



Common Country Assessment

**Versión final
Agosto, 2018**

Acrónimos.....	4
Sección I. Sobre el CCA.....	8
Sección II. Análisis integrador de la Agenda 2030 y los ODS.....	10
Sección III. Marco institucional, normativo y de política.....	12
2.1. Estructura de gobierno	12
2.2. Contexto político-electoral	13
2.3. Contexto programático e interinstitucional	15
2.4. Contexto normativo en materia de derechos humanos.....	17
2.4. México en el contexto internacional	19
Sección IV. Análisis situacional	22
4.1. Una sociedad con gran potencial, pero profundamente desigual.....	22
4.1.1. Población y tendencias demográficas	22
4.1.2. Pobreza multidimensional.....	24
4.1.3. Seguridad alimentaria y nutricional	29
4.1.4. Salud	32
4.1.5. Educación y cultura	38
4.2 Una economía estable, pero con persistentes asimetrías y marcados contrastes.	42
4.2.1. Crecimiento económico, productividad y competitividad	43
4.2.2. Empleo y trabajo decente	44
4.2.3. Política fiscal, gasto público.....	47
4.2.4.Desigualdad entre regiones y estados, y entre grupos de ingresos.....	48
4.2.5. Inclusión financiera.....	49
4.2.6. Ciencia, tecnología e innovación	50
4.2.7. Ciudades incluyentes, sostenibles y resilientes.....	52
4.3 Un país megadiverso con grandes retos ambientales	53
4.3.1. Acceso al agua y saneamiento.....	54
4.3.2. Energía asequible y limpia	56
4.3.3. Producción y consumo sustentable.....	58
4.3.4. Acción frente al cambio climático	60
4.3.5. Desastres	62
4.3.6. Conservación y manejo de la biodiversidad terrestre y marina	64
4.3.7. Manejo de sustancias químicas.....	66
4.4. Una democracia en consolidación, pero un Estado de Derecho con desafíos estructurales	67
4.4.1. Violencia e inseguridad.....	68
4.4.2. Protección de niñas, niños y adolescentes.....	70
4.4.3. Acceso a la justicia e impunidad.....	72
4.4.4. Corrupción	74
4.4.5 Transparencia y rendición de cuentas.....	75
4.4.6 Acceso a la información y protección de libertades fundamentales	76
4.4.7. Decisiones inclusivas, participativas y representativas.....	77
4.5. Retos transversales	80
4.5.1. Desafíos para el logro de la igualdad de género y empoderamiento de todas las mujeres y niñas.....	80
4.5.2. Los derechos humanos de las personas migrantes.	84
4.6. <i>Risk profile</i>	89

Sección V. México y la Agenda 2030	94
5.1. Desempeño en el cumplimiento de los ODS.....	94
5.2. Gobernanza e inversión para el cumplimiento de la Agenda 2030.....	95
5.3. Retos para la implementación	97
5.4. Ventajas comparativas del SNU	100
5.5. Recomendaciones	105
Bibliografía.....	107
Anexo 1. Compromisos internacionales en materia de Derechos Humanos (archivo adjunto)	
Anexo 2. Estadísticas sociales, económicas y ambientales (archivo adjunto).	

Acrónimos

ACNUR	Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados
Agenda 2030	Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible
ALADI	Asociación Latinoamericana de Integración
AMEXCID	Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo
AOD	Ayuda Oficial para el Desarrollo
APEC	Mecanismo de Cooperación Económica Asia-Pacífico
APF	Administración Pública Federal
ASF	Auditoría Superior de la Federación
BM	Banco Mundial
CCA	<i>Common Country Assessment</i> (Evaluación Común de País)
CEAV	Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas
CEDAW	Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer
CDI	Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas
CdE	Centros de Excelencia
CEPAL	Comisión Económica para América Latina
CID	Cooperación internacional para el desarrollo
CIDH	Comisión Interamericana de Derechos Humanos
CINU	Centro de Información de las Naciones Unidas
CJF	Consejo de la Judicatura Federal
CNDH	Comisión Nacional de los Derechos Humanos
CONABIO	Comisión Nacional de Biodiversidad
CONAGUA	Comisión Nacional de Agua
CONAPESCA	Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca
CONAGO	Conferencia Nacional de Gobernadores
CONAPO	Consejo Nacional de Población
CONAMM	Conferencia Nacional de Municipios de México
CONATrib	Conferencia Nacional de Procuración de Justicia y la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia
CONAPRED	Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación
CONEVAL	Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social

Corte IDH	Corte Interamericana de Derechos Humanos
CPEUM	Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
CTI	Ciencia, Tecnología e Innovación
CTIM	Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas
CTM	Comité de las Naciones Unidas de Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares
ENADID	Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica
ENAPROCE	Encuesta Nacional sobre Productividad y Competitividad de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas
ENCIG	Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental
ENDIREH	Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares
ENDUTIH	Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de TIC en Hogares
ENIGH	Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares
ENIM	Encuesta Nacional de Niñas, Niños y Mujeres en México
ENOE	Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo
ENPOL	Encuesta Nacional de la Población Privada de la Libertad
ENSANUT	Encuesta Nacional de Salud y Nutrición
ENSPU	Encuesta de Seguridad Pública Urbana
ENVIPE	Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre la Seguridad
EPU	Examen Periódico Universal
ESIDET	Encuesta sobre Investigación y Desarrollo Tecnológico
FAO	Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura
FIDA	Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola
FONCID	Fondo Nacional de Cooperación Internacional para el Desarrollo
G-20	Grupo de los 20
GIG	Grupo Interagencial de Género
IICA	Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura
IDH	Índice de Desarrollo Humano
OIT	Organización Internacional del Trabajo
IAEG-SDGs	Grupo Interinstitucional y de Expertos sobre los Indicadores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (por sus siglas en inglés)
IMJUVE	Instituto Mexicano de la Juventud

IMSS	Instituto Mexicano del Seguro Social
INAI	Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos
INEE	Instituto Nacional para la Evaluación Educativa
INEGI	Instituto Nacional de Estadística y Geografía
INMUJERES	Instituto Nacional de las Mujeres
INECC	Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático
ISSSTE	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
LGBTI	Colectivo Lesbianas, gays, bisexuales, población transgénero e intersexual
LGDNNA	Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes
MORENA	Movimiento de Regeneración Nacional
MPYMES	Micro, Pequeñas y Medianas Empresas
NNA	Niñas, niños y adolescentes
OACNUDH	Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos
OCDE	Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico
ODM	Objetivos de Desarrollo del Milenio
ODS	Objetivos de Desarrollo Sostenible
OIT	Organización Internacional del Trabajo
OMC	Organización Mundial del Comercio
ONU Mujeres	Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las mujeres
OSC	Organizaciones de la Sociedad Civil
OIM	Organización Internacional para las Migraciones
OMS/OPS	Organización Mundial de la Salud/Organización Panamericana de la Salud
OPLEs	Organismos Públicos Locales Electorales
PAN	Partido Acción Nacional
PEF	Presupuesto de Egresos de la Federación
PEMEX	Petróleos Mexicanos
PISA	Programa de Evaluación Internacional de Alumnos
PND	Plan Nacional de Desarrollo
PNUD	Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
PNUMA/UNEP	Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (ONU Medio Ambiente)
PRD	Partido de la Revolución Democrática

PRI	Partido Revolucionario Institucional
PROIGUALDAD	Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y no Discriminación contra las Mujeres
PYMES	Pequeñas y Medianas Empresas
SCJN	Suprema Corte de Justicia de la Nación
SHCP	Secretaría de Hacienda y Crédito Público
SEMAR	Secretaría de Marina
SEMARNAT	Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
SEDENA	Secretaría de la Defensa Nacional

Sección I. Sobre el CCA

El Equipo de País del Sistema de las Naciones Unidas (SNU) desarrollará el nuevo Marco de Cooperación para su trabajo en México (UNDAF, por sus siglas en inglés) para el periodo 2020-2025. Un requisito para ello es contar con un Common Country Assessment (CCA), el cual proporcione información y evidencia a partir de la cual se pueda desarrollar la teoría del cambio y la Visión 2030 del próximo UNDAF.

El objetivo del CCA es proveer conocimiento profundo sobre los principales retos del desarrollo sostenible que enfrenta México, con base en un entendimiento común de la situación del país y tomando en consideración las metas planteadas por los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), así como otros compromisos internacionales suscritos por México.

La integración del CCA se hizo con base en los Términos de Referencia que se elaboraron para tal efecto, y siguió los pasos y las recomendaciones contenidas en el documento *Common Country Analysis. UNDAF Companion Guidance*, elaborado por el Grupo de las Naciones Unidas para el Desarrollo.

La metodología para la integración del CCA consistió en una revisión documental a profundidad de diversas fuentes de información -internacionales, regionales y nacionales-, tanto de las agencias del SNU, como del Gobierno de México, así como de otros organismos, agencias de desarrollo, la academia y la sociedad civil. Parte central del ejercicio consistió en revisar y analizar las observaciones finales y recomendaciones emitidas a México por parte de los mecanismos internacionales de derechos humanos durante el periodo 2012-2018. Para contar con una visión de conjunto sobre las ventajas comparativas del Equipo de País, se realizó un análisis FODA (fortalezas, oportunidades, debilidades y amenaza), con el *Task Force* de Monitoreo y Evaluación del SNU.

El CCA se integró en un momento coyuntural marcado por el último tramo de gobierno de la actual administración (2012-2018), las elecciones 2018 y el consecuente cambio de gobierno y de autoridades que tendrá lugar en diciembre de 2018. La *Estrategia Nacional para el Cumplimiento de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible*, cuyo Documento Inicial se sometió a consulta pública durante el segundo trimestre de 2018, no ha sido aún aprobada, por lo que no fue considerada como fuente. Sin duda, haber contado en su momento con este documento hubiera enriquecido la información y el análisis estratégico contenidos en el CCA.

El CCA está estructurado en cinco grandes secciones. La Sección I comprende esta introducción. La Sección II hace un breve recuento de los principales postulados de la Agenda 2030 a la luz del enfoque integrador, en donde la identificación de interrelaciones y potenciales sinergias entre los ODS y las metas es parte fundamental para su cumplimiento.

La Sección III describe el marco normativo, institucional y de política de México, los compromisos internacionales y nacionales en materia de derechos humanos, así como el liderazgo del país en diversos temas de la agenda internacional y su papel polivalente en los esquemas de cooperación internacional para el desarrollo. Esta sección funge como marco general de referencia de las siguientes secciones del CCA.

La Sección IV contiene el análisis sustantivo de los principales desafíos del desarrollo sostenible de México, en términos sociales, económicos, ambientales y del Estado de Derecho. El análisis de estos apartados se hizo a la luz de cuatro de los cinco ejes de la Agenda 2030 (Eje Personas, Eje Prosperidad, Eje Planeta y Eje Paz). En esta sección se incluye también un apartado sobre los retos

transversales o sistémicos que tiene México en materia de igualdad de género y derechos de las personas migrantes, así como un apartado sobre el perfil de riesgo del país (*Risk Profile*). Diversos postulados del Eje Alianzas (ODS17) se consideran de forma transversal en el CCA.

La Sección V da cuenta del desempeño, avances, retos y oportunidades de México en el cumplimiento de la Agenda 2030 y los ODS, y se analizan las ventajas comparativas del SNU para acompañar este proceso. En la parte final de esta sección se sistematiza una serie de consideraciones estratégicas para que sirvan de base al Equipo de País en la construcción del UNDAF 2020-2025.

Sección II. Análisis integrador de la Agenda 2030 y los ODS

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible (en adelante Agenda 2030), es una clara respuesta de la comunidad internacional para transitar hacia un **modelo de desarrollo inclusivo y sostenible**, a través de la construcción de sociedades pacíficas, más justas, solidarias, en las que se protejan los derechos humanos, el planeta y los recursos naturales. A través de sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), 169 metas y 232 indicadores¹, la Agenda 2030 incide en las causas estructurales de la pobreza, combate las desigualdades y genera oportunidades para mejorar la calidad de vida de las personas en el marco de las tres dimensiones del desarrollo sostenible: social, económica y ambiental.

La Agenda 2030 reconoce explícitamente que la **igualdad de género** es un motor del desarrollo sostenible, por lo que incorpora un objetivo específico referido a la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y las niñas (ODS 5), y refleja una sólida transversalización de género en las metas e indicadores de los demás ODS, así como en los medios para su implementación, seguimiento y revisión, y en las asociaciones globales para su financiación.

Otro sello distintivo de la Agenda 2030 es su carácter **universal**, ya que aplica a todos los países, a todas las personas y a todos los sectores de la sociedad, al mismo tiempo que incorpora la necesidad de priorizar los derechos y las necesidades de los grupos más desfavorecidos. El principio de **no dejar a nadie atrás** pretende que las acciones para el cumplimiento de la Agenda 2030 lleguen primero a los grupos que están más lejos, más rezagados e históricamente excluidos y marginados del desarrollo. Para no dejar a nadie atrás es indispensable que todos los actores involucrados en el cumplimiento de los ODS realicen un abordaje integral de las privaciones combinadas², y de las múltiples desigualdades y formas de discriminación que se cruzan entre sí, como las que tienen que ver con el género, la edad, la clase social, la condición de discapacidad, la raza, el origen étnico, la orientación sexual, la identidad de género o el estatus migratorio, con miras a diseñar políticas e intervenciones focalizadas.

Los ODS son, en este sentido, una **hoja de ruta** para la comunidad internacional, los gobiernos, las ciudades, así como las organizaciones de la sociedad civil, la academia y el sector privado para lograr el desarrollo sostenible. Hay sinergias potenciales entre las metas, de tal suerte que el progreso en una permitiría avanzar en la consecución de otras. Al estar estrechamente conectados entre sí, el avance o no en un objetivo produce efectos positivos o negativos en los demás.

La implementación de la Agenda 2030 requiere de un **enfoque integrador**, centrado en los derechos humanos y la igualdad de género, y con estrategias multisectoriales que permitan la sinergia del progreso en diversas áreas. Si prevalece un enfoque aislado, el avance en algunas metas puede verse perjudicado o comprometido por el retroceso o estancamiento en otras. Considerar en la planificación y toma de decisiones para el cumplimiento de la Agenda 2030 la Meta 17.14, que plantea “Mejorar la coherencia de las políticas para el desarrollo sostenible” no

¹ El número total de indicadores enumerados en el Marco de indicadores mundiales para los Objetivos de Desarrollo Sostenible y metas de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible es 244. Sin embargo, dado que nueve indicadores se repiten en dos o tres objetivos diferentes, el número total real de indicadores individuales en la lista es 232. La lista de indicadores está disponible en: <https://unstats.un.org/sdgs/indicators/indicators-list/>

² De acuerdo con ONU Mujeres, “Las privaciones combinadas hacen alusión a la tendencia a que las privaciones se produzcan en conjunto y se “agrupen”, de tal modo que las carencias en un ámbito a menudo vayan acompañadas de privaciones en otro. La pobreza, por ejemplo, que es la falta de acceso a los recursos necesarios para vivir una vida digna, con frecuencia está estrechamente relacionada con muchas otras formas de privación, incluso en lo referente a la educación, la salud y el bienestar”. Ver ONU Mujeres, *Hacer las promesas realidad: la igualdad de género en la Agenda 2030* (Nueva York: ONU Mujeres, 2018), P. 139.

solo es estratégico, sino también indispensable. Entre los pasos necesarios que identifica la CEPAL³ para construir un enfoque integrador, se encuentra identificar interrelaciones entre las metas, hacer análisis integrados de las políticas y proponer estrategias de aprovechamiento de las interrelaciones para ofrecer respuestas integrales. A esto habrá que sumarle la importancia de identificar aceleradores que, como su nombre lo indica, sean el pivote para acelerar el progreso en diversas metas.

La implementación de la Agenda 2030 supone, por lo tanto, un **cambio de paradigma** en la forma de abordar los desafíos para el desarrollo sostenible, con múltiples consecuencias para la amplia gama de actores implicados en su realización. El Secretario General de las Naciones Unidas⁴ reconoce que acelerar la implementación de los ODS a nivel nacional con un enfoque integral del desarrollo, que deje atrás la fragmentación por sectores de las metas, impone grandes retos para los gobiernos nacionales y para el propio SNU, en específico para los Equipos de País en sus esfuerzos de apoyar la efectiva localización⁵.

El fortalecimiento de la planificación integrada, la reflexión estratégica entre sectores y la definición de políticas multidimensionales, en el marco de un enfoque alineado con las normas internacionales de derechos humanos, con la igualdad de género en el centro de la implementación, es crucial para construir la mejor forma de aplicación integral de los ODS a nivel nacional y subnacional. Dada la magnitud y ambición de la Agenda 2030, la definición de prioridades, en combinación con las capacidades institucionales y en función de los medios de financiación disponibles, es indispensable.

Con este enfoque en mente, el análisis contextual que se desarrolla en la Sección IV tiene la finalidad de mostrar los principales desafíos de México en el marco del desarrollo sostenible, así como identificar, en la medida de lo posible, las interrelaciones entre los ODS y las sinergias potenciales entre las metas.

³ CEPAL, *Segundo Informe anual sobre el progreso y los desafíos regionales de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en América Latina y el Caribe* (Santiago de Chile, CEPAL: 2018). P. 58.

⁴ Naciones Unidas, *Informe del Secretario General, Nuevo posicionamiento del Sistema de las Naciones Unidas para el desarrollo a fin de cumplir la Agenda 2030: garantizar un futuro mejor para todos* (Documento A/72/124, 11 de julio de 2017). Párr. 22.

⁵ *Idem.* Párr. 45.

2.1. Estructura de gobierno

México es una República Representativa Federal, en donde coexisten tres Poderes - Ejecutivo, Legislativo y Judicial- y tres niveles de gobierno - Federal, Estatal (32 entidades federativas) y Municipal (2,457 Municipios). Las 32 Entidades Federativas son autónomas en su régimen de gobierno interno.

El **Poder Ejecutivo** gobierna de conformidad con lo establecido por la legislación. Los Poderes Ejecutivos de la Federación y de los estados son elegidos mediante elecciones directas cada seis años, sin posibilidad de reelección, y se depositan en la Presidencia de la República y en las Gubernaturas estatales. El Poder Ejecutivo también contempla a las alcaldías o presidencias municipales, cuyo periodo de gobierno es de 3 años.

La Administración Pública Federal (APF) comprende la totalidad de los organismos del Estado (299) que ejercen el Poder Ejecutivo. La Oficina de la Presidencia de la República, las 18 Secretarías de Estado, la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, la Procuraduría General de la República (PGR) y los Órganos Reguladores Coordinados integran actualmente la Administración Pública Centralizada. La organización y las atribuciones de estas dependencias están establecidas en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

El **Poder Legislativo** se deposita a nivel federal en el Congreso de la Unión, que se integra por dos cámaras: Cámara de Senadores y Senadoras (en adelante Senado), compuesta por 128 senadurías que se renuevan cada seis años, así como la Cámara de Diputados y Diputadas, compuesta por 500 diputaciones que se renuevan cada tres años. En cada una de las 32 entidades federativas los poderes legislativos se componen de una sola Cámara (Congresos Locales).

El **Poder Judicial** a nivel federal se organiza jerárquicamente de la siguiente forma: Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Tribunales Colegiados de Circuito, Tribunales Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito. El Poder Judicial de la Federación tiene un órgano de control, con independencia técnica y de gestión: el Consejo de la Judicatura Federal (CJF). En cada una de las 32 entidades federativas, el Poder Judicial lo encabezan sus respectivos Tribunales Superiores de Justicia.

Desde la década de los noventa, la estructura del Estado Mexicano comenzó a experimentar la creación de **órganos autónomos** de rango constitucional en diversas áreas de la vida pública, los cuales no se adscriben a los tres poderes del Estado. La naturaleza de los órganos autónomos no es homogénea, dado que existen importantes diferencias entre ellos, así como las relaciones entre ellos y las demás instituciones de gobierno. A nivel federal, una primera generación de órganos autónomos la componen la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (1992), el Banco de México (al cual se le dotó de autonomía en 1993) y el Instituto Federal Electoral (1996), ahora Instituto Nacional Electoral (ver apartado 2.2). La segunda generación está compuesta por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el cual obtuvo su plena autonomía en 2008; así como por la Comisión Federal de Competencia Económica (2013), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (2013), el Instituto Nacional de Evaluación de la Educación (2013), el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (2014), el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (2014) y la Fiscalía

General de la República⁶ (2014), la cual todavía no entra en funciones dado que no se han logrado los acuerdos necesarios para emitir las leyes secundarias correspondientes para dar paso a la transformación institucional de la PGR en la Fiscalía. A nivel subnacional, existen 32 organismos públicos autónomos de protección y defensa de los derechos humanos, 32 organismos públicos locales electorales (OPLEs), así como 32 órganos estatales de transparencia especializados garantes del derecho de acceso a la información.

2.2. Contexto político-electoral

México ha experimentado en los últimos veinte años un proceso complejo de democratización, al transitar de un sistema de partido hegemónico a un sistema de **pluralismo político** moderado. Los procesos electorales son cada vez más competidos, ya sea por efecto de nuevas reglas de competencia político-electoral o como producto de la inconformidad de la sociedad ante la gestión de los gobiernos. La competencia política en todos los niveles ha favorecido la alternancia en el poder, aunque el ritmo de avance ha variado entre el nivel federal, estatal y municipal. Al día de hoy, algunas entidades federativas todavía continúan bajo un régimen de partido hegemónico⁷. Desde el año 2000, año de la transición, los procesos electorales se han llevado a cabo en un ambiente de estabilidad política. Durante el período 2000-2018, ningún partido nacional⁸ contó por sí solo con mayoría absoluta ni calificada en ninguna de las cámaras del Congreso y en las cuatro últimas legislaturas se lograron construir coaliciones legislativas mayoritarias.

El artículo 2° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM⁹), reconoce el **pluralismo jurídico** y garantiza el derecho de los pueblos y las comunidades indígenas de elegir, de acuerdo con sus normas internas, a sus autoridades o representantes, así como de acceder y desempeñar los cargos, garantizando que mujeres y hombres disfruten y ejerzan sus derechos en condiciones de igualdad. El estado de Oaxaca es la entidad con el mayor número de municipios que eligen a sus autoridades bajo sistemas normativos indígenas (417 de 570).

Después de dos sexenios de gobierno del PAN (2000-2006 y 2006-2012), un candidato del PRI ganó las elecciones en 2012. Desde el inicio de su administración, el Presidente Peña Nieto (2012-2018) impulsó un conjunto de **reformas estructurales** destinadas a fortalecer el crecimiento económico,

⁶ El 10 de febrero de 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federación un Decreto de Reforma Constitucional, por el que Procuraduría General de la República sería sustituida por la Fiscalía General de la República. La reforma al artículo 102 constitucional contempla que el Ministerio Público se organice en una Fiscalía General de la República como órgano público autónomo, dotado de personalidad jurídica y de patrimonio propios. Hasta el momento, la reforma constitucional no ha entrado en vigor, dado que no se han logrado los acuerdos para emitir las leyes secundarias correspondientes para dar paso a la transformación institucional de la PGR en la Fiscalía.

⁷ Tal es el caso del Estado de México, que siempre ha sido gobernando por un representante del PRI, partido hegemónico con 80 años en el poder.

⁸ Actualmente existen 9 Partidos Políticos Nacionales con registro ante el Instituto Nacional Electoral: Partido de la Revolución Institucional (PRI), Partido de Acción Nacional (PAN), Partido de la Revolución Democrática (PRD), Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Movimiento Ciudadano (MC), Nueva Alianza (NA), Partido del Trabajo (PT), Partido Encuentro Social (PES), por lo que tienen el derecho de participar en las elecciones de carácter federal y local, es decir, para la elección de Presidente de la República, Senadores, Diputados, Gobernador, Diputados Locales y Ayuntamientos. Como resultado de las elecciones de 2018, probablemente los partidos MC y PES perderán su registro debido a que no lograron alcanzar el 3% de los votos.

⁹ La Sala Superior del TEPJF, en el expediente SUP-JDC1714/2015, estableció el criterio de “que de la interpretación sistemática tanto de la Constitución como de los tratados internacionales, el principio de maximización de la autonomía de los pueblos y comunidades indígenas, el cual, implica también la minimización de las restricciones a su ejercicio, forma parte y potencializa su derecho a la autonomía o autogobierno, en el entendido de que si bien este último no constituye un derecho absoluto, toda limitación debe ser estrictamente necesaria y razonable, para garantizar el reconocimiento y respeto debidos a los derechos y libertades fundamentales de los integrantes de las comunidades en cuestión, así como para satisfacer las necesidades de una sociedad democrática y plural, sin dejar de considerar el contexto de cada comunidad, a fin de que no se impongan restricciones que incidan desproporcionadamente en el derecho a la libre determinación de estas comunidades y al desarrollo pleno de su cultura”. El expediente se puede consultar en: <http://sitios.te.gob.mx/20TEPJF/media/pdf/43335d38d162bfa.pdf>

mejorar el bienestar de la población y cerrar las brechas de desigualdad. La acción reformadora fue detonada por el *Pacto por México*, un acuerdo de gobernabilidad histórico y sin precedentes entre los tres principales partidos políticos en ese momento (PRI, PAN y PRD), destinado a que el país reanudara la marcha hacia la prosperidad después de tres décadas de lento crecimiento. Las reformas abordaron problemas en áreas fundamentales para el desarrollo sostenible de México que habían esperado cambios profundos a nivel normativo, institucional y de política pública durante décadas, como el mercado laboral, la política hacendaria, el sector financiero, las telecomunicaciones, la competencia económica, el sistema educativo, el sistema judicial y el sector energético. A estas reformas se sumaron otras en materia político-electoral, para combatir la corrupción y garantizar el acceso a la información pública, la transparencia y la rendición de cuentas del Estado. De acuerdo con la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE¹⁰), varias de estas reformas han empezado a dar resultados en áreas de gran relevancia para el desarrollo del país -educación, energía, telecomunicaciones, recaudación fiscal e informalidad-, pero en muchas otras no se ha logrado todavía una efectiva implementación, como en los ámbitos de transparencia y corrupción, lo que de acuerdo con dicha organización limita el crecimiento económico inclusivo del país.

La *Reforma Constitucional Político-Electoral* (2014) completó los esfuerzos iniciados desde 2012 para incrementar la calidad de la democracia, favorecer la gobernabilidad y fortalecer las instituciones. La reforma abrió la posibilidad de un gobierno de coalición; estableció la reelección de Senadurías y Diputaciones del Congreso de la Unión, así como de legisladores locales e integrantes de los Ayuntamientos; incluyó también la figura de candidaturas independientes como expresión de participación democrática; e incorporó el criterio de *paridad de género* en candidaturas a cargos de elección popular a nivel federal y local como una obligación de los partidos políticos. Todo esto en el contexto de un cambio sustancial en la estructura y distribución de facultades de la organización electoral, desapareciendo al Instituto Federal Electoral y creando al Instituto Nacional Electoral (INE) con nuevas y mayores atribuciones.

El **proceso electoral 2015-2016** marcó una reconfiguración y redistribución importante de las principales fuerzas políticas del país. El voto duro de los tres principales partidos políticos se vio menguado en las elecciones intermedias de 2015, emergiendo nuevas fuerzas capaces de competir por la presidencia de la República (principalmente MORENA). Como resultado, se logró la alternancia en 6 estados en donde se eligió la gubernatura y, a pesar de que la mayoría de las reglas electorales favorecen ampliamente al régimen de partidos, seis candidatos independientes - un gobernador, un diputado federal, tres alcaldes municipales y un diputado local-, resultaron electos. En 2016, en 8 de los 12 estados en donde se eligió gubernatura hubo alternancia.

Las **elecciones de 2018** fueron históricas por su magnitud, ya que por primera vez concurrieron 30 elecciones locales con los comicios federales. La elección representó la renovación de la Presidencia de la República y del Congreso de la Unión, además de que en 9 entidades federativas se eligieron gubernaturas, en 29 los congresos locales y en 26 los ayuntamientos. En total, se disputaron alrededor de 3,600 cargos que pusieron a prueba la eficacia de la infraestructura electoral de todas las instituciones. Si bien el proceso electoral se llevó a cabo en un ambiente de estabilidad política, la evidencia muestra que ha sido el más violento en cuanto a asesinatos de pre-candidatos, candidatos y políticos se refiere, con 110 casos registrados por fuentes

¹⁰ OCDE, *Getting it right. Prioridades estratégicas para México* (Paris, OECD Publishing: 2018). P. 10.

periodísticas (95 hombres y 15 mujeres), y 110 de amenaza e intimidación, en ambos casos especialmente a nivel subnacional y particularmente en el ámbito municipal¹¹.

De acuerdo con los datos más recientes de los Cómputos Distritales de las Elecciones de Presidencia, Senadurías y Diputaciones Federales¹², la elección del primero de julio de 2018 tuvo una alta participación ciudadana que alcanzó el 63.2% del padrón electoral. El candidato de la coalición Juntos Haremos Historia (compuesta por MORENA, Partido del Trabajo y Partido Encuentro Social¹³), Andrés Manuel López Obrador (AMLO), obtuvo el 53.19% de los votos, lo que equivale a 30 millones 113 mil 483 sufragios, convirtiéndolo en el presidente electo mayor votado en la historia de México, ganando en 31 de las 32 entidades federativas del país. En ocho de los nueve estados donde se eligieron gubernaturas se dio lugar a la alternancia. La distribución del poder político a nivel estatal como resultado de las elecciones de 2018 cambió sustancialmente: el PRI gobernará en 12 entidades¹⁴, en donde viven 44.4 millones de personas; el PAN mantiene 12 gubernaturas¹⁵ y gobernará a 32.8 millones de personas; Morena tuvo los mejores resultados en las elecciones de 2018, ya que ganó 5¹⁶ de las 9 gubernaturas en disputa, y gobernará a 26.7 millones de personas; el PRD gobierna en una entidad (Michoacán), con una población de 4.6 millones de personas; Movimiento Ciudadano gobernará Jalisco (anteriormente del PRI), cuya población asciende a 8.1 millones de habitantes; y Nuevo León, con 5.2 millones de habitantes, es gobernado por un gobernador independiente.

La coalición ganadora de la presidencia será la primera fuerza en el Congreso de la Unión, con mayoría absoluta en el Senado (aproximadamente 70 escaños de 128) y en la Cámara de Diputados y Diputadas (aproximadamente 300 curules de 500). Esta es la primera ocasión en 24 años que un Presidente de México contará con mayoría en el Poder Legislativo. De acuerdo con los resultados del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLEs), MORENA asegura amplias mayorías en por los menos 17 de los 29 congresos locales disputados.

2.3. Contexto programático e interinstitucional

El Plan Nacional de Desarrollo (PND) es el documento de política pública que funge como directriz de la acción gubernamental y que contiene la visión del proyecto de nación con base en los principios rectores para la **planeación del desarrollo** establecidos en la *Ley de Planeación*¹⁷. Las 32

¹¹ Político Mx, “110 políticos asesinados: 2018, elección más violenta en México”, <https://politico.mx/central-electoral/elecciones-2018/estados/110-pol%C3%ADticos-asesinados-2018-elecci%C3%B3n-m%C3%A1s-violenta-en-m%C3%A9xico/> (Fecha de consulta: 11 de julio de 2018).

¹² INE, “Cómputos Distritales 2018. Elecciones Federales”, <https://computos2018.ine.mx/> (Fecha de consulta: 7 de julio de 2018).

¹³ Como resultado de las elecciones 2018, el PES perdió el registro como partido nacional al no alcanzar el 3% de la votación.

¹⁴ En las elecciones 2018, el PRI perdió Jalisco y Yucatán. Las 12 gubernaturas se refieren a: Coahuila, Estado de México, Campeche; Colima; Guerrero; Hidalgo; Oaxaca; San Luis Potosí; Sinaloa; Sonora; Tlaxcala, y Zacatecas.

¹⁵ En las elecciones 2018, el PAN perdió Veracruz, pero ganó Yucatán. Las 12 gubernaturas se refieren a: Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Durango (en alianza con el PRD); Guanajuato (en alianza con PRD y MC); Nayarit (en coalición con el PRD, PT y el partido local PRS); Puebla (en alianza con PRD y MC); Querétaro; Quintana Roo (en alianza con el PRD); Tamaulipas; Yucatán (en alianza con MC);

¹⁶ Morena, en coalición con el PT y el PES, ganó las elecciones en: Ciudad de México, Morelos, Veracruz, Tabasco y Chiapas.

¹⁷ El artículo 2º de la Ley de Planeación establece que “La planeación deberá llevarse a cabo como un medio para el eficaz desempeño de la responsabilidad del Estado sobre el desarrollo equitativo, incluyente, integral, sustentable y sostenible del país, con perspectiva de interculturalidad y de género, y deberá tender a la consecución de los fines y objetivos políticos, sociales, culturales, ambientales y económicos contenidos en la Constitución Política”. Para tal efecto, establece ocho principios básicos que el Poder Ejecutivo debe considerar y atender para la consecución de las metas y objetivos de desarrollo, entre ellos: la consolidación de la democracia, la igualdad de derechos entre mujeres y hombres, el respeto irrestricto de las garantías individuales, y de las libertades y derechos sociales, políticos y culturales, el fortalecimiento del pacto federal y del Municipio libre, el equilibrio de los factores de la producción, la perspectiva de género y la factibilidad cultural de las políticas públicas nacionales.

entidades federativas cuentan con sus respectivas leyes de planeación, las cuales estipulan los principios y ejes rectores para la integración de planes estatales y municipales de desarrollo.

A nivel federal, El PND 2013-2018 dio cauce a las reformas estructurales derivadas del *Pacto por México* y estableció cinco metas nacionales de desarrollo: México en Paz, México Incluyente, México con Educación de Calidad, México Próspero y México con Responsabilidad Global; así como tres estrategias transversales: Democratizar la productividad, Gobierno cercano y moderno, y Perspectiva de género. Con una visión de hacer de México una sociedad de derechos, el PND 2013-2018 fue la primera estrategia nacional de desarrollo que incorporó a la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres y niñas en el centro del quehacer gubernamental, y que incluyó indicadores de resultados para medir el progreso del país. Del PND 2013-2018 se derivaron¹⁸ 3 Programas Transversales¹⁹, 14 Sectoriales²⁰, 28 Nacionales²¹, 10 Especiales²², 3 Regionales²³ y 39 Institucionales²⁴, todos ellos orientados a dar cumplimiento a los objetivos y metas de desarrollo en él planteadas.

México cuenta con mecanismos y estructuras de **coordinación interinstitucional**, horizontal y vertical, de naturaleza diversa, con el objetivo de facilitar y fortalecer la colaboración y articulación entre los tres niveles y órdenes de gobierno. A modo de ejemplo, el Poder Ejecutivo Federal estableció 5 Gabinetes Especializados vinculados al cumplimiento de las cinco metas del PND 2013-2018, los cuales cuentan con alto liderazgo político y son encabezados por el Presidente. En el marco de la APF, se han creado diversas comisiones intersecretariales para la atención de actividades de la planeación nacional que deben desarrollar conjuntamente varias Secretarías,

¹⁸ SHCP, "Seguimiento de los Programas Transversales, Especiales, Sectoriales, Regionales e Institucionales derivados del PND 2013-2018", <https://www.gob.mx/shcp/acciones-y-programas/seguimiento-de-los-programas-transversales-especiales-sectoriales-regionales-e-institucionales-derivados-del-pnd-2013-2018> (Fecha de consulta: 9 de julio de 2018).

¹⁹ Programa para Democratizar la Productividad 2013-2018; Programa para un Gobierno Cercano y Moderno 2013-2018; Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y no Discriminación contra las Mujeres (PROIGUALDAD) 2013-2018.

²⁰ Programa Sectorial de Gobernación 2013-2018, Programa Sectorial de Relaciones Exteriores 2013-2018, Programa Sectorial de Defensa Nacional 2013-2018, Programa Sectorial de Marina 2013-2018, Programa Sectorial de Desarrollo Social 2013-2018, Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2013-2018, Programa Sectorial de Energía 2013-2018, Programa Sectorial de Desarrollo Agropecuario, Pesquero y Alimentario 2013-2018, Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes 2013-2018, Programa Sectorial de Educación 2013-2018, Programa Sectorial de Salud 2013-2018, Programa Sectorial de Trabajo y Previsión Social 2013-2018, Programa Sectorial de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 2013-2018, Programa Sectorial de Turismo 2013-2018.

²¹ Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo 2013-2018, Programa Nacional de Procuración de Justicia 2013-2018, Programa Nacional de Infraestructura 2013-2018, Programa Nacional de Juventud 2014-2018, Programa Nacional de Seguridad Pública 2014-2018, Programa Nacional de Vivienda 2014-2018, Programa Nacional Forestal 2014-2018, Programa Nacional México sin Hambre 2014-2018, Programa Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad 2014-2018, Programa Nacional Hídrico 2014-2018, Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia 2014-2018, Programa Nacional para Prevenir y Eliminar la Discriminación 2014-2018, Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres 2014-2018, Programa Nacional para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos 2014-2018, Programa de Desarrollo Innovador 2013-2018; Programa Nacional de Derechos Humanos 2014-2018, Programa Nacional de Cultura Física y Deporte 2014-2018, Programa Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes 2016-2018, entre otros.

²² Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable 2014-2018, Programa Especial de Cambio Climático 2014-2018, Programa Especial de Cultura y Arte 2014-2018, Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación 2014-2018, Programa Especial de los Pueblos Indígenas 2014-2018, Programa Especial de Migración 2014-2018, Programa Especial de Producción y Consumo Sustentable 2014-2018, entre otros.

²³ Programa Regional de Desarrollo del Centro 2014-2018; Programa Regional de Desarrollo del Sur-Sureste 2014-2018; Programa Regional para el Desarrollo del Norte 2014-2018.

²⁴ Programa Institucional de la Comisión Nacional Forestal 2014-2018; Programa Institucional del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático 2014-2018; Programa Institucional 2013-2018 de FONATUR Constructora, S.A. de C.V.; Programa Institucional 2013-2018 de FONATUR Mantenimiento Turístico, S.A. de C.V.; Programa Institucional 2013-2018 de FONATUR Operadora Portuaria, S.A. de C.V.; Programa Institucional 2013-2018 del Fondo Nacional de Fomento al Turismo; Programa Institucional 2014-2018 del Consejo de Promoción Turística de México, S.A. de C.V.; Programa Institucional 2014-2018 del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología; Programa Institucional de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas 2017-2018; Programa Institucional 2013-2018 de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente; entre otros.

como la Comisión Intersecretarial para el Desarrollo Social o la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático.

Existen también mecanismos de coordinación interinstitucional a nivel nacional en donde participan los tres niveles y órdenes de gobierno y que han surgido en cumplimiento de legislación específica, como el Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica y sus 4 subsistemas, el Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, el Sistema Nacional Anti-Corrupción, o bien el Sistema Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres (rango ministerial) y el Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), estos últimos cuatro con sus correlatos a nivel estatal y/o municipal derivados de la legislación local correspondiente, aunque ciertamente con niveles diferenciados de desarrollo, efectividad y resultados.

Desde una visión federalista, la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO), la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia (CONATrib) y la Comisión Permanente de Contralores Estados-Federación son instancias o foros de diálogo, concertación y encuentro que impulsan la coordinación entre las entidades, y entre éstas y la federación, para privilegiar acuerdos y ejecutar políticas públicas que incidan en el desarrollo de México desde sus ámbitos de competencia. La Conferencia Nacional de Municipios de México (CONAMM), que agrupa a todos los municipios del país, tiene entre sus objetivos impulsar iniciativas que atiendan las problemáticas y las necesidades de los gobiernos municipales.

No obstante, como se observa en diversos apartados del CCA, el enfoque sectorial y la estructura federal de México imponen retos para avanzar hacia una efectiva coordinación interinstitucional y multisectorial, orientada a atender problemas y situaciones multifactoriales o multidimensionales que requieren de un abordaje integral. Esto es particularmente evidente, por ejemplo, en temas como el combate a la pobreza, la igualdad de género, la eliminación de todas las formas de la violencia contra las mujeres, la protección integral de niñas, niños y adolescentes (NNA), la acción frente al cambio climático o la reducción del riesgo de desastre.

2.4. Contexto normativo en materia de derechos humanos

La *Reforma Constitucional en materia de Derechos Humanos* (2011) elevó a rango constitucional los derechos humanos reconocidos y protegidos en los tratados internacionales ratificados por México. El reconocimiento explícito del Derecho Internacional de los Derechos Humanos representa un cambio de paradigma al obligar a las autoridades de todos los niveles y órdenes de gobierno a garantizar su cabal cumplimiento a nivel interno, proporcionando en todo momento a las personas la protección más amplia (principio *pro persona*).

Este cambio de paradigma cobra singular importancia al ser México Estado Parte de los principales **instrumentos internacionales de derechos humanos**. De acuerdo con la CNDH, el Estado Mexicano ha ratificado un total de 181 instrumentos, de ellos 21 son regionales y 160 internacionales, 73 vinculantes y 108 no vinculantes²⁵. En particular, México ha ratificado los instrumentos base de derechos humanos de las Naciones Unidas, los cuales establecen obligaciones para informar sobre su cumplimiento, crean un comité de expertos/as para su vigilancia, algunos se complementan con protocolos facultativos relativos a preocupaciones específicas y varios establecen procedimientos especiales de comunicaciones individuales e interestatales, así como de investigación (Anexo 1). A nivel regional, México ha tenido una activa

²⁵ CNDH, “Derechos Humanos. Materia Internacional Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos”, http://www.cndh.org.mx/Instrumentos_Internacionales_Derechos_Humanos (Fecha de consulta: 3 de mayo de 2018).

participación en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Además de ser parte de los principales instrumentos sobre la materia, México reconoció la competencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para recibir y tramitar peticiones individuales y realizar visitas *in situ*, y aceptó la jurisdicción obligatoria de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en 1998, la cual ha conocido, hasta el momento, de diez casos contenciosos²⁶ y ha emitido 9 sentencias condenatorias al Estado Mexicano que obligan a todos los niveles de gobierno a reparar el daño de víctimas que sufrieron violaciones a derechos humanos²⁷.

Al día de hoy, el Estado Mexicano tiene todavía pendiente la ratificación del Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y del Tercer Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño, los cuales establecen procedimientos de comunicaciones individuales; la aceptación de la competencia del Comité contra las Desapariciones Forzadas sobre el procedimiento de investigaciones²⁸; la ratificación de 41 convenios de la OIT relacionado al trabajo decente²⁹; así como la ratificación o adhesión a la Convención para Reducir los casos de Apatridia, la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos humanos de las Personas Adultas Mayores y la Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes.

Importantes **reformas constitucionales y legislativas** han tenido lugar para alinear el derecho interno con los estándares internacionales de derechos humanos. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) reconoce de manera explícita un catálogo amplio de derechos y libertades fundamentales, entre ellos: el derecho a la no discriminación (art 1), a la libre determinación y la consulta previa de los pueblos y comunidades indígenas (art 2), a la educación de calidad (art 3), a la igualdad jurídica entre el hombre y la mujer (art 4), a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad (art 4), a la protección de la salud (art 4), a un medio ambiente sano (art 4), al acceso, disposición y saneamiento de agua (art 4), a una vivienda digna (art 4), a la identidad (art 4), al acceso a la cultura (art 4), al acceso a la información (art 6), a buscar y recibir asilo (art 11), a la protección de datos personales (art 16), a la justicia (art 17) y al trabajo digno (123). Al mismo tiempo, la CPEUM reconoce el principio del interés superior de la niñez (art 4), así como el principio de paridad de género en las candidaturas a legisladores federales y locales (art 41).

El Congreso de la Unión ha emitido leyes federales y generales importantes que se han traducido en la mayoría de los casos en leyes estatales para el cumplimiento de los derechos que tutelan. Tal es el caso de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación (2003), así como las leyes generales en materia de desarrollo social (2004), igualdad entre mujeres y hombres (2006), para el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia (2007), para la inclusión de las personas con discapacidad (2011), sobre refugiados, protección complementaria y asilo político (2011), en materia de prevención social de la violencia y la delincuencia (2012), para la prevención, sanción y erradicación de la trata de personas (2012), para la protección de personas defensoras de

²⁶ Corte IDH, “Casos contenciosos. México”, http://www.corteidh.or.cr/cf/Jurisprudencia2/busqueda_casos_contenciosos.cfm?lang=es (Fecha de consulta: 3 de julio de 2018).

²⁷ SRE, “Sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, <https://www.gob.mx/sre/acciones-y-programas/sentencias-de-la-corte-interamericana-de-derechos-humanos> (Fecha de consulta: 5 de julio de 2018).

²⁸ OACNUDH, “Ratificación por país y/o por tratado. México”, http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/TreatyBodyExternal/Treaty.aspx?CountryID=112&Lang=SP (Fecha de consulta: 3 de mayo de 2018).

²⁹ OIT, “Information System on International Labour Standards. Country profiles”, http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:11210:0::NO::P11210_COUNTRY_ID:102764 (Fecha de consulta: 3 de mayo de 2018).

derechos humanos y periodistas (2012), de Víctimas (2013 y reformada en 2017), para la protección de los derechos de NNA (2014), sobre transparencia y acceso a la información pública (2015), para prevenir, investigar y sancionar la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes (2017), en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares (2017), así como en el tema de cultura y derecho culturales (2017).

México es un país abierto al **escrutinio internacional** en materia de derechos humanos. Entre 2012-2018, el país se sometió al segundo ciclo de revisión del Examen Periódico Universal (EPU), recibió la visita de diversos mecanismos internacionales y regionales de derechos humanos³⁰, cumplió con obligaciones, algunas de ellas con retraso, de presentar informes de cumplimiento a diversos órganos de control de los tratados³¹ y se someterá al tercer ciclo del EPU en 2018.

Los mecanismos internacionales de derechos humanos han emitido un cuerpo considerable de **recomendaciones** a México para que avance y garantice el cumplimiento efectivo de sus obligaciones internacionales sobre la materia³² (ver Anexo 1). Un constante motivo de preocupación en este sentido, además de la incompleta alineación de las agendas políticas y armonización del derecho interno con los estándares internacionales, principalmente a nivel sectorial y estatal, es la marcada y persistente brecha de implementación que existe entre lo que establece el marco normativo, y su traducción en políticas públicas eficaces y en el ejercicio pleno de los derechos humanos de la población.

2.4. México en el contexto internacional

El Gobierno de México ha desarrollado una agenda de **política exterior** claramente articulada con el objetivo de posicionar al país como un actor con responsabilidad global. México ha demostrado un sólido liderazgo, caracterizado por su vocación multilateral, para fomentar el diálogo y construir consensos en temas clave de la agenda internacional, como derechos humanos, igualdad de género, pueblos indígenas, cambio climático, reducción del riesgo de desastres, migración, narcotráfico, seguridad internacional, comercio de armas e inclusión social. México participó activamente en la definición de la Agenda 2030 y los ODS, liderando posturas en los foros de consulta y durante el proceso de negociación, presentando propuestas puntuales para incorporar los principios de igualdad, inclusión social y económica; impulsando la universalidad, sustentabilidad y los derechos humanos como ejes rectores de la nueva agenda de desarrollo; y abogando por la adopción de un enfoque multidimensional de la pobreza que, además de considerar el ingreso de las personas, tomara en cuenta el acceso efectivo a otros derechos básicos, como alimentación, educación, salud y seguridad social.

³⁰ Relator Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias (2013); Relator Especial sobre la tortura (2014); Comisión Interamericana de Derechos Humanos (2015); Grupo de Trabajo sobre las Empresas y los Derechos Humanos (2016); Relator Especial sobre los defensores de derechos humanos (2017); Relator Especial sobre el agua potable y el saneamiento (2017); Relatora Especial sobre los pueblos indígenas (2017); Relator Especial de la ONU sobre la libertad de expresión y el Relator Especial sobre libertad de expresión de la CIDH (2017).

³¹ Informe inicial de México sobre el cumplimiento de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (2013); Informe de México en virtud del artículo 29, párrafo 1, de la Convención para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas (2014); Informes periódicos cuarto y quinto consolidados de México sobre la Convención sobre los Derechos del Niño (2014); Noveno informe periódico de México sobre la CEDAW (2016); Informes periódicos quinto y sexto sobre el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. México (2016); Informes periódicos 18º a 21º que el Estado parte debía presentar en 2016 sobre el cumplimiento de la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial (2017); Séptimo informe que México debía presentar en 2016 en virtud del artículo 19 de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos y Degradantes (2018); Sexto informe periódico que México debía presentar en 2015 en virtud del artículo 40 del Pacto con arreglo al procedimiento facultativo de presentación de informes (2018).

³² En el periodo 2012-2017, México recibió 188 recomendaciones por parte de los órganos de control de los tratados y 176 derivadas del Examen Periódico Universal, ciclo 2013. Fuente: OACNUDH, "Índice Universal de los Derechos Humanos. México", <http://uhri.ohchr.org/es/Summary/Country> (Fecha de consulta: 10 de julio de 2018).

México es **socio clave de la ONU**. Es uno de los principales contribuyentes a su presupuesto regular ordinario, ha comenzado una participación gradual en las Operaciones de Mantenimiento de la Paz, ha participado de forma activa en el desarrollo y proceso de reforma de la organización, además de ejercer en el periodo 2012-2018 un papel protagónico como miembro de diversos órganos intergubernamentales, entre ellos el Consejo de Derechos Humanos (2016-2018, 2018-2020), el Consejo Económico y Social (2018-2020), el Grupo Interinstitucional y de Expertos sobre los Indicadores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (IAEG-SDGs, por sus siglas en inglés) y el Comité de Organización de la Comisión de Consolidación de la Paz (2017-2018); y fue reelecto para el Consejo de la Organización de Aviación Civil Internacional, Parte II (2016-2019); el Consejo de Administración de la Organización Internacional del Trabajo (2017-2020) y el Consejo Ejecutivo de la Comisión Oceanográfica Intergubernamental de la UNESCO (2017-2019)³³.

México ha fortalecido su influencia en la toma de decisiones dentro de los principales organismos y foros multilaterales. Además de ser miembro y participar activamente en la Organización Mundial del Comercio (OMC), la OCDE, el G-20, el Mecanismo de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), la Alianza del Pacífico, la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI), la Organización de Estados Iberoamericanos y el mecanismo de Cumbres Iberoamericanas, el país recién ingresó en 2018 a la Agencia Internacional de Energía, constituyéndose como el primer y único miembro de América Latina y el Caribe hasta la fecha.

México tiene un papel polivalente en las dinámicas globales y regionales de la **cooperación internacional para el desarrollo** (CID). En tanto que país de renta media alta y por el tamaño de su economía, México es simultáneamente receptor y oferente de cooperación. El país ha avanzado en la formulación e implementación de un marco legal, institucional y programático robusto sobre la materia, compuesto por la Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo, la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID), el Programa de Cooperación Internacional para el Desarrollo y el Fondo Nacional de Cooperación Internacional para el Desarrollo (FONCID), lo que le ha permitido mejorar la cantidad y calidad de la cooperación, así como desarrollar esquemas innovadores de cooperación sur-sur y triangular para hacer más relevante y eficiente su papel como socio internacional para el desarrollo. De acuerdo con el Segundo Informe Nacional Voluntario sobre el cumplimiento de los ODS³⁴, en los últimos cinco años el país ha otorgado, en promedio, más de 250 millones de dólares anuales en CID. En 2017, México llevó a cabo 595 proyectos de CID en ámbitos relacionados con el cumplimiento de los ODS, incluyendo temas de acción climática, educación, salud y energía.

No obstante, persisten importantes desafíos asociados con la evolución del contexto. Si bien la AMEXCID se encuentra en proceso de adaptación a los retos de la nueva configuración de la cooperación internacional para el desarrollo, su ingeniería institucional deberá transitar hacia un modelo más complejo y eficaz que refleje de mejor manera las particularidades de un cooperante del sur, caracterizado también como cooperante dual y país de renta media alta, con profundas desigualdades económicas y sociales al interior de su territorio y entre grupos de población. A la par del rol cambiante de los cooperantes tradicionales, y a siete años de la entrada en vigor del

³³ SRE, *Quinto informe de labores, 2016-2017*, (México, Secretaría de Relaciones Exteriores: 2017). Recuperado de: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/255693/5o_INFORME_SRE.pdf (Fecha de acceso. 5 de julio de 2018).

³⁴ Gobierno de la República, *Segundo Informe Nacional Voluntario para el Foro Político de Alto Nivel sobre Desarrollo Sostenible* (México, Oficina de la Presidencia de la República: 2018). P. 85.

Ley correspondiente, México tiene el reto de sentar las bases de una cooperación internacional para el desarrollo fortalecida, consolidada e integral en el marco de la Agenda 2030 y los ODS³⁵.

México alberga trece **centros de excelencia** (CdeE) convenidos entre diferentes agencias del SNU y entidades públicas. Se trata de organizaciones, institutos o unidades de trabajo dentro de organismos o plataformas tecnológicas gubernamentales expertas que posicionan al país como un cooperante eficaz en distintas materias. Nueve de los trece CdeE establecidos en México fueron convenidos con la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS), fungiendo como centros regionales de América Latina y el Caribe³⁶. Los otros acuerdos firmados corresponden al Centro de Excelencia para la Información Estadística de Gobierno, Seguridad Pública, Victimización y Justicia (CEGOSEP), hospedado en INEGI y convenido en 2010 con UNODC; el Centro Regional para el Aprendizaje en Evaluación y Resultados (CLEAR, por sus siglas en inglés), hospedado en el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) y convenido en 2013 con el PNUD; el Instituto Regional del Patrimonio Mundial en Zacatecas, convenido en 2014 con la UNESCO; y el Centro de Excelencia Virtual en Monitoreo Forestal (CEVMF), hospedado en la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) y convenido en 2016 con el PNUD y la FAO. En 2017, ONU Mujeres e INEGI firmaron un acuerdo para establecer en México el Centro Global de Excelencia en Estadísticas de Género (CEEG), primero en su tipo y cuyo valor agregado residirá, entre otros aspectos, en fortalecer la generación, disponibilidad, análisis y uso de datos y estadísticas internacionalmente comparables sobre aspectos clave y emergentes para el logro de la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres en el marco de la implementación de la Agenda 2030 y los ODS.

Finalmente, México cuenta con una red de 12 **tratados de libre comercio** con 46 países, 32 acuerdos para la promoción y protección recíproca de las inversiones con 36 países, 9 acuerdos de alcance limitado (Acuerdos de Complementación Económica y Acuerdos de Alcance Parcial) en el marco de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) y es miembro del Tratado de Asociación Transpacífico³⁷.

³⁵ PNUD, “Programa de Cooperación AMEXCID-PNUD (2013-2017)”, <http://www.mx.undp.org/content/dam/mexico/docs/GobernabilidadDemocratica/Proyectos/ProgramaAMEXCID/PRODOC%20firmado.pdf> (Fecha de consulta: 12 de julio de 2018).

³⁶ Los centros colaboradores de la OMS en la Región de las Américas se conocen como Centros Colaboradores de la OPS/OMS debido a la característica única que tiene la Organización Panamericana de la Salud de cumplir una doble función: como oficina regional de la OMS para las Américas y como organismo especializado de salud del sistema interamericano. Los Centros Colaboradores de la OPS/OMS son socios fundamentales en la implementación de la cooperación técnica descentralizada (CTD). Al ser designados por la OMS para actuar localmente, integran una red participativa nacional e internacional para realizar actividades técnicas y concretar acciones para lograr resultados en salud en el nivel local, regional y global. La Red Mexicana de Centros Colaboradores de la OPS/OMS es promovida por la OPS/OMS en México y la Dirección de Relaciones Internacionales de la Secretaría de Salud. El más reciente de este grupo es el CdeE Piloto para Buenas Prácticas Regulatorias que inició sus trabajos a mediados de 2016 mediante convenio firmado entre la OMS, la OPS y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS).

³⁷ ProMéxico, “Tratados de comercio”, <http://www.promexico.mx/es/mx/tratados-comerciales> (Fecha de acceso: 5 de julio de 2018).

Sección IV. Análisis situacional

4.1. Una sociedad con gran potencial, pero profundamente desigual

México es un ejemplo de la paradoja que enfrentan diversos países de ingreso medio alto. Mientras su economía es la segunda en dimensión a nivel regional y undécima a nivel mundial, y el país tiene un Índice de Desarrollo Humano Alto (lugar 77 de 188 países³⁸), México enfrenta problemas estructurales de desigualdad, rezago social, discriminación y marginación de amplios grupos y sectores de la población en el ejercicio de los derechos sociales, económicos y culturales. Las desigualdades se profundizan principalmente por razones de género, edad, etnia y territorio.

4.1.1. Población y tendencias demográficas

México es el décimo país más poblado del mundo³⁹. En 2017, la **población total** ascendió a 123.5 millones de personas. De este total, 51.2% son mujeres, 34.1% menores de 18 años, 52.8% menores de 29 años, 36.7% adultos de 30 a 59 años y 10.5% adultos mayores de 60 años. Durante el periodo 2010 al 2014, la tasa de crecimiento total de la población promedio anual fue de 1.17%, observando desde 2015 una clara tendencia decreciente (1.06%). Para 2030, se estima que el país cuente con una población total de 140.1 millones de personas⁴⁰.

México es un país de gran riqueza y diversidad cultural. Con datos de la Encuesta Intercensal 2015 y con base en el criterio de hogar indígena de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los **Pueblos Indígenas** (CDI)⁴¹, se estima que en el país viven 12.2 millones de indígenas, lo que representa 10.1% de la población total. Cerca de 7.3 millones de personas hablan alguna de las 68 lenguas indígenas (6.5%) y, de acuerdo con su cultura, 24.4 millones de personas (21.5% de la población total) se reconocen como indígenas (autoadscripción), independientemente de hablar o no alguna lengua indígena. Las entidades con mayor porcentaje de población indígena son Oaxaca (32.2%), Yucatán (28.8%), Chiapas (27.9%), Quintana Roo (16.6%) y Guerrero (15.3%)⁴².

La **población afrodescendiente** es el tercer grupo poblacional de México después de los no indígenas y los indígenas. De acuerdo con la clasificación cultural, 1.4 millones de personas se autodefinen como afromexicanas o afrodescendientes, lo que representa 1.2% de la población total. Guerrero, Oaxaca y Veracruz son las tres entidades con la mayor población de este grupo, con 6.5%, 4.9% y 3.3% respectivamente⁴³.

³⁸ PNUD, *Informe sobre Desarrollo Humano 2016*, (Nueva York, PNUD:2016).

³⁹ United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division. *World Population Prospects: The 2017 Revision, Key Findings and Advance Tables* (Working Paper No. ESA/P/WP/248, NY: United Nations, 2017), p. 29.

⁴⁰ CONAPO, "Proyecciones de la Población 2010-2050. Datos de proyecciones", http://www.conapo.gob.mx/es/CONAPO/Proyecciones_Datos (Fecha de consulta: 9 de abril de 2018).

⁴¹ "El concepto de hogar indígena se ha definido como aquel donde el jefe(a), su cónyuge o alguno de los ascendientes (madre o padre, madrastra o padrastro, abuelo(a), bisabuelo(a), tatarabuelo(a), suegro(a)) declararon hablar alguna lengua indígena. Todos los integrantes de este hogar se contabilizan como población indígena aun cuando hayan manifestado no hablar alguna lengua indígena". Ver CDI, *Indicadores socioeconómicos de los pueblos indígenas de México, 2015* (México, CDI: 2015) <https://www.gob.mx/cdi/articulos/indicadores-socioeconomicos-de-los-pueblos-indigenas-de-mexico-2015-116128?idiom=es> (Fecha de consulta: 2 de mayo de 2018).

⁴² INEGI, "Estadísticas a propósito del Día Internacional de los Pueblos Indígenas", http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2016/indigenas2016_0.pdf (Fecha de consulta: 6 de abril de 2018)

⁴³ INEGI, CNDH, CONAPRED, *Perfil de la población afrodescendiente en México* (México, INEGI:2017), <http://www.cndh.org.mx/docs/Afrodescendientes.pdf> (Fecha de consulta: 2 de mayo de 2018).

México es un país predominantemente **urbano**, ya que cerca del 78% de su población vive en localidades urbanas de 2,500 habitantes y más⁴⁴. En las próximas décadas, buena parte del crecimiento demográfico del país será urbano, lo que significa que México pasará de contar con 384 ciudades a 961 en 2030, en las que se concentrará 83.2% de la población⁴⁵. La prominente concentración de la población en grandes ciudades se conjuga con una fuerte dispersión de la población. De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2010, el país tenía en ese mismo año 182,675 localidades con menos de mil habitantes, en donde vivían 17 millones de personas (15% de la población total). Esta dualidad plantea fuertes retos para el desarrollo sostenible y el cumplimiento de metas de los ODS.

México transita por un proceso demográfico que está modificando sustancialmente su pirámide poblacional, estrechando su base y ampliando su cúspide, perfilándose hacia un franco **envejecimiento** de la población para el año 2050. Entre 1990 y 2017, el grupo de las personas de 60 años y más aumentó su proporción con respecto al total de la población (de 6.4 a 10.5%). Para 2030, se estima que la población de **personas adultas mayores** será de 20.4 millones (14.8%), y llegará a su cúspide en 2050 con 32.4 millones, lo que representará el 21.5% de la población total⁴⁶.

Otro proceso vinculado a la transición demográfica tiene que ver con el aumento relativo de la población en edades potencialmente activas en relación con la proporción de personas en edades potencialmente dependientes (**bono demográfico**). Lo anterior se percibe principalmente a través de la disminución en la razón de dependencia demográfica (número de dependientes económicos de 0-14 años y 60 años y más, por cada 100 personas en edad de trabajar de 15 a 59 años). De acuerdo con el INEGI⁴⁷, entre 1970 y 2017 la razón de dependencia demográfica pasó de 107.6 a 59.9 dependientes por cada 100 personas activas. Se prevé que para 2030 esta relación estará en su cúspide y será de dos a uno. Para 2050, la brecha en la estructura demográfica se cerrará, es decir, los porcentajes de ambos grupos serán similares y su relación será prácticamente de uno a uno. Tanto el envejecimiento de la población como el bono demográfico imponen desafíos de política pública para garantizar el ejercicio pleno de los derechos sociales, a través de la generación de capacidades y oportunidades de desarrollo para ambos segmentos de la población, en un marco de respuesta integral a los retos presentes y futuros del cuidado como un derecho humano, de forma que esta responsabilidad no recaiga individualmente en las mujeres y acreciente las brechas de género. Bajo este marco, toma particular relevancia la inversión en formación de capital humano, particularmente enfocada hacia la población de adolescentes y jóvenes; así como la formulación de políticas que permitan preparar al país ante el proceso de envejecimiento de la población.

⁴⁴ INEGI, *Principales resultados del Censo de Población y Vivienda 2010* (México, INEGI: 2011) e INEGI, "Tabulados de la encuesta Intercensal 2015. Población". Datos del Banco Mundial revelan que, en 2016, 79.5% de la población en México era urbana. Por otro lado, en su estudio *El campo mexicano en el siglo XXI. Tendencias y Cambios* (México, marzo 2018), Hector Robles Berlanga y Daniel Mejía mencionan que la definición de población rural, a partir de localidades de 2,500 habitantes, "si bien refleja nítidamente a lo rural, no contiene a toda la población que vive en el campo mexicano, de ahí que consideramos hasta 15 mil habitantes como población rural, lo que nos arroja un total de 45 millones de personas, que representan 38% de la población total del país (INEGI, 2015). Siete millones más de personas que los registrados en el censo del año 2000".

⁴⁵ ONU Hábitat, "Tendencias del desarrollo urbano en México", <http://onuhabitat.org.mx/index.php/tendencias-del-desarrollo-urbano-en-mexico> (Fecha de consulta: 26 de abril de 2018).

⁴⁶ CONAPO, "Proyecciones de la Población 2010-2050. Datos de proyecciones...op cit" (Fecha de consulta: 19 de abril de 2018).

⁴⁷ INEGI, "Estadísticas a propósito del Día Mundial de la Población (11 de julio), datos nacionales", http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2017/poblacion2017_Nal.pdf (Fecha de consulta: 26 de junio de 2018); IMJUVE, "Situación demográfica", https://www.imjuventud.gob.mx/imgs/uploads/Infografia_Demografica.pdf (Fecha de consulta: 29 de abril de 2018).

Se estima que 6% de la población total de México (7.1 millones de personas), tiene al menos una **discapacidad**⁴⁸. El principal tipo de discapacidad en México es la motriz (37.3%), seguido de la discapacidad por enfermedad (38.5%). En aproximadamente 19.1 de cada cien hogares del país (6.14 millones de hogares) vive, al menos, una persona con discapacidad. La estructura por edad de la población con discapacidad muestra la estrecha relación de esta condición con el proceso de envejecimiento, ya que casi la mitad de las personas con discapacidad son mayores de 60 años. Datos de la Encuesta Nacional de Niñas, Niños y Mujeres en México (ENIM) 2015 revelan que la prevalencia de niñas, niños y adolescentes de 2 a 17 años con dificultades severas de funcionamiento en al menos un ámbito alcanza de 8.4%, siendo la prevalencia más elevada entre los niños (10%) que entre las niñas (7%).

México refleja de manera clara el carácter pluridimensional de la **migración** internacional. Por su ubicación geográfica, el país forma parte de uno de los corredores migratorios más dinámicos y complejos del mundo, en donde confluyen diversos procesos de la migración: origen, destino, tránsito, retorno y migración interna, que han dado como resultado una tasa de migración neta internacional de -0.23 en 2017, es decir, salieron más de 382 mil personas de México (39.4% mujeres y 60.5% hombres) y entraron más de 92 mil personas extranjeras (41% mujeres y 60% hombres). Cada vez más un mayor número de personas (principalmente provenientes del Triángulo Norte de Centroamérica) manifiestan su intención de permanecer en México buscando la protección internacional como refugiados (ver capítulo 4.5.2).

4.1.2. Pobreza multidimensional⁴⁹

Los datos más recientes de **pobreza** en México⁵⁰, revelan que el porcentaje de población en esa situación no ha mostrado cambios estadísticamente significativos en los últimos ocho años. En 2008, 44.4% de la población se encontraba en pobreza, mientras que en 2016 el 43.6% lo estaba. Si bien hubo una disminución de 0.8 puntos porcentuales en ese lapso, en términos absolutos el número de personas en pobreza aumentó de 49.5 a 53.4 millones (3.4 millones más). En el mismo periodo, la **pobreza extrema** tuvo una disminución de 3.4 puntos porcentuales, al pasar de 11 a 7.6%, lo que representa una disminución de 2.9 millones de personas en esa situación (de 12.3 millones en 2008 a 9.4 millones en 2016). De acuerdo con la CEPAL⁵¹, la reducción de los niveles de pobreza en México ha sido menor y más lenta en comparación con la que han mostrado otros países de América Latina y el Caribe.

El panorama mixto de la pobreza en México se debe principalmente a la falta de mejora del **ingreso en los hogares** y a la reducción desigual de las carencias sociales a lo largo del tiempo. Aún y cuando el porcentaje de población con un ingreso inferior a la línea de bienestar mínimo y a la línea de bienestar ha mostrado una tendencia descendente en los últimos años, lo cierto es que, para 2016, el ingreso de 21.4 millones de personas (17.5% de la población) era inferior al valor de la canasta alimentaria y el de 62 millones de personas (50.6% de la población) era insuficiente para

⁴⁸ INEGI, *La discapacidad en México, datos al 2014* (México: INEGI, 2016). P. 22.

⁴⁹ Conforme a la Ley General de Desarrollo Social, artículo 36, el CONEVAL es responsable de establecer los lineamientos y criterios para definir, identificar y medir la pobreza en México, tomando en consideración, al menos, los siguientes indicadores: ingreso corriente per cápita; rezago educativo promedio en el hogar; acceso a los servicios de salud; acceso a la seguridad social; calidad y espacios de la vivienda; acceso a los servicios básicos en la vivienda; acceso a la alimentación; y grado de cohesión social. La palabra multidimensional se refiere a que la metodología de medición de pobreza utiliza varias dimensiones o factores económicos y sociales en su concepción y definición. Ver: CONEVAL, "Glosario", <https://www.coneval.org.mx/Medicion/Paginas/Glosario.aspx> (Fecha de consulta: 11 de julio de 2012).

⁵⁰ Salvo que se indique lo contrario, todos los datos de pobreza y carencias sociales referidos en este apartado y a lo largo del documento tienen como fuente CONEVAL, *Informe de evaluación de la Política de Desarrollo Social, 2018* (Ciudad de México, CONEVAL: 2018).

⁵¹ CEPAL, *Panorama de la situación social de América Latina y el Caribe 2017* (Santiago de Chile, CEPAL: 2018).

cubrir las necesidades básicas respecto a salud, educación, alimentación, vivienda, vestido o transporte público, aún y cuando dedicara todo su ingreso para ello.

La medición multidimensional de la pobreza permite observar avances en la disminución de todas las **carencias sociales** durante el periodo 2008-2016. En conjunto, la población vulnerable por carencias sociales disminuyó de 32.3% a 26.8% en dicho periodo. No obstante, la evolución de las carencias sociales ha sido desigual y en ciertas dimensiones el progreso demasiado lento. Por ejemplo, mientras que el porcentaje de población con carencias por acceso a los servicios de salud (Meta 3.7) se redujo de manera importante de 38.4% en 2008 a 15.5% en 2016 (una disminución de 22.9 puntos porcentuales⁵²), el porcentaje de población con carencia por acceso a la seguridad social (Meta 1.3) mostró una disminución menor, de 65 a 55.8% (9.2 puntos porcentuales), pero el progreso en la carencia por acceso a la alimentación (Meta 2.1) en estos ocho años no ha sido estadísticamente significativo (de 21.7 a 20.1%, lo que representa una disminución de tan solo 1.6 puntos porcentuales). Esto ha tenido como resultado un cuello de botella en la reducción de la pobreza multidimensional ya que, si bien algunas personas dejan de tener carencias en una dimensión, siguen teniendo privaciones en otros derechos sociales, de tal suerte que su situación de pobreza no cambia.

La **concentración de la pobreza** muestra un patrón persistente, se ubica mayoritariamente en la región sur-sureste del país y en estados con una fuerte presencia de población indígena. En 2016, cinco estados mostraron los índices más altos de pobreza, superando el 50% de su población en esa situación: Chiapas (77.1%); Oaxaca (70.4%); Guerrero (64.4%); Veracruz (62.2%) y Puebla (59.4%)⁵³. Preocupa en este contexto el impacto que los sismos de septiembre de 2017, que afectaron principalmente a Oaxaca y Chiapas, han podido tener en el número de personas en situación de pobreza y pobreza extrema, principalmente por el aumento de personas con carencias por calidad y espacios de la vivienda, y servicios básicos de la vivienda (Meta 1.5)⁵⁴.

México tiene un doble reto de reducir la **pobreza rural y urbana**. Si bien la pobreza se concentra en localidades rurales, en comunidades pequeñas y dispersas, el número de personas pobres en zonas urbanas es mayor. En 2016, 16.5 millones de personas en zonas rurales vivían en situación de pobreza, mientras que 36.9 millones de personas en zonas urbanas tenían esa misma condición. Los niveles de pobreza en el ámbito rural han mostrado, desde 2008, una disminución moderada, aunque progresiva (de 62.5 a 58.2% en 2016), situación que no ocurre con la pobreza en zonas urbanas, la cual prácticamente se ha mantenido estable desde 2008 (de 38.2 a 39.2%). La tendencia indica que, para el 2030, 83.2% de la población se concentrará en zonas urbanas, en donde probablemente la población en situación de pobreza que viva en zonas marginadas sea la que predomine⁵⁵.

⁵² Esta reducción se puede explicar principalmente por la incorporación de un gran número de personas al Seguro Popular (ver apartado 4.1.4). No obstante, el acceso a los servicios de salud es diferenciado al de la población derechohabiente, como se menciona también en dicho capítulo.

⁵³ En 2012, estos mismos cinco estados ya tenían los índices más altos de pobreza, lo que muestra que su situación no mejoró a lo largo del tiempo.

⁵⁴ De acuerdo con el Censo de viviendas dañadas por los sismos de septiembre de 2017, elaborado por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), 65 mil viviendas en Oaxaca y 46,773 en Chiapas fueron afectadas por los sismos. Este censo no muestra información desagregada por sexo y edad sobre el número de personas afectadas por la pérdida parcial o total de sus viviendas. El censo está disponible en la liga <http://transparencia.sedatu.gob.mx/>

⁵⁵ ONU Hábitat, "Tendencias del desarrollo urbano en México", <http://onuhabitat.org.mx/index.php/tendencias-del-desarrollo-urbano-en-mexico> (Fecha de consulta: 26 de abril de 2018). De acuerdo con el informe *Slum Almanac 2015 2016, Participatory Slum Upgrading Programme* (P. 84), ONU Hábitat estima que actualmente el 21.1% de la población urbana en América Latina y el Caribe vive en cinturones de miseria.

La pobreza afecta de manera diferenciada a diversos **grupos de población**, quienes, por su condición de género, etnia, edad y área geográfica de residencia, así como la intersección de estas variables, experimentan mayores privaciones y obstáculos en el ejercicio de sus derechos sociales.

Las **mujeres** en México tienen mayor probabilidad de vivir en situación de pobreza que los hombres. La falta de ingresos propios (ODS 8), la agudización de las carencias sociales en materia de alimentación (ODS 2), salud (ODS 3) y educación (ODS 4), así como la mayor vulnerabilidad de los hogares con jefatura femenina⁵⁶ son factores que ubican al 44% de las mujeres mexicanas en situación de pobreza. Si bien no existe una brecha de género en la incidencia de la pobreza (44% mujeres-43% hombres), las mujeres muestran mayores privaciones que los hombres en prácticamente todas las dimensiones de las carencias sociales, especialmente en los indicadores de bienestar. La pobreza de tiempo⁵⁷ tiene un impacto negativo en la vida y las oportunidades de desarrollo de las mujeres, ya que profundiza y reproduce la pobreza. En México, una proporción mayor de mujeres (62.9%) que de hombres (7.1%) está en pobreza de tiempo, debido a que dedica más de 37.4 horas a la semana, aproximadamente 5.3 horas al día, a actividades de trabajo no remunerado (Meta 5.4), situación que es todavía más adversa para las mujeres que viven en localidades rurales (76.5%).

Los **pueblos y comunidades indígenas** enfrentan históricamente los mayores índices de pobreza en México: casi 8 de cada 10 indígenas viven en pobreza y 3 de cada 10 en pobreza extrema, situación que no ha variado a lo largo del tiempo y que sugiere que las políticas de combate a la pobreza focalizadas a este grupo de población no han sido efectivas. La situación es todavía más adversa para las mujeres indígenas que viven en zonas rurales (8.5 de cada 10 vive en pobreza y 4 de cada 10 en pobreza extrema), quienes enfrentan no solo los obstáculos estructurales por razones de género, sino también los específicos derivados de los sistemas normativos indígenas, para tener igualdad en el acceso a los títulos de propiedad y tenencia de la tierra como medida para su empoderamiento económico (Metas 1.4, 2.3 y 5.a).

Los altos niveles de pobreza en **niñas, niños y adolescentes** confieren a su atención y reducción un sentido de urgencia. La medición de la pobreza muestra que, en 2016, más de la mitad de niñas y niños entre 0 a 11 años (52.3%) vivían en situación de pobreza (9.7% en pobreza extrema) y casi la mitad de las y los adolescentes de 12-17 años (48.8%) se encontraban en esa misma condición (7.8% en pobreza extrema). En términos absolutos, 20.7 millones de niñas, niños y adolescentes en México carecen de las condiciones mínimas para ejercer sus derechos sociales, además de que el ingreso de su hogar es insuficiente para satisfacer sus necesidades básicas.

⁵⁶ De acuerdo con la ENIGH 2016, en México existen 32.9 millones de hogares, de los cuales 27.3 son de jefatura femenina. Con base en los indicadores de CONEVAL sobre pobreza y género, la vulnerabilidad de los hogares con jefatura femenina se asocia a un mayor número de integrantes de la población infantil y adulta mayor, mayor dependencia demográfica y mayor vulnerabilidad sociodemográfica que derivan en mayores porcentajes de pobreza. Información disponible en: <https://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Paginas/Pobreza-y-genero-en-Mexico-2010-2016.aspx> (Fecha de consulta: 2 de mayo de 2018).

⁵⁷ El concepto de pobreza de tiempo se refiere, en términos generales, a la situación en la que una persona enfrenta cargas de trabajo considerables y, por tanto, ve reducida su capacidad para decidir cómo asignar su tiempo, con implicaciones negativas para su bienestar, desarrollo y empoderamiento económico. La medición de la pobreza de tiempo pretende reflejar la desigualdad de género que se deriva de la división sexual de trabajo que da lugar a una organización social del tiempo profundamente desigual para las mujeres. La pobreza de tiempo se mide a través de la distribución observada del tiempo dedicado a actividades de trabajo no remunerado de la población de 16 a 64 años. Las líneas de pobreza de tiempo se estiman como múltiplos de la mediana, de tal suerte que la línea que corresponde a 1.5 veces la mediana equivale a 37.4 horas a la semana, aproximadamente 5.3 horas al día, y la línea asociada a dos veces la mediana es 49.9 horas, aproximadamente 7.1 horas al día. Aquellas personas que dedican más de 37.4 horas a actividades de trabajo no remunerado se consideran pobres de tiempo. Datos calculados a partir de la Encuesta Nacional sobre Uso del Tiempo (ENUT) 2009 e incorporados en ONU Mujeres e INMUJERES, *Pobreza de tiempo: una revisión conceptual. Cuaderno de trabajo*. (México, ONU Mujeres/INMUJERES: 2015). Pp. 7-8.

La situación de pobreza infantil es heterogénea en términos individuales, del hogar y del entorno geográfico, pero también de la etapa específica del ciclo de vida en la que se encuentra. Con datos de 2014⁵⁸, la población de 0 a 1 año de edad tiene mayor incidencia de la carencia por acceso a los servicios de salud (ODS 3); mientras que la población de 2 a 5 años presenta mayor incidencia de pobreza y pobreza extrema en gran medida asociada a las diferencias en la carencia por rezago educativo (ODS 3); el grupo de 12 a 17 años, si bien tiene menor porcentaje con ingreso inferior a las líneas de bienestar económico y de bienestar mínimo, presenta la mayor carencia por acceso a la alimentación (ODS 2) en comparación con los otros grupos de edad. Las niñas, niños y adolescentes (NNA) en municipios de muy alta marginación, así como aquellos que hablan una lengua indígena, son los grupos con los mayores niveles de pobreza, pobreza extrema y con dos o más carencias sociales. El derecho social en que la población infantil y adolescente tiene el mayor rezago es en el acceso a la seguridad social (62.6%, lo que equivale a 24.9 millones de niñas, niños y adolescentes). Dentro de los obstáculos que enfrentan los NNA para el ejercicio de sus derechos humanos por su condición etaria, las niñas adicionalmente tienen que sortear los obstáculos por su condición de género (ODS5) ya que, en comparación con sus pares hombres, tienen menos acceso a espacios de participación y esparcimiento. Incluso su alimentación (ODS 2) y educación (ODS 4) se coloca, cuando es necesario, por debajo de sus pares varones. Estas situaciones afectan su desarrollo y aumenta las probabilidades de que vivan en pobreza (ODS 1).

La pobreza en las **personas adultas mayores** se agrava a partir de la acumulación de desventajas. En 2016, 41.1% de las personas de 65 años y más se encontraban en situación de pobreza y 6.5% en pobreza extrema. Además del marcado rezago educativo (ODS 4), la carencia por acceso a servicios de salud (ODS 3) y la lenta disminución en los niveles de carencia alimentaria (ODS 2), un aspecto que preocupa en este grupo es la falta de acceso a la seguridad social (ODS 10). Del total de adultos mayores que no cuentan con pensiones no contributivas de carácter federal y estatal, 61.1% son mujeres (1.5 millones).

La **disminución de la pobreza multidimensional**, por lo menos a la mitad, como lo propone el ODS 1, es un reto mayúsculo para México. Un análisis prospectivo realizado por el Programa Universitario de Estudios de Desarrollo de la UNAM⁵⁹ muestra que, en un escenario tendencial, en donde no se experimenten cambios en el crecimiento económico, no mejore el ingreso de los hogares y la política social continúe como hasta ahora, la pobreza aumentará a 66.7% en 2030. No obstante, el escenario de reducir la pobreza e incluso cumplir con la meta (llegar a 31.9%) es posible si se modifica la trayectoria que han seguido los indicadores en el espacio de bienestar (ingreso de los hogares) y en el de derechos sociales (carencias).

El combate a la pobreza ha sido prioridad de la política de desarrollo social de México. Sin embargo, los programas de combate a la pobreza⁶⁰ y de transferencias⁶¹, de los cuales

⁵⁸ CONEVAL y UNICEF México, *Pobreza y derechos sociales de niñas, niños y adolescentes, 2014* (México, CONEVAL/UNICEF México: 2016).

⁵⁹ PUDH, *Perspectivas del desarrollo al 2030* (México, Universidad Nacional Autónoma de México-Programa Universitario de Estudios del Desarrollo: 2017). Pp. 52-57.

⁶⁰ Los tres principales instrumentos a nivel federal para combatir la pobreza y las carencias sociales de la actual administración son: La Cruzada contra el Hambre, el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) y la Estrategia Nacional de Inclusión (ENI). La Cruzada contra el Hambre surgió con la intención de atender los problemas de coordinación institucional para atender, desde un enfoque multidimensional, la pobreza y las carencias sociales. A través del FAIS, se destinan recursos a la federación y gobiernos estatales para la disminución de las carencias sociales de la medición de la pobreza que, a partir de sus nuevas reglas de operación en 2016, tendrán una mayor y mejor focalización. La ENI surgió en 2016 para que las secretarías y dependencias del Gabinete Especializado de México Incluyente intensificaran las acciones para garantizar el ejercicio pleno de los derechos sociales.

⁶¹ Entre los principales programas federales de transferencias se encuentran: PROSPERA-Inclusión Social y el Programa de Adultos Mayores. Cabe anotar que PROSPERA ahora no solo es un programa de transferencias condicionadas, ya que se le agregó un componente que promueve la inclusión productiva entre sus beneficiarios/as.

actualmente son beneficiarias cerca de 76 millones de personas⁶², no han logrado tener un impacto relevante en los indicadores de pobreza, ni en indicadores más igualitarios e inclusivos en materia de salud, educación, ingreso o protección social. Inclusive, las limitaciones y falta de integralidad de los esquemas basados en transferencias para reducir de manera efectiva la pobreza han sido reconocidas por el propio gobierno⁶³. Entre las principales preocupaciones se encuentran los desafíos en términos de inclusión y exclusión. De ahí la importancia de abrir a la discusión las limitaciones de la focalización y la necesidad de transitar hacia un enfoque más universalista. Otro reto es la equidad del gasto público dirigido a los grupos que se encuentran en mayor vulnerabilidad. Un análisis sobre este tema indica que las niñas y niños entre 0 a 5 años (primera infancia) recibieron el menor gasto público *per cápita* entre las y los menores de 18 años y tuvieron la menor proporción de beneficiarios del gasto en desarrollo humano, a pesar de ser el grupo de población infantil que presenta el menor nivel de desarrollo humano⁶⁴.

Más allá de los retos de coordinación vertical y horizontal que se han identificado, así como de la fragmentación o duplicidad de los programas públicos⁶⁵, el CONEVAL advierte que el gran desafío de México es construir una política pública de desarrollo social en donde el combate a la pobreza se inserte en una estrategia más amplia, de verdadera inclusión e igualdad de oportunidades para todos los grupos de población, y cuyo objetivo sea el acceso y ejercicio pleno de los derechos sociales. Reducir la pobreza multidimensional, bajo un enfoque de derechos humanos, con perspectiva de género, interculturalidad y de ciclo de vida, y a través de la integralidad de esfuerzos (Meta 1.b) puede ser la ruta que México se trace para cumplir con el ODS 1 y la Agenda 2030.

Finalmente, los sismos de septiembre de 2017, que afectaron principalmente a estados del sureste y centro del país con altos índices de población en situación de pobreza y pobreza extrema, pusieron en evidencia la necesidad de fortalecer los sistemas de protección social y de transferencias en el marco de la respuesta a la emergencia, con miras a evitar que los hogares pobres y vulnerables afectados por los sismos cayeran en ciclos de pobreza crónica y estuvieran en mayor riesgo de enfrentar otras carencias sociales (Meta 1.5). El uso de **sistemas integrales de protección social en la gestión del riesgo** (Metas 1.3) es fundamental para que los gobiernos, los donantes y los aliados de la cooperación internacional armonicen la asistencia a la población afectada, coordinen una respuesta más oportuna que responda a las necesidades específicas de los grupos de población afectados, y trasciendan la división tradicional entre apoyo humanitario e intervenciones de desarrollo⁶⁶.

⁶²De acuerdo con el Padrón Único de Beneficiarios de Programas de Desarrollo Social (PUB) de SEDESOL (cifras redondeadas), hay 822 mil beneficiarios de programas estatales, mientras que en los principales programas federales hay 25 millones de beneficiarios en PROSPERA-Inclusión Social; 53.5 millones en el Seguro Popular; 5 millones en el Programa Pensión de Adultos Mayores y 8 millones en Liconsa. Datos recuperados de: SEDESOL, "Padrón Único de Beneficiarios de Programas de Desarrollo Social", <http://pub.sedesol.gob.mx/spp/resumen/personasFisicas.jsp> (Fecha de consulta: 20 de abril de 2018).

⁶³SEDESOL, "Diagnóstico de PROSPERA Programa de Inclusión Social", https://evaluacion.prospera.gob.mx/es/wersd53465sdg1/matriz/Diagnostico_PROSPERA_29122015.pdf (Fecha de consulta: 24 de mayo de 2018)

⁶⁴Por ejemplo: 20% de los NNA con menor IDH debió captar el 38.6% del gasto en desarrollo humano; sin embargo, sólo recibió 15.2%. Al mismo tiempo, 20% de los NNA con mayor IDH debió recibir el 8.9% del gasto en desarrollo humano; no obstante, recibió 24.2%. PNUD y UNICEF México, *Informe sobre la equidad del gasto público en la infancia y la adolescencia en México* (PNUD/UNICEF México: 2015). Recuperado de:

http://www.mx.undp.org/content/dam/mexico/docs/Publicaciones/PublicacionesReduccionPobreza/InformesDesarrolloHumano/idh_pnudunicef/UNICEF_PNUD_Equidad_Gasto.pdf (Fecha de consulta: 24 de mayo de 2018)

⁶⁵En su Informe de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 2016, el CONEVAL identificó un total de 5,491 programas y acciones de desarrollo social, de los cuales 233 son federales, 2,528 estatales y 2,730 municipales.

⁶⁶Rodolfo Beazley y Ana Solórzano, *Protección social reactiva frente a emergencias en América Latina y el Caribe. Principales hallazgos y recomendaciones* (Oxford Policy Management/World Food Programme: 2017).

4.1.3. Seguridad alimentaria y nutricional

La **seguridad alimentaria** en México presenta un panorama de claroscuros. Por un lado, la oferta de energía alimentaria disponible en México sobrepasa los requerimientos para cubrir la demanda. De acuerdo con la FAO⁶⁷, el consumo calórico para la población mexicana se estima en 2,200 calorías en promedio. En 2014-2016, los alimentos disponibles en el país, si bien con un componente importado, permitían un consumo calórico superior a los requerimientos en alrededor de 30%. En principio, no tendría por qué haber hambre en México.

No obstante, las fuertes deficiencias en el acceso a la alimentación (Meta 2.1), acceso económico y acceso físico, han originado un panorama heterogéneo de grandes carencias, el cual requiere de intervenciones focalizadas en ciertos grupos de población y regiones del país. El número y la proporción de personas que no gozan del pleno ejercicio del derecho a la alimentación son altos. De acuerdo con las estimaciones del CONEVAL, en 2016 24.6 millones de personas (20.1% de la población) tenían inseguridad alimentaria moderada y severa (carencia por acceso a la alimentación), con proporciones superiores en zonas rurales (24.7%), en las personas con discapacidad (27.9%) y la población indígena (30.5%).

El problema del acceso a la alimentación afecta desproporcionadamente a los hogares con peores condiciones de bienestar y, particularmente, a los hogares con jefatura femenina. La medición multidimensional de la pobreza indica que 21.4 millones de personas no tenían ingresos suficientes para comprar la canasta alimentaria en 2016. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares (ENIGH) 2016, el gasto de los hogares en alimentos y bebidas de la población con los ingresos más bajos (decil I) fue de 50.6% del total del gasto, mientras que el de las personas con el decil más alto (decil X) fue de 25.2%. En el periodo 2010-2016, si bien se observó una reducción en la carencia por acceso a la alimentación, el ritmo de descenso fue menor en hogares con jefatura femenina con respecto a los de jefatura masculina, lo que se refleja en una brecha de 3.1 puntos porcentuales en 2010, la cual aumentó a 3.8 en 2016⁶⁸.

De acuerdo con el *Panorama de la Seguridad Alimentaria y Nutricional en México 2012*⁶⁹, el cual sirvió de base para la integración de los principales instrumentos de política pública sobre la materia (el Programa Nacional México sin Hambre 2013-2018 y la Cruzada Nacional contra el Hambre), los estados donde los niveles de pobreza son mayores (ODS 1), presentan también los niveles más elevados de carencia por acceso a la alimentación (ODS 2). En 2014, 16 entidades superaron el porcentaje de población con carencia alimentaria observado a nivel nacional y seis estados del sur-sureste tenían entre el 30 y 45% del total de su población en esa condición⁷⁰.

México enfrenta retos importantes en términos de la **seguridad nutricional** de su población. Si bien el país tiene un nivel relativamente bajo de prevalencia de subalimentación (4.2%, que equivale a 5.4 millones de personas⁷¹) y, el porcentaje de la población por debajo del nivel mínimo

⁶⁷ FAO, "Indicadores de Seguridad Alimentaria", <http://www.fao.org/economic/ess/ess-fs/indicadores-de-la-seguridad-%20alimentaria/es/#.WsU-Q9Pwbq1> (Fecha de consulta: 6 de mayo de 2018)

⁶⁸ CONEVAL, "Pobreza y género en México: hacia un sistema de indicadores. Información 2010-2016", <https://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Paginas/Pobreza-y-genero-en-Mexico-2010-2016.aspx> (Fecha de consulta: 8 de mayo de 2018).

⁶⁹ FAO, SAGARPA, SEDESOL, INSP, *Panorama de la Seguridad Alimentaria y Nutricional en México 2012* (México, Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO): 2013).

⁷⁰ Tabasco 45%, Guerrero 38%, Oaxaca 36%, Michoacán 34%, Hidalgo 31% y Veracruz 30%.

⁷¹ FAO y OPS, *Panorama de la seguridad alimentaria y nutricional en América Latina y el Caribe 2017* (Santiago de Chile, Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y Organización Panamericana de la Salud (OPS): 2017). P. 11.

de proteínas requerido se situó en 3.6 en 2014⁷², preocupa la coexistencia de una doble carga de la malnutrición: la desnutrición, y el sobrepeso y la obesidad. Ambas situaciones afectan el goce efectivo del derecho a una alimentación adecuada, con serias repercusiones en la salud de la población en general⁷³, pero especialmente de las mujeres y de niñas, niños y adolescentes.

La **anemia de mujeres** embarazadas (Meta 2.2) es un factor de riesgo de muerte materna (Meta 3.1) y de bajo peso al nacer (Meta 2.2). Si bien entre 2005-2015 México redujo la proporción de mujeres en edad fértil con anemia de 21% a 15%⁷⁴, existe todavía un déficit importante que atender, principalmente en zonas rurales e indígenas. En términos de la **desnutrición infantil**, la ENIM 2015 revela que 12.4% de niñas y niños menores de cinco años presentaba desnutrición crónica, 4% bajo peso al nacer, 1% estaba demasiado delgado para su talla, y la prevalencia de cualquier tipo de anemia en niñas y niños de 12-59 meses se situó en 14.1%⁷⁵. La desnutrición afecta en mayor proporción a niñas y niños indígenas, pero también a niñas y niños con discapacidad, en quienes la prevalencia de desnutrición aguda y desnutrición crónica es mayor en comparación con sus pares sin discapacidad⁷⁶. La tasa de **obesidad** de adultos (33%) en México es la segunda más alta en la OCDE y 35% de las y los adolescentes entre 12 a 19 años tienen sobrepeso u obesidad⁷⁷. Las consecuencias del sobrepeso y la obesidad son graves, e incluyen la mayor probabilidad de desarrollo de enfermedades crónicas, como la diabetes (Meta 3.4). De ahí que la alimentación es un eje que vincula el cumplimiento de los ODS 2 y ODS 3.

El **sector rural** en México cuenta con una superficie de 196 millones de hectáreas. Estas tierras, además de producir una cantidad importante de los alimentos que demanda la población, incluyen 141 millones de hectáreas correspondientes a recursos forestales y albergan la mayoría de las reservas de la biósfera, de las áreas naturales protegidas y los centros arqueológicos⁷⁸. Del total de la superficie rural, 43% corresponde a la propiedad ejidal, con 3.8 millones de ejidatarios y 697 mil posesionarios; 9.1% a comunidades agrarias en manos de 993 mil comuneros; 41% a propiedad privada; 6.4% a otras formas de propiedad (colonias agrícolas y terrenos nacionales); y el resto son carreteras, cuerpos de agua, cauces de ríos y arroyos. Un análisis sociodemográfico de la **propiedad de la tierra** en México⁷⁹ estima que 1 millón 877 mil mujeres (18%⁸⁰) son actualmente dueñas de la tierra, lo que revela una aguda brecha de género en este ámbito (Metas 1.4, 2.3 y 5.a). Los indígenas participan en el 22.9% de los núcleos agrarios, son dueños de 22.6 millones de hectáreas de propiedad ejidal y comunal, y de cinco millones de propiedad privada, lo que representa el 15.5% de la superficie rural⁸¹. Una de las características sobresalientes de los núcleos agrarios con población indígena es la disponibilidad de recursos naturales⁸². De ahí que los pueblos

⁷² Dato consultado en la Plataforma Nacional de Seguimiento a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), <http://agenda2030.mx/#/home>, con estimaciones de la Secretaría de Salud/Dirección General de Información en Salud.

⁷³ Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, *Observaciones finales sobre a los informes periódicos quinto y sexto combinados de México* (Documento E-C-12-MEX-CO_5_6_30800_S, 29 de marzo de 2018). Párr. 48.

⁷⁴ FAO y OPS, *Panorama de la seguridad alimentaria y nutricional...* op cit. P. 24.

⁷⁵ INSP y UNICEF México, *Encuesta Nacional de Niños, Niñas y Mujeres en México 2015. Resultados Principales* (Ciudad de México, México: Instituto Nacional de Salud Pública y UNICEF México:2016). P.8.

⁷⁶ INSP y UNICEF México (tríptico), *Que nadie se quede atrás. La situación de niños y niñas con discapacidad en México*.

⁷⁷ OECD, "Health at a Glance 2017: OECD Indicators. ¿Cómo se compara México?", <https://www.oecd.org/mexico/Health-at-a-Glance-2017-Key-Findings-MEXICO-in-Spanish.pdf> (Fecha de consulta: 6 de mayo de 2018).

⁷⁸ Cálculos de Héctor Robles Berlanga y Daniel Mejía, *El campo mexicano en el siglo XXI. Tendencias y cambios*. (México: marzo 2018), con datos del Registro Agrario Nacional, "Sujetos de Núcleos Agrarios Certificados y No Certificados", http://www.ran.gob.mx/ran/indic_gen/nucag-certynocert-2016.pdf e INEGI, "Actualización del Marco Censal Agropecuario. Tabulados. México, 2016", <http://www.beta.inegi.org.mx/proyectos/agro/amca/>.

⁷⁹ *Ídem*. Pp. 20-21.

⁸⁰ 701 mil ejidatarias, 201 mil comuneras, 656 mil posesionarias y 318 mil propietarias privadas.

⁸¹ Héctor Robles Berlanga y Daniel Mejía, *El campo mexicano en el siglo XXI...* op cit. Pp. 17-20.

⁸² Nueve de cada diez ejidos y comunidades con población indígena dispone de algún recurso natural. Los indígenas son dueños del 28% de los bosques y la mitad de las selvas que existen en la propiedad ejidal y comunal; además de que en los municipios donde

y comunidades indígenas son actores clave y aliados indiscutibles en la adaptación al cambio climático (ODS 13), así como la conservación y uso sostenible de la vida marina (ODS 14) y los ecosistemas terrestres (ODS 15).

El **sector agroalimentario** mexicano muestra un rezago general en términos de productividad⁸³ (Meta 2.3). Si bien da empleo al 14% de la población ocupada en el país, su contribución al PIB nacional es de poco menos del 4%⁸⁴ y el valor agregado por trabajador en el sector agrícola, forestal y pesca en 2016, en dólares constantes de 2010, fue de US\$5,509, por debajo del promedio de América Latina y el Caribe (6,861), y muy lejos de la OCDE (26,752)⁸⁵. Los **pequeños y medianos productores** y campesinos representan casi el 85% del trabajo contratado por la agricultura nacional, así como el 88% del trabajo familiar en el sector. De las 5.3 millones de Unidades Económicas Rurales (UERs), 8.7% corresponden a UERs empresariales dinámicas y pujantes, 22.4% a UERs familiares de subsistencia sin vinculación al mercado y 50.6% a las UERs familiares de subsistencia con vínculos al mercado⁸⁶. Las UERs familiares de subsistencia se concentran en el centro y sur del país, y sus integrantes se encuentran en situación de pobreza debido a sus niveles de ingreso. La concentración geográfica del valor de la producción de alimentos y de UERs empresariales y pujantes en pocos estados expresa una desigualdad crítica en el sector agroalimentario. La brecha productiva, de capital, de capacidades y de ingreso entre las UERs de subsistencia –con y sin acceso al mercado– y las empresariales, es muy grande.

El *Informe del Grupo de Alto Nivel y de Expertos en Seguridad Alimentaria y Nutrición*⁸⁷ reconoce que los pequeños y medianos productores, debidamente respaldados por políticas e inversiones públicas, tienen la capacidad de contribuir de manera efectiva a la seguridad alimentaria (ODS 2) y, de forma sustancial y significativa, al crecimiento económico y la generación de empleo (ODS 8), la reducción de la pobreza en el ámbito rural (ODS 1), la reducción de las desigualdades territoriales y entre grupos de población (ODS 10), así como a la ordenación sostenible de la biodiversidad y otros recursos naturales (ODS 15). De tal suerte que duplicar la productividad agrícola a través de un igual acceso a los recursos, activos y capacidades de los pequeños productores agrícolas (Meta 2.3), especialmente de las mujeres (Meta 5.a) y de los más pobres y vulnerables (Meta 1.4), es el camino que México podría plantearse para lograr la seguridad alimentaria (Meta 2.1), combatir la pobreza en el ámbito rural (Meta 1.2), lograr el empoderamiento económico de las mujeres rurales e indígenas (Metas 5.a y 8.5) y reducir la desigualdad entre estados, regiones y grupos de población (Metas 10.1, 10.2 y 10.3). Impulsar el desarrollo alternativo y condiciones de acceso justo de los productos del campo al mercado nacional es también indispensable para promover ingresos dignos que potencien el desarrollo rural y ofrezcan alternativas de generación de ingresos a los pequeños productores para la prevención del cultivo de productos ilícitos.

habitan se producen volúmenes muy importantes de agua resultado de altas precipitaciones, por lo que son considerados municipios captadores de agua. Héctor Robles Berlanga y Daniel Mejía, *El campo mexicano en el siglo XXI...op cit.* Pp. 17-20.

⁸³ “Se siembran alrededor de 280 cultivos cíclicos y 199 perennes, entre los que se encuentran cultivos básicos, forrajeros, oleaginosas, frutales, hortalizas, agroindustriales, ornamentales y los denominados como no tradicionales. Si bien existe un patrón de cultivos muy extenso, la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, en su artículo 179, considera a siete cultivos como básicos y estratégicos: maíz, caña de azúcar, frijol, trigo, arroz, sorgo y café. Si adicionamos las oleaginosas más importantes (algodón, soya y cártamo), los commodities y los cultivos para alimentar el ganado (avena, maíz forrajero, pastos cultivados) resultan 30 productos que ocupan el 87% de la superficie cultivable”. Héctor Robles Berlanga y Daniel Mejía, *El campo mexicano en el siglo XXI...op cit.* P. 23.

⁸⁴ Diversos organismos internacionales, entre ellos CEPAL, FAO, IICA, FIDA, recomiendan que en los análisis del sector agrícola se considere la contribución del sector agropecuario ampliado que incluye las actividades primarias, de transformación (agroindustria), insumos y servicios. Bajo esta lógica, el aporte del PIB ampliado es alrededor del 7.5%.

⁸⁵ Banco Mundial, “Agriculture, forestry and fishing (value added per worker, constan \$USD 2010), <https://datos.bancomundial.org> (Fecha de consulta: 6 de mayo de 2018).

⁸⁶ FAO, *Panorama de la seguridad alimentaria en México, 2012* (México, Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO): 2013). Recuperado de: <http://www.fao.org/3/a-i3269s.pdf>

⁸⁷ HLPE, *Inversión en la agricultura a pequeña escala en favor de la seguridad alimentaria* (Roma, Informe del Grupo de Alto Nivel de Expertos en Seguridad Alimentaria y Nutrición del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial: 2013). P.13.

4.1.4. Salud

Las desigualdades en el ejercicio del derecho a la salud en México se originan principalmente por cuatro causas estructurales.

- En primer lugar, por la **condición de aseguramiento** de la población, pues se accede a la protección de la salud en mayor proporción si se adquiere como prestación laboral por la población asalariada en empleos formales y registrada ante alguna institución de salud. En una primera instancia, este hecho cobra particular relevancia si se toma en cuenta que 57% de la población ocupada en el país trabaja en el sector informal de la economía⁸⁸ (ver capítulo 4.2.2).
- En segundo lugar, por la segmentación del **Sistema Nacional de Salud (SNS)** y la débil gobernanza del mismo⁸⁹, que tienen implicaciones no sólo en cuanto a la equidad en el acceso y la cobertura, sino también en términos de la disponibilidad, asequibilidad y calidad de los servicios de salud. La iniciativa para la integración funcional del SNS de 2010 tiene retos económicos, administrativos, legales y organizacionales que todavía no son superados.
- En tercer lugar, por el reducido **gasto en salud**, que representó el 5.6% del PIB en 2016, del cual 2.9% correspondió al gasto público⁹⁰, este último muy por debajo del promedio de la OCDE (6.6%). La insuficiente inversión pública en salud (Meta 3.c) se refleja en las grandes disparidades y profundas asimetrías entre regiones, y zonas rurales-urbanas, tanto en términos de acceso, disponibilidad y calidad de los servicios, como en la falta de infraestructura y equipo médico adecuado, el desabastecimiento de medicamentos y el número insuficiente de personal médico⁹¹. Además, el gasto público en salud no ha sido proporcional al incremento de la población beneficiaria, lo que ha resultado en una disminución del gasto en salud *per cápita*. Entre 2012-2016, este último se contrajo 4%, al pasar de \$3,826 a \$3,672 pesos en los mismos años, con amplias disparidades por condición de afiliación⁹². El gobierno mexicano ha reconocido que uno de los mayores retos del SNS es reducir los gastos de bolsillo. El gasto que realizaron las familias en 2015 constituyó 47% de los ingresos de salud, cifras de las más altas entre los países de la OCDE⁹³ y que reflejan los problemas de inequidad en el ejercicio efectivo del derecho a la salud.

⁸⁸ INEGI, "Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. Cifras al IV Trimestre de 2017" (Comunicado de Prensa N°. 70/18: 13 de febrero de 2018), http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/boletines/2018/enoe_ie/enoe_ie2018_02.pdf (Fecha de consulta: 12 de mayo de 2018).

⁸⁹ Un problema fundamental del SNS que es imprescindible abordar en el futuro inmediato se refiere a su débil gobernanza dada por dos factores: el marco normativo que consolida la alta segmentación al no conferir a la Secretaría de Salud facultades legales para actuar como autoridad sanitaria en lo que se refiere al IMSS, ISSSTE, SEDENA y PEMEX y el sector privado; y por el modo como se implementó la descentralización, despojando a la autoridad sanitaria federal del poder para la implementación real de las políticas sanitarias en las entidades federativas.

⁹⁰ Secretaría de Salud, "Gasto en salud en el Sistema Nacional de Salud. Gasto en salud por fuente de financiamiento 1990-2016", http://www.dgis.salud.gob.mx/contenidos/sinais/gastoensalud_gobmx.html (Fecha de consulta: 27 de junio de 2018).

⁹¹ Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, *Observaciones finales sobre a los informes periódicos quinto y sexto combinados de México* (Documento E-C-12-MEX-CO_5_6_30800_S, 29 de marzo de 2018). Párr. 59.b)

⁹² El gasto en salud per cápita muestra amplias diferencias entre instituciones y esquemas de afiliación. En 2016, este se ubicó en \$4,155 pesos en el IMSS; \$4,496 en el ISSSTE; \$13,363 en PEMEX (incluye SEDENA y SEMAR); \$3,182 Seguro Popular; y \$1,050 IMSS-Prospera. Datos consultados en: CIEP, *Gasto en Salud per cápita: menos usuarios del sistema de salud* (México, Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, A.C: 2 de febrero de 2018). Recuperado de: <http://ciep.mx/gasto-en-salud-per-capita-menos-usuarios-del-sistema-de-salud/> (Fecha de consulta: 10 de julio de 2018).

⁹³ Secretaría de Salud, "Gasto en salud en el Sistema Nacional de Salud. Gasto en salud por fuente de financiamiento 1990-2016...op cit"; y OCDE, "Health at a Glance, 2017. México", <https://www.oecd.org/mexico/Health-at-a-Glance-2017-Key-Findings-MEXICO-in-Spanish.pdf> (Fecha de consulta: 25 de junio de 2018).

- En cuarto lugar, por la **calidad de los servicios de salud**, la cual varía de manera importante entre instituciones de salud y regiones del país. La OMS estima que los costos de la ineficiencia y mala calidad en la atención a la salud, que generalmente son ocultos, fluctúan entre un 20 y 40% de todo el gasto de los sistemas de salud⁹⁴ y son especialmente notorios en situaciones en las que los servicios ofrecidos no son efectivos, con especial énfasis en la atención prenatal y salud materna.

El avance de México hacia el **acceso y cobertura universal** de los servicios de salud ha sido notable desde la introducción del Seguro Popular en 2003⁹⁵. De acuerdo con el CONEVAL, en 2016 109.9 millones de personas estaban afiliadas a alguna institución del SNS⁹⁶, de las cuales 55.6 lo estaban al Seguro Popular. Si bien este es un progreso relevante, el CONEVAL⁹⁷ ha mostrado que la afiliación al Seguro Popular como condición mínima para garantizar el derecho a la salud no es suficiente para asegurar que la población afiliada ejerza plenamente su derecho, dado que este esquema tiene un importante déficit que atender en términos de cobertura⁹⁸, disponibilidad⁹⁹ y calidad¹⁰⁰ de los servicios. Por otro lado, la medición multidimensional de la pobreza indica que, en 2016, 19.1 millones de personas tenían carencia por acceso a los servicios de salud. Si a esta última cifra se le añade los 17 millones de personas más que habrá en el país en 2030, los retos de subsanar el déficit de acceso y cobertura de 36 millones de personas entre 2018-2030 y cerrar la brecha que persiste entre grupos de población¹⁰¹ son mayúsculos. Para estar en condiciones de garantizar el acceso y cobertura universales a servicios de salud de calidad para 2030, tal y como lo establece la Meta 3.8, México necesita resolver la segmentación del SNS, armonizar su funcionamiento y transitar hacia un sistema unificado, funcional, eficiente y de calidad, en donde el acceso y la cobertura estén determinados por la necesidad y el ejercicio pleno del derecho a la salud, y no por la situación laboral o condición de afiliación.

⁹⁴ OMS, *La financiación de los sistemas de salud. El camino hacia la cobertura universal* (Ginebra, Suiza, Organización Mundial de la Salud: 2010). P. 9.

⁹⁵ Las reformas a la Ley General de Salud y su Reglamento, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 15 de mayo de 2003 y el 5 de abril de 2004, respectivamente, crean el Sistema de Protección Social en Salud (Seguro Popular), el cual plantea la prestación de los servicios de salud a todas las familias que carecen de un sistema de protección social.

⁹⁶ IMSS 43.4 millones; ISSSTE 8.6 millones; PEMEX, SEDENA y SEMAR 1.0 millones; IMSS-Prospera 1.3 millones; Seguro Popular 55.6 millones; otras instituciones privadas 1.0 millones. Al analizar estas cifras, es importante considerar las duplicidades de los registros de las personas afiliadas. De acuerdo con el Informe General de la Cuenta Pública 2014, elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, la duplicidad de registros en el padrón del Seguro Popular, con los del IMSS, ISSSTE y el ISSFAM alcanza el 12.1%.

⁹⁷ CONEVAL, *Indicadores de acceso y uso de los servicios de salud de afiliados al Seguro Popular* (México, CONEVAL:2014). Recuperado de: <https://www.coneval.org.mx/Informes/Evaluacion/Impacto/Acceso%20y%20Uso%20Efectivo.pdf> (Fecha de consulta: 10 de julio de 2018).

⁹⁸ La Auditoría Superior de la Federación (ASF), en su Informe de la Cuenta Pública 2017, llamó la atención sobre el riesgo de que las intervenciones cubiertas por el Seguro Popular no respondan a las principales necesidades de salud de la población afiliada, lo que puede implicar una desprotección financiera de la población afiliada como resultado de los límites de la cobertura de dicho esquema. En 2017, el Seguro Popular cubrió 348 intervenciones para brindar el acceso a los servicios de salud para la población sin seguridad social, de las cuales 287 (82.5%) se incluyeron en el Catálogo Universal de Servicios de Salud (CAUSES) y 61 (17.5%) en el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos (FPGC), las cuales son consideradas de alta complejidad diagnóstica y de tratamiento. Las 348 enfermedades cubiertas por el Seguro Popular representaron el 2.4% de las 14,444 enfermedades establecidas en la clasificación estadística internacional de enfermedades y problemas relacionados con la salud, emitida por el Centro Colaborador para la Familia de Clasificaciones Internacionales de la OMS en México (CEMECE). Fuente: ASF, *Informe de la Cuenta Pública, Grupo Funcional de Desarrollo Social, Seguro Popular*. Recuperado de: http://informe.asf.gob.mx/Documentos/Fichas/Ficha_DS_a.pdf (Fecha de acceso: 4 de junio de 2018).

⁹⁹ Por ejemplo, las mujeres embarazadas afiliadas al Seguro Popular se enfrentan a la falta de laboratorios en las unidades médicas para que puedan certificar su embarazo y, con esto, incorporarse a la Estrategia de Embarazo Saludable.

¹⁰⁰ El objetivo de lograr una atención en salud oportuna, integral, con calidad y calidez y sin desembolso a través del Seguro Popular se ve mermado por la insuficiencia de medicamentos y equipo, la poca accesibilidad a hospitales de segundo y tercer nivel, y la saturación de clínicas y hospitales, entre otros factores. CONEVAL, *Indicadores de acceso y uso de los servicios de salud de afiliados al Seguro Popular...op cit*.

¹⁰¹ De acuerdo con la medición multidimensional de la pobreza, en 2016 17.9% de los hombres tenía carencia por acceso a los servicios de salud; 13.4% de las mujeres, 13.3% de NNA menores de 18 años; 9.5% de las personas adultas mayores; 15.1% de los indígenas; 11% de las mujeres indígenas; 12% de las personas con discapacidad.

Diversos indicadores básicos relacionados con el estado de la salud de la población registran niveles inferiores a lo que cabría esperar de un país de ingresos medios altos y con un IDH alto. Como en otros indicadores, las cifras nacionales esconden grandes disparidades entre regiones y grupos de población. La salud materna, la salud sexual y reproductiva, y la salud infantil son muestras de esta paradoja.

La **salud materna** sigue siendo el gran pendiente de México. Si bien la Razón de Mortalidad Materna (RMM) se ha reducido significativamente en las últimas décadas, de 88.7 muertes por cada 100,000 nacidos vivos en 1990 a 34.5 en 2015¹⁰², el progreso no ha sido homogéneo, presenta grandes disparidades al interior del territorio y está muy lejos de la meta planteada en el ODM5 para 2015 (22.2), siendo incluso uno de los objetivos que México no logró cumplir. La mortalidad materna se concentra en poblaciones marginadas, rurales e indígenas del centro y sureste del país. La mayoría de las muertes maternas ocurren al interior de los establecimientos de salud, lo cual refleja de manera muy clara que el principal problema es la baja calidad de la provisión de los servicios de salud, en particular de los cuidados obstétricos, y no la falta de acceso a los mismos. Este panorama revela la necesidad de ajustar la Meta 3.1 acorde al grado de desarrollo del país y a su infraestructura de salud, dado que si bien se ya cumplió con la meta global (70), el verdadero reto a nivel nacional es lograr la RMM de 22.2 lo más pronto posible, así como fijar metas y métricas adecuadas para las entidades federativas que permitan avanzar de manera sostenida en la misma dirección.

Si bien la proporción de partos atendidos por personal sanitario calificado ha mostrado un avance sustancial en los últimos veinte años, al pasar de 74.6% en 1990 a 98% en 2016, preocupa en este contexto la alta medicalización del parto, incluidas las cesáreas innecesarias, así como la saturación de los hospitales que se manifiesta a través de la discriminación, malos tratos, negativa del acceso a los servicios de salud y a la atención obstétrica a mujeres, principalmente de bajos recursos y niveles socioeconómicos, con énfasis en zonas indígenas y rurales. De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2016¹⁰³, en los últimos cinco años, 33.4% de mujeres fueron víctimas de malos tratos por parte del personal sanitario durante el parto. El sistema de salud de México no ha incorporado la participación de las parteras profesionales en los equipos multidisciplinarios de salud en el primer y segundo nivel de atención, con lo cual se favorecería la mejora en la atención materna y neonatal, así como el parto respetado.

México ha hecho grandes avances para garantizar la **salud sexual y reproductiva** de las mujeres al incrementar el acceso a la planificación familiar (Meta 3.7). La adquisición centralizada de anticonceptivos ha ayudado a garantizar su disponibilidad y calidad en diferentes estados, pero no así su uso. La Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID) 2014, permite observar importantes brechas en el acceso de mujeres en edad fértil a métodos anticonceptivos modernos por razones de edad, etnia, territorio y nivel de escolaridad¹⁰⁴. Las adolescentes de 15-19 años, las mujeres rurales e indígenas, así como las mujeres sin escolaridad tienen menos acceso a métodos modernos de planificación familiar.

¹⁰² INEGI, "Estadísticas a propósito del Día de la Madre. Datos nacionales" (Comunicado de prensa: 8 de mayo de 2017), http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2017/madre2017_Nal.pdf (Fecha de consulta: 12 de mayo de 2018).

¹⁰³ INEGI, "Encuesta Nacional sobre las Dinámicas de las Relaciones en los Hogares, 2016. Resultados nacionales", http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/boletines/2017/endireh/endireh2017_08.pdf (Fecha de acceso: 3 de abril de 2018)

¹⁰⁴ Un análisis de la ENADID 2014, muestra que 7 de cada 10 mujeres que viven en zonas urbanas recurrieron al uso de métodos anticonceptivos modernos (69.8%); proporción que se reduce a 6.3 de cada 10 mujeres en zonas rurales; 6 de cada 10 mujeres sin escolaridad; 5.6 de cada 10 mujeres indígenas y casi 5 de cada 10 mujeres de 15-19 años. Ver María Felipa Hernández, María de la Cruz Muradás y Miguel Sánchez, "Panorama de la salud sexual y reproductiva, 2014", en *La Situación Demográfica de México 2015* (México, Consejo Nacional de Población: 2016). Pp. 43-72.

México ocupa el segundo lugar en embarazos de adolescentes dentro de la OCDE (el primero es Colombia), con una tasa de fecundidad de 66.2 hijos por cada mil mujeres¹⁰⁵. En 2016, se registraron 399,140 nacimientos de madres menores de 20 años, de los cuales 9,555 fueron de niñas de 10-14 años¹⁰⁶. Entre 1990 y 2016, en la mayoría de las entidades federativas se incrementó el número de nacimientos en niñas y adolescentes de 10 a 14 años, destacando con el mayor volumen en 2016 el Estado México, Chiapas, Veracruz, Guerrero y Puebla¹⁰⁷. Las causales del embarazo adolescente son multifactoriales: pobreza y carencias sociales (Meta 1.2), violencia de género (Meta 5.2), matrimonios o uniones tempranos (Meta 5.3), así como dificultades en el acceso y disponibilidad de servicios en salud sexual y reproductiva (Meta 3.7); y sus consecuencias son multidimensionales, dado que afecta negativamente el ejercicio de otros derechos de las adolescentes, como la permanencia en la escuela (Meta 4.1), el acceso a oportunidades laborales en trabajos decentes (Meta 8.5) y la generación de ingresos propios presentes y futuros (Meta 10.1). Reducir a la mitad la tasa de fecundidad entre las adolescentes de 15 a 19 años, así como erradicar el embarazo en niñas menores de 15 años de aquí al 2030, tal y como lo propone la *Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo Adolescente* (ENAPEA) 2015, requerirá de mayores esfuerzos, recursos y una efectiva coordinación interinstitucional para implementar de manera sostenida y articulada las acciones.

Los avances de México en materia de **salud infantil** son notables, pero todavía existen brechas que atender. El país redujo la tasa de mortalidad de niñas y niños menores de 5 años de 44.9 defunciones por cada mil nacidos vivos en 1990 a 15.1 en 2015¹⁰⁸, lo que representa una disminución del 63%. En términos estrictos, México ya cumplió con la Meta 3.2 del ODS 3, que plantea reducirla, al menos, a 25 defunciones. Sin embargo, el promedio nacional esconde disparidades al interior del territorio, dado que en la región sur aún se mantienen tasas por arriba de las 17 defunciones. Este mismo panorama se repite en cuanto a la mortalidad neonatal, en donde si bien México está cerca de lograr la meta de 12 defunciones por cada 100 mil nacidos vivos a nivel nacional (Meta 3.2), 13 entidades tienen tasas que fluctúan entre 13 y 15.5 defunciones. Desde el principio pro-persona, México debe plantearse una meta más exigente para poner fin a las muertes evitables de recién nacidos, y de niñas y niños menores de 5 años, lo cual requiere, entre otras acciones, enfrentar las enfermedades prevenibles que aún son la principal causa de muerte en México, así como garantizar el acceso universal a los servicios de salud (Meta 3.7) y los esquemas de vacunación completos en la primera infancia (Meta 3.8).

Las condiciones de **salud de las personas adultas mayores** representan un gran reto para el SNS. De acuerdo con el *Global AgeWatch Index* 2015¹⁰⁹, en México se estima que las personas que hoy tienen 60 años cuentan con una esperanza de vida aproximada de 22 años (adicionales), de los cuales 17.3 transcurren en buen estado de salud y cerca de cinco se viven con una o varias

¹⁰⁵ Dato de 2016. Ver OCDE, *SF2.3: Age of mothers at childbirth and age-specific fertility*, https://www.oecd.org/els/soc/SF_2_3_Age_mothers_childbirth.pdf De acuerdo con los datos presentados en la Plataforma Nacional para el Seguimiento de los ODS, la Tasa de fecundidad de las adolescentes de 15 a 19 años por cada 1,000 adolescentes en ese grupo de edad se ubicó en 65.3 en 2016.

¹⁰⁶ INEGI, “Nacimientos. Consulta interactiva de datos”, http://www.inegi.org.mx/sistemas/olap/Proyectos/bd/continuas/natalidad/nacimientos.asp?s=est&c=23699&prov=nat_nac (Fecha de consulta: 3 de abril de 2018)

¹⁰⁷ CONAPO, *Fecundidad en niñas y adolescentes de 10 a 14 años, niveles, tendencias y caracterización sociodemográfica de las menores y de los padres de sus hijos(as), a partir de las estadísticas del registro de nacimiento, 1990-2016* (México, Consejo Nacional de Población: 2017).

¹⁰⁸ Banco Mundial, “Datos. Tasa de mortalidad, menores de 5 años (por cada 1.000)”, <https://datos.bancomundial.org/indicador/SH.DYN.MORT> (Fecha de consulta: 3 de abril de 2018)

¹⁰⁹ Help Age International, “Global AgeWatch Index 2015. AgeWatch Report Card. Mexico”, <http://www.helpage.org/global-agewatch/population-ageing-data/country-ageing-data/?country=Mexico> (Fecha de consulta: 2 de julio de 2018)

enfermedades, con pérdida de funcionalidad o discapacidad. Las mujeres adultas mayores acumulan más carga asociada a la discapacidad, ya que viven más años en esa condición en comparación de los hombres¹¹⁰. De acuerdo con el CONEVAL, la diabetes mellitus, la enfermedad isquémica del corazón, la enfermedad renal crónica y la enfermedad vascular cerebral son responsables del 46% de las defunciones y 37% del total de años de vida saludables perdidos en este grupo poblacional. Además de estrategias de prevención, México requiere de políticas públicas que respondan a las necesidades específicas de las personas adultas mayores, las cuales contemplen los Cuidados de Largo Plazo (CLP), que si bien están relacionados con el acceso a los servicios de salud de calidad, abarcan una atención integral que incluye principalmente el servicio de cuidado permanente, cuya provisión en México es escasa y fragmentada, y se provee fundamentalmente en el hogar, de manera informal, sin remuneración o sin ningún tipo de apoyo, y su función recae mayoritariamente en las mujeres (Meta 5.4).

En cuanto a las **enfermedades transmisibles** (Meta 3.3), la tuberculosis en todas sus formas continúa siendo un problema de salud pública que afecta en mayor frecuencia a la población masculina y en edad productiva. En 2016, la tasa de tuberculosis se ubicó en 22 por cada 100 mil habitantes¹¹¹, un incremento con respecto a 2015 (17.5¹¹²). Poner fin a la tuberculosis para el 2030 es un reto mayor debido a los determinantes sociales de su propagación, principalmente la pobreza (ODS 1), el hacinamiento en zonas urbanas (ODS 11), la malnutrición (ODS 2) y la migración (ODS 10). En cuanto al VIH, si bien México redujo la prevalencia de la infección en la población adulta de 15-49 años a menos de 0.6 (0.2)¹¹³, los retos en este ámbito se encuentra en ampliar la cobertura universal y gratuita del tratamiento antirretroviral a las personas infectadas, incluida la población privada de la libertad y los consumidores de drogas, la cual alcanzó el 58.8% en 2015¹¹⁴, así como implementar estrategias de prevención combinada del VIH, especialmente dirigidas a las poblaciones clave (hombres que tiene sexo con hombres, mujeres transgénero, trabajadoras y trabajadores sexuales, entre otros) que tienen prevalencias superiores a las de la población general¹¹⁵. Otro reto se refiere a la atención de otras infecciones de transmisión sexual (ITS), como la sífilis, la hepatitis B y C, la clamidia y la gonorrea¹¹⁶, entre otras, así como asegurar que los grupos pertenecientes a la diversidad sexual y colectivos LGBTI (lesbianas, gays, bisexuales, población transgénero e intersexual) tengan acceso a servicios integrales de salud. México ha logrado avances sustanciales en la prevención, detección, atención y control de enfermedades transmisibles por vectores¹¹⁷, lo que se refleja en la pre-eliminación de la incidencia del paludismo, la disminución de los casos acumulados y la tasa de incidencia del dengue¹¹⁸, el control de la

¹¹⁰ INEGI, *La discapacidad en México, datos al 2014...* op cit. P. 22.

¹¹¹ WHO, "México, Tuberculosis profile", https://extranet.who.int/sree/Reports?op=Replet&name=%2FWHO_HQ_Reports%2FG2%2FPROD%2FEXT%2FTBCountryProfile&ISO2=MX&LAN=EN&outtype=html (Fecha de consulta: 30 de junio de 2018).

¹¹² Datos consultados en la plataforma <http://www.objetivosdesdesarrollodemilenio.org.mx/>

¹¹³ UNAIDS, "AidsInfo" (HIV prevalence), <http://aidsinfo.unaids.org/> (Fecha de consulta: 30 de junio de 2018).

¹¹⁴ Datos de la Secretaría de Salud/Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH y el Sida (Censida), consultados en: <https://www.gob.mx/censida>

¹¹⁵ FUNSALUD, con datos del Proyecto del Fondo Mundial de lucha contra el Sida, la Tuberculosis y la Malaria, <http://funsalud.org.mx/portal/wp-content/uploads/2013/05/Encuesta-seroprevalencia.pdf> (Fecha de consulta: 11 de julio de 2018).

¹¹⁶ Secretaría de Salud, "Boletín Epidemiológico. Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica. Sistema Único de Información, Semana Epidemiológica 23", <https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/336785/sem23.pdf> (Fecha de consulta: 11 de julio de 2018).

¹¹⁷ Secretaría de Salud, "Boletín Epidemiológico. Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica. Sistema Único de Información, Semana Epidemiológica 12", <https://www.gob.mx/salud/documentos/boletinepidemiologico-sistema-nacional-de-vigilancia-epidemiologica-sistema-unico-de-informacion-152620> (Fecha de consulta: 4 de abril de 2018)

¹¹⁸ Secretaría de Salud, "Panorama epidemiológico del Dengue, 2017. Información publicada en la Semana Epidemiológica 52 (Actualizada al 1 de enero de 2018), https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/285237/Pano_dengue_sem_52_2017.pdf (Fecha de consulta: 4 de abril de 2018)

transmisión y atención de casos del virus del Zika y la disminución de la transmisión autóctona de fiebre de Chikungunya.

Las **enfermedades crónicas no transmisibles**, como la diabetes, las enfermedades cardíacas y las cerebrovasculares, así como la cirrosis y el cáncer, dominan el panorama de la mortalidad en el país¹¹⁹. Si bien la probabilidad de mortalidad prematura debido a enfermedades no transmisibles (cardiovasculares, cáncer, diabetes y enfermedades respiratorias crónicas) descendió de 17% en el año 2000 a 15% en 2015¹²⁰, el nivel de progreso en estos últimos 15 años evidencia la necesidad de acelerar acciones para cumplir la Meta 3.4 al 2030 (reducir en un tercio la mortalidad prematura por enfermedades no transmisibles, lo que significa llegar a 5%). Además, las enfermedades crónico-degenerativas representan 90% de las estimaciones del gasto en salud, de tal suerte que se requiere de políticas de prevención y promoción de salud que contengan los niveles proyectados de incidencia de cáncer, hipertensión, diabetes y depresión¹²¹.

De acuerdo con el Programa Nacional para la **Salud Mental** 2013-2018, una de cada cuatro personas entre 18 y 65 años ha padecido, en algún momento de su vida, un trastorno mental, pero solo uno de cada cinco de los que lo padecen recibe tratamiento (Meta 3.4). La depresión y la ansiedad generan una condición de discapacidad mayor y días de trabajo perdidos comparado con algunas enfermedades crónicas no psiquiátricas. Preocupa en este contexto la prevalencia de los trastornos psiquiátricos en edades tempranas, dado que el 24.7% de las y los adolescentes mexicanos se encuentra afectado por uno o más problemas de salud mental. De acuerdo con el INEGI¹²², entre 1990 y 2015 la tasa de suicidios se duplicó en el país, al pasar de 2.4 por cada 100 mil habitantes a 5.2. Las muertes por suicidio son más comunes en hombres (80.1%) que en mujeres (19.9%), y suelen concentrarse en edades jóvenes entre 15-29 años (41%), pero también con incidencia en NNA de 10 a 14 años (3.7%). Un reto en este sentido es la recolección de datos en los sistemas de salud mental, dado que si bien se cuenta con registros oficiales sobre los servicios prestados, recursos disponibles e infraestructura, las definiciones de los indicadores no son uniformes en las diferentes entidades federativas, lo que impide tener información homogénea sobre la morbilidad mental en el país¹²³. Otro aspecto por considerar es que el eje de la atención de la salud mental en México sigue siendo el hospital psiquiátrico. Muestra de ello es que existen 46 hospitales psiquiátricos frente a 13 unidades de internamiento psiquiátrico en hospitales generales y 8 establecimientos residenciales (dato de 2011)¹²⁴, lo que impone retos considerables para ampliar la atención a la salud mental al resto de los niveles de servicios de salud y no sólo en hospitales psiquiátricos. Un desafío reconocido por el propio gobierno federal lo constituye la erradicación de las violaciones a los derechos humanos, principalmente las prácticas

¹¹⁹ Secretaría de Salud, *Informe de la Salud de los mexicanos 2015. Diagnóstico general de la salud poblacional* (México, Secretaría de Salud: 2015). Recuperado de: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/data/file/64176/INFORME_LA_SALUD_DE_LOS_MEXICANOS_2015_S.pdf (Fecha de consulta: 6 de julio de 2018)

¹²⁰ Global Health Observatory (GHO), "World Health Statistics data", <http://www.who.int/healthinfo/statistics/en/> (Fecha de consulta: 4 de abril de 2018).

¹²¹ CIEP, *Sistema Universal de Salud: Retos de cobertura y financiamiento en México* (México, Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP): s/f). Recuperado de: <http://ciep.mx/sistema-universal-de-salud-retos-de-cobertura-y-financiamiento/> (Fecha de consulta: 27 de junio de 2018).

¹²² INEGI, "Estadísticas a propósito del Día Mundial para la Prevención del Suicidio", http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2017/suicidios2017_Nal.pdf (Fecha de consulta: 24 de mayo de 2018)

¹²³ OPS/OMS, *Informe de la evaluación del sistema de salud mental en México utilizando el Instrumento de Evaluación para Sistemas de Salud Mental de la Organización Mundial de la Salud* (México, Organización Panamericana de Salud/Organización Mundial de Salud, Secretaría de Salud: 2011). Recuperado de: http://www.who.int/mental_health/who_aims_country_reports/who_aims_report_mexico_es.pdf (Fecha de consulta: 11 de julio de 2018).

¹²⁴ *Idem*.

de tortura contra las y los usuarios que se encuentran hospitalizados en las unidades médico-psiquiátricas¹²⁵.

La Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco (ENCODAT) 2016-2017¹²⁶ evidencia que el consumo y el abuso de drogas y alcohol en los últimos años en México se ha incrementado (Meta 3.5) y se ubica como uno de los problemas de salud pública de mayor relevancia, dadas las consecuencias sanitarias y sociales, y los retos que representa para garantizar el derecho a la salud y el acceso universal a servicios de salud de calidad de quienes las consumen. Los datos advierten la necesidad de reforzar las acciones para reducir la demanda de drogas, así como la urgencia de ampliar una política de prevención y tratamiento, y dirigir mayores recursos y esfuerzos a la población adulta joven.

4.1.5. Educación y cultura

México emprendió una serie de reformas estructurales a su sistema educativo en 2013¹²⁷. La reforma educativa hizo de la educación de calidad un derecho constitucional y estableció los propósitos para ampliar su cobertura, mejorar las condiciones de enseñanza y aprendizaje, establecer un nuevo modelo educativo, otorgar mayor autonomía a las escuelas, establecer escuelas de tiempo completo, fundar el Servicio Profesional Docente, promover mejoras en la transparencia y consolidar una autoridad de evaluación independiente y autónoma (el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación-INEE).

El **Sistema Educativo Nacional** (SEN) es uno de los más grandes y complejos a nivel internacional. La matrícula en el sistema escolarizado en 2016-2017¹²⁸ ascendió a 36.6 millones de alumnos (50.1% mujeres-49.9% hombres), que se distribuyen de la siguiente manera: educación básica (27.5 millones), educación media superior (5.1 millones), educación superior (3.7 millones) y capacitación para el empleo (1.9 millones). El SEN cuenta con un total de 2 millones de docentes y 257,000 instituciones educativas. La educación obligatoria y gratuita está conformada por la educación básica (educación preescolar, educación primaria y educación secundaria) y, desde 2012, por la educación media superior (que incluye el bachillerato general, bachillerato técnico y profesional técnico).

El **gasto nacional en educación** se ha incrementado para cumplir con los compromisos de la reforma educativa. Durante el periodo 2013-2016, el gasto nacional en educación relativo al PIB fue en promedio de 6.8% (5.3% público y 1.5% privado), en donde la participación pública alcanzó 78% en 2016 y la privada de 22¹²⁹. De acuerdo con la OCDE, el gasto en educación por estudiante en México es bajo, al destinar US\$ 3,703 por estudiante en instituciones educativas de primaria a

¹²⁵ Secretaría de Salud, "Programa de Acción Específico. Salud Mental 2013-2018", P. 32, https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/11918/Salud_Mental.pdf (Fecha de consulta: 28 de mayo de 2018).

¹²⁶ CONADIC, "Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco, ENCODAT 2016-2017", <https://www.gob.mx/salud/conadic/acciones-y-programas/encuesta-nacional-de-consumo-de-drogas-alcohol-y-tabaco-encodat-2016-2017-136758> (Fecha de consulta: 11 de julio de 2018).

¹²⁷ Gobierno de la República, "Reforma educativa. Reformas y leyes", <http://reformas.gob.mx/reforma-educativa/reformas-y-leyes> (Fecha de consulta: 11 de julio de 2018).

¹²⁸ A menos de que se indique lo contrario, todos los datos de este apartado relativos al ciclo escolar 2016-2017 provienen de la siguiente fuente: SEP, "Principales cifras 2016-2017", http://fs.planeacion.sep.gob.mx/estadistica_e_indicadores/principales_cifras/principales_cifras_2016_2017_bolsillo.pdf (Fecha de consulta: 5 de abril de 2018).

¹²⁹ INEE, *Panorama educativo de México 2016. Indicadores del Sistema Educativo Nacional. Educación básica y media superior* (Ciudad de México, Instituto Nacional para la Evaluación Educativa: 2017). Pp. 190-191.

educación superior, en comparación con el promedio de la OCDE de 10,759¹³⁰. Los retos que tiene el país para el cumplimiento del ODS 4 implican una mayor inversión y mejor canalización de los recursos, ya que el gasto en educación tiene una planeación inercial y de corto plazo, que no favorece la equidad, la calidad educativa, ni la sostenibilidad fiscal para atender las necesidades reales de la educación¹³¹ y cerrar las brechas de desigualdad que persisten en diversos rubros y que afectan simultáneamente a distintos grupos de población.

El **acceso y terminación universal** de la educación obligatoria en México presenta claroscuros¹³². En el ciclo escolar 2016-2017¹³³, la cobertura en primaria fue universal (105.4), con una tasa neta de escolarización de 98.4% y una eficiencia terminal de 98.7%. En secundaria, la cobertura alcanzó 99.9%, pero la tasa neta de escolarización disminuyó a 86.2% y la eficiencia terminal a 87.8%. Lo anterior muestra que un porcentaje significativo de estudiantes de 12-14 años no concluye este nivel escolar. Aún y cuando la cobertura de la educación media superior (15-17 años) incrementó a 76.6% en el ciclo 2016-2017, la tasa neta de escolarización es muy baja (62.0%) y la tasa de abandono escolar muy alta (12.8%), lo que se traduce en que cerca de 600 mil estudiantes se pierden en este nivel educativo cada ciclo escolar¹³⁴. A este ritmo, se calcula que México logre la universalización del acceso y la terminación de la educación primaria en 2035, de la educación secundaria en 2060 y de la educación media superior en el 2100, proyecciones que evidencian el tamaño del desafío para cumplir con la Meta 4.1 en 2030¹³⁵.

En cuanto a los **servicios de atención y desarrollo en la primera infancia**, México tiene un rezago importante que atender para garantizar el acceso universal a preescolar (Meta 4.2). Si bien en el ciclo 2016-2017 la tasa de escolarización de niñas y niños de 3-5 años fue de 74.3%, el promedio general esconde grandes diferencias entre los rangos de edad. Mientras que 8 de cada 10 niñas y niños de 5 años asistía a la educación preescolar, 9 de cada 10 de cuatro años lo hacía, pero solo 4 de cada 10 de tres años estaba inscrito en la educación inicial. La educación de la primera infancia desempeña un papel importante en el desarrollo cognitivo de niñas y niños, y su rendimiento escolar subsecuente en la educación primaria. De ahí la necesidad de focalizar esfuerzos para expandir su cobertura en zonas marginadas, rurales e indígenas en donde se ubican las niñas y los niños con los mayores rezagos.

Los resultados del Programa de Evaluación Internacional de Alumnos (PISA, por sus siglas en inglés), muestran que los **resultados del aprendizaje** en México, después de 9 años o más de escolaridad, son deficientes. En su aplicación de 2015, PISA evidenció que el desempeño de

¹³⁰ Este es el nivel de gasto por estudiante más bajo entre los países de la OCDE, así como en otros países latinoamericanos con datos disponibles, tales como Argentina (4,240 dólares), Brasil (5,610 dólares) y Chile (5,135 dólares), pero es superior a Colombia (3,245 dólares). OCDE, "Panorama de la Educación. Nota país. México", <http://www.oecd.org/education/skills-beyond-school/EAG2017CN-Mexico-Spanish.pdf> (Fecha de consulta: 14 de abril de 2018).

¹³¹ CIEP, Gasto público para una educación de calidad (México, Centro de Investigación Económica y Presupuestaria: s/f). Recuperado de: <http://gastoeducativo.ciep.mx/Gasto-publico-para-una-educacion-de-calidad.pdf> (Fecha de consulta: 5 de julio de 2018).

¹³² De acuerdo con el Modelo de Tránsito Escolar del Sistema Escolarizado, elaborado por la SEP, el comportamiento de cada 100 estudiantes que iniciaron educación primaria, con año base en el ciclo escolar 2000-2001, y lograron egresar de estudios superiores, con año base en el ciclo escolar 2016-2017, es el siguiente: de los 100 que iniciaron primaria, 92 egresan de este nivel; de estos, 88 ingresan a educación secundaria y 71 egresan de este nivel; de estos, 62 ingresan a bachillerato, de los cuales egresan 39; y, de estos, 34 ingresan a licenciatura, egresando de este nivel 23 estudiantes. Este modelo da cuenta del número de estudiantes que abandonan temporal o definitivamente sus estudios en cada nivel escolar. Fuente: SEP, Principales cifras 2016-2017...op cit. P. 11.

¹³³ Durante dicho ciclo escolar la matrícula escolarizada por sostenimiento fue la siguiente: a) en educación primaria, 90.7% público y 9.3% privado; en educación secundaria, 91.2% público y 8.8% privado; en educación media superior, 81.2% público y 18.8% privado; y en educación superior, 70.6% público y 29.4% privado.

¹³⁴ Teresa Bracho González (Miembro de la Junta de Gobierno del INEE), "Educación media superior. Un tema urgente, pero ausente", en *El Universal* (Artículo de opinión, 25 de febrero de 2017).

¹³⁵ CINU, "Con las tendencias actuales no se alcanzará la universalización de la educación para el 2030, sino en 2095" (Noticias de la ONU: 23 de septiembre de 2016), <http://www.cinu.mx/noticias/la-con-las-tendencias-actuales-no/> (Fecha de consulta: 14 de abril de 2018).

México (416 puntos) se encuentra por debajo del promedio de la OCDE (493), así como de otros países de América Latina (Argentina 475, Chile 447, Uruguay 435 y Costa Rica 420). En las tres áreas de evaluación (ciencias, lectura y matemáticas), menos del 1% de los estudiantes de 15 años logró alcanzar niveles de competencia de excelencia (nivel 5 y 6) y prácticamente la mitad se ubicó en los niveles más bajos de desempeño (47.8% en Ciencias, 56.6% en Matemáticas y 41.7% en Lectura)¹³⁶. Si bien los adolescentes obtienen resultados más altos que las adolescentes en la evaluación de ciencias, existe un porcentaje similar de hombres y mujeres con bajo y alto desempeño. Si se toman en consideración los resultados de PISA como punto de partida para el cumplimiento de la Meta 4.1 en 2030, el desafío de superar en doce años las deficiencias en el aprendizaje en todos los niveles educativos es considerable.

La reforma educativa ha impulsado la **educación técnica** y ha ayudado a las y los adolescentes (15-17 años) a capacitarse para el empleo mientras completan los estudios de educación media superior. Del total de 5.1 millones de estudiantes de educación media superior en el ciclo escolar 2016-2017, 1.8 millones (36.3%) estaba inscrito en el bachillerato tecnológico y 66 mil en el profesional técnico (1.3%). Si bien estas cifras representan más de un tercio de la matrícula total de la educación media superior, el porcentaje de egresados de estos programas es considerablemente bajo (21%). De acuerdo con estudios de diversas empresas, 40% de las y los egresados de la educación media superior no está capacitado para incorporarse en actividades laborales¹³⁷, además de que solo 36.4% de las personas entre 25-64 años cuenta con educación media superior y técnica superior no universitaria completa (37.4 hombres y 35.4 mujeres)¹³⁸. Desde el 2014 México ha estado impulsando modelos de formación dual para que los jóvenes cuenten con una formación en aula más una formación en empresa que permita el incremento de la pertinencia de sus habilidades profesionales. Sin embargo, México tiene todavía un rezago considerable que atender para aumentar al 2030 el número de jóvenes con las competencias técnicas necesarias (Meta 4.4) para acceder al empleo, en un trabajo decente (Meta 8.5) y al emprendimiento (Meta 8.3).

Elevar la cobertura y calidad, y garantizar el acceso universal e igualitario a la **educación superior**, es un reto de grandes proporciones para la política educativa, principalmente a la luz de la transición demográfica del país, la cual duplicará la demanda de acceso a la educación superior en 2025. En 2016, sólo el 17.6% de las personas entre 25 a 64 años había cursado la educación superior (18.3 hombres y 17.0 mujeres¹³⁹). En el ciclo escolar 2016-2017, la cobertura total de educación superior sin posgrado fue de 37.3%. Se estima que para 2018, México incrementará ese porcentaje a 38%, dos puntos porcentuales por debajo de la meta establecida en el Programa Sectorial de Educación 2013-2018 (40%) y muy lejos de los estándares internacionales y regionales¹⁴⁰. Con datos de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación

¹³⁶OCDE, *Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos. PISA 2015. Resultados, Nota País México* (Paris, Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico: 2016). Recuperado de: <http://www.oecd.org/pisa/pisa-2015-Mexico-ESP.pdf> (Fecha de consulta: 8 de abril de 2018).

¹³⁷SEP, Subsecretaría de Educación Media Superior, *El Modelo Mexicano de Formación Dual prepara a los estudiantes para "saber hacer" y "aprender haciendo"* (Boletín informativo: diciembre de 2017). Recuperado de: http://www.sems.gob.mx/es_mx/sems/el-modelo-mexicano-de-formacion-dual-prepara-a-los-estudiantes-para-saber-hacer-y-aprender-haciendo (Fecha de consulta: 17 de abril de 2018).

¹³⁸INEE, *Panorama educativo de México 2016...op cit.* P. 125.

¹³⁹*Idem.* P. 135.

¹⁴⁰Por ejemplo, con datos de 2015: España (89.4), Chile (88.3), Finlandia (87.6), Argentina (85.7), Uruguay (55.5), Colombia (55.6), Costa Rica (53.6), Panamá (47.2), Ecuador (45.5). Fuente: UNESCO, Institute for Statistics, "Gross enrolment ratio, tertiary, both sexes (%)", <http://data.uis.unesco.org/index.aspx?queryid=142#> (Fecha de consulta: 27 de junio de 2018).

Superior (ANUIES¹⁴¹), solo siete estados del país habían logrado o estaban por encima de la meta sexenal en el ciclo 2016-2017¹⁴², mientras que siete estaban en el otro extremo con tasas menores al 30%¹⁴³.

El derecho a la **educación sexual** se basa en los derechos humanos universales, incluido el derecho a la educación y a la salud, tal y como se establece en numerosos acuerdos internacionales¹⁴⁴. El Consenso de Montevideo sobre la Población y el Desarrollo establece la obligación de los gobiernos de asegurar la efectiva implementación de programas de educación integral para la sexualidad, reconociendo la afectividad, desde la primera infancia, respetando la autonomía progresiva del niño y de la niña y las decisiones informadas de adolescentes y jóvenes sobre su sexualidad, con enfoque participativo, intercultural, de género y de derechos humanos. Por su parte, la ENAPEA establece como obligación del Estado Mexicano el garantizar el derecho de NNA a recibir educación integral en sexualidad en todos los niveles educativos de gestión pública y privada.

México tiene el gran desafío de lograr la **igualdad y equidad** en el ejercicio del derecho a la educación (Meta 4.5). Si bien el nivel de escolaridad de la población ha incrementado sustancialmente, al pasar de 8.1 años en 2005 (8.4 hombres y 7.9 mujeres) a 9.2 en 2015 (9.3 hombres y 9.0 mujeres), y la tasa de analfabetismo se redujo de 8.4 a 4.7% en el mismo periodo, el género, la condición socioeconómica, el territorio, la pertenencia étnica, la discapacidad o la situación migratoria son factores que determinan fuertemente las oportunidades y resultados educativos de las personas, con las consecuentes repercusiones en el acceso a trabajos formales y decentes¹⁴⁵.

El país está próximo a lograr la paridad en el acceso a la educación en todos los niveles educativos¹⁴⁶; no obstante, persisten marcadas brechas de género en este ámbito. Entre ellas, la segregación de carreras, la subrepresentación de las mujeres en los puestos de decisión dentro de la academia¹⁴⁷, las inconsistencias entre los avances del perfil educativo de las mujeres y las oportunidades de inserción, movilidad y ascenso laboral¹⁴⁸, así como la violencia por razones de género en el ámbito escolar que, de acuerdo con la ENDIREH 2016, afecta a 25.3% de las mujeres durante su vida como estudiante¹⁴⁹.

¹⁴¹ ANUIES, *Visión y Acción 20-30. Propuesta para renovar la educación superior en México*. (México, Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), Documento de trabajo 1.0: 2018). Recuperado de <https://www.uv.mx/crss-anuiies/files/2018/01/ANUIES.-Vision-y-Accion-2030.pdf> (Fecha de consulta: 26 de junio 2018).

¹⁴² Ciudad de México (99.5%), Sinaloa (50%), Nuevo León (45%), Colima (42%), Sonora (40%) y Aguascalientes (40%).

¹⁴³ Tlaxcala (28.0), Guanajuato (27.2), Quintana Roo (26.8), Michoacán (26.4), Guerrero (20.9), Chiapas (20.7), Oaxaca (19).

¹⁴⁴ Por ejemplo: la Convención sobre los Derechos del Niño; el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

¹⁴⁵ Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, *Observaciones finales sobre a los informes periódicos quinto y sexto combinados de México...op cit.* Párr. 65.

¹⁴⁶ En 2016, la razón entre niñas y niños en educación primaria fue 0.964; en educación secundaria 0.978; en educación media superior 1.017 y en educación superior 0.982. Datos disponibles en la plataforma: <http://www.objetivosdesarrollodemilenio.org.mx/Default.aspx?Param=CDR,E> (Fecha de consulta: 17 de abril de 2018).

¹⁴⁷ En 2015, de las 180 instituciones afiliadas a la ANUIES, sólo 20 eran encabezadas por mujeres con cargos de directora general o rectora y en el Consejo Nacional, constituido por quince universidades o institutos, sólo una de ellas era encabezada por una mujer. Con datos de la investigación de Imanol Ordorika, "Equidad de Género en la Educación Superior", en *Revista de Educación Superior*, (Vol.44, No.174, abril/junio 2015.) Recuperado de: http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0185-27602015000200001 (Fecha de consulta: 17 de abril de 2018)

¹⁴⁸ Si bien el promedio de ingreso por hora trabajada indica que a mayor escolaridad los ingresos aumentan, se observa que en todos los niveles educativos los hombres ganan más que las mujeres y la brecha se pronuncia cuando el nivel de escolaridad es menor. En Las mujeres con instrucción media superior y superior perciben un salario menor que los hombres: \$45.9 frente a \$47.6 pesos por hora trabajada; además de que están sub-representadas en los cargos de mayor nivel y remuneración.

¹⁴⁹ Datos de la ENDIREH 2016.

La falta de ingreso por arriba de la línea de bienestar mínimo de los hogares mantiene a poco más de 1 millón de NNA entre 3 y 17 años fuera de la escuela¹⁵⁰, y sólo cerca de la mitad de jóvenes de 15-17 años de entornos desfavorecidos se inscriben en el sistema educativo¹⁵¹. Existe una diferencia de más de un año de asistencia escolar entre los alumnos de zonas urbanas y rurales, aunado a que las escuelas rurales, indígenas o multigrado tienen menos acceso a los recursos que las escuelas urbanas más favorecidas¹⁵². La discriminación interseccional que enfrenta la población indígena, con énfasis las mujeres y las niñas indígenas, se refleja en niveles más bajos de escolaridad, alfabetización y asistencia a la escuela en comparación con la población no indígena. Las niñas y niños con alguna discapacidad presentan las menores tasas de asistencia escolar, la falta de programas específicos para las personas con discapacidad que permitan la continuación hacia niveles superiores de la educación básica, aunado a la falta de escuelas e infraestructura con accesibilidad universal, son serias limitantes del ejercicio pleno del derecho a la educación. El trabajo infantil es otro obstáculo para el ejercicio del derecho a la educación, cerca de 37% de NNA que trabajan no asiste a la escuela (915,309)¹⁵³.

La **cultura** es un instrumento estratégico para avanzar el desarrollo sostenible¹⁵⁴ de México, dada su gran riqueza y diversidad cultural, étnica y lingüística. En los últimos años, el país ha dado pasos importantes a nivel normativo, institucional y programático en este ámbito, al incluir a la cultura en el PND 2013-2018 y distinguir su papel en la cohesión social, el desarrollo integral del ser humano y su poder transformador; adoptar el *Programa Especial de Cultura y Arte 2014-2018*; crear la Secretaría de Cultura en 2015; fortalecer la coordinación interinstitucional de este sector; y adoptar la Ley General de Cultura y Derechos Culturales en 2017¹⁵⁵. México es el séptimo país a nivel mundial y primero en América Latina con mayor número de bienes inscritos en la Lista del Patrimonio Mundial 2016 de la UNESCO, con 34 bienes, de los cuales 6 son naturales, 27 culturales y 1 mixto. Además, cuenta con 8 expresiones culturales inscritas en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, se ubica dentro de los diez países del mundo con mayor diversidad lingüística y tiene 42 Reservas de la Biosfera. México tiene un enorme potencial para situar a la cultura en el centro del desarrollo sostenible.

4.2 Una economía estable, pero con persistentes asimetrías y marcados contrastes.

La economía mexicana ha enfrentado un entorno internacional adverso y ha sido resiliente ante la incertidumbre. Si bien ha mostrado un crecimiento estable en los últimos siete años (2011-2017), con una tasa de crecimiento real del PIB de 2.8% anual en promedio¹⁵⁶, el crecimiento económico sigue siendo desigual e insuficiente (Meta 8.1) para impulsar el empleo (Meta 8.5), reducir la pobreza (Meta 1.2), beneficiar a todos los sectores económicos (Meta 8.2), y cerrar las brechas de desigualdad entre regiones del país y grupos población (Metas 10.2 y 10.3). En México conviven sectores económicos con altos niveles de crecimiento y competitividad internacional, con otros de baja productividad y poco crecimiento, que son intensivos en mano de obra. Asimismo, coexisten grupos población con grandes diferencias en oportunidades de un trabajo decente, niveles de ingreso y el acceso a diversos servicios básicos. Estas diferencias están, además, fuertemente

¹⁵⁰ CONEVAL, *Informe de evaluación de la Política de Desarrollo Social 2018 ...op cit.* P. 84.

¹⁵¹ OCDE, *Getting it right. Prioridades estratégicas para México...op cit.* P. 61.

¹⁵² *Idem.* P. 64.

¹⁵³ INEGI, "Módulo de Trabajo Infantil de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 2015", <http://www.beta.inegi.org.mx/proyectos/enchogares/modulos/mti/2015/> (Fecha de consulta: 26 de abril de 2018)

¹⁵⁴ UNESCO, *Informe Mundial Re-Pensar las Políticas Culturales* (Paris, Francia, UNESCO:2015). Recuperado de: http://en.unesco.org/creativity/sites/creativity/files/gmr_es.pdf (Fecha de consulta: 24 de abril de 2018).

¹⁵⁵ Secretaría de Cultura, *Avance y resultados 2017. Programa Especial de Cultura y Arte 2014-2018*, <https://www.gob.mx/cultura/es/documentos/logros-2017-peca> (Fecha de consulta: 30 de abril de 2018).

¹⁵⁶ INEGI, "Banco de información económica", <http://www.inegi.org.mx/sistemas/bie/> (Fecha de consulta: 18 de abril de 2018)

vinculadas a la ubicación geográfica y tipo de localidad de las empresas y las personas. El crecimiento económico observado no ha solucionado los problemas ambientales; al contrario, ha agregado retos para la sustentabilidad ambiental (Meta 8.4), por lo que es necesario poner especial atención al estilo de desarrollo.

4.2.1. Crecimiento económico, productividad y competitividad

El **Producto Interno Bruto (PIB)** del país creció 2.0% en 2017, la tasa más baja de los últimos cuatro años, y casi un punto porcentual menor a la registrada en 2016 (2.9%). Esta desaceleración se explica primordialmente por una caída en la inversión, principalmente pública (que disminuyó 26.3%), y al efecto negativo de los desastres naturales, que contrarrestaron un mayor dinamismo del sector externo. Sin embargo, de acuerdo con varios organismos internacionales, las perspectivas de crecimiento para 2018 apuntan a un crecimiento de entre 2.1% y 2.5%¹⁵⁷, a pesar de la vulnerabilidad que significa el proceso electoral, el cambio de gobierno y la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

El **comercio exterior** sigue siendo uno de los motores de la economía mexicana. En 2017, México exportó \$409 miles de millones de dólares, lo que significa un crecimiento anual de 9.51%, ocupando el lugar 13 de las economías más exportadoras del mundo. Sin embargo, el número de micro, pequeñas y medianas empresas (MPYMES) vinculadas a las cadenas de valor de las grandes empresas exportadoras es aún reducido y el valor agregado local en las exportaciones en los sectores clave de exportación sigue siendo bajo (cerca al 35%)¹⁵⁸. Para lograr mayor participación en las cadenas globales de valor (Meta 9.3), las MPYMES mexicanas requieren mayores niveles de productividad (Meta 8.2), los cuales se pueden alcanzar incrementando la innovación y la adopción de tecnología (Meta 8.3), así como las capacidades de su fuerza laboral. Sin embargo, los indicadores de gastos en investigación, desarrollo e innovación de las empresas siguen siendo bajos y la mayor parte de las empresas MPYMES invierten muy poco o no realizan inversiones en nuevas tecnologías o capacitación para sus empleados.

México tiene la tasa de **productividad** laboral más baja entre los países de la OCDE¹⁵⁹, y ésta presenta comportamientos muy diversos entre sectores, regiones y tamaño de empresas, los cuales se explican por diversas brechas estructurales. Los índices de productividad presentan mejor desempeño en el sector manufacturero, comparado con el sector primario; los sectores exportadores y las empresas grandes son más productivos, comparados con los sectores no exportadores y las microempresas. Igualmente, los trabajadores con mayores niveles de producción tienen mayores tasas de productividad.¹⁶⁰ Si bien las reformas estructurales implementadas por la actual administración han significado un incremento en la productividad en algunos sectores, otros siguen rezagados. Esta baja productividad laboral y de otros factores de producción se reflejan en los niveles de competitividad del país. De acuerdo con el Índice Global de Competitividad del Foro Económico Mundial¹⁶¹, México se sitúa en el lugar 51 de 137 países.

¹⁵⁷ Pronósticos para 2018 de la CEPAL (2.3%), el FMI (2.3%), el Banco Mundial (2.1%) y la OCDE (2.5%).

¹⁵⁸ INEGI, "PIB y Cuentas Nacionales. Valor Agregado de Exportación de la Manufactura Global (VAEMG)" <http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/cn/vaemg/default.aspx> (Fecha de consulta: 16 de abril de 2018)

¹⁵⁹ OCDE, "Estadísticas de productividad", <http://www.oecd.org/sdd/productivity-stats/> (Fecha de consulta: 16 de abril de 2018); Banco Mundial, "World Development Indicators", <https://datos.bancomundial.org/> (Fecha de consulta: 16 de abril de 2018).

¹⁶⁰ CEPAL, *Productividad y brechas estructurales en México* (Ciudad de México, CEPAL, LC/MEX/L.1211: mayo de 2016), https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/40165/1/S1600553_es.pdf (Fecha de consulta: 28 de junio de 2018).

¹⁶¹ World Economic Forum, "The Global Competitiveness Report 2017-2018", <http://www3.weforum.org/docs/GCR2017-2018/05FullReport/TheGlobalCompetitivenessReport2017%E2%80%932018.pdf> (Fecha de consulta: 20 de abril de 2018).

Uno de los factores sociales que ha tenido un efecto sobre el crecimiento económico son los altos niveles de violencia e inseguridad registrados en México en los últimos años (Meta 16.1), los cuales han impactado en las inversiones. De acuerdo con el Índice Global de Competitividad, el costo del crimen y la violencia para los negocios en México registró una calificación de 2.7 (la calificación máxima es 7), colocando a México en el lugar 131 de 137 países en este rubro. La violencia e inseguridad es el segundo problema más importante para hacer negocios en México de acuerdo con el mismo reporte¹⁶².

En México existe un alto consumo de **productos falsificados y piratería digital**, afectando no sólo las finanzas públicas y a las empresas que enfrentan una competencia desleal, sino también a los consumidores. En 2014, de acuerdo con un estudio realizado por el Centro de Investigación para el Desarrollo (CIDAC)¹⁶³, la piratería consumida en el país costó más de 43 mil millones de pesos y significó una pérdida recaudatoria de 6 mil millones de pesos por Impuesto al Valor Agregado (IVA). Asimismo, de acuerdo con una encuesta más reciente, publicada por el Coalición por el Acceso Legal a la Cultura¹⁶⁴, en 2017 sólo el 18.6% de los encuestados no adquirieron productos apócrifos en música, películas, libros, software, fotografías, pintura y estructura. Asimismo, en 2017 el 49% del software instalado en las computadoras no tenía la licencia correspondiente para su uso, cifra muy superior al 16% en registrado en América del Norte y el 26% de Europa Occidental¹⁶⁵.

4.2.2. Empleo y trabajo decente

Si bien en México la tasa de desempleo e informalidad han mostrado una tendencia a la baja durante el periodo 2011-2018, pasando de 5.0% a 3.2% y de 59.5% a 57%, respectivamente, el déficit de trabajo decente es considerablemente alto.¹⁶⁶ Las marcadas diferencias entre mujeres y hombres respecto a su participación económica persisten, al igual que una alta informalidad y limitado acceso a prestaciones de seguridad social. Las desigualdades entre estados y regiones son considerables en esta materia, y este tipo de disparidades tienden a replicarse al analizar a los grupos de población. Por ejemplo, desde una perspectiva de ciclo de vida, se observa que las personas jóvenes tienen mayor tasa de desempleo y peores condiciones laborales en comparación con grupos de mayor edad.

Aunque el empleo en las mujeres ha crecido a un mayor ritmo que en los hombres en las últimas dos décadas, la **participación económica** de las mujeres continúa siendo considerablemente menor a la masculina y sigue siendo una de las menores en América (77.6 de los hombres y 42.9% de las mujeres)¹⁶⁷. La brecha se ensancha todavía más en diversas entidades del país, en donde la participación económica de las mujeres no supera el 40% (Chiapas 27.2%, Veracruz 34.4%, Querétaro 36.3%, Tabasco 37.4%, Hidalgo y Zacatecas 39.3%, respectivamente¹⁶⁸). En general, persiste un alto grado de segregación ocupacional, en donde las mujeres tienden a insertarse en los sectores productivos de menor valor agregado, con una marcada brecha en términos de

¹⁶² *Idem*.

¹⁶³ CIDAC, "Piratería: Entendiendo el mercado "sombra" en México" (México, Centro de Investigación para el Desarrollo (CIDAC): 2015), http://cidac.org/esp/uploads/1/PIRATERIA_Entendiendo_el_mercado_sombra_en_Mexico_1.pdf (Fecha de consulta: 26 de junio de 2018).

¹⁶⁴ Coalición por el Acceso Legal a la Cultura (CALC), "Encuesta para la medición de la piratería en México", <http://ht.ly/9hiz30g8fw1> (Fecha de consulta: 27 de junio de 2018).

¹⁶⁵ The Software Alliance (BSA), "Encuesta Global de Software". http://www.bsa.org/~media/Files/StudiesDownload/2018_BSA_GSS_Report_eslatam.pdf (Fecha de consulta: 26 de junio de 2018).

¹⁶⁶ México incorporó el concepto de trabajo digno o decente en las reformas la Ley Federal del Trabajo en 2012.

¹⁶⁷ Con datos de la ENOE, Cuarto Trimestre, citado en INEGI/INMUJERES, *Mujeres y hombres en México 2017* (México, INEGI: 2017). P. 133.

¹⁶⁸ *Idem*.

movilidad profesional y acceso a mejores oportunidades de empleo. La OCDE estima que reducir a la mitad la brecha de género en la participación económica (Meta 8.5) para 2040, además de contribuir a la igualdad de género y empoderamiento de las mujeres (Meta 5.c), aumentaría el PIB *per cápita* en casi 0.2 puntos porcentuales anuales por arriba de las proyecciones (Meta 8.1). La participación económica de la población indígena también presenta un rezago importante. De acuerdo con la Encuesta Intercensal 2015, 46.9% de la población de 15 años y más hablante de lengua indígena es económicamente activa, cifra 7.8 puntos porcentuales menor a la participación económica de los no hablantes de lengua indígena (54.7%). Las mujeres indígenas trabajan en mayor proporción en trabajos por su cuenta (32.2%), que las mujeres que no son hablantes de lengua indígena (19.0%)¹⁶⁹, reflejo de una todavía mayor precariedad laboral.

La población joven en México encuentra serias limitantes para participar en la economía en un trabajo decente (Meta 8.5). La tasa de **participación económica juvenil** muestra una disminución, la cual ha sido constante en los últimos diez años, pasando de 47.7% en 2008 a 43.8% en 2017¹⁷⁰. De acuerdo con la ENOE, en el primer trimestre de 2017, la PEA de 15 a 29 años ascendió a 16 millones de jóvenes, de ello 15 millones se encontraban ocupados, de los cuales 60.6% lo estaban en el sector informal. El desempleo en México es más elevado entre la población joven. Mientras que la tasa de **desocupación** para adolescentes y jóvenes de 15 a 29 años es de 6.7%, la de personas mayores a 25 es de 2.8%. Por otro lado, México tiene una de las tasas más altas de jóvenes de 15 a 29 años que no estudian, trabajan o se capacitan para el empleo, la cual llegó en 2017 a casi 18.7%¹⁷¹, lo que representa un enorme reto para cumplir con la Meta 8.6. Las causas son múltiples y entre sus repercusiones está la imposibilidad de acceso a recursos para satisfacer sus necesidades más básicas de alimentación (ODS 2), salud (ODS 3) y seguridad social (ODS 10). Las mujeres jóvenes tienen una probabilidad prácticamente 4 veces superior de estar en esa condición en comparación con los hombres, situación que se agrava porque más de la mitad son madres y el país tiene una de las tasas de empleo de madres de niñas y niños más bajas entre los países miembros la OCDE.

Los **salarios** promedio en México registran el nivel más bajo entre los países de la OCDE, con apenas 15,311 dólares anuales en 2016, comparado con el promedio de este grupo de países que fue 39,285 dólares¹⁷² (Meta 8.5). De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), la categoría con mayor porcentaje de personas ocupadas en los últimos 10 años es la de “más de 1 hasta 2 salarios mínimos”¹⁷³ que en 2017 alcanzó el 27% y el porcentaje de personas que ganaron “hasta un salario mínimo” fue 15%. En el período 2017-2018, la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos ha establecido el salario mínimo diario en 88.36 pesos, cerca de 4.5 dólares estadounidenses actuales. La desigualdad entre mujeres y hombres en lo que se refiere a salarios se observa prácticamente en todos los grupos de ocupación, alcanzando entre 15 y 20% por trabajo de igual valor, y llegando hasta 40% cuando se trata de mujeres en puestos de alta dirección¹⁷⁴.

¹⁶⁹ INEGI, “Estadísticas a propósito del día internacional de los pueblos indígenas, 2016. Datos Nacionales”, http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2016/indigenas2016_0.pdf (Fecha de consulta: 18 de abril de 2018).

¹⁷⁰ INEGI, “Estadísticas a propósito del Día Internacional de la Juventud, 2017” http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2017/juventud2017_Nal.pdf (Fecha de consulta: 20 de mayo de 2018)

¹⁷¹ Fuente Organización Internacional del Trabajo. ILOSTAT Country Profiles.

¹⁷² OCDE, “Employment and Labour Market Statistics,” <https://data.oecd.org/earnwage/average-wages.htm> (Fecha de consulta: 22 de abril de 2018).

¹⁷³ De acuerdo con la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, el salario mínimo diario en 2017 y 2018 es de 88.36 pesos (cerca de 4.5 dólares estadounidenses actuales).

¹⁷⁴ Con datos del Índice de discriminación salarial de la población ocupada de 15 y más años de edad, por grupos de ocupación. Serie anual de 2005 a 2016, citado en INEGI/INMUJERES, *Mujeres y hombres en México, 2016* (México, INEGI:2016). P. 158.

En 25 años, el **poder adquisitivo** del salario mínimo perdió 76.3% y en 2011 había 13.2 millones de personas que tenían que laborar más de 48 horas a la semana para tener un nivel de ingresos que les permitiera obtener el nivel suficiente para vivir¹⁷⁵. En el primer trimestre de 2018, el porcentaje de la población con ingreso laboral inferior al costo de la canasta alimentaria fue de 39.1%¹⁷⁶. En años recientes, en México se inició la discusión entre diversos sectores de la sociedad sobre el papel y monto del salario mínimo, buscando la recuperación de su poder adquisitivo. En octubre de 2014 inició sus trabajos la Comisión Consultiva para la Recuperación Gradual y Sostenida de los Salarios Mínimos Generales y Profesionales, y una de las acciones iniciales fue la propuesta de desindexación o desvinculación del salario mínimo, la cual fue aprobada en 2016¹⁷⁷.

Las oportunidades de **empleo formal y remunerado** no han sido las mismas para todos los mexicanos. Datos de la ENOE evidencian que la tasa de informalidad laboral en México alcanzó en 2017 el 57% de la población ocupada (30.1 millones de personas¹⁷⁸), lo que significa también bajos sueldos y menos oportunidades de progreso laboral y capacitación (baja productividad), además de que limita el acceso a la seguridad social y al sistema de pensiones. La tasa de informalidad es una de las más altas entre los países de la OCDE, una de las mayores de América Latina y es una de las principales causas de las desigualdades económicas y sociales entre regiones en México, siendo los estados del sur-sureste del país los que tienen mayores tasas de ocupación informal: Oaxaca (81.5%), Chiapas (79.3%), Guerrero (78.8%), Hidalgo (74.2%) y Puebla (73.4%). La informalidad laboral también afecta de manera diferente a mujeres y hombres, sobre todo de acuerdo con el tipo de zona. En el caso de las zonas menos urbanizadas, esta tasa es de 59.7% para hombres y 69.4% para las mujeres, mientras que en las áreas más urbanizadas la tasa de informalidad de hombres es de 41.9% y para las mujeres de 46.9% (brecha de 4.3 puntos porcentuales).

Esta dinámica del empleo y los salarios, con un incremento en el empleo informal y la precarización del trabajo asalariado en general, ha significado un deterioro de la distribución funcional del ingreso (entre el capital y el trabajo), con una disminución en la participación de las remuneraciones al trabajo en el PIB en las últimas décadas¹⁷⁹. En 2014, la participación de los salarios en el PIB (a precios de mercado) en México fue menor al 30%¹⁸⁰.

El trabajo infantil constituye una violación de los derechos de NNA, especialmente del derecho a estar protegido contra la explotación, al sano crecimiento, a la educación, al juego, la cultura y al deporte. México sigue registrando altas tasas de **trabajo infantil**, con 3.5 millones de niños de entre 5 y 17 años participando en actividades laborales. Según datos de la ENIM 2015, este número representa 12.6% de este segmento. Entre ellos, 40% son niños y niñas entre 5 y 14 años,

¹⁷⁵ Centro de Análisis Multidisciplinarios, Facultad de Economía, *Poder adquisitivo del salario y la precarización del nivel de vida de los trabajadores en México 2012* (Ciudad Universitaria, UNAM: agosto de 2012). Recuperado de: <http://www.frecuencialaboral.com/multimedia/ReporteEMPLEOSALARIOUNAM.pdf> (Fecha de consulta: 17 de abril de 2018).

¹⁷⁶ CONEVAL, "Índice de tendencia laboral de la pobreza al primer trimestre de 2018", https://www.coneval.org.mx/Medicion/Paginas/ITLP-IS_resultados_a_nivel_nacional.aspx (Fecha de consulta: 26 de junio de 2018).

¹⁷⁷ Diario Oficial de la Federación, *Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo* (México, DOF: 27/01/16). Recuperado de: http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5423663&fecha=27/01/2016 (Fecha de consulta: 25 junio 2018)

¹⁷⁸ 14.2 millones laboran en unidades económicas no registradas; 2.3 millones trabajan en el servicio doméstico remunerado sin seguridad social; 6.3 millones trabajan por cuenta propia en la agricultura de subsistencia, y 7.3 millones son trabajadores no remunerados, o trabajadores subordinados y remunerados que laboran sin seguridad social.

¹⁷⁹ Norma Samaniego, *La participación del trabajo en el ingreso nacional. El regreso a un tema olvidado*. (México, Comisión Económica para América Latina (CEPAL) Serie Estudios y Perspectivas: 2014). Recuperado de: https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/37279/S1420829_es.pdf?sequence=1&isAllowed=y (Fecha de consulta: 25 de junio de 2018).

¹⁸⁰ CEPAL, *Panorama Social de América Latina, 2016...* op cit.

es decir, por debajo de la edad legal para trabajar¹⁸¹. México tiene grandes retos para asegurar de aquí al 2030 la eliminación de todas las formas de trabajo infantil (Meta 8.7).

Conforme los indicadores de cobertura de protección social, publicados por la OIT, hay importantes rezagos en la extensión de los sistemas de seguridad social contributivos y no-contributivos en el país frente al objetivo de la universalización de cobertura hacia 2030 (Meta 1.3). Además del indicador general de acceso a una prestación monetaria, que es de solamente 50.3% de la población, la cobertura de niños con prestaciones corresponde a 25.0% (frente a un promedio de 66.2% en Américas) y la protección de adultos mayores con pensiones es de 64.1% (comparado con un promedio de 70.8% para América Latina y Caribe). La explicación de estas brechas de cobertura se debe a la elevada informalidad laboral (ya mencionada arriba) y a la fragmentación (por ejemplo, de los seguros sociales y programas de asistencia social) y fuerte focalización de los programas de transferencias no-contributivas (como es el caso del Prospera y de la Pensión para Adultos Mayores). México requiere importantes reformas de sus sistemas de protección social para proporcionar mayor cobertura y prestaciones a su población (Meta 1.3).

4.2.3. Política fiscal, gasto público

La **reforma fiscal**, en vigor desde 2014, está teniendo ya algunos efectos sobre los ingresos fiscales como porcentaje del PIB, permitiendo un incremento de 3.4 puntos porcentuales en el período 2014-2017 (Meta 17.1). Sin embargo, el incremento en la recaudación tributaria es aún baja en comparación con otros países de América Latina y la OCDE¹⁸², además de que aún no se ha traducido en una mejora en la redistribución del ingreso en México y en una mayor eficiencia del gasto social (Meta 10.4). México es uno de los países de la OCDE en donde el sistema fiscal y de transferencias tiene menor impacto en el Coeficiente de Gini (Meta 10.1), además de que el gasto social como porcentaje del PIB (8.4% en 2017) es también bajo (el promedio de ese grupo de países es 21%). En sus observaciones finales a México, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU mostró su preocupación acerca de que el impacto de la reforma fiscal no sea lo suficientemente progresivo y que la tasa de recaudación fiscal continúe siendo baja, afectando la capacidad de México para cumplir con su obligación de movilizar la mayor cantidad de recursos disponibles para la realización de los derechos económicos, sociales y culturales¹⁸³.

Una mayor **capacidad fiscal** y hacer que el gasto público sea más progresivo con políticas sociales incluyentes es fundamental para revertir las desigualdades en México. Si no se logra incrementar los ingresos fiscales (Meta 17.1), a través de la reducción de la evasión y mejores estrategias de recaudación, y usarlo de manera más eficiente, combatiendo la corrupción (Meta 16.5) y la informalidad (Meta 8.5), no se logrará tener un impacto en la efectividad de las políticas fiscales y su función redistributiva (Meta 10.4). Incrementar la eficiencia y transparencia de los gobiernos estatales (Meta 16.6), los cuales son responsables de uso de un porcentaje importante de los recursos fiscales, es también indispensable para alcanzar la efectividad y capacidad redistributiva del gasto. Con el objetivo de transparentar las decisiones ingreso-gasto, desde hace varios años, diversos organismos internacionales, entre ellos el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, así como organizaciones empresariales nacionales, han propuesto crear un consejo fiscal independiente.

¹⁸¹ UNICEF, *Los derechos de la niñez y la adolescencia en México. Análisis de su situación* (México, UNICEF: 2017). P. 204.

¹⁸² Mientras que en promedio de los países de la OCDE fue 34.3% en 2016, en México representó el 17.2% del PIB.

¹⁸³ Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. *Observaciones finales sobre a los informes periódicos quinto y sexto combinados de México...op cit.* Párr. 14.

4.2.4. Desigualdad entre regiones y estados, y entre grupos de ingresos

México sigue siendo un país de fuertes contrastes y los avances de los últimos años en materia económica no han sido suficientes para reducir los desequilibrios e impactar en las capacidades del capital humano, su ocupación (ODS 8), su nivel de educación (ODS 4) y otros factores determinantes para reducir las desigualdades (ODS 10) que persisten entre grupos de población, regiones y tipos de localidades.

La **distribución del ingreso** del país ha mostrado una concentración prácticamente sin cambios en los últimos cinco años¹⁸⁴. El Coeficiente de Gini¹⁸⁵ para la distribución del ingreso por deciles de hogares fue de 0.448 en 2016 (considerando transferencias). Aunque significa una mejora respecto a 2008 (0.457), sigue siendo alto y registra el mayor nivel de los últimos 8 años¹⁸⁶. Aun considerando los impuestos y las transferencias aplicados a la reducción de las desigualdades, no se observan cambios importantes en el Coeficiente de Gini, como sí ocurre, por ejemplo, en la mayoría de los países de la OCDE¹⁸⁷. De acuerdo con la ENIGH 2016, el 30% de los hogares con mayores ingresos (deciles VIII, IX y X) concentraron el 63.3% de los ingresos corrientes totales, mientras que el restante 70% de los hogares (deciles I al VII), obtuvieron sólo el 36.7% del ingreso. El décimo decil de los hogares en México captó 21 veces más ingresos que el primero.

Al usar metodologías que permitan estimaciones más precisas de los ingresos de las familias más ricas, los resultados de desigualdad en México son aún más críticos¹⁸⁸. Un estudio de la CEPAL¹⁸⁹ encontró que la proporción del ingreso corriente total que concentra el 10% de las familias más ricas se incrementa del 35% al 62% una vez que se ajustan las cifras, por lo que el coeficiente de Gini aumenta de 0.45 a 0.68 (cifras 2012). Si se excluyen las transferencias, el 10% con mayor ingreso concentra el 66% y el coeficiente de Gini se eleva a 0.73. Resultados similares ha difundido Oxfam México, de cuyos datos se concluye que en México “al 1% más rico le corresponde un 21% de los ingresos totales de la nación”¹⁹⁰. Considerando sólo los activos financieros, se observa también esta mayor desigualdad, ya que 80% de éstos es propiedad del 10% más rico. Se estima que sólo 23 mil personas tienen el 80% de la inversión de la Bolsa Mexicana de Valores.

Las mayores **desigualdades a nivel territorial** en todos los ámbitos del desarrollo social se observan en los estados con menor crecimiento y menor participación en la producción nacional. Entre 2003-2013, los estados del sur-sureste (Campeche, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán) presentaron, como grupo, una tasa de crecimiento media anual del PIB de 1.3%, muy por debajo de la del resto del país, que fue superior a 3%. Estos mismos estados son los que tienen una mayor proporción de su población viviendo con menos del

¹⁸⁴ INEGI, “Sistema de Cuentas Nacionales”, <http://www.beta.inegi.org.mx/app/buscador/default.html?q=gini#tabMCcollapse-Indicadores> (Fecha de consulta: 18 de abril de 2018).

¹⁸⁵ El coeficiente de Gini es una medida de concentración del ingreso, que toma valores entre cero y uno. Cuando el valor se acerca a uno, indica que hay mayor concentración del ingreso.

¹⁸⁶ De 2010 a la fecha los resultados son: 0.435 en 2010, 0.440 en 2012 y 0.438 en 2014. INEGI, “Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) 2016. Tabulados básicos”, <http://www.beta.inegi.org.mx/proyectos/enchogares/regulares/enigh/nc/2016/> (Fecha de consulta: 18 de abril de 2018).

¹⁸⁷ OCDE, “Estudios Económicos de la OCDE: México 2017. Visión general”, <https://www.oecd.org/eco/surveys/mexico-2017-OECD-Estudios-economicos-de-la-ocde-vision-general.pdf> (Fecha de consulta: 4 de mayo de 2018)

¹⁸⁸ Las metodologías buscan ajustar los datos de las encuestas de ingresos y gastos de los hogares con la información de las cuentas nacionales a fin de contar con información confiable en especial entre los sectores de mayores ingresos, las cuales generalmente no reportan la cantidad total de sus ingresos.

¹⁸⁹ Miguel Del Castillo, *La magnitud de la desigualdad en el ingreso y la riqueza en México* (México, Comisión Económica para América Latina (CEPAL), Serie Estudios y Perspectivas N° 167: 2015). Recuperado de: https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/39531/1/S1501288_es.pdf (Fecha de consulta: 25 de junio de 2018).

¹⁹⁰ Gerardo Esquivel, *Desigualdad extrema en México: concentración del poder económico y político* (México, Oxfam México: 2015) Recuperado de: https://www.oxfamMexico.org/sites/default/files/desigualdadextrema_informe.pdf (Fecha de consulta: 25 de junio de 2018).

50% del ingreso medio (Meta 10.1), siendo Chiapas (68.8%), Guerrero (63.6%) y Oaxaca (57.3%) los que tienen los mayores porcentajes de población en esta situación¹⁹¹.

Otro de los factores que está influyendo en las desigualdades entre los estados del norte del país y los de la región sur-sureste es el desempeño de los flujos migratorios, pues mientras que los primeros son receptores, los segundos son expulsores y muestran un fuerte dinamismo en los flujos hacia el exterior y otros estados del país. Lo anterior, entre otras consecuencias, significa un descenso de la fuerza laboral y la capacidad de producción, ya que generalmente los migrantes son aquellos con mayores capacidades para el trabajo. La región sur-sureste tiene la menor participación en las remesas entre las cuatro regiones de México (19.3% en 2017¹⁹²).

La desigualdad en los ingresos y la concentración de la riqueza impactan en la igualdad de oportunidades y, por lo tanto, en la **movilidad social** de las personas. En México la probabilidad de que alguien que nace en el quintil más bajo de la distribución (el 20% más pobre) ascienda al quintil más alto (el 20% más rico), es de apenas el 4%¹⁹³. Las mujeres enfrentan mayores dificultades para alcanzar un nivel socioeconómico más alto, especialmente cuando vienen de los hogares más pobres. Mientras que 23 de cada 100 hombres originarios de los hogares más pobres permanecen en el mismo nivel en la edad adulta, 43 de cada 100 mujeres en la misma condición continúan actualmente en el mismo nivel¹⁹⁴. La correlación negativa entre desigualdad económica y movilidad social en México se observa también en las amplias disparidades entre regiones y estados. Las opciones de movilidad social ascendente entre quienes crecieron en hogares pobres son significativamente mayores en la región norte del país. La tasa de movilidad ascendente entre quienes nacieron en el quintil más bajo en Chiapas (0.16), Oaxaca (0.20) y Guerrero (0.28), estados con altos porcentajes de población indígena y localidades rurales dispersas, es significativamente menor en comparación con la movilidad social de aquellas personas que nacieron en hogares pobres pero en entidades más desarrolladas, con un importante componente de urbanización y zonas metropolitanas, como la Ciudad de México (3.01), Jalisco (1.76) y Nuevo León (1.70)¹⁹⁵.

4.2.5. Inclusión financiera

La **inclusión financiera** (Meta 8.3), considerada como un habilitador de siete de los 17 ODS¹⁹⁶, con efecto directo sobre el bienestar de las personas, los hogares y el desarrollo de las empresas de menor tamaño, es un aspecto en el que México ha logrado avances, pero en donde igualmente persisten brechas regionales, de género, por grupos de edad y por tamaño de empresas, ocasionadas por diversos factores, como la concentración de la infraestructura en las zonas urbanas, bajo conocimiento sobre la oferta de servicios, alto costo de los servicios o trámites onerosos, así como el limitado uso de las tecnologías de la información para realizar transacciones, entre otros.

¹⁹¹ PNUD, *Informe sobre desarrollo humano en México 2016. Desigualdad y movilidad* (México, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo: 2017). P. 39.

¹⁹² Banco de México, "Remesas por entidad federativa", <http://www.banxico.org.mx/SielInternet/consultarDirectorioInternetAction.do?accion=consultarCuadroAnalitico&idCuadro=CA79> (Fecha de consulta: 28 de junio de 2018).

¹⁹³ Centro de Estudios Espinosa Yglesias, *El México del 2018. Movilidad social para el bienestar* (México, CEEY Editorial: 2018). Pp. 26-27.

¹⁹⁴ *Idem*.

¹⁹⁵ Vélez R., O. Stabidris y E. Minor, "Still looking for the land of opportunity: The case of Mexico, Documento de Trabajo núm. 001/2017" (México, CEEY: 2017), citado en: Cornelio Martínez López, "Panorama general y alternativas legislativas para fomentar la movilidad social en México", en *Mirada Legislativa*, No. 130 (México, Instituto Belisario Domínguez agosto 2017). P. 13.

¹⁹⁶ De acuerdo con diversos estudios, las personas con una cuenta en una institución financiera formal son más propensas a ahorrar y usar otros servicios financieros, como créditos o seguros, a iniciar o expandir un negocio, a invertir en educación o salud, entre otros.

El número de personas que posee al menos un producto financiero, ya sea ahorro, crédito, seguro, ahorro para el retiro o Afore, se incrementó en 12.7 millones entre 2012 y 2015¹⁹⁷. Lo anterior significa que 68% de las personas adultas mayores (52.1 millones) usa al menos un servicio financiero. La brecha de género a nivel nacional se redujo al pasar de 8 a 6 puntos porcentuales, con mejoras en las zonas rurales, donde actualmente es mayor el número de mujeres que de hombres con cuentas bancarias. Sin embargo, las comunidades rurales siguen teniendo poco acceso a servicios financieros y sólo 20.7% de los municipios cuenta con una sucursal o corresponsal bancarios, además de que únicamente el 10% de éstos cuenta con cajeros automáticos, registrando menos de un cajero por cada 10 mil adultos. Asimismo, el porcentaje de adultos a los que les implica un costo monetario acudir a una sucursal bancaria es 85% en zonas rurales, comparado con el 72% en zonas urbanas. Por otro lado, alrededor de 56% de las personas adultas mayores no cuentan con ningún producto de ahorro y 71% tampoco con algún producto de crédito¹⁹⁸.

En lo que se refiere al **acceso al financiamiento** de MYPIMES (Meta 9.3), México también requiere redoblar esfuerzos para aumentar el acceso de éstas a los servicios financieros. Si bien el monto del financiamiento se ha incrementado en el período 2010-2016, las MPYMES sólo representan el 25% del total del monto de crédito destinado a las empresas por parte de las instituciones de la banca múltiple, además de que solo el 10% de las MPYMES cuenta con crédito¹⁹⁹. Asimismo, según los resultados de Encuesta Nacional sobre Productividad y Competitividad de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (ENAPROCE) 2015²⁰⁰, uno de los principales problemas que afecta el crecimiento de las PYMES es la falta de crédito, en lo cual coinciden el 22.7% de las microempresas, 9.2% de las pequeñas empresas y 6.0% de las medianas.

La falta de financiamiento es uno de los principales problemas que afectan al campo mexicano (Meta 2.3). De acuerdo con la Encuesta Nacional Agropecuaria (ENA) 2014²⁰¹, sólo el 12.6% de las unidades de producción tramitaron o les ofrecieron un crédito o préstamo, mientras que sólo el 10.4% lo obtuvo. Las principales fuentes de las que obtuvieron este tipo de apoyos fueron las cajas de ahorro, con el 26.4%, seguida de empresas o personas que compran la producción (16%), la financiera rural (15.3%), los que proveen insumos (12.8%) y los bancos (11.8%).

4.2.6. Ciencia, tecnología e innovación

El desarrollo de la **ciencia, la tecnología y la innovación** (CTI) podría ser el habilitador de un crecimiento económico sostenido e inclusivo y la productividad que el país requiere. México cuenta con un marco institucional sólido en materia de CTI y un presupuesto institucionalizado. Sin embargo, si bien ha habido un número importante de iniciativas lanzadas recientemente, el monto y alcance sigue siendo limitado, logrando impactar solo a un grupo de empresas y sectores.

El **gasto en investigación y desarrollo**, aunque se ha incrementado de manera constante en la última década, no ha logrado remontar y alcanzar el 1% del PIB (Meta 9.5). En 2016, representó

¹⁹⁷ CONAIF, *Reporte Nacional de Inclusión Financiera 8*, (México, Consejo Nacional de Inclusión Financiera (CONAIF): 2017). Recuperado de: <http://www.cnbf.gob.mx/Inclusi%C3%B3n/Documents/Reportes%20de%20IF/Reporte%20de%20Inclusion%20Financiera%208.pdf>

¹⁹⁸ *Idem*.

¹⁹⁹ *Idem*.

²⁰⁰ INEGI, "Encuesta Nacional sobre Productividad y Competitividad de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (ENAPROCE) 2015", http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/Proyectos/encuestas/establecimientos/otras/enaproce/default_t.aspx

²⁰¹ INEGI, "Encuesta Nacional Agropecuaria 2014", <http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/encuestas/agropecuarias/ena/ena2014/doc/tabulados.html> (Fecha de consulta: 25 de junio de 2018).

apenas el 0.51% del PIB²⁰². El gasto en investigación y desarrollo en México es el segundo más bajo de los países de la OCDE y cerca del 80% se realiza por el sector público y académico, mientras que las empresas siguen invirtiendo poco (20% de ese gasto)²⁰³. De ahí que el desafío de aumentar al 2030 la investigación científica y mejorar la capacidad tecnológica de los sectores industriales es considerable (Meta 9.5).

En lo que se refiere a los indicadores de **innovación**, de acuerdo con el *Global Innovation Index*²⁰⁴, México ocupó el lugar 58 de 127 países en el indicador global. En México un porcentaje muy bajo de empresas realizan proyectos de innovación (menos del 5%)²⁰⁵, además de que la mayoría tiene un grado de madurez tecnológica pobre, es decir, pocas adquieren licencias, compran maquinaria o adaptan las tecnologías, la maquinaria o el equipo para mejorar su eficiencia en la producción y contribuir a la protección del medio ambiente (Meta 9.4).

En cuanto al **capital humano especializado**, capaz de desarrollar nuevo conocimiento científico y tecnológico, así como innovaciones, México muestra todavía un desempeño limitado y una marcada brecha de género. Si bien la proporción de estudiantes que ingresan en las áreas de ciencias, tecnología, ingenierías y matemáticas (CTIM)²⁰⁶ en educación superior ha aumentado progresivamente y actualmente es de 32%, y cada día hay más mujeres ingresando en las ciencias e ingenierías, solo 33% de los investigadores a nivel nacional son mujeres y el acceso de las mujeres a los puestos de decisión dentro de la investigación científica es todavía limitado.

Para lograr mayor **eficiencia en la innovación**, México requiere fortalecer las capacidades del capital humano, mejorando la educación en todos los niveles, principalmente en las áreas CTIM (Meta 4.4), de tal manera que se puedan generar más ideas y tecnologías (Meta 9.5); mejorar el ambiente de negocios, para que haya mayor inversión privada; aumentar la oferta de servicios y apoyos para las empresas y emprendedores, tales como centros de innovación, incubadoras y aceleradoras, así como servicios financieros (Meta 8.3); fortalecer los programas de apoyo público y los incentivos fiscales, que estimule el gasto privado en investigación y desarrollo (Meta 9.5); y fomentar la vinculación academia-empresa para que el conocimiento generado sea aprovechado.

El **uso de tecnologías de la información** es un canal importante para la apropiación social del conocimiento, incluyendo el científico y tecnológico, así como sus aplicaciones y avances, además de ser una de las herramientas habilitadoras de la innovación, el desarrollo tecnológico y la transmisión de la cultura. En México ha habido avances significativos en este rubro (Meta 9.c), en parte impulsado por la reforma en materia de telecomunicaciones, que han permitido reducir los precios de la banda ancha móvil. De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de TIC en Hogares (ENDUTIH) 2017²⁰⁷, el número de usuarios de Internet como porcentaje de la población de seis años o más ha crecido de 43.5% en 2013 a 63.9% en 2017, lo que en términos absolutos significa 71.3 millones de personas. El porcentaje de hogares con conexión a Internet pasó de 30.7% en 2013 a 50.9% en 2017 (17.4 millones de hogares) y actualmente el 72.2% de la

²⁰² CONACYT, *Informe General del Estado de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación 2016*, (México, Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología: 2017), Recuperado de: <http://www.siiicyt.gob.mx/index.php/transparencia/informes-conacyt/informe-general-del-estado-de-la-ciencia-tecnologia-e-innovacion/informe-general-2016/3835-informe-general-2016/file>

²⁰³ En promedio, en los países de las OCDE el 60% del gasto en investigación y desarrollo lo realizan las empresas. OCDE, "Main Science and Technology Indicators", <http://stats.oecd.org/> (Fecha de consulta: 19 de abril de 2018).

²⁰⁴ Cornell University, INSEAD, and WIPO. *The Global Innovation Index 2017: Innovation Feeding the World* (Geneva, Ithaca, Fontainebleau: 2017). Recuperado de: http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_gii_2017.pdf (Fecha de consulta: 18 de abril de 2018).

²⁰⁵ INEGI, "Encuesta Sobre Investigación y Desarrollo Tecnológico (ESIDET) 2014", <http://www.beta.inegi.org.mx/proyectos/encuestablecimientos/especiales/esidet/2014/> (Fecha de consulta: 18 de abril de 2018).

²⁰⁶ Se refiere a carreras en las áreas de ciencias, tecnología, ingenierías y matemáticas.

²⁰⁷ INEGI, "Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de TIC en Hogares, (ENDUTIH) 2017", <http://www.beta.inegi.org.mx/temas/ticshogares/> (Fecha de consulta: 18 de abril de 2018).

población de seis años o más (64.7 millones de personas) utiliza el teléfono celular, de los cuales ocho de cada diez disponen de celular inteligente, con la posibilidad de conectarse a Internet. Si bien las personas usuarias de computadora de seis años o más alcanzaron en 2017 los 50.6 millones (45.3% del total de la población en este rango de edad), la proporción de hogares que disponen de computadora registró un ligero descenso de -0.2 puntos porcentuales, al pasar de 45.6% en 2016, a 45.4% en 2017. En estos indicadores, como en otros, existen amplias diferencias regionales y por grupos de la población.

4.2.7. Ciudades incluyentes, sostenibles y resilientes

La tendencia mundial de concentración de la población en las ciudades se presenta también en México, con retos similares en seguridad, prosperidad y sustentabilidad. Debido a la constante migración de las zonas rurales a las ciudades, la **población urbana** en el país pasó de representar cerca de 43% del total en 1950, a 71% en 1990; para 2010, esta cifra aumentó a casi 78%. Se estima que este porcentaje es de 79.5% en 2016, lo que significa que 101 millones de personas viven en zonas urbanas²⁰⁸. El **derecho a la ciudad** está reconocido en la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano (2016).

En 2010, se habían delimitado 59 **zonas metropolitanas** (más del doble de las que había en 1980), las cuales concentraron el 56.8% de la población²⁰⁹. Esta concentración en las ciudades ha implicado algunas ventajas para sus habitantes, como mayores oportunidades de educación (ODS 4), acceso a servicios e infraestructura y vivienda formal (ODS 11) y posibilidades de empleo con mayores salarios (ODS 8), pero también múltiples problemáticas que inciden negativamente en el nivel de vida y bienestar de sus habitantes, como la calidad ambiental (ODS 12), la distribución inequitativa del ingreso (ODS 10) o las oportunidades de empleo formal (ODS 8), vivienda adecuada (ODS 11), además del daño a las áreas naturales a su alrededor y pérdida de áreas verdes (ODS 15).

El valor promedio a nivel nacional del *Índice de las Ciudades Prósperas*²¹⁰ (CPI por sus siglas en inglés), medido en una primera etapa en 153 municipios urbanos en México²¹¹, es de 54.3, lo que se considera como moderadamente débil. Mientras que las dimensiones de Infraestructura del Desarrollo y Equidad e Inclusión Social son las que mostraron mejores resultados, los mayores rezagos se ubican en las dimensiones de Productividad, Sostenibilidad Ambiental, y, en particular, en la dimensión Gobernanza y Legislación Urbana, considerándose como un factor muy débil para la prosperidad de las ciudades.

Los principales hallazgos de dicho índice revelan los **grandes retos** que tiene México para cumplir con el ODS 11, entre ellos: las importantes asimetrías en ingreso y distribución de la riqueza entre y dentro de las ciudades (ODS 10), y las altas tasas de pobreza urbana (ODS 1); el crecimiento del empleo informal y la baja productividad (ODS 8), el persistente patrón de crecimiento expansivo y no sustentable (ODS 12); las pérdidas importantes en la calidad ambiental, con la correspondiente afectación de la salud de la población (ODS 3); un modelo de transporte basado en el transporte privado, así como la falta de capacidad para generar/utilizar energía proveniente de fuentes

²⁰⁸ Estimaciones del Banco Mundial, con base en las perspectivas de la urbanización mundial de Naciones Unidas.

²⁰⁹ SEDESOL, CONAPO, INEGI, *Delimitación de las Zonas Metropolitanas de México 2010*, (México, SEDESOL, CONAPO, INEGI:2012)

²¹⁰ Es una herramienta diseñada por ONU-Hábitat para entender, analizar, planificar, tomar acción y observar los efectos de las políticas públicas en el bienestar ciudadano. Se utiliza para medir el progreso actual y futuro de las ciudades hacia la prosperidad, bajo un enfoque holístico e integrado que proporciona índices y medidas y permite identificar oportunidades y áreas potenciales de intervención para construir ciudades más prósperas.

²¹¹ La colaboración técnica entre ONU-Hábitat y el Infonavit permitió el cálculo del CPI en 153 municipios en 2016 y en 152 municipios en 2018.

renovables (ODS 7), manejar residuos sólidos (ODS 12) y tratar aguas residuales (ODS 6). Destaca, además, el bajo acceso a tecnologías de la información y comunicación (ODS 9), que obstaculiza la educación y el desarrollo humano (ODS 4).

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) 2017, 54.5% de la población de 18 años o más en áreas urbanas (más de 100 mil habitantes) está insatisfecha con la calidad de los servicios públicos básicos y los bajo demanda. A lo anterior, habrá que agregar los grandes retos que tiene México en términos de seguridad urbana y violencia (ODS 16). La Encuesta de Seguridad Pública Urbana (ENSPU) 2018²¹², muestra que el 76.8% de la población de 18 años y más considera que vivir en su ciudad es inseguro, cifra mayor en casi 4 puntos porcentuales a la registrada en el mismo mes de 2017 y 10 puntos superior respecto a la de septiembre de 2014. Los NNA y jóvenes en las ciudades también se ven fuertemente afectados por la inseguridad y son víctimas de delitos y actos de maltrato (ver capítulo 4.4.2). Una cuarta parte de las y los jóvenes de 12 a 29 años (24.3%) valoran negativamente su comunidad (colonia o barrio), siendo la inseguridad y los conflictos existentes el principal problema²¹³. La inseguridad en las ciudades afecta de manera desproporcionada a las mujeres y las niñas. La ENDIREH 2016 reveló que la violencia contra las mujeres en los espacios públicos es sobre todo de índole sexual (66.8%) y tiene un impacto en el derecho de las mujeres a una movilidad libre y autónoma.

Para atender algunos de estos retos y con el objetivo de fortalecer las acciones en seguridad urbana, inclusión y cohesión social (Meta 11.7), y sustentabilidad (Metas 11.3, 11.5 y 11.b), el Gobierno de México creó la Red Mexicana de Ciudades Más Seguras, a la cual se han unido cinco ciudades; la Red de Ciudades Resilientes²¹⁴, en la cual los tres niveles de gobierno de 18 ciudades en 17 entidades federativas trabajarán para diseñar planes de resiliencia frente al impacto de amenazas ocasionadas por fenómenos naturales; así como la Red de Ciudades Sustentables²¹⁵, la cual está compuesta por ocho centros urbanos que serán ejemplo nacional e internacional en materia de planeación, vivienda, transporte y cuidado del ecosistema, a través del manejo de residuos sólidos, el rescate de espacios públicos y al construcción de vivienda con ecotecnologías que permitirán a sus habitantes sus consumos de energía y sus emisiones contaminantes (Meta 11.3).

4.3 Un país megadiverso con grandes retos ambientales

México forma parte del grupo de los 15 países megadiversos que concentran, en conjunto, entre el 60 y 70% de la biodiversidad global. No obstante, el país enfrenta múltiples retos ambientales relacionados con la creciente pérdida de ecosistemas en gran parte del territorio nacional, el deterioro de la calidad del aire en las zonas metropolitanas, la degradación edáfica y una creciente presión sobre el agua²¹⁶. De acuerdo con el INEGI, el costo total por agotamiento y degradación

²¹² INEGI, "Encuesta de Seguridad Pública Urbana 2018". <http://www.beta.inegi.org.mx/proyectos/enchogares/regulares/ensu/>. (Fecha de consulta: 25 de junio de 2018).

²¹³ INEGI, "Encuesta de Cohesión Social para la Prevención de la Violencia y la Delincuencia (ECOPRED) 2014". http://internet.contenidos.inegi.org.mx/contenidos/productos/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/nueva_estruc/promo/ecopred14_presentacion_ejecutiva.pdf. (Fecha de consulta: 25 de junio de 2018).

²¹⁴ ONU-Hábitat, "Se establece Red de Ciudades Resilientes en México", <https://es.unhabitat.org/se-establece-red-de-ciudades-resilientes-en-mexico/> (Fecha de consulta: 6 de julio de 2018).

²¹⁵ SEDATU, "Red de Ciudades Sustentables, ejemplo del Gobierno de México en cuidado del medio ambiente" (Comunicado, 9 de noviembre de 2016), <https://www.gob.mx/sedatu/prensa/red-de-ciudades-sustentables-ejemplo-del-gobierno-de-mexico-en-cuidado-del-medio-ambiente?idiom=es> (Fecha de consulta: 3 de julio de 2018).

²¹⁶ SEMARNAT, *Informe de la situación del Medio Ambiente en México 2015* (México, SEMARNAT: 2015). Recuperado de: <http://apps1.semarnat.gob.mx/dgeia/informe15/index.html> (Fecha de consulta: 31 de mayo de 2018).

ambiental en 2016 representó el 4.6% del PIB nacional²¹⁷. Si bien México ha fortalecido considerablemente su marco normativo, al emitir leyes que son referencia internacional, como es el caso de la Ley General de Cambio Climático (2012), la Ley de Responsabilidad Ambiental (2013), la Ley de Transición Energética (2015) y la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable (2018), persiste el reto de reforzar el marco institucional a nivel subnacional e implementar de manera integral y coherente las políticas medioambientales, a fin de que se logren los objetivos globales de largo plazo, entre ellos los establecidos en la Agenda 2030 y los ODS²¹⁸. Otro reto por considerar es lograr un incremento del gasto público en el sector ambiental en los niveles promedios observados en la última década, ya que éste presenta una considerable reducción del 150% en los últimos cinco años²¹⁹. México es particularmente vulnerable a los efectos del cambio climático y los desastres naturales²²⁰, con graves riesgos para su población y altos costos económicos.

4.3.1. Acceso al agua y saneamiento

La provisión del agua en México entraña la complejidad de asegurar abasto de calidad, cantidad, suficiencia y oportunidad a una población diseminada heterogéneamente en un territorio con una extensión y geografía complejas. Estos retos naturales y demográficos se han visto acentuados por las capacidades diferenciadas de los órdenes de gobierno²²¹, la sinergia o contradicción entre marcos normativos y su aplicación mediante las instituciones del Estado en forma de políticas públicas con grados variables de éxito; así como por la escasez física del agua, prevista en un par de décadas, resultado de los impactos del cambio climático²²².

México ha tenido un avance notable para garantizar el **acceso al agua y servicios básicos** (Meta 6.2). En 2015, 94.4% de la población tenía acceso al agua entubada en las inmediaciones de su vivienda y el restante accedió a dicho recurso por otros medios²²³. No obstante, el país afronta todavía numerosos desafíos para garantizar el acceso, disposición y saneamiento del agua de toda su población, en particular en zonas urbanas periféricas (Meta 11.1), en comunidades rurales dispersas que cuentan con bajos niveles de desarrollo y altos índices de pobreza (Meta 1.2) y en hogares de jefatura femenina²²⁴. Lo anterior, tiene un impacto negativo en las mujeres, quienes son responsables y dedican gran parte de su tiempo al acarreo del agua, afectando su capacidad de dedicarse a otras actividades económicas (Meta 5.4), políticas, culturales y recreativas²²⁵. El tiempo que se dedica para la recolección de agua compite con el tiempo que debe ser dedicado por las niñas para asistir a la escuela (Meta 4.1) y realizar otras tareas, siendo una de las causas de

²¹⁷ INEGI, "Cuentas Económicas y Ecológicas", <http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/cn/ee/> (Fecha de consulta: 30 de mayo de 2018).

²¹⁸ PNUMA, *El desarrollo sostenible en la práctica: la aplicación de un enfoque integrado en América Latina y el Caribe* (Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente: 2016).

²¹⁹ Presupuesto de Egresos de la Federación 2008-2018.

²²⁰ Gobierno de la República, *Programa Especial de Cambio Climático 2014-2018*. P.11.

²²¹ Las facultades de los órdenes de gobierno son parte del desafío. La CPEUM establece que el servicio público de agua y el tratamiento de aguas residuales es de los municipios (organismos operadores municipales) y sólo en algunos casos la regulación está a cargo de los gobiernos estatales. En el caso de los Organismos de Cuenca no cuentan con la autonomía necesaria para administrar las aguas nacionales. Las facultades administrativas y las capacidades de coordinación de la CONAGUA son limitadas.

²²² UNEP, *Towards a Green Economy: Pathways to Sustainable Development and Poverty Eradication-A Synthesis for Policy Makers* (United Nations Environment Programme: 2011) P. 126.

²²³ CONAGUA, *Estadísticas del Agua en México. Edición 2017* (México, SEMARNAT/CONAGUA: 2016). P. 122.

²²⁴ En 2017, 24.6% de los hogares con jefatura femenina no disponían de agua dentro de la vivienda.

²²⁵ Naciones Unidas, *Informe del Relator Especial sobre el derecho humano al agua potable y el saneamiento acerca de su misión a México*. (A/HRC/36/45/Add.2, 2 de agosto de 2017). Párr. 4.

deserción escolar²²⁶. Esta situación cobra particular relevancia y exige estrategias específicas para la prestación de servicios básicos ante un panorama demográfico en donde México deberá proveer de agua potable a 17 millones de personas adicionales al 2030.

México está en vías de garantizar el **acceso equitativo a servicios de saneamiento e higiene** (Meta 6.2). Si bien la cobertura de alcantarillado o fosa séptica se incrementó de 58.6% en 1990 a 91.4% en 2015, en comparación con América Latina y el Caribe que fue de 86%²²⁷, la provisión de servicios de saneamiento en zonas urbanas y rurales no conectadas a redes de alcantarillado es un motivo de preocupación que debe ser atendido²²⁸. Un análisis territorial muestra que el acceso al drenaje doméstico y alcantarillado está asociado a las características económicas de los estados y municipios. Aquellos con mayor pobreza tienen mayores carencias de saneamiento en la vivienda. Esto se agrava aún más en el caso de la población indígena, dado que, de acuerdo con la ENIGH 2016, 20.8 % de las viviendas particulares habitadas por población indígena no disponían de drenaje, mientras que el porcentaje de las viviendas habitadas por población no indígena en esta condición era de 5.1%²²⁹.

La **calidad del agua** en el país aún presenta algunos retos (Meta 6.3). Las últimas cifras publicadas en 2016 señalan que de 2,772 sitios monitoreados para el criterio *Demanda Bioquímica de Oxígeno* a los cinco días (DBO)²³⁰, el agua en 57.5% de éstos se encontraba en el criterio excelente, 13.9% en buena calidad, 18.6% en aceptable y solamente 6.4% en contaminada o fuertemente contaminada. Para el indicador *Demanda Química de Oxígeno* (DQO)²³¹, de 2,779 sitios muestreados, 24.2% fue excelente, 19.3% en buena calidad, 24.8% en aceptable, 24.9% contaminada y 6.8% fuertemente contaminada. En cuanto a los 3,810 sitios monitoreados para *Sólidos Suspendidos Total* (SST)²³², 50% se encontró excelente, 33.1% con buena calidad, 11.1% en aceptable, 4.8% en contaminada y 1% fuertemente contaminada²³³. El hecho de que México tenga el nivel más elevado del mundo de consumo *per cápita* de agua embotellada (480 litros al año), es un indicio de la desconfianza de la población hacia los servicios de distribución de agua, que impone una considerable carga financiera adicional a personas que a menudo viven en zonas pobres y tienen los ingresos más bajos²³⁴.

El **tratamiento del agua** en México se mantiene rezagado. En 2016, únicamente se trataba 58.3% de los 212 m³/s de aguas residuales municipales y pluviales recolectadas en el sistema de alcantarillado y la industria trató 75.9 m³/s de aguas residuales industriales. Se estima que se reusaban directamente antes de su descarga 28.5 m³/s y que se reusaban indirectamente 78.9 m³/s, y que el intercambio de aguas residuales tratadas por aguas de primer uso asciende a 8.2 m³/s²³⁵. De acuerdo con la OCDE, México presenta la tasa más baja de conexión con plantas públicas de tratamiento de aguas residuales entre los países miembros²³⁶, lo que evidencia el gran

²²⁶ UNEP, *Global Gender and Environment Outlook 2016* (Nairobi, Kenya; UN Environment: 2016). Recuperado de: <http://web.unep.org/ggeo>

²²⁷ UNEP, *GEO-6 Regional Assessment for Latin American and the Caribbean* (Nairobi, Kenya; UNEP: 2016). P. 13. Recuperado de: <https://www.unenvironment.org/resources/assessment-report/geo-6-regional-assessment-latin-america-and-caribbean>

²²⁸ Naciones Unidas, *Informe del Relator Especial sobre el derecho humano al agua potable...op cit.* Párr. 25.

²²⁹ CONEVAL, *Informe de evaluación de la política de desarrollo social 2018...op cit.* P. 95.

²³⁰ Señala la cantidad proporcional de materia orgánica biodegradable presente.

²³¹ Total de materia orgánica presente e indica presencia de sustancias provenientes de descargas no municipales. El incremento en DBO y DQO incide en la disminución de oxígeno en el agua y por tanto resulta en afectaciones a los ecosistemas acuáticos.

²³² Se trata de sólidos como sedimentos y materia orgánica en suspensión. Tienen su origen en las aguas residuales y la erosión.

²³³ CONAGUA, *Estadísticas del Agua en México. Edición 2017*, (México, SEMARNAT/CONAGUA: 2016). P. 63. Recuperado de: <http://files.conagua.gob.mx/conagua/publicaciones/Publicaciones/EAM2016.pdf>

²³⁴ Naciones Unidas, *Informe del Relator Especial sobre el derecho humano al agua potable...op cit.* Párr. 32.

²³⁵ CONAGUA, *Estadísticas del Agua en México. Edición 2017...op cit.* P. 134.

²³⁶ OCDE, *Getting it right. Prioridades estratégicas para México... op cit.* P. 133.

reto para alcanzar niveles suficientes de tratamiento de aguas residuales y disminuir así el impacto ambiental de las descargas (Meta 6.3, 6.5 y 14.1).

México enfrenta retos importantes para la **gestión eficiente de los recursos hídricos** (Meta 6.4). Del total del agua extraída de fuentes superficiales y subterráneas, el uso agropecuario consumió 76% del agua abastecida en 2016, mientras que el abastecimiento público le correspondió en ese año el 15%, el industrial empleó 4% y la producción de energía eléctrica el 5% restante²³⁷. Además de que el agua se disputa entre sus usos, no se ha alcanzado un nivel de consumo eficiente en los sectores con alta demanda. En este sentido se requieren incentivos normativos y de mercado que aseguren un uso eficiente del agua en los sectores productivos, el hogar y los servicios (Metas 2.4, 2.b, 6.4, 6.5, 7.3, 9.4). Además, se observa la necesidad de reorganizar el manejo de agua lluvia y promover su captación y uso para agricultura (Meta 2.4), consumo humano o filtración a los acuíferos. Actualmente, el agua lluvia se desperdicia, mezclándose con aguas grises y negras. Especialmente en las ciudades y los otros asentamientos humanos puede ser una medida importante de sostenibilidad (Meta 11.b).

4.3.2. Energía asequible y limpia

Ante un entorno energético mundial cambiante, que presenta retos en los precios y las tecnologías de producción de energía, el Gobierno de México, con el objetivo fundamental de otorgar un acceso al servicio de energía eléctrica de calidad, de menor precio y con procesos más sostenibles, inició en 2013 la **Reforma Energética**, terminando con el monopolio del Estado en exploración y explotación de hidrocarburos, así como en la generación y comercialización de electricidad. En este sentido, se aprobó y publicó un paquete legislativo de 21 elementos conocido por “Leyes Secundarias”, entre las que se encuentran la Ley de la Industria Eléctrica y la Ley de Transición Energética, las cuales han definido instrumentos jurídicos eficaces para la “descarbonización” del sector energético de México. Específicamente, la Ley de Transición Energética refuerza el objetivo de generación de electricidad a través de energías renovables del 35% al 2024, establecida en la Ley General de Cambio Climático, y fija objetivos intermedios del 25% al 2018 y 30% al 2021.

El rezago en el **acceso universal a la energía eléctrica** en el país es relativamente bajo (Meta 7.1). De los 32.9 millones de hogares en México, existen todavía alrededor de 170 mil que no disponen de energía eléctrica (0.51%). No obstante, esto solamente considera el rubro de iluminación, pues en cuanto a los combustibles usados para procesar los alimentos, 76.1% de los hogares emplea gas a través de un tanque, 14.7% usa leña o carbón, 7.1% gas natural o de tubería y 2% otros combustibles no especificados²³⁸.

En 2017, en 11.3% de los hogares con jefatura femenina en México se utilizaba leña o carbón para cocinar. En 2014, se estimó que, en las zonas rurales, las mujeres invierten en promedio 11.5 horas semanales para encender el fogón para preparar o calentar alimentos, en contraste con 6 horas semanales que invierten los hombres²³⁹. El uso de leña afecta a las mujeres y niñas por su acarreo que, de la misma manera que el agua, tiene serias consecuencias en el uso del tiempo

²³⁷ CONAGUA, *Estadísticas del Agua en México. Edición 2017...op cit.* P. 77.

²³⁸ INEGI, “Encuesta Nacional de los Hogares (ENIGH) 2016”, <http://www.beta.inegi.org.mx/proyectos/enchogares/regulares/enh/2016/default.html> (Fecha de consulta: 27 de abril de 2018)

²³⁹ ONU Mujeres y El Colegio de México, *Hacer las promesas realidad. La igualdad de género en la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible. Caso México* (Ciudad de México, ONU Mujeres: 2018). Recuperado de: <http://www2.unwomen.org/-/media/field%20office%20mexico/documentos/publicaciones/2018/08/fact%20sheet%20onu-mujeres.pdf?la=es&vs=4124>

(Meta 5.4) y en sus cuerpos. Además, el cocinar con leña, carbón y desperdicios de cosechas produce una alta contaminación del aire en el hogar, lo que repercute en la salud ²⁴⁰ (Meta 3.9).

El reto para el país es alcanzar la cobertura universal del servicio eléctrico (Meta 7.1) establecida en la Ley de la Industria Eléctrica y realizar un rápido desacoplamiento de combustibles, como la leña para el procesamiento de alimentos, lo que redituará en mejoras en la salud, así como promover los mercados masivos de nuevas tecnologías limpias (Meta 7.a), como la solar fotovoltaica en generación distribuida²⁴¹, lo que podría modificar sustancialmente el mercado eléctrico nacional y apoyar la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (Meta 13.2), promoviendo al mismo tiempo la creación de más y mejores empleos (Metas 8.3 y 8.5), así como la transferencia de esta tecnología consolidando la base industrial del país (Meta 9.4). Algunas soluciones concretas son, por ejemplo, los Centros Mexicanos de Innovación en Energía (CEMIE), que tienen el objetivo de desarrollar proyectos sobre tecnología, productos y servicios para aprovechar el potencial energético del país.

México cuenta con un enorme potencial en recursos renovables y gracias a las reformas implementadas en el sector energético se han ido eliminando barreras que impedían el desarrollo de nuevos proyectos y tecnologías, e incorporando incentivos como los Certificados de Energías Limpias. Al cierre del primer semestre del 2017, México generó el 20.82 % de su energía eléctrica con **fuentes limpias** (Meta 7.2),²⁴² con una capacidad instalada de 21,541 MW; de acuerdo con las proyecciones oficiales, en 2031 esa participación será del 45.9% conforme a las prospectivas actuales²⁴³. Derivando de este positivo escenario en 2017, México por primera vez se ubicó en las primeras posiciones globales en términos de inversiones en energías renovables, alcanzando aproximadamente USD 6,000 millones, lo que representó un incremento de 810%²⁴⁴.

Entre 2016 y 2031, México espera incrementar en 25.6 puntos porcentuales la producción de **energía limpia**, además de diversificar las fuentes que la proveen. El actual marco legal y la presencia de entes reguladores previstos por la Reforma Energética puede permitir alcanzar mejores precios y una diversificación más pronunciada de la matriz energética. Conforme a los planteamientos y proyecciones actuales, se espera que en el país se alcance un 50% de producción de energía con fuentes renovables en 2050, lo que sin duda pone a México en la dirección correcta para el cumplimiento de sus compromisos climáticos en el contexto del Acuerdo de París (Meta 13.2) y con los objetivos y metas de la Agenda 2030 (Meta 7.2). En términos de la **eficiencia energética**, México se ha planteado una meta de reducción de la intensidad energética por consumo final para el periodo 2016-2030 del 1.9% y del 3.7% para el periodo 2031-2050, con un promedio de 2.9%²⁴⁵ (Meta 7.3).

²⁴⁰ UNEP, *Global Gender and Environment Outlook 2016...op cit.*

²⁴¹ Jerome S. Engel; Itxaso del-Palacio, "Global networks of clusters of innovation: Accelerating the innovation process", en *Business Horizons* (Elsevier: September–October 2009).

²⁴² SENER, *Reporte de avances de energías limpias primer semestre 2017* (México, Secretaría de Energía: 2017). Recuperado de: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/279723/Informe_Renovables_2017_11122017.pdf

²⁴³ SENER, *Prospectiva del Sector Eléctrico 2017-2031* (México, Secretaría de Energía: 2017). Recuperado de: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/284345/Prospectiva_del_Sector_Elctrico_2017.pdf

²⁴⁴ Frankfurt School-UNEP Centre/BNEF, *Global Trends in Renewable Energy Investment, 2018* (Frankfurt am Main: 2018). Recuperado de: <http://www.fs-unep-centre.org>

²⁴⁵ Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía, "Estrategia de Transición para Promover el Uso de Tecnologías y Combustibles más Limpios 2016", https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/182202/20161110_1300h_Estrategia_CCTE-1.pdf (Fecha de consulta: 5 de julio de 2018).

4.3.3. Producción y consumo sustentable

La economía realiza procesos de aprovechamiento y transformación de insumos, el más básico de ellos son los recursos naturales. Éstos se obtienen o extraen, transforman e intercambian en procesos denominados actividades económicas, en el contexto de los sectores primario, secundario y terciario. El uso de los recursos naturales, sin controles ni atención a sus tasas de recuperación presiona al medio ambiente, causa degradación ambiental y agotamiento de los bienes naturales, con lo cual se pierde su valor económico y natural.

México muestra un avance considerable a nivel de compromiso y de política pública para avanzar el cumplimiento del **Marco Decenal de Consumo y Producción Sostenibles** (Meta 12.1), iniciativa enmarcada en un periodo a 10 años a partir de su adopción en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible (Río+20). En 2012, el Gobierno de México presentó la *Estrategia Nacional de Producción y Consumo Sustentable*. Al año siguiente, México fue asignado en una de las 10 posiciones dentro del Consejo Rector del Marco Decenal y en 2013 se le eligió para la Presidencia del Consejo Rector. En abril de 2014, el gobierno federal presentó el Programa Especial de Producción y Consumo Sustentable (PEPyCS) 2014-2018²⁴⁶. Desde octubre de 2014 hasta el 2016, se realizó la Integración regional para el fortalecimiento de la producción y consumo sustentable (PyCS) en el marco del Fondo Regional para la Cooperación Triangular para América Latina y el Caribe. El proyecto promovió la producción y consumo sustentable al interior de la Alianza del Pacífico, así como en el diseño y la instrumentación de programas. Uno de los resultados del proyecto PyCS fue la creación de la Guía de Etiquetas para un Consumo Sustentable²⁴⁷.

Estas acciones han dado rumbo a la definición de políticas que promueven medidas de consumo y producción sostenible en diversos sectores. De acuerdo con la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), 24% de los 66 millones de hectáreas de bosques y selvas se encuentran bajo manejo forestal sustentable. México ocupa el quinto lugar mundial en aprovechamiento de fibra secundaria de cartón y papel; en el país anualmente se reciclan 9.6% de los 42.9 millones de toneladas de residuos sólidos urbanos y 70% de los residuos sólidos urbanos son dispuestos en rellenos sanitarios²⁴⁸.

No obstante, el Gobierno de México reconoce que los avances para transformar estos sistemas han sido modestos y que los esfuerzos se han realizado, en la mayoría de los casos, sin la vinculación entre los sectores público, privado y social²⁴⁹ (Meta 17.17). México necesita de políticas que implementen la trazabilidad de los productos y servicios a lo largo de su ciclo de vida, lo que daría pauta a programas y proyectos eficaces de reducción y manejo de residuos.

Del análisis comparativo de los sectores económicos estratégicos con los sectores de mayor impacto al ambiente, considerando las emisiones gases de efecto invernadero (GEI), el peso relativo al impacto de los recursos, el consumo energético, así como el consumo de agua, se desprende que los sectores que requieren modificar sus **patrones de producción y consumo** sustentable son, primordialmente, agricultura (Meta 2.4), energía (Meta 7.2), industria (Meta 9.2), construcción (Meta 9.4), transporte (Meta 11.2), turismo (Meta 12.b), así como comercial y

²⁴⁶ SEMARNAT, *Programa Especial de Producción y Consumo Sustentable 2014-2018*, <https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/30928/ProgramaEspecialdeProduccionyConsumoSustentable.pdf> (Fecha de consulta: 3 de julio de 2018).

²⁴⁷ Alianza del Pacífico, Fondo de Cooperación México-Chile, *Guía de etiquetas para consumo sustentable*, http://dsiappsdev.semarnat.gob.mx/datos/portal/publicaciones/Guia_de_Etiquetas_para_un_Consumo_Sustentable%20web.pdf

²⁴⁸ Gobierno de la República, *Segundo Informe Nacional Voluntario...op cit.* P. 55.

²⁴⁹ *Idem.*

servicios. Si bien el aporte de la industria minera como fuente de empleo es indiscutible, preocupa, además de la contaminación del medio ambiente por el uso intensivo de sustancias químicas nocivas (Meta 12.4), la destrucción de los suelos (Meta 15.3) y el exterminio de mantos acuíferos (Meta 6.6), la precariedad laboral de las y los trabajadores que trabajan en este sector (Meta 8.8), quienes generalmente ocupan empleos mal remunerados y con escasa cobertura social (Meta 8.5), poca higiene y seguridad, así como los daños a la salud (Meta 3.9), el debilitamiento de la organización social comunitaria y los conflictos que involucran a pobladores de las zonas donde las empresas mineras, mexicanas y transnacionales, ejercen las concesiones que recibieron de parte del Gobierno²⁵⁰.

La **pérdida y desperdicio de alimentos**, además de contaminar el medio ambiente, es un obstáculo para reducir la pobreza (Meta 1.2). De acuerdo con el Banco Mundial²⁵¹, se estima que anualmente en México se desperdicia 34.5% de la producción total de alimentos (Meta 12.3), lo que en términos absolutos representa más de 20 millones de toneladas. Esta cantidad equivale a alimentos para 7.4 millones de mexicanos, su valor en el mercado se calcula en 491 mdp y se estima que genera unas 36 millones de toneladas de dióxido de carbono, equiparables a las emisiones anuales de 15.7 millones de vehículos.

El problema de la **salud de los suelos** en México es grave²⁵². Los resultados estiman que 42% de la superficie nacional podría resultar afectada por erosión hídrica y que 17 entidades federativas mostrarían daño en más de 50% de su territorio. Con respecto a la erosión eólica potencial, se estimó que 89% del territorio nacional estaría en riesgo de ser afectado. La degradación de suelos afecta a 89 millones de hectáreas. Los procesos de degradación de los suelos dominantes son: la degradación química en 17.8%, la erosión hídrica 9.5%, la erosión eólica 5.7%. En el Atlas Agroalimentario 2017²⁵³, se reporta que del total de hectáreas que tiene el territorio nacional, más de 142 millones se encuentran en procesos de degradación física, química y biológica, lo cual se refleja en el cambio climático (ODS13) y en la severa y creciente escasez de agua (ODS 6) y alimentos (ODS 2). A lo anterior se agrega la pérdida de recursos de manera persistente: entre 150,000 a 190,000 hectáreas de deforestación anual (ODS 15).

México ha avanzado en la consolidación de su marco normativo e institucional para asegurar **compras públicas con criterios de sostenibilidad** (Meta 12.7). Actualmente, se realizan compras sustentables, principalmente papel de oficina y muebles de madera, en distintas dependencias que cumplen con normas oficiales mexicanas y certificaciones, como lo indica el artículo 26 de Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios. No obstante, México requiere orientar y hacer más eficiente el gasto público para fortalecer el mercado interno. En 2017, el 0.77% del presupuesto ejercido por la APF en el concepto de materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales se invirtió en compras públicas sustentables²⁵⁴. Otro desafío es lograr la

²⁵⁰ REMA, *Zacatecas: la riqueza que empobrece* (Comunicado: 13 julio 2018), <http://www.remamx.org/wp-content/uploads/2018/07/Comunicado-sobre-datos-mineros-en-Zacatecas-13-jul.pdf> (Fecha de consulta: 13 de julio de 2018)

²⁵¹ Banco Mundial, *Pérdidas y desperdicios de alimentos en México* (México, Banco Mundial: 2017), citado en Gobierno de la República, *Segundo Informe Nacional Voluntario* (México, Gobierno de la República. Presidencia: 2018). P. 55 y SEMARNAT, "Impulsa SEMARNAT Estrategia Nacional para evitar el desperdicio de alimentos" (Comunicado: 7 de diciembre de 2017), <https://www.gob.mx/semarnat/prensa/impulsa-semarnat-estrategia-nacional-para-evitar-desperdicio-de-alimentos?idiom=es> (Fecha de consulta: 10 de julio de 2018).

²⁵² Héctor Robles y Daniel Mejía, *El campo mexicano en el Siglo XXI...op cit.* P. 22, con datos de SEMARNAT, *Informe de la situación del medio ambiente en México, 2012* (México, SEMARNAT: 2012), SAGARPA/SIAP, *Atlas Agroalimentario 2017. Siembra éxito* (México, Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera: 2017); SEMARNAT, *Inventario Nacional Forestal y de Suelos* (México, SEMARNAT: 2015).

²⁵³ SAGARPA/SIAP, *Atlas agroalimentario 2017...op cit.*

²⁵⁴ Gobierno de la República, *Segundo Informe Nacional Voluntario...op cit.* P. 55.

completa alineación y compatibilidad entre el marco jurídico nacional sobre criterios de sostenibilidad para las compras públicas y los criterios de adquisición, además de ampliar las compras públicas sostenibles hacia otras categorías de servicios como los materiales para construcción y acabados; productos químicos, como aceite y pintura; alimentos; productos de limpieza; productos de informática; eventos; vehículos, textiles (uniformes); turismo y transporte.

El turismo es el sector que más aporta al PIB nacional. En el 2017, según datos del World Travel & Tourism Council (WTTC), el turismo aportó 16% al PIB y está previsto que en 2028 su aporte sea del 17.9%²⁵⁵. México es uno de los países reconocidos por la UNESCO por su diversidad de sitios naturales y culturales que ofrecen una amplia gama de oportunidades para su aprovechamiento turístico. Desde 2011, el gobierno federal ha implementado el Programa **Turismo Sustentable** en México, enmarcado por estrategias que monitorean y evalúan la sustentabilidad turística, y dentro del cual se han elaborado instrumentos normativos para los subsectores de desarrollos inmobiliarios turísticos, hoteles verdes, marinas, ecoturismo y playas. En su versión 2013-2018, el programa impulsó la oferta turística y cultural de los pueblos originarios y se difundió el valor del patrimonio natural, histórico, cultural y gastronómico²⁵⁶. La inversión para impulsar el turismo de naturaleza, ecoturismo y turismo de aventura alcanzó los 146 mil millones de pesos (dato 2016). En 2017, se crearon dos normas mexicanas (NMX-157-AA y NMX 178) para especificar los criterios de desempeño sustentable, construcción y operación de desarrollos en el Golfo de California y Península de Yucatán²⁵⁷. Un reto en este ámbito es ampliar normas para para otros estados del país, como Guerrero, Veracruz, Guanajuato, Michoacán, Oaxaca, Chiapas, Jalisco y Nayarit, además de fomentar la incorporación de certificados de sustentabilidad en los sectores productivos vinculados al turismo.

4.3.4. Acción frente al cambio climático

México es un país cuya población, ecosistemas e infraestructura se encuentran en situación de **vulnerabilidad ante el cambio climático**. Sus condiciones geográficas, ubicación entre dos océanos, latitud y relieve, determinan condiciones particulares de exposición a fenómenos hidrometeorológicos²⁵⁸. De acuerdo con la Quinta Comunicación Nacional sobre Cambio Climático, las sequías tienen serios efectos sociales, económicos y ambientales. Desde el 2010 se ha observado una reducción considerable en las precipitaciones en 19 estados, lo que ha significado pérdidas económicas estimadas en 15 mil mdp. Asimismo, los eventos meteorológicos son factores clave en la acumulación de lluvias en grandes extensiones del país, las cuales han sido impactadas también por un incremento en la intensidad de estos eventos.

La disponibilidad promedio de agua en México al 2010 fue de 4,200 m³/hab/año, y se calcula que hacia el 2030 sea de 3,800 m³/hab/año. El país presenta un desequilibrio entre disponibilidad hídrica y la demanda, pues existen cuencas donde que se utiliza un bajo porcentaje del agua total disponible, y otras en que utiliza más de 100%. Con estas consideraciones, en un par de décadas,

²⁵⁵ World Travel & Tourism Council, *Economic Impact in Mexico*, <https://www.wttc.org/-/media/files/reports/economic-impact-research/countries-2018/mexico2018.pdf>

²⁵⁶ SEMARNAT, *Turismo Sustentable en México. Cuadernos de divulgación ambiental* (México, Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales/Centro de Educación y Capacitación para el Desarrollo Sustentable/ Universidad de Occidente. Unidad Mazatlán: 2017), <http://biblioteca.semarnat.gob.mx/janium/Documentos/Ciga/Libros2013/CD002793.pdf>

²⁵⁷ SEMARNAT, "Turismo Sustentable en México, Normas mexicanas sobre desarrollos turísticos", <https://www.gob.mx/semarnat/acciones-y-programas/nmx-157-y-nmx-178-desarrollos-inmobiliarios>

²⁵⁸ SEMARNAT, *Programa Especial de Cambio Climático 2014-2018*, Recuperado de: http://www.semarnat.gob.mx/sites/default/files/documentos/transparencia/programa_especial_de_cambio_climatico_2014-2018.pdf
Fecha de consulta: 18 de abril de 2018).

un 55% del territorio nacional presentará niveles muy altos de requerimiento, lo que podría resultar en sequías hidrológicas, agrícolas o sociales más frecuentes.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC), 480 municipios de 13 entidades son los más vulnerables al cambio climático, lo que lo que representa el 20% de los municipios a nivel nacional²⁵⁹. Un análisis del Banco Mundial²⁶⁰, sobre el riesgo de desastres naturales a nivel municipal muestra que los municipios de más alto riesgo son, en su mayoría, pobres (ODS 1) y rurales con producción agrícola de subsistencia (ODS 2), con alta concentración de población indígena, con mayor número de viviendas de bajos ingresos (ODS 10), con hogares encabezados por mujeres (ODS 5), con infraestructura pública deficiente o insuficiente (ODS 9), con perfiles socioeconómicos menos privilegiados, con escasos instrumentos de respuesta ante desastres (ODS 13) y en riesgo de deforestación (ODS 14). El estudio del Banco Mundial encontró que el cambio climático en México guarda también una relación con la desnutrición infantil en áreas rurales (Meta 2.2) y su impacto tiende a desacelerar la tasa de reducción de la pobreza (Meta 1.2)²⁶¹. Aun y cuando los impactos del cambio climático se reflejan en las políticas públicas, se requiere de una mayor sistematización y documentación en términos de impactos relacionados al género²⁶².

En la última década, el cambio climático se ha ubicado en el centro de la agenda ambiental de México (Meta 13.2), lo que fue reforzado en la Ley General de Cambio Climático (2012), a partir de la cual el país ha avanzado a nivel federal en la construcción de un marco legal, institucional y de políticas sólido sobre la materia. En 2013, se expidió la segunda *Estrategia Nacional de Cambio Climático*, con una visión de mediano y largo plazo; y se publicó el segundo *Programa Especial de Cambio Climático 2014-2018*, el cual cuenta también con arreglos institucionales a nivel federal para coordinar la acción entre las dependencias. En 2015, se creó el *Sistema Nacional de Cambio Climático*, el cual reúne a los principales actores del país de los tres niveles de gobierno, con el objetivo de coordinar las acciones derivadas de una política nacional coherente y ambiciosa.

De acuerdo con el Inventario Nacional de **Emisiones de Gases y Compuestos de Efecto Invernadero (GEI)** de 2015, México emitió 683 millones de toneladas de bióxido de carbono equivalente (MtCO₂e), lo que lo situó en el lugar 14 mundial, siendo los gases más relevantes el bióxido de carbono, representando el 71%, y el metano, con 21%. Del total de emisiones, 64% correspondieron al consumo de combustibles fósiles, 10% se originaron en sistemas de producción pecuaria, 8% provienen de procesos industriales; 7% de los residuos, 6% de las emisiones fugitivas por la extracción de petróleo, gas y minería, y 6% de la agricultura.

En 2016, México ratificó sus compromisos climáticos en el marco del Acuerdo de París, a través de sus Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC, por sus siglas en inglés) en las que se comprometió a una reducción no condicionada del 22% de sus emisiones de GEI respecto a la línea base en 2030, considerando un escenario tendencial carente de medidas para combatir el cambio

²⁵⁹ Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal, <https://www.gob.mx/inafed/articulos/el-20-de-los-municipios-son-vulnerables-al-cambio-climatico-que-acciones-de-mitigacion-y-adaptacion-implementa-municipio>, 18 de abril de 2017 (Fecha de consulta: 16 de agosto de 2018).

²⁶⁰ Banco Mundial, *Las dimensiones sociales del cambio climático en México* (Washington, Banco Mundial:2013). Recuperado de: <http://www.bancomundial.org/content/dam/Worldbank/document/web%20spa%20mexico.pdf> (Fecha de consulta: 20 de abril de 2018).

²⁶¹ *Idem*. P. 13.

²⁶² UNEP, *Global Gender and Environment Outlook...op cit.* P.169.

climático. Las NDC se integraron con treinta medidas indicativas, distribuidas en ocho sectores de la economía nacional²⁶³.

De acuerdo con el análisis de *Costos de las Contribuciones Nacionalmente Determinadas de México. Medidas Sectoriales No Condicionadas*²⁶⁴, el costo agregado de las treinta medidas sectoriales asciende a poco más de 126 mil millones de dólares de 2017, devengados a lo largo del periodo 2014-2030. De ejecutarse exitosamente esta inversión, el análisis refiere que se lograría una mitigación de 1,520 millones de toneladas de bióxido de carbono equivalente (MtCO₂e), vis-à-vis un escenario de inacción ante el cambio climático durante el mismo periodo. Por el contrario, en un escenario tendencial (no deseable) de inacción, el crecimiento económico, sustentado en los mismos patrones de consumo de energía y degradación del capital natural del país, requeriría aproximadamente 143 mil millones de dólares. En consecuencia, una primera gran conclusión permite afirmar que la ruta de mitigación representaría para México un costo neto o ahorro de más de 17 mil millones de dólares.

De cumplir con las NDC, la economía mexicana se inscribiría en una senda relativamente estable hacia la **descarbonización**, ya que habría reducido en aproximadamente 37% la intensidad carbónica del PIB y en 23% las emisiones de GEI *per cápita* durante el periodo 2014-2030²⁶⁵. Sin embargo, diferentes análisis y considerando las políticas actuales, México no alcanzaría a lograr dichas metas bajo sus NDC²⁶⁶ (Metas 13.1, 13.2, 13.a y 13.b).

4.3.5. Desastres

México está altamente expuesto a una gran variedad de fenómenos geológicos e hidrometeorológicos y está clasificado como uno de los 30 países en el mundo más expuestos a tres o más tipos de peligros naturales (ver capítulo 4.6). Un factor determinante de la vulnerabilidad social en México es la pobreza. Se estima que 68% de la población ha sido alguna vez afectada por desastres, cifra que coincide con los grupos en situación de pobreza y extrema pobreza (Meta 1.5).²⁶⁷

Los efectos de los **desastres naturales** en México reflejan la tendencia mundial de aumento de las pérdidas económicas, menos vidas perdidas y más personas afectadas. De acuerdo con el *Reporte de la Evaluación Global del Riesgo*²⁶⁸, seis tipos de desastres acumulan el 90% de las pérdidas combinadas en México: inundaciones (39.1%), lluvias (23.2%), sequías (18.4%), heladas (3.5%), sismos (2.9%) y tormentas (2.8%). Mientras que la cifra decreciente de muertes es alentadora, el incremento en el número de personas afectadas es motivo de preocupación, especialmente si esto incluye una gran cantidad de hogares pobres, ya sea en zonas rurales o urbanas. Esta tendencia se confirmó de manera muy evidente en los sismos del 7 y 19 de septiembre de 2017, y la réplica del 23 de septiembre, que afectaron a 12 estados²⁶⁹ del centro y sur-sureste del país (400 municipios y

²⁶³ Transporte, Eléctrico, Residencia y Comercial, Petróleo y Gas, Industria, Agricultura y Ganadería, Residuos, así como Uso del Suelo, Cambio en el Uso del Suelo y Silvicultura.

²⁶⁴ INECC, *Costos de las Contribuciones Nacionalmente Determinadas de México. Medidas Sectoriales No Condicionadas. Informe final*. (México, Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático:2018). Recuperado de: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/330857/Costos_de_las_contribuciones_nacionalmente_determinadas_de_Mexico_dobles_p_ginas.pdf (Fecha de consulta: 28 de junio de 2018).

²⁶⁵ *Idem*. P. 146.

²⁶⁶ UNEP, *The Emissions Gap Report 2017* (Nairobi, United Nations Environment Programme: 2017). P. 24.

²⁶⁷ INECC, "Vulnerabilidad actual", <https://www.gob.mx/inecc/acciones-y-programas/vulnerabilidad-al-cambio-climatico-actual> (Fecha de consulta: 17 de julio de 2018).

²⁶⁸ Global Assessment Report on Disaster Risk Reduction 2015, "Mexico, basic country statistics and indicators (2014)", <https://www.preventionweb.net/english/hyogo/gar/2015/en/home/data.php?iso=MEX> (Fecha de consulta: 5 de julio de 2018).

²⁶⁹ En septiembre de 2017, la zona centro y sur del país enfrentaron una contingencia de gran magnitud, producto de dos sismos los días 7 y 19. El primer sismo ocasionó pérdidas humanas de más de 102 personas en los estados de Chiapas, Oaxaca y Tabasco. Por su

delegaciones), y los cuales, en conjunto, ocasionaron cerca de 470 pérdidas humanas y un estimado de 12 millones de personas afectadas²⁷⁰, múltiples daños materiales en infraestructura educativa, de salud y cultural, en edificios públicos y privados, y una afectación a 180 mil 731 viviendas (de las cuales el 28% fue afectación total). Según proyecciones oficiales, la reconstrucción podría alcanzar los 48 mil millones de pesos²⁷¹.

Si bien las capacidades nacionales en materia de **preparación y respuesta en casos de emergencia** están bien desarrolladas y han sido eficaces, la magnitud y las afectaciones de los sismos de septiembre pusieron en evidencia tres desafíos estructurales en este ámbito: la falta de sistemas de información concatenados y georreferenciados que den cuenta de los distintos tipos de afectaciones y daños para cada grupo poblacional (Meta 17.19); el desconocimiento de protocolos de actuación que permitan a la población saber qué hacer antes, durante y después de una amenaza de origen natural o antrópico (Meta 13.1); así como la necesidad de avanzar en la reducción del riesgo de desastres con enfoque de derechos humanos, perspectiva de género, y de ciclo de vida, tal y como lo establece el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030 y la Plataforma Global 2017 para la Reducción del Riesgo de Desastres.

La falta de análisis de la situación con base en datos desagregados por sexo y edad, y otras condicionantes como el ingreso y la pertenencia étnica, fue una limitante para el diseño y la formulación de la respuesta, y redujo el impacto de las acciones implementadas, en particular en los aspectos de protección, recuperación temprana y restitución integral de derechos²⁷². La atención a la salud sexual y reproductiva de las mujeres, adolescentes y niñas debe ser una prioridad en los programas y planes de contingencia y protección civil, debido al alto número de muertes maternas (Meta 3.1), complicaciones en el embarazo y parto, y casos de violencia de género (Meta 5.2) que se registran en contextos de emergencia. Finalmente, el voluntariado tiene una importancia crítica en situaciones de desastre, toda vez que puede complementar los esfuerzos de los gobiernos al aumentar la capacidad de prevención y reducción del riesgo (Meta 13.1), llevar a cabo esfuerzos para reducir las vulnerabilidades de los más pobres frente a los desastres (Meta 1.5) y aumentar la movilización de las comunidades generando así mayor consciencia y capacidades de resiliencia (Meta 13.3).

México también es vulnerable ante los riesgos potenciales de las negligencias y accidentes causados por los humanos, los **desastres antropogénicos**. Los accidentes industriales y fallas en instalaciones de infraestructura pueden ser causados por irresponsabilidad, corrupción (Meta 16.5), falta de mantenimiento, falta de capacitación y factores ambientales extraordinarios. En el sector de los hidrocarburos y minería pueden darse diferentes desastres, como: incendios, explosiones, derrames y fugas. En las actividades agrícolas y pecuarias se manifiestan desastres por la introducción de especies exóticas o invasoras, plagas, incendios derivados de costumbres agrícolas, uso y dispersión de semillas genéticamente modificadas, uso irracional de pesticidas que atentan ante la vida y ciclo de los polinizadores, entre otros. A nivel nacional, el sector de turismo ha provocado pérdida de ecosistemas y biodiversidad, extracción de recursos naturales

parte, el sismo del 19 de septiembre ocasionó 369 decesos en los estados de Ciudad de México, Morelos, Puebla, Estado de México, Guerrero y Oaxaca (particularmente en Juchitán).

²⁷⁰ Nota periodística publicada en el periódico Reforma, "Cifra EPN reconstrucción en 48 mil mdp", Sección Nacional, 17 de octubre de 2017.

²⁷¹ Senado de la República/Instituto Belisario Domínguez, *Recuento de los daños 7S y 19S: a un mes de la tragedia. Nota estratégica* (México, Instituto Belisario Domínguez: 17 de Octubre de 2017.)

²⁷² ONU Mujeres, *Respuesta humanitaria integral y con enfoque de igualdad de género: el liderazgo y la participación de las mujeres es clave en la reconstrucción* (México, ONU Mujeres: 2017). Recuperado de: <http://mexico.unwomen.org/es/digiteca/publicaciones/2018/02/respuesta-humanitaria>

indiscriminada, así como segregación social, económica y espacial de poblaciones vulnerables. El impacto de los desastres antropogénicos pueden derivar en crisis de derechos humanos²⁷³.

4.3.6. Conservación y manejo de la biodiversidad terrestre y marina

La ubicación de México entre dos regiones biogeográficas, en conjunto con una topografía y geología complejas y con litorales en los océanos Atlántico, Pacífico y el Mar Caribe, le permite al territorio gozar de una enorme **diversidad de climas y ecosistemas**. Gracias a esto se cuenta con una gran cantidad de servicios ambientales esenciales para la supervivencia humana, tales como alimentos, materias primas, regulación del ciclo hidrológico, la calidad del aire, entre otros; los que se ven amenazados por las actividades humanas, como el cambio de uso de suelo o su degradación, incluida la contaminación de suelo y agua, la sobreexplotación de los recursos, así como por el cambio climático y otras presiones naturales como la presencia de especies exóticas e invasoras²⁷⁴.

El país es reconocido por ocupar el segundo lugar en diversidad de reptiles y mamíferos, así como el cuarto en plantas vasculares, dentro de los países megadiversos. Asimismo, es centro de origen y domesticación de al menos 100 especies cultivadas de importancia mundial, como el maíz, el aguacate, la vainilla y el cacao²⁷⁵. No obstante, México enfrenta múltiples retos ambientales relacionados con el incremento de la población humana y su demanda de recursos naturales²⁷⁶.

El avance nacional con la actualización de la *Estrategia Nacional sobre Biodiversidad de México (ENBioMex)* y el *Plan de Acción 2016-2030*²⁷⁷ es notable para establecer acciones colectivas y lograr integrar los criterios de **conservación y uso sustentable de la biodiversidad** en las políticas, planes y los programas de todos los sectores (Meta 15.1). Actualmente, ya se están desarrollando *Estrategias de Integración para la Conservación y el Uso Sustentable de la Biodiversidad* para los sectores agrícola, pesquero, turístico y forestal²⁷⁸. El país cuenta, además, con compromisos internacionales relevantes en el tema, como las 20 Metas de Aichi que instrumentan el Convenio de Diversidad Biológica. La interacción e importancia de la biodiversidad en sectores clave de la economía, como el minero, petróleo y gas, construcción, transportación marítima, entre otros, debe ser tomada en cuenta.

Mediante dichos instrumentos, se han estipulado medidas para aumentar la concientización sobre la importancia de la integración de la diversidad biológica por medio del pago de los servicios ambientales, el impulso del valor agregado a los productos, el fomento al consumo responsable y

²⁷³ Uno de los peores desastres antropogénicos en México se refiere al desastre ecológico en los ríos Bocanuchi y Sonora, en 2014, donde 40 mil metros cúbicos de sulfato de cobre, mezclado con ácido sulfúrico y altas concentraciones de metales pesados (plomo, arsénico y cobre) muy dañinos para la salud y los ecosistemas, provenientes de la mina Buenavista del Cobre, en Cananea, llegaron a los afluentes de los ríos, lo que disminuyó la calidad del agua, afectando a cerca de 22 mil personas de 7 municipios. Ver Animal Político, *Alimentos, fauna y agua envenenados, los peligros con los que se vive tras derrame en Río Sonora* (16 de agosto de 2017), <https://www.animalpolitico.com/2017/08/derrame-rio-sonora-estudio/> (Fecha de consulta: 22 de julio de 2018).

²⁷⁴ Gobierno de la República-CONABIO, *Estrategia Nacional sobre Biodiversidad de México y Plan de Acción 2016-2030*, (México, CONABIO: 2016)

²⁷⁵ Sarukhán, J. et. al, *Capital Natural de México. Síntesis: evaluación del conocimiento actual y tendencias de cambio, perspectivas de sustentabilidad, capacidades humanas e institucionales* (México, CONABIO: 2017).

²⁷⁶ SEMARNAT, *Informe de la situación del Medio Ambiente en México 2015*, (México, SEMARNAT: 2015). Recuperado de: <http://apps1.semarnat.gob.mx/dgeia/informe15/index.html> (Fecha de acceso: 31 de mayo de 2018).

²⁷⁷ La primera Estrategia Nacional sobre Biodiversidad de México se publicó en el año 2000. La ENBioMex y el Plan de Acción 2016-2030 es el segundo ejercicio que se realiza en este ámbito. El documento está alineado al Plan Estratégico 2011-2020 del Convenio sobre la Biodiversidad Biológica y las Metas de Aichi, así como a la Agenda 2030 y los ODS; de tal suerte que ambos instrumentos contribuyen explícitamente al cumplimiento de los compromisos de México sobre la materia.

²⁷⁸ Las cuatro estrategias estarán a cargo de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), Secretaría de Turismo (SECTUR) y Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) en conjunto con la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR).

la adopción de las mejores prácticas para erradicar la falta de conocimiento de los impactos ambientales, la escasa comprensión de las alternativas sostenibles para la utilización de los recursos y la falta de experiencia en la planificación participativa, la gobernanza para el crecimiento verde local, así como herramientas y opciones de monitoreo²⁷⁹.

En 2014, dentro de los **ecosistemas terrestres** mexicanos aún persistían el 49.5% de sus grupos vegetales en estado original, entre los que se encontraban como más representativos el matorral, el bosque de coníferas y encinos, y la selva seca²⁸⁰, y se logró reforestar una superficie de 173,563 hectáreas (Meta 15.2)²⁸¹. La producción forestal maderable en 2014 fue de 158,248 toneladas de no maderables y de 5.6 millones de metros cúbicos de maderables, cuyas principales especies son el pino, oyamel, encino y maderas preciosas²⁸². La importancia de estos ecosistemas también radica en su participación fundamental en los procesos de control de temperaturas, captura de emisiones de GEI (Meta 13.1), así como captación y filtración de agua (Meta 6.4, 6.6). El conocimiento tradicional para el aprovechamiento de los bosques vincula a las mujeres con roles de protección, preservación de semillas y plantas medicinales²⁸³.

No obstante, las últimas estimaciones señalan que en México se ha perdido alrededor del 50% de los ecosistemas naturales²⁸⁴. La degradación del suelo (ver capítulo 4.3.3) tiene impactos no solo de forma directa en los ecosistemas, sino también en los medios de vida de las familias que lo habitan. Un ejemplo son los recursos de bosque que dan sustento a millones de habitantes en el país. Presiones como el desplazamiento de la frontera agrícola forestal (ODS 2), la contaminación de los recursos hídricos (ODS 6), del propio suelo (ODS 15) y del aire (ODS 11), restringen y vuelven escasos los recursos a los que las personas tienen acceso y por ende afectan directamente el desarrollo social de una parte importante de la población, con repercusiones en los niveles de pobreza (ODS 1).

Los **ecosistemas marinos y humedales** enfrentan las consecuencias de la sobrepesca y la contaminación (Meta 14.1) por la explotación de hidrocarburos²⁸⁵, la minería, la agricultura, la forestería, el turismo y el transporte que, junto con el aumento de las temperaturas y la acidificación de los océanos (Meta 14.2), están deteriorando hábitats naturales esenciales²⁸⁶. La Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca reportó que en el periodo 1990-2014, la producción pesquera en México registro un promedio anual cercano a 1.5 millones de toneladas, posicionándolo en el lugar 16 de los mayores productores a nivel mundial, siendo los estados del litoral Pacífico los que aportaron 77% de la producción, y los del Golfo de México y Mar Caribe el 20.4%²⁸⁷. El INEGI reportó que, en 2013, se consumieron en México poco más de 11.8 miles de toneladas de productos de la pesca, siendo los principales productos el atún, camarón, carpa, cazón, tiburón, mero, ostión, sardina y sierra; algunas de estas especies llegan a tener altas concentraciones de metilmercurio, por lo que muchos gobiernos empezaron a advertir de sus

²⁷⁹ Gobierno de la República-CONABIO, *Estrategia Nacional sobre Biodiversidad de México y Plan de Acción 2016-2030...op cit*

²⁸⁰ INEGI, "Conjunto de Datos Vectoriales de Uso del Suelo y Vegetación escala 1:250 000. Serie V", <http://www.inegi.org.mx/geo/contenidos/reclat/usuarios/>

²⁸¹ INEGI, *Anuario estadístico y geográfico* (para cada entidad federativa), varios años, <http://www3.inegi.org.mx/sistemas/biblioteca/ficha.aspx?upc=702825076115>

²⁸² INEGI, *Anuario estadístico y geográfico de los Estados Unidos Mexicanos 2015* (México, INEGI: 2015). Recuperado de: <http://internet.contenidos.inegi.org.mx/>

²⁸³ UNEP, *Global Gender and Environment Outlook 2016...op. cit* P.157

²⁸⁴ CoNaBio, "¿Por qué se pierde la biodiversidad?", <https://www.biodiversidad.gob.mx/biodiversidad/porque.html#perdida> (Fecha de consulta: 19 de julio de 2018).

²⁸⁵ Entre 2010 y 2016, Petróleos Mexicanos (PEMEX) reportó 1,262 derrames, equivalente a más de 1.5 millones de litros.

²⁸⁶ PNUMA, *Fronteras 2017. Nuevos temas de interés ambiental* (Nairobi, Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente: 2017).

²⁸⁷ CONAPESCA, *Anuario estadístico de acuacultura y pesca* (México, Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (CONAPESCA): 2014).

consecuencias en la salud, especialmente en mujeres embarazadas y niños (Metas 3.9 y 14.2). En otro contexto, el país posee 6,331 humedales²⁸⁸, de los cuales 142 están sujetos al esquema Ramsar²⁸⁹ (Meta 14.5). En el país existe una superficie de 775,555 hectáreas de manglares en el territorio nacional, la cual ha disminuido 10% desde 1981²⁹⁰.

La normatividad que regula la **pérdida de biodiversidad y especies amenazadas** nacional²⁹¹ enlista 2,606 especies en riesgo, de las cuales 987 eran plantas, 443 reptiles, 392 aves, 291 mamíferos, y 204 peces. La pérdida de biodiversidad (Meta 15.5), ya sea por su aprovechamiento ineficiente o ilegal, incluido el tráfico ilícito de flora y fauna (Meta 15.7), o por las presiones humanas en los ecosistemas e, incluso, por fenómenos naturales (Meta 13.1), altera el equilibrio del medio ambiente y genera impactos incluso imperceptibles pero duraderos (Meta 15.9). Adicionalmente, el manejo ineficiente de los ecosistemas y su restauración es más costoso que su cuidado²⁹². Los esquemas para su protección tienen diversas modalidades, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas administra actualmente 182 áreas naturales de carácter federal que representan 90,839,521.55 hectáreas²⁹³, y apoya 403 Áreas Destinadas Voluntariamente a la Conservación, con una superficie de 503,379.17 hectáreas.

4.3.7. Manejo de sustancias químicas

Por décadas, la contaminación y sus efectos adversos en la salud humana, el ambiente y el planeta han sido poco considerados por los gobiernos y la comunidad internacional. Actualmente, la contaminación es la mayor causa de enfermedades y muertes en el mundo (Meta 3.9), y es responsable de un estimado de 9 millones de muertes prematuras en 2015 (Meta 3.4)²⁹⁴. El 92% de la mortalidad relacionada con contaminación ocurre en países de bajo y mediano ingreso. La salud y costos económicos de la contaminación global no puede ser ignorada por más tiempo²⁹⁵.

Las acciones nacionales para el fortalecimiento de las capacidades para promover una **gestión integral de las sustancias químicas** para proteger a la población y a los ecosistemas de los posibles efectos adversos han sido aisladas y con recursos limitados (Meta 12.4)²⁹⁶. Uno de los principales huecos de información en el país está relacionado con las sustancias químicas y la carencia de un sistema de gestión que permita la integración de un catálogo de sustancias químicas, lo que hace infructuosa su regulación²⁹⁷ y dificulta su estudio. Es complejo evaluar el estado de cada sustancia en el contexto nacional, apenas existen algunos datos relevantes, como la prohibición de la importación, producción, comercialización y uso de los plaguicidas Contaminantes Orgánicos

²⁸⁸ CONAGUA, "Inventario Nacional de Humedales", <https://www.gob.mx/conagua/acciones-y-programas/inventario-nacional-de-humedales-inh>

²⁸⁹ Ramsar/COP13, "Los sitios Ramsar en el mundo. México", <https://www.ramsar.org/es/humedal/mexico> (Fecha de consulta: 11 de julio de 2018).

²⁹⁰ CONABIO, "Manglares de México, " <http://www.biodiversidad.gob.mx/ecosistemas/manglares2013/manglares.html> (Fecha de consulta: 11 de julio de 2018).

²⁹¹ Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010, Protección ambiental-Especies nativas de México de flora y fauna silvestres-Categorías de riesgo y especificaciones para su inclusión, exclusión o cambio-Lista de especies en riesgo. Recuperado de: <https://www.gob.mx/profepa/documentos/norma-oficial-mexicana-nom-059-semarnat-2010>

²⁹² UNEP, *Taking Steps toward Marine and Coastal Ecosystem-Based Management* (Nairobi, UNEP: 2011).

²⁹³ México supera por más del doble (22.3%) la superficie marina protegida, comprometida en la Meta 11 de Aichi ante el Convenio de Diversidad Biológica.

²⁹⁴ Landrigan, PJ, Fuller R, Acosta NJR, et. al. *The Lancet Commission on pollution and health*, (October, 2017). Recuperado de: <https://www.thelancet.com/commissions/pollution-and-health> (Fecha de acceso: 19 de junio de 2018).

²⁹⁵ Das, P Horton, R, Pollution, health, and the planet (October, 2017). Recuperado de: [https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736\(17\)32588-6/fulltext](https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(17)32588-6/fulltext) (Fecha de acceso: 19 de junio de 2018)

²⁹⁶ SEMANAT-INECC, *Perfil Nacional de Sustancias Químicas Base 2014* (México, INECC: 2016). P. 18

²⁹⁷ SEMARNAT-INECC, *Actualización del Inventario Nacional de Sustancias Químicas 2010-2013* (México, INECC: 2014). P.104.

Persistentes (COP), y que los Bifenilos Policlorados (BPC) sean considerados como un residuo peligroso y que estén sujetos a la norma ambiental²⁹⁸.

En 2017, entró en vigor el Convenio de Minamata en México (ver capítulo 4.3.2), el cual busca reducir gradualmente el uso de mercurio para proteger tanto la salud humana como el medio ambiente de las emisiones y liberaciones antropogénicas de mercurio, así como de compuestos de mercurio. Asimismo, establece la reducción del uso de mercurio en diversos procesos, plantea medidas de control de la liberación de este elemento al suelo, agua y atmósfera, prohíbe el establecimiento de nuevas minas de mercurio además de la eliminación gradual de las ya existentes y plantea la regulación de la minería de pequeña escala y oro artesanal. Además, el tratado regula la exportación e importación de mercurio; así como el almacenamiento bajo condiciones de seguridad de los desechos de este metal. A través de la *Evaluación Inicial en México para el Desarrollo de la Convención de Minamata*, México pretende cuantificar la concentración de mercurio dentro de su territorio con el objetivo de procurar la obtención de información de calidad necesaria para el desarrollo de una estrategia de control y reducción del mercurio.

Dentro del país, los principales yacimientos de mercurio se encuentran localizados en los estados de Guerrero, Guanajuato, Querétaro, San Luis Potosí y Zacatecas; sin embargo, el mercurio se encuentra actualmente presente también en los estados de Chihuahua, Durango y Estado de México, además de los anteriormente mencionados. Se han detectado vacíos normativos y áreas de oportunidad para fortalecer las capacidades para verificar el cumplimiento de las normas en la materia en adición con la desarticulación de las múltiples autoridades involucradas en la emisión de permisos o licencias y sus limitaciones para verificar el cumplimiento de las normativas²⁹⁹.

4.4. Una democracia en consolidación, pero un Estado de Derecho con desafíos estructurales

México ha presentado un desempeño desfavorable en diversos índices globales y regionales que miden la calidad de la democracia, situándose dentro del conjunto de países con bajo desarrollo democrático (IDD-LAT 2016³⁰⁰) o bien dentro de las democracias imperfectas o con fallas (*Democracy Index 2016*³⁰¹). En 2017, México cayó cuatro posiciones con respecto a 2016 en el *Índice de Estado de Derecho 2017-2018*³⁰², ubicándose en el lugar 92 de 113 países a nivel global, en el 25 de 30 a nivel regional y en el 34 de 36 países de ingreso medio alto³⁰³. Sobre otras razones críticas que pueden exponerse, el retroceso del país está relacionado con la aplicación deficiente del Estado de Derecho, principalmente en los indicadores relacionados con la violencia e inseguridad, el sistema de justicia y los límites del poder gubernamental.

²⁹⁸ SEMARNAT, *Plan Nacional de Implementación del Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes en México* (México, SEMARNAT: 2016).

²⁹⁹ *Idem*. P. 16.

³⁰⁰ Fundación Konrad Adenauer & Polilat.com, *Índice de desarrollo democrático de América Latina 2016* (Fundación Konrad Adenauer & Polilat.com: 2016). Recuperado de: http://www.idd-lat.org/2016/informes_x_pais/297/2016-mxico.html (Fecha de consulta: 20 de mayo de 2018).

³⁰¹ The Economist, "Democracy Index 2016, Country profile" https://www.eiu.com/public/topical_report.aspx?campaignid=DemocracyIndex2016 (Fecha de consulta: 20 de mayo de 2018)

³⁰² The World Justice Project, *Rule of Law Index 2017-2018*, (Washington, D.C., The World Justice Project: 2018) <https://worldjusticeproject.org/our-work/wjp-rule-law-index/wjp-rule-law-index-2017%E2%80%932018> (Fecha de consulta: 20 de mayo de 2018)

³⁰³ El desempeño de los países es evaluado a través de ocho factores: Limitaciones a los poderes del gobierno, Ausencia de corrupción, Gobierno abierto, Derechos fundamentales, Orden y seguridad, Ejecución regulatoria, Justicia civil Justicia criminal. Estos factores pretenden reflejar cómo las personas experimentan el Estado de derecho en sus vidas cotidianas.

Para los mecanismos internacionales de derechos humanos, la violencia que afecta particularmente a diversos grupos de población, entre ellos las niñas, niños y adolescentes, las mujeres, migrantes en tránsito, población LGTBI y las personas defensoras de derechos humanos y periodistas, en conjunto con las barreras en el acceso a la justicia, los altos niveles de impunidad, la corrupción y la falta de transparencia y rendición de cuentas de las instituciones, han debilitado al Estado de Derecho y constituyen desafíos urgentes para el país. Los siguientes indicadores y cifras muestran un panorama adverso de México para cumplir con diversas metas del ODS 16 de aquí al 2030.

4.4.1. Violencia e inseguridad

México enfrenta desde hace 12 años una crisis de violencia e inseguridad vinculada a la lucha contra la delincuencia organizada. Las dos últimas administraciones han optado por incrementar el papel y la participación de las Fuerzas Armadas en las tareas de seguridad pública, incluyendo una política de confrontación y el despliegue de operativos conjuntos entre las fuerzas armadas y las instituciones de seguridad pública de los tres niveles de gobierno.

De acuerdo con la CIDH, la confrontación y consecuente militarización en diversas partes del país ha dado lugar a un incremento en el uso excesivo de la fuerza, generando aún mayor violencia, así como violaciones graves a los derechos humanos³⁰⁴, en las que se observan altos índices de impunidad y una falta de rendición de cuentas conforme a los estándares internacionales³⁰⁵. Otra causa subyacente a la escalada de violencia y los altos niveles de inseguridad en México es el tráfico ilícito de armas de fuego (Meta 16.4).

El *Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia 2014-2018* es el primer intento por desarrollar una política nacional de prevención de la violencia y el delito en México. Si bien en 2013 se le asignaron 2 mil 456 mdp, en 2017 no se le asignaron recursos y en 2018 tan solo contó con un presupuesto de 300 mdp. Esta reducción presupuestal no se explica propiamente por un descenso de la violencia en el país³⁰⁶. En medio de un debate nacional y la preocupación expresa de la sociedad civil, la academia y de los mecanismos internacionales de derechos humanos³⁰⁷, se adoptó en diciembre de 2017 la Ley de Seguridad Interior, la cual prevé la participación de las fuerzas armadas en tareas de cumplimiento de la ley en materia de seguridad. La constitucionalidad de esta ley está siendo objeto de análisis actualmente en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

³⁰⁴ CIDH, *Informe sobre la situación de los derechos humanos en México 2015*. (Washington, OAS-Documentos oficiales OEA/Ser.L/V/II.Doc. 44/15: 2016), P. 61.

³⁰⁵ Jan Jarab, "Seguridad y justicia en democracia: hacia una política de Estado centrada en los derechos humanos", Palabras del Representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en la Segunda Conferencia Internacional en Seguridad y Justicia en Democracia. Recuperado de <http://www.hchr.org.mx/> (Fecha de consulta: 10 de abril de 2018).

³⁰⁶ Organizaciones de la sociedad civil y la academia mostraron su escepticismo ante la implementación y resultados del Pronapred, quienes visibilizaron las limitaciones de diseño de dicho programa. Entre las principales críticas se encuentra que las acciones implementadas con los fondos destinados al programa no tenían una teoría del cambio sólida; la temporalidad en la transferencia y ejecución de los recursos limitaba la implementación efectiva y adecuada de las acciones; los gobiernos locales adaptaban el programa a sus necesidades o agendas e implementaban acciones que poco o nada tenían que ver con la violencia y la delincuencia, lo que se prestaba para actos de corrupción. Ver José Andrés Sumano Rodríguez, "Pronapred: mismos problemas, menos recursos", en *Nexos. Blog sobre la política de seguridad* (19 de febrero de 2018), <https://seguridad.nexos.com.mx/?p=370> (Fecha de consulta: 11 de julio de 2018).

³⁰⁷ "México: Proyecto de Ley de Seguridad Interior supone riesgo para los derechos humanos y debe ser rechazado, advierten expertos y expertas de la ONU", (Ginebra, Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH). Comunicado de prensa: 14 de diciembre de 2017). Recuperado de: <http://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=22535&LangID=S>

La violencia en México tiene su mayor expresión en las altas tasas de **homicidio intencional** y la comisión de delitos de alto impacto que afectan a la ciudadanía, como el secuestro, la extorsión, las amenazas y el robo con violencia³⁰⁸. De acuerdo con las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública³⁰⁹, entre 2012-2017, 117,881 personas han sido asesinadas, principalmente hombres (90%), en su mayoría adolescentes y jóvenes en edad productiva³¹⁰. El año 2017 ha sido el más violento desde 1997, con 25,340 homicidios y una tasa a nivel nacional de 20.52 homicidios por cada 100 mil habitantes. Trece entidades superan la tasa nacional, en algunos casos hasta por cuatro o tres veces su valor³¹¹, lo que refleja no solamente la intensidad de la violencia, sino también su expansión territorial.

La escalada de violencia ha tenido un impacto en la violencia contra las mujeres, siendo el **feminicidio** su expresión más extrema³¹². En los últimos 32 años (1985-2016) se han registrado en el país 52,210 muertes de mujeres con presunción de homicidio, de las cuales 15,535 (29.8%) ocurrieron en los últimos seis (2011-2016)³¹³. En 2016, un promedio de 7.5 mujeres fueron asesinadas cada día³¹⁴, un incremento en comparación con el promedio registrado en 2014 (6.3)³¹⁵.

La violencia tiene un alto costo para México y el bienestar de su población. Su **impacto económico** alcanzó 4.72 billones de pesos (249 mil millones de dólares) en 2017, lo que equivale a 21% del PIB nacional, ocho veces mayor que la inversión pública en salud y siete veces el presupuesto de educación³¹⁶. Varios indicadores sobre la calidad de vida, entre ellos los relacionados con la seguridad, sitúan a México en el último lugar del *Índice para una Vida Mejor* de la OCDE³¹⁷. Para el 61.1% de la población, la **inseguridad** y delincuencia es el principal problema que aqueja a su entidad³¹⁸.

La **confianza de la ciudadanía** en las instituciones de seguridad pública ha disminuido considerablemente, resultado, entre otros factores, del involucramiento de agentes policiacos en la comisión de delitos. En 2017, la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre la Seguridad (ENVIPE), midió que 66.5% de la población de 18 años y más tenía mucha o algo de confianza en la Policía Federal, porcentaje que se redujo a 56.4 con respecto a la Policía Estatal, disminuyó a 51.2 en cuanto a la Policía Preventiva Municipal y cayó a 43.1 en relación con la

³⁰⁸ De acuerdo con la ENVIPE 2017, a nivel nacional se estiman 69,107 secuestros a algún integrante del hogar sufridos por 66,842 víctimas en 2016. La incidencia delictiva por tipo de delito se distribuye de la siguiente manera: robo o asalto en la calle o en el transporte público (25.9%); extorsión (24.2%); fraude (12.6%); robo total o parcial de vehículo (11.3%); amenazas verbales (7.8%); robo en casa habitación (6.6%); robo en forma distinta a las anteriores (5.1%); otros delitos (3.4%); lesiones (3.1%).

³⁰⁹ Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, "Tasas por cada 100 mil habitantes. 1999-2017. Corte informativo: 31/12/2017. Fecha de publicación: 20/02/18", <http://secretariadosejecutivo.gob.mx/docs/pdfs/tasas%20por%20cada%20100%20mil%20habitantes/Tasas012018.pdf> (Fecha de consulta: 11 de abril de 2018).

³¹⁰ La concentración de las defunciones de hombres con presunción de homicidio de acuerdo a los grupos de edad mencionados es la siguiente: 15-19 (26.51); 20-24 (56.69); 25-29 (67.02); 30-34 (66.33); 35-39 (63.65) y 40-44 (57.42).

³¹¹ Colima (93.61), Baja California Sur (69.15), Guerrero (64.26), Baja California (58.36), Sinaloa (43.89), Chihuahua (41.72), Zacatecas (35.12), Morelos (30.63), Michoacán (27.41), Sonora (23.01), Oaxaca (22.63), Tamaulipas (22.22), Quintana Roo (21.57).

³¹² ONU Mujeres, INMUJERES y SEGOB, *Violencia feminicida en México. Aproximaciones y tendencias. 1985-2016* (México, ONU Mujeres/INMUJERES/SEGOB: 2018). P. 21.

³¹³ *idem*. P. 19.

³¹⁴ *idem*.

³¹⁵ ONU Mujeres, INMUJERES y SEGOB, *La violencia feminicida en México, aproximaciones y tendencias 1985-2014* (México, ONU Mujeres/INMUJERES/SEGOB: 2016). P. 10.

³¹⁶ Institute for Economics and Peace (IEP), *Índice de Paz. México 2018*, (México, IEP: 2018). Recuperado de: <http://indicedepazmexico.org/wp-content/uploads/2018/04/Indice-de-Paz-Mexico-2018.pdf> (Fecha de consulta: 12 de abril de 2018).

³¹⁷ OECD, "Better life Index. Countries", <http://www.oecdbetterlifeindex.org/es/countries/mexico-es/> (Fecha de consulta: 13 de abril de 2018).

³¹⁸ INEGI, "Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre la Seguridad (ENVIPE) 2017. Resultados generales", <http://www.inegi.org.mx/> (Fecha de consulta: 30 de marzo de 2018).

Policía de Tránsito. Además de la falta de confianza, se percibe fuertemente altos niveles de corrupción dentro de las instituciones de seguridad pública: más de la mitad de la población consideró que en la Policía Federal (57%), en la Policía Estatal (65%), en la Policía Preventiva Municipal (68.1%) y en la Policía de Tránsito (77.7%) prevalece la corrupción³¹⁹.

Para reducir todos los niveles de violencia (Meta 16.1), México requiere transitar hacia una política de seguridad pública con enfoque de derechos humanos y de seguridad ciudadana, la cual ponga mayor énfasis y focalice más y mejor los recursos en la dimensión de la prevención (Meta 16.a); garantice la protección de todos los grupos de población ante la violencia e inseguridad; mejore la capacidad de la policía para llevar a cabo sus funciones de seguridad pública de manera más eficiente, transparente y con rendición de cuentas (Meta 16.6); y fortalezca el Estado de Derecho a través del combate a los actos de corrupción (Meta 16.5) e impunidad (Meta 16.3) que prevalecen en los distintos niveles y ámbitos de las instituciones de seguridad pública.

4.4.2. Protección de niñas, niños y adolescentes

En sus observaciones finales a México, el Comité de los Derechos del Niño³²⁰ mostró preocupación por las amenazas al derecho a la vida, integridad, supervivencia y el desarrollo de NNA en el contexto de la violencia e inseguridad que permea en el país.

Entre 2012-2016 ocurrieron 11,223 defunciones de niñas, niños y adolescentes entre 0-19 años con presunción de **homicidio**. El 80.1% de los casos correspondieron a niños y adolescentes hombres, mientras que el 19.9% a niñas y adolescentes mujeres. Las tasas más altas de defunciones con presunción de homicidio se presentaron en el grupo de edad 15-19 años para ambos sexos³²¹. La falta de información y análisis sobre las causas y los contextos situacionales en donde se presentan los fenómenos que desencadenan muertes violentas de NNA ha limitado la implementación de políticas públicas basadas en evidencia en este ámbito.

La **desaparición** de niñas y adolescentes puede ser el preámbulo de un feminicidio o del delito de trata. Del análisis del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas en México (RNPED³²²), es posible afirmar que 2 de cada 10 personas desaparecidas son NNA menores de 18 años. El grupo más violentado son adolescentes mujeres de 12 a 17 años, que representan 4 de cada 10 desapariciones de 0 a 17 años³²³. México debe asegurar un enfoque de búsqueda, localización e investigación de NNA desaparecidos, así como la implementación de medidas específicas para garantizar sus derechos cuando sus padres o cuidadores están desaparecidos.

La ECOPRED 2014³²⁴ captó información de más de 4.0 millones de NNA de 12 a 17 años e identificó que 47.8% de ellos fueron **víctimas de delito**. En 49.9% de los casos se trató de un niño y en 50.1% de una niña. El total de delitos o actos de maltrato contra NNA de 12 a 17 años estimados por la encuesta supera los 10 millones. La tasa de prevalencia delictiva para este grupo

³¹⁹ INEGI, "Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre la Seguridad 2017... op cit"

³²⁰ Comité de los Derechos del Niño, *Observaciones finales sobre los informes periódicos cuarto y quinto combinados de México*, (CRC/C/MEX/CO/4-5, 3 de julio de 2015)

³²¹ ONU Mujeres, INMUJERES y SEGOB, *Violencia feminizada en México. Aproximaciones y tendencias. 1985-2016...op cit*. (Anexo estadístico)

³²² Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, "Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas en México", <https://www.gob.mx/sesnsp/acciones-y-programas/registro-nacional-de-datos-de-personas-extraviadas-o-desaparecidas-rnped> (Fecha de consulta: 11 de abril de 2018).

³²³ Save the children, *Las niñas y adolescentes frente a la violencia* (México, Save the Children: s/f). Recuperado de: <https://www.savethechildren.mx/sci-mx/files/76/76f9829b-4ba5-47b6-bf24-b508abcbfeda.pdf> (Fecha de consulta: 11 de abril de 2018).

³²⁴ INEGI, "Encuesta de Cohesión Social para la Prevención de la Violencia y la Delincuencia (ECOPRED) 2014", <http://www.beta.inegi.org.mx/proyectos/enchogares/especiales/ecopred/2014/> (Fecha de consulta: 11 de abril de 2018).

de edad es de 47,759 víctimas por cada 100 mil. Entre los principales delitos se encuentran el maltrato físico, las amenazas, el robo con violencia, los tocamientos ofensivos y la violación ³²⁵.

Los datos disponibles que se relacionan con el delito de **trata** de personas en México revelan que, entre 2010 y 2013, 60% de las víctimas de trata fueron explotadas sexualmente y, de estas, más de la mitad eran NNA. Los desarrollos turísticos, donde confluyen altas tasas de migración, pueden hacer más vulnerables a las niñas, niños y adolescentes ante la **explotación sexual comercial**. De acuerdo con la Secretaría de Turismo, alrededor de 21 mil niñas y niños son víctimas de trata con fines de explotación sexual comercial cada año ³²⁶.

En México, se denuncian, al menos, 600 mil delitos sexuales cada año, de los cuales 4 de cada 10 son en contra de NNA menores de 18 años ³²⁷. La **violencia sexual** mantiene una alta prevalencia en las niñas y mujeres adolescentes, ya que mientras el 34% de las mujeres ha sufrido alguna forma de violencia sexual en el último año, entre las adolescentes de 15 a 17 años esta prevalencia llega hasta el 43.3%. De acuerdo con la ENDIREH 2016, 9.4% de las mujeres de 15 años y más (4.4 millones) sufrieron **abuso sexual** durante su infancia. En la mayoría de los casos, los agresores fueron miembros de la familia.

La situación de **NNA acompañados y no acompañados que son detenidos en estaciones migratorias** es motivo de alta preocupación. En 2017, el número de detenciones por parte de las autoridades migratorias ascendió a 95,497, incluyendo 18,300 de NNA (7,430 estaban no acompañados). A pesar del número tan alto de NNA no acompañados, son muy pocos los que solicitan la condición de refugiado y mucho menos los que reciben la protección internacional como tal (ver también apartado 4.5.2).

La **disciplina violenta** contra NNA sigue siendo ampliamente aceptada; particularmente el castigo físico u otras formas humillantes de castigo que todavía son usados como métodos de disciplina. Con datos de la ENIM 2015, 63% de NNA entre 1-14 años de edad fueron sometidos al menos a una forma de castigo psicológico (53%) o físico (44%) por miembros del hogar. Este tipo de violencia y maltrato ocurre también en otros espacios, como el ámbito escolar, en donde el 90% de la población escolar de sexto de primaria y secundaria ha manifestado haber sufrido alguna vez humillaciones o insultos y cerca de la mitad del personal docente en las escuelas (43.2%) dijo que se han detectado casos de *bullying* en su escuela ³²⁸. La negligencia ³²⁹ es la peor forma de violencia contra niñas y niños menores de 5 años, con daños físicos y emocionales severos, crónicos e irreversible.

México enfrenta grandes desafíos para poner fin a todas las formas de violencia en contra de niñas, niños y adolescentes (Meta 16.2). En términos normativos, si bien la LGDNNA establece el derecho de NNA a una vida libre de todas formas de violencia, el establecimiento en las leyes

³²⁵ De acuerdo con la ECOPRED, la prevalencia para el delito de violación fue de mil 764 NNA victimizados por cada 100 mil NNA de 12 a 17 años. En el caso de tocamientos ofensivos y manoseos, la prevalencia es de cinco mil 89 casos por cada 100 mil NNA

³²⁶ Secretaría de Turismo, “La trata de personas en el sector turístico. Factores que permiten la trata de personas en el sector turístico e instrumentación de mecanismos de acción para el combate a la problemática desde la óptica de la prevención”, citado en UNODC, *Diagnóstico sobre la trata de personas en México* (México, Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC):2014). P. 53.

³²⁷ CEAV, *Cartilla de Derechos de las Víctimas de Violencia Sexual Infantil* (México, Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas: 2016)., <https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/127012/cartilla-derechos-victimas-violencia-sexual-infantil.pdf>

³²⁸ Datos de 2008 y 2009. UNICEF y SEP, *Informe Nacional sobre Violencia de Género en la Educación Básica en México*, (México, UNICEF-SEP-CIESAS: 2009).

³²⁹ “La negligencia es la forma de maltrato que consiste en el fracaso repetido por parte de los padres, cuidadores o de las personas responsables del cuidado de un niño o una niña, para proporcionarle los estándares mínimos de alimentación, vestido, atención médica, educación, seguridad y afecto, es decir, la satisfacción de sus necesidades básicas, tanto físicas como emocionales”. Citado en Secretaría de Salud, *Informe Nacional sobre Violencia y Salud* (México, DF: SSA; 2006). P. 24.

federales y estatales de las respectivas prohibiciones y sanciones que protejan a niñas y niños del castigo corporal, así como la homologación en la normativa penal en cuanto a la protección contra los distintos tipos de violencia, es todavía un pendiente. A nivel de política pública, los esfuerzos institucionales para prevenir la violencia en contra de NNA son fragmentados, por lo que sus efectos han sido limitados. Se carece de una política específica de prevención y protección integral de NNA enfocada en las causas fundamentales de la violencia, más que en los síntomas y las consecuencias inmediatas. En cuanto a la información estadística, pese a que existen diferentes encuestas, faltan datos comprensivos y globalmente comparables sobre todas las formas y tipos de violencia contra NNA, con miras a informar la toma de decisiones. En términos de los recursos, la inversión pública para la protección de NNA contra la violencia es insuficiente, lo cual se aprecia en el PEF 2015, en el cual el monto del gasto vinculado con el derecho a la protección fue de 0.07% del monto del gasto total en infancia³³⁰.

4.4.3. Acceso a la justicia e impunidad

La *Reforma Constitucional en materia de Seguridad Pública y Justicia Penal* (2008) introdujo cambios estructurales a la administración de justicia en México, abrió el camino para la unificación de códigos y criterios en materia penal en el país y contempló la transformación del sistema de justicia penal de un sistema inquisitorio y predominantemente escrito, a uno acusatorio y oral. En junio de 2016, el sistema de justicia penal entró en plena vigencia en todo el territorio nacional. Junto con la *Reforma Constitucional en Materia de Derechos Humanos* (2011) y la *Reforma al Código de Justicia Militar* (2014), la cual estableció que las violaciones a los derechos humanos cometidas por militares en contra de civiles deberán ser juzgadas en tribunales civiles, el ordenamiento jurídico mexicano está evolucionando hacia la dirección correcta para garantizar el acceso a la justicia. No obstante, persiste una amplia **brecha de implementación** entre lo que establece el marco jurídico y el ejercicio pleno del derecho a la justicia, la verdad y la reparación de la población, en especial de los grupos más desfavorecidos y marginados.

Según el *Índice Global de Impunidad 2017*³³¹, 99% de los crímenes cometidos en el país permanecen impunes en México y solo 4.46% de los crímenes registrados resultan en condenas. En 2016, se denunció el 9.7% de los delitos, de ese total se inició averiguación previa solamente en el 6.4% de los casos³³². Estas cifras muestran que la cifra negra, es decir los delitos que no se denuncian, mantiene un nivel muy alto (93.6%) en gran parte debido a los crecientes niveles de desconfianza, percepción de poca efectividad y percepción de corrupción que tiene la población sobre las instituciones de la cadena de justicia, pero también a la débil cultura de denuncia.

El poco personal dedicado a la procuración y administración de justicia es un cuello de botella para avanzar hacia un **sistema de justicia eficiente**. En el país existen 3.2 agencias del Ministerio Público y 7.5 agentes por cada 100 mil habitantes, así como 4.2 jueces por cada 100 mil habitantes (esta última cifra considerablemente por debajo del promedio mundial de 16.2). Este déficit contribuye a que menos casos se lleven a juicio, a las bajas tasas de sentencias y al alto porcentaje de personas privadas de la libertad sin una sentencia condenatoria³³³. La primera Encuesta Nacional de la Población Privada de la Libertad (ENPOL) 2017 estimó que, del total de personas

³³⁰ UNICEF, *Los derechos de la niñez y la adolescencia en México. Análisis de su situación*, (México, UNICEF: 2018). P. 135.

³³¹ UDLAP, *Índice Global de Impunidad 2017* (Puebla, México; Universidad de las Américas Puebla: 2017). Recuperado de: <http://www.udlap.mx/cesij/files/IGI-2017-Resultados.pdf> (Fecha de consulta: 20 de abril de 2018).

³³² INEGI, "Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre la Seguridad 2017...op cit".

³³³ ETHOS, *Descifrando el gasto público en seguridad*, (Ciudad de México, ETHOS. Laboratorio de Políticas Públicas: 2017).

privadas de la libertad que se encontraban en proceso de ser sentenciadas en 2016 (29.3%³³⁴), 43.4% había permanecido reclusa en al menos un Centro Penitenciario durante más de dos años.

En el sistema de justicia penal, la **investigación independiente**, técnica, profesional, imparcial y apegada a las normas de derechos humanos es crucial para garantizar la igualdad en el acceso a la justicia. De acuerdo con la CIDH, las policías investigadoras y otros funcionarios/as a cargo de la investigación y persecución del delito, sobre todo a nivel subnacional, carecen de las capacidades para la investigación de crímenes ordinarios en apego a los estándares internacionales, más aún para la investigación de crímenes complejos y graves violaciones a los derechos humanos³³⁵. Si bien la *Reforma Constitucional en materia Político-Electoral* (2014) estableció la autonomía del Ministerio Público de la Federación, a través de la creación de una Fiscalía General de la República, como órgano público autónomo, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, hasta el momento no ha entrado en vigor, dado que no se han logrado los acuerdos necesarios para emitir las leyes secundarias correspondientes para dar paso a la transformación institucional de la PGR hacia una Fiscalía independiente. La transición de la PGR a una Fiscalía implica grandes retos para México, pero también oportunidades en lo que a procuración de justicia se refiere, estado de derecho, fortalecimiento institucional y reducción de la impunidad.

La desigualdad en México se expresa particularmente en los obstáculos que enfrentan diversos grupos de población para acceder a **recursos judiciales efectivos, eficientes y responsable con los derechos humanos**³³⁶. Los estereotipos de género y otros factores de discriminación con base en la edad, la pertenencia étnica o el estatus migratorio aún prevalecen en la interpretación de la ley. Las desigualdades y vulnerabilidad de las víctimas, en especial de las mujeres y de los pueblos y comunidades indígenas, son escasamente consideradas en los procedimientos legales. A pesar de los amplios esfuerzos de capacitación, la plena aplicación de los estándares internacionales, la perspectiva de género, el enfoque intercultural y el interés superior de la niñez en las resoluciones judiciales siguen siendo retos de grandes proporciones³³⁷.

Para garantizar la igualdad de acceso a la justicia para todos (Meta 16.3), el sistema de justicia requiere generar, analizar y usar información estadística judicial desagregada por sexo y otras condicionantes para medir la **calidad del acceso a la justicia** de todos los grupos de población, y elaborar políticas y presupuestos públicos orientados a cerrar la marcada brecha de implementación en este ámbito³³⁸.

³³⁴ INEGI, "Encuesta Nacional de la Población Privada de la Libertad. 2017", http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/boletines/2017/enpol/enpol2017_07.pdf (Fecha de consulta: 7 de julio de 2018).

³³⁵ Open Society Justice Initiative, "Justicia Fallida en el Estado de Guerrero", citado en CIDH, *Informe sobre la situación de los derechos humanos en México...* op cit. P.221.

³³⁶ Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, *Observaciones finales sobre a los informes periódicos quinto y sexto combinados de México...* op cit. Párr. 5; Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, *Observaciones finales sobre el informe inicial de México* (CRPD/C/MEX/CO/1: 27 de octubre de 2014). Párr.25; Comité de Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares, *Observaciones finales sobre el tercer informe periódico de México* (CMW/C/MEX/3: 13 de septiembre de 2017). Párr. 31; Comité de los Derechos del Niño, *Observaciones finales sobre el informe presentado por México* (CRC/C/MEX/4-5, 5 de junio de 2015). Párr. 21, 67, 30, 31, 32, 45, 62, 67; Comité contra la Desaparición Forzada, *Observaciones finales sobre el informe presentado por México* (CED/C/MEX/1: 11 de febrero de 2015). Párr. 23, 38, 39. Comité de expertas para la eliminación de discriminación contra la mujer (CEDAW), *Observaciones finales del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer* (CEDAW/C/MEX/CO/7-8: 7 de agosto de 2012). Párr. 19, 35.

³³⁷ CIDH, *Informe sobre la situación de los derechos humanos en México. 2015...* op cit. P. 58.

³³⁸ ONU Mujeres, *Hacia un sistema integrado de información estadística sobre impartición de justicia con perspectiva de género y derechos humanos. Aportes desde la experiencia mexicana* (México, ONU Mujeres: 2016). Pp.33-34. Recuperado de <http://mexico.unwomen.org/es/digiteca/publicaciones> (Fecha de consulta: 19 de abril de 2018).

4.4.4. Corrupción

México se sitúa entre los países con los mayores **índices de corrupción** a nivel mundial (Meta 16.5). Con una calificación de 30 puntos, México se ubicó en la posición 123 de 176 países en el *Índice Global de Percepción de la Corrupción 2016*³³⁹, por debajo de sus principales socios y competidores económicos (40 posiciones separan a México de China, India y Brasil).

La corrupción es un problema que preocupa y afecta a la sociedad mexicana. Más del 90% de la población considera que la corrupción está generalizada y que los actos de corrupción son muy frecuentes³⁴⁰. En 2015, la mitad de la población percibía a la corrupción como el segundo mayor problema que enfrentaban sus entidades, solo por debajo de la inseguridad y la delincuencia³⁴¹.

La corrupción tiene un alto **impacto económico** y representa uno de los mayores costos para las finanzas del país. De acuerdo con la ENCIG 2017³⁴², el costo total a consecuencia de la corrupción en la realización de pagos, trámites o solicitudes de servicios públicos y otros contactos con autoridades fue de 7,218 millones de pesos. La corrupción agrava también las desigualdades sociales. Un estudio sobre la anatomía de la corrupción en México indica que el promedio anual del ingreso que los hogares destinan a pagar actos de corrupción es de 14%, cifra que se eleva a 33% para los hogares que perciben un salario mínimo. La corrupción representa en este sentido un impuesto regresivo y considerable para los más pobres, y uno de los principales problemas que tiene México para avanzar el desarrollo sostenible del país³⁴³.

México puso en marcha, dentro del paquete de reformas estructurales derivadas del Pacto por México, el **Sistema Nacional Anticorrupción** (SNA), para lo cual se emitieron, reformaron y abrogaron diversos ordenamientos jurídicos³⁴⁴. Las nuevas leyes fortalecen los mecanismos de control para investigar y sancionar violaciones a la integridad cometidas por funcionarios públicos y empresas, y refuerzan la supervisión al aumentar la transparencia, el poder de las auditorías y la participación de la sociedad civil. Si bien estas reformas son muestra del compromiso político del Estado para combatir la corrupción y representan un avance normativo e institucional fundamental para avanzar hacia esa dirección, diversos obstáculos demoran todavía su aplicación efectiva. Entre ellos, la falta de designación de diversos puestos clave del SNA, como el Fiscal Anticorrupción; así como el progreso desigual y las asimetrías que se observan entre los Sistemas Locales Anticorrupción³⁴⁵. Entre los retos que enfrenta la Secretaría Ejecutiva del SNA³⁴⁶, se

³³⁹ Transparencia Mexicana, *Índice de percepción de la Corrupción. Enfoque para México* (México, Transparencia Mexicana. Documento de análisis: 25 de enero de 2017). Recuperado de: <https://www.tm.org.mx/jpc2016/> (Fecha de acceso: 12 de abril de 2018).

³⁴⁰ INEGI, "Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) 2017", <http://www.beta.inegi.org.mx/proyectos/enchogares/regulares/encig/2017/> (Fecha de acceso: 11 de julio de 2018).

³⁴¹ INEGI, "Estadísticas a propósito del Día Internacional contra la Corrupción, 9 de diciembre (Comunicado de Prensa: 7 de diciembre de 2017) http://www.beta.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2017/corruccion2017_Nal.pdf (Fecha de consulta: 12 de abril de 2018).

³⁴² INEGI, "Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) 2017"...opc cit.

³⁴³ María Amparo Casar, México. *Anatomía de la corrupción* (México, IMCO/CIDE: 2015). P. 44. Recuperado de: https://imco.org.mx/wp-content/uploads/2015/05/2015_Libro_completo_Anatomia_corruccion.pdf (Fecha de consulta: 12 de abril de 2018).

³⁴⁴ Se reformaron 14 artículos Constitucionales (22, 28, 41, 73, 74, 76, 79, 104, 108, 109, 113, 114, 116 y 122) y se aprobaron las siguientes leyes secundarias: Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción; Ley General de Responsabilidades Administrativas; Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa; Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación; Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República; Código Penal Federal (reformado) y Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. (reformada).

³⁴⁵ OCDE, *Getting it right. Prioridades estratégicas para México...*opc cit. P. 38.

³⁴⁶ Como consecuencia de la reforma constitucional en materia de combate a la corrupción, se creó la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción (SESNA), organismo descentralizado, no sectorizado, con personalidad jurídica, patrimonio propio, autonomía técnica y de gestión y cuya función es ser un organismo de apoyo técnico encargado de generar los insumos necesarios para la toma de decisiones dentro del Comité Coordinador, instancia responsable de aprobar, diseñar, promover y evaluar la política nacional en la

encuentra la integración de una Política Nacional Anticorrupción (PNA) y su consecuente Programa Nacional de Implementación, así como el establecimiento de un mecanismo de monitoreo y evaluación del SNA, de la PNA y de los sistemas locales.

4.4.5 Transparencia y rendición de cuentas

Los avances de México en materia de transparencia y rendición de cuentas, a través de una mayor apertura de las autoridades del Estado, los esfuerzos para avanzar hacia un gobierno abierto, así como el fortalecimiento de una sociedad más exigente, informada y competente para involucrarse en los asuntos públicos, son notorios. La *Reforma Constitucional en materia de Transparencia* (2014) es un parteaguas que fortalece el **derecho al acceso a la información pública**, a través de la ampliación del catálogo de sujetos obligados a transparentar la información, como los partidos políticos, los sindicatos y todos los poderes de la unión; consolida un **Sistema Nacional de Transparencia**, otorgándole autonomía constitucional al INAI, estableciendo las bases para la creación de organismos locales autónomos y haciendo más oportuno el trabajo de la ASF; al mismo tiempo, establece nuevas facultades para el INAI; por ejemplo, para interponer acciones de inconstitucionalidad contra leyes que vulneren el derecho de acceso a la información pública.

A pesar de este gran avance, existe todavía un déficit de mecanismos que mejoren la rendición de cuentas, que combatan la corrupción (Meta 16.5), fomenten la transparencia (Meta 16.6) e incentiven el involucramiento de la ciudadanía en la toma de decisiones (Meta 16.7), particularmente a nivel subnacional y, especialmente, en el ámbito municipal. México es cofundador de la Alianza para el Gobierno Abierto (AGA³⁴⁷) desde 2011 y tiene ante sí el gran reto de avanzar en la consolidación de acciones que permitan prosperar la agenda de **gobierno abierto** en el país, especialmente en los aspectos relacionados con la mejora de la coordinación y el trabajo entre autoridades y la ciudadanía para atender los principales problemas públicos y las demandas más apremiantes de la sociedad.

Muestra de lo anterior es el lugar que ocupa el país en el Índice de Presupuesto Abierto 2017³⁴⁸. México logra 79 puntos sobre un total de 100 en términos de transparencia del presupuesto, es decir, brinda información considerable al público sobre el presupuesto. Sin embargo, en cuanto a la participación ciudadana, el país logra 35 puntos de 100, lo que significa que México ofrece pocas oportunidades a la sociedad para participar en el proceso presupuestario. En relación con la vigilancia del presupuesto por parte del órgano legislativo y de fiscalización, México alcanza 63 puntos sobre 100. Sobre este último rubro, los resultados muestran que el Congreso brinda vigilancia limitada durante el ciclo presupuestario, dado que ésta es adecuada durante la fase de planificación, pero débil durante la fase de implementación. En cambio, la institución superior de auditoría, en este caso la Auditoría Superior de la Federación, sí ofrece una vigilancia adecuada del presupuesto.

Fortalecer al **sector público**, a través de instituciones fuertes, eficientes, transparentes y que rindan cuentas (Meta 16.6) es indispensable para que el país logre un crecimiento económico sostenible (Meta 8.1) que permita reducir las desigualdades (Meta 10.3). Si bien el país ha

materia. "Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción", <https://www.gob.mx/sesna> (Fecha de consulta: 11 de julio de 2018).

³⁴⁷ La Alianza para el Gobierno Abierto fue lanzada en septiembre de 2011, cuando los gobiernos de los ocho países fundadores (Brasil, Indonesia, México, Noruega, Filipinas, Sudáfrica, el Reino Unido Y Estados Unidos) adoptaron la Declaración de Gobierno Abierto y anunciaron su Plan de Acción. En dos años, los gobiernos de 56 nuevos países se han unido a la Alianza, quienes han hecho más de 1,000 compromisos para hacer sus gobiernos más abiertos y transparentes.

³⁴⁸ International Budget, *Encuesta de Presupuesto Abierto. México. 2017*, <https://www.internationalbudget.org/wp-content/uploads/mexico-open-budget-survey-2017-summary-spanish.pdf> (Fecha de consulta: 3 de julio de 2018).

progresado en el funcionamiento de su sector público, principalmente a nivel federal, a través de, entre otros elementos, la profesionalización del servicio público, la simplificación regulatoria, la modernización de los sistemas de contratación pública y el mejoramiento de los servicios digitales, la efectividad y eficiencia de la gestión pública sigue siendo baja y dispareja entre regiones y entidades, lo que se traduce en bajos niveles de satisfacción de los servicios públicos y de confianza en las instituciones y el gobierno³⁴⁹. En 2017, el porcentaje de la población de 18 años y más de áreas urbanas de más de 100 mil habitantes que refirió estar satisfecha en términos generales con la calidad de los servicios públicos básicos y servicios bajo demanda alcanzó solamente el 45.5%³⁵⁰.

4.4.6 Acceso a la información y protección de libertades fundamentales

México cuenta con un marco jurídico fuerte para la protección y promoción del acceso a la información pública. La *Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública* (2015) ocupa el primer lugar del *Global Right to Information Rating*³⁵¹, con 136 de 150 puntos posibles, lo cual indica que, de manera formal, el **derecho de la ciudadanía al acceso a la información pública** está garantizado. La ley mexicana es considerada como un modelo a nivel internacional y regional, no solo por su buen diseño, sino también por su apoyo y uso por parte de los medios de comunicación y la sociedad civil³⁵².

De acuerdo con la Encuesta nacional de acceso a la información pública y protección de datos personales (ENAIID) 2016³⁵³, 50.6% de la población de 18 años y más a nivel nacional manifestó conocer o haber escuchado sobre la existencia de una ley encargada de garantizar el derecho de acceso a la información pública, de los cuales 6.9% mencionó la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Solamente 5.6% de la población realizó una solicitud formal de información a una institución de gobierno y, de este universo, 73.1% obtuvo la información requerida. Sin embargo, una tercera parte de la población (33.6%) no consulta información generada por el gobierno y un alto porcentaje tiene mucha desconfianza en la información gubernamental; por ejemplo, en el tema de salarios y sueldos de los funcionarios públicos (57.5%); elecciones (55.2%); utilización de los recursos públicos (49.3%); desempeño de los gobiernos (48.5%); seguridad pública, narcotráfico y/o delincuencia (45.5%), entre otros temas.

En sus observaciones preliminares sobre su visita a México en 2017, el Relator Especial de la ONU sobre la libertad de expresión y el Relator Especial sobre libertad de expresión de la CIDH³⁵⁴, mostraron su preocupación por cómo el acceso a la información opera en el contexto de las alegaciones de violaciones graves a derechos humanos, en donde investigadores, periodistas y personas defensoras de derechos humanos enfrentan barreras para obtener y divulgar la información.

³⁴⁹ OCDE, *Getting it right. Prioridades estratégicas para México...* op cit. P. 10.

³⁵⁰ INEGI, "Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) 2017..." op cit"

³⁵¹ Centre for Law and Democracy, "Global Right to Information Rating. Country data", <http://www.rti-rating.org/> (Fecha de consulta: 20 de mayo de 2018).

³⁵² UNESCO, *Acceso a la información: Lecciones de la América Latina* (Montevideo, Uruguay; Oficina Regional de Ciencias de la UNESCO para América Latina y el Caribe. Cuadernos de discusión de comunicación e información: 2017). P. 15.

³⁵³ INEGI, "Encuesta nacional de acceso a la información pública y protección de datos personales 2016 (ENAIID)" (Boletín de prensa 467/16, 8 de noviembre de 2016), http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/boletines/2016/especiales/especiales2016_11_01.pdf (Fecha de consulta: 11 de julio de 2018).

³⁵⁴ CIDH/OACNUDH, *Observaciones preliminares del Relator Especial de la ONU sobre la libertad de expresión y el Relator Especial sobre libertad de expresión de la CIDH después de su visita conjunta en México, 27 de noviembre–4 de diciembre 2017* (Comunicado: 4 de diciembre de 2017). Recuperado de: https://www.oas.org/es/cidh/expresion/docs/Observaciones_Preliminares_ESP.PDF (Fecha de consulta: 21 de mayo de 2018).

Los ataques cometidos en contra de **personas defensoras de derechos humanos y periodistas** son una amenaza y violación a la libertad de expresión (Meta 16.10). México es considerado uno de los países más peligrosos para ejercer la profesión del periodismo y la defensa de los derechos humanos. Con datos de la CNDH³⁵⁵, desde 2010, 73 periodistas han sido asesinados³⁵⁶, 12 han sido víctimas de desaparición forzada y ha habido 44 intentos de asesinato. Al menos 99.6% de estos crímenes siguen sin resolverse, lo que muestra el alto grado de impunidad que los rodean (Meta 16.3)³⁵⁷. En un contexto de grave violencia e inseguridad en el país (Meta 16.1), diversos grupos de periodistas y personas defensoras de derechos humanos enfrentan vulnerabilidades adicionales en su trabajo debido principalmente a su género o pertenencia étnica. Entre 2010 y 2017, más de 43 mujeres defensoras de derechos humanos y periodistas fueron asesinadas en México (Meta 5.2)³⁵⁸. Los periodistas indígenas y comunitarios, quienes son frecuentemente el único canal para llevar información a sus comunidades, enfrentan condiciones particularmente adversas debido a que trabajan en regiones y en asuntos que involucren la industria de extracción y los megaproyectos económicos³⁵⁹.

Una de las consecuencias de esta situación es la autocensura practicada por periodistas locales amenazados y organizaciones noticiosas que, si bien es un mecanismo comprensible de autodefensa, priva a la ciudadanía de información pública esencial sobre el crimen y la corrupción en sus comunidades. A los mecanismos internacionales de derechos humanos les preocupa que las medidas adoptadas para brindar protección a las personas defensoras de derechos humanos y periodistas no sean lo suficientemente efectivas; en parte, debido a la falta de coordinación entre las autoridades federales, estatales y municipales, la falta de asignación de recursos suficientes para su implementación, así como la falta de implementación de un enfoque diferenciado que permita atender las necesidades particulares de acuerdo al género, ciclo de vida y pertenencia étnica o cultural³⁶⁰.

La radio y televisión tienen un impacto social y proporcionan acceso a la información, beneficiando a la población en general, pero en particular a las comunidades marginadas y a los grupos sociales más desfavorecidos. El acceso a la radio es fundamental durante emergencias y desastres, dado que tiene la habilidad de informar y generar conciencia en el mayor número de personas en el menor tiempo posible (Meta 13.3), además de la transmisión de la cultura. De acuerdo con la ENDUTIH 2015, la televisión fue el aparato con mayor nivel de adopción a nivel nacional con un 93.5% de hogares, seguida de la radio con 65.8%. La radio comunitaria y la radio indígena fueron reconocidas a nivel constitucional por primera vez en la Reforma de Telecomunicaciones de 2013.

4.4.7. Decisiones inclusivas, participativas y representativas

En un contexto de consolidación democrática, México exhibe marcadas brechas de representación y participación política de su población, principalmente por razones de género, pertenencia étnica, edad y situación de discapacidad (Meta 16.7).

³⁵⁵ Datos de la CNDH proporcionados al Relator Especial de la ONU sobre la libertad de expresión y al Relator Especial sobre libertad de expresión de la CIDH, en el marco de su visita a México, e incorporados en sus observaciones preliminares.

³⁵⁶ La sociedad civil ha documentado 115 asesinatos de periodistas en el mismo periodo <https://articulo19.org/periodistasasesinados/>

³⁵⁷ CIDH/OACNUDH, *Observaciones preliminares del Relator Especial de la ONU sobre la libertad de expresión y el Relator Especial sobre libertad de expresión de la CIDH después de su visita conjunta en México...* op cit.

³⁵⁸ Report of the Special Rapporteur on the situation of human rights defenders on his mission to Mexico, (A/HRC/37/51/Add.2, 12 February 2018). Recuperado de: http://www.hchr.org.mx/images/doc_pub/A_HRC_37_51_Add_2_EN.pdf (Fecha de consulta: 11 de abril de 2018).

³⁵⁹ *Idem*. Párr. 32, 47 y 61.

³⁶⁰ Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, *Observaciones finales sobre a los informes periódicos quinto y sexto combinados de México...* op cit. Párr.7.

México ocupa actualmente el octavo lugar en el mundo³⁶¹ en cuanto a representación de **mujeres** en el Congreso Nacional (42%), y el avance a nivel subnacional ha sido notable: 7 congresos Locales de 32 han logrado la paridad y otros 10 están cerca de la meta. De acuerdo con el Índice de Paridad Política 2017³⁶², que mide el estado del ejercicio de los derechos políticos de las mujeres desde una perspectiva paritaria con base en ocho dimensiones y 40 indicadores, México obtuvo un puntaje global promedio de 66.2, sobre un total de 100 puntos posibles. Entre los principales desafíos se encuentra la persistente y aguda subrepresentación de las mujeres en la toma de decisiones públicas en el poder ejecutivo y judicial, a nivel subnacional o en los espacios y/o carteras clave para el desarrollo sostenible del país, (por ejemplo: economía, hacienda, gobernación, entre otros).

Sin duda, un avance hacia una democracia paritaria es el resultado del proceso electoral 2018 (ver capítulo 4.6). De acuerdo con el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), el próximo Congreso de la Unión, que tomará posesión el primero de septiembre de este año, estará conformado por el mayor número de mujeres registrado en la historia política de México (Meta 5.5). Hasta el momento, el Senado estaría conformado por 32 escaños para mujeres y 32 para hombres por el principio de mayoría relativa; y, si se consideran a los elegidos por la primera minoría, sumarán 49 mujeres y 47 hombres, mientras que 32 senadurías están todavía pendientes, pues corresponden a la segunda minoría que se distribuirá según la votación total. En la Cámara de Diputados y Diputadas, las curules por el principio de mayoría relativa quedaron conformadas por 144 mujeres (49.3%) y 155 hombres (51.7%). En cuanto a los escaños de representación proporcional, las mujeres alcanzarían 101 espacios y los hombres 99, lo que podría traducirse en una diferencia de sólo nueve diputaciones, mientras que hay una más que aún no ha sido definida. De tal suerte, que la Cámara de Diputados y Diputadas podría quedar conformada por 245 mujeres (49%) y 254 hombres (51%)³⁶³.

El reconocimiento del carácter pluricultural de México, así como de los derechos de los pueblos indígenas a la autonomía y la libre determinación en el artículo 2 Constitucional, no se ha reflejado en una inclusión política plena de los pueblos indígenas. A pesar de que el 21.5% de la población se autodescribe como indígena, y los **pueblos y comunidades indígenas** son la mayoría de los habitantes en más de 30% de los municipios del país, su representación a nivel nacional ha sido marginal y ha mostrado una tendencia a la baja de manera constante desde el año 2000³⁶⁴. Las mujeres indígenas en particular enfrentan serios obstáculos para participar en la toma de decisiones, producto de prácticas y actitudes discriminatorias por razones de género y etnia, tanto de los partidos políticos como de las estructuras de gobierno, así como las derivadas de los sistemas normativos indígenas. México requiere garantizar la consulta previa de los pueblos y comunidades indígenas como un mecanismo para hacer efectivo su derecho a la participación.

³⁶¹ IPU y ONU Mujeres, “Mujeres en la política, 2017” (situación al primero de enero de 2017), <https://www.ipu.org/resources/publications/infographics/2017-03/women-in-politics-2017> (Fecha de consulta: 14 de abril de 2018).

³⁶² ONU Mujeres, PNUD, IDEA Internacional, *La democracia paritaria en México: Avances y desafíos* (México, ONU Mujeres-PNUD-IDEA Internacional: 2017). Recuperado de <http://mexico.unwomen.org/es/digiteca/publicaciones/2017/10/diagnostico-atenea-la-democracia-paritaria-en-mexico> (Fecha de consulta: 10 de julio de 2018).

³⁶³ INE, *En el Senado de la República habría más mujeres que hombres y en la Cámara de Diputados la conformación será casi igual* (Comunicado de Prensa 398: 3 de julio de 2018). Recuperado de: <https://centralectoral.ine.mx/2018/07/03/conforme-resultados-preliminares-se-perfila-conformacion-historica-del-congreso-de-la-union-en-materia-de-paridad-2/>

³⁶⁴ En 2006, 12 hombres y dos mujeres indígenas formaban parte de la Cámara de Diputados (2.4%), proporción que disminuyó en 2009 a siete hombres y tres mujeres indígenas (2%), en 2012 se redujo a cinco hombres y dos mujeres indígenas (1.4%), para llegar a 2015 con la representación más baja: seis hombres indígenas y ninguna mujer indígena (1.2%). Información consultada en: http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5506209&fecha=30/11/2017

De acuerdo con el *Índice Nacional de Participación Juvenil* (2016³⁶⁵), la participación de **jóvenes** (15-29 años) en la actual legislatura de la Cámara de Diputados y Diputadas (2015-2018) alcanza el 5%, muy por debajo del 26.1% que este segmento representa de la población mexicana. En el gobierno, su participación disminuyó de 20% en 2015 a 12% en 2016, mientras que en el caso de los partidos políticos el nivel de participación se redujo considerablemente de 16% en 2015 (año electoral) a 11% en 2016.

México cuenta con legislación para proteger los derechos de las **personas con discapacidad**. Sin embargo, existen vacíos e inconsistencias jurídicas que no reflejan la obligación internacional del país de garantizar el derecho a la consulta y a la participación directa de las personas con discapacidad en los asuntos que les competen. Al igual que en el caso de los pueblos y comunidades indígenas, así como de las y los jóvenes, México tiene un reto importante en materia de generación, análisis y uso de datos e información estadística desglosada sobre la representación y participación de las personas con discapacidad en la vida pública. La falta de evidencia ha sido una gran limitante en estos tres casos para visibilizar las brechas, identificar el rezago e informar la toma de decisiones, tanto a nivel nacional como subnacional.

Una sociedad organizada, dinámica, diversa, plural e independiente constituye un piso indispensable para la consolidación de la democracia y el fortalecimiento del Estado de Derecho. En los últimos veinte años, la **sociedad civil** mexicana ha fortalecido sus capacidades y ganado experiencia en la construcción de estrategias de incidencia e interlocución con el gobierno y los organismos internacionales. Esto la ha posicionado como un actor clave para monitorear el cumplimiento de los compromisos internacionales de México, proponer soluciones de política pública, promover la defensa del interés público y vigilar a los actores que participan en el ejercicio gubernamental en todos los niveles³⁶⁶. Aun así, México se ubica en niveles bajos de densidad de organizaciones de la sociedad civil (27.7 OSC por cada 100 mil habitantes³⁶⁷), además de que subsisten grandes asimetrías a nivel subnacional que demuestran un desarrollo considerablemente desigual de la sociedad civil según el territorio³⁶⁸. Esto puede explicarse, entre otros factores, porque el andamiaje normativo e institucional actual, así como la falta de financiamiento y apoyo económico a sus actividades, dificulta la organización y participación de la sociedad en lo público. Los espacios y mecanismos de relación para una eficiente y eficaz intervención de las OSC en la definición, evaluación, seguimiento y ejecución de políticas públicas no han sido ampliados ni utilizados en su máximo potencial por las estructuras de gobierno, en donde también se observan grandes variaciones entre las entidades federativas³⁶⁹. México requiere fortalecer un entorno habilitante que incentive y favorezca la organización, capacitación y participación de la sociedad en los asuntos públicos, particularmente en aquellos estados y municipios donde la sociedad civil está menos desarrollada.

³⁶⁵ Ollin, Jóvenes en Movimiento A.C., *Índice Nacional de Participación Juvenil 2015-2016* (México, Ollin: 2016). Pp. 80-86.

³⁶⁶ Edna Jaime, "Sociedad civil: un vehículo de cambio para México", (artículo de opinión publicado en el blog de México Evalúa, 8 de junio de 2017. Recuperado de: <http://www.estepais.com/articulo.php?id=1037&t=sociedad-civil-un-vehiculo-de-cambio-para-mexico> (Fecha de consulta: 25 marzo de 2018).

³⁶⁷ Caros Chávez, Pablo González y Gustavo Venegas, *Retos, perspectivas y horizontes de las organizaciones de la sociedad civil en México. Los caminos hacia una reforma de la LFFAROSC*, (Septiembre de 2016). Recuperado de: http://ibd.senado.gob.mx/sites/default/files/Estudio_Final_Retos_y_Perspectivas_de_las_OSC.pdf (Fecha de consulta: 25 de marzo de 2018).

³⁶⁸ Con datos de la Encuesta Intercensal 2015, mientras que la densidad de organizaciones en la CDMX es de 66.2 OSC por cada 100 mil habitantes, en Tamaulipas es de 11. Si bien la zona centro tiene un promedio de 31.6 OSC por cada 100 mil habitantes, seguida por el sureste con 27.9 y occidente con 25.2, la zona norte, conformada por el noreste y noroeste, tiene los promedios más bajos con 23.6 y 24.6.

³⁶⁹ Mientras que la Ciudad de México tiene 10 mecanismos de participación reglamentados en su ley de participación ciudadana, estados como Campeche, Nuevo León y Puebla no cuentan con una ley de este tipo y solamente regulan una figura de participación. <https://imco.org.mx/wp-content/uploads/2016/09/La-reeleccion-en-Mexico-en-los-tiempos-de-la-partidocracia.pdf>

La **calidad de la democracia** está todavía lejos de las expectativas que la transición política del 2000 despertó entre la población. La mala percepción sobre el funcionamiento de la democracia, la desconfianza en las instituciones, así como el desinterés de la ciudadanía por los asuntos públicos es gran un reto para México. Según el Latinobarómetro 2017, la mayor pérdida de apoyo a la democracia entre la población de los países de América Latina se produce en México, con 10 puntos porcentuales menos que en 2016, llegando a 38%. Tan solo 18% de las y los mexicanos está satisfecho con la forma como la democracia funciona en el país³⁷⁰, la confianza en los partidos políticos cayó a su nivel más bajo desde 1995 (9%), mientras que la confianza en el Congreso pasó de 32 a 22% y en las Fuerzas Armadas disminuyó de 61 a 52%. Estos datos, más lo que se han expuesto a lo largo de este capítulo, revelan una sociedad crecientemente desconfiada de las instituciones públicas.

Un sistema democrático no puede funcionar de manera correcta y sustantiva si no cuenta con una ciudadanía interesada, participativa y que pueda ejercer de manera real sus derechos³⁷¹. La transición hacia la democracia ha hecho evidente la importancia de contar con mayores y mejores espacios de **participación ciudadana**, más allá de acudir a las urnas a emitir un voto durante los procesos electorales. México necesita institucionalizar y mejorar el funcionamiento de los mecanismos de participación ciudadana dentro de la APF, y con mayor énfasis a nivel subnacional, con el fin de avanzar hacia una participación ciudadana más efectiva.

4.5. Retos transversales

4.5.1. Desafíos para el logro de la igualdad de género y empoderamiento de todas las mujeres y niñas

México ha logrado **avances significativos** para adelantar los derechos de las mujeres y la igualdad de género, principalmente en tres áreas fundamentales: el fortalecimiento del derecho interno, una fuerte institucionalidad de género y el incremento de los recursos públicos etiquetados para la igualdad. Por primera vez, la estrategia nacional de desarrollo (PND 2013-2018) incorpora de manera transversal la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres en todas sus áreas, y la política nacional de igualdad de género (PROIGUALDAD 2013-2018) está enfocada en avanzar hacia la igualdad sustantiva. Desde la inclusión del Anexo 13 Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres en el Decreto de PEF 2008, los recursos aprobados para la igualdad de género han crecido en promedio anual 12.1% hasta 2018, año que tuvo un incremento de 68%, al pasar de 27 mil 424.6 millones de pesos en 2017 a 47 mil 918, el mayor presupuesto de igualdad de género de la historia de México, aunque apenas representa el 1.2% del gasto programable³⁷².

No obstante, el progreso de México no ha sido uniforme, persisten profundos contrastes al interior del territorio y subsisten marcadas desigualdades de género en todos los ámbitos, tal y como se ha mostrado a lo largo del análisis situacional de esta sección. Entre los **desafíos estructurales**, se encuentra la profunda brecha de implementación que existe entre lo que está

³⁷⁰ Corporación Latinobarómetro, *Informe 2017* (Santiago de Chile, Corporación Latinobarómetro: 2017). Recuperado de: <file:///Users/administrador/Downloads/F00006433-InfLatinobarometro2017.pdf> (Fecha de consulta: 20 de mayo de 2018).

³⁷¹ INE, *Informe de País sobre la Calidad de la Ciudadanía* (México, Instituto Nacional Electoral: 2017). P. 18.

³⁷² Cámara de Diputados/Centro de Estudios de Finanzas Públicas, *Presupuesto de Egresos de la Federación 2018 Principales Anexos Transversales* (Nota informativa. 14 de diciembre de 2017). Recuperado de: <http://www.cefp.gob.mx/publicaciones/nota/2017/notacefp0362017.pdf> (Fecha de consulta: 18 de agosto de 2018).

Cámara de Diputados/Centro de Estudios de Finanzas Públicas, *El Gasto Público Federal en Equidad de Género* (Nota informativa, 27 de marzo de 2017). Recuperado de: <http://www.cefp.gob.mx/publicaciones/nota/2017/notacefp0062017.pdf> (Fecha de consulta: 25 de mayo de 2018).

estipulado en leyes, planes, programas y presupuestos para la igualdad de género y la realidad cotidiana de millones de mujeres y niñas. La plena y efectiva implementación de la CEDAW y de otros compromisos internacionales sobre los derechos de las mujeres, así como la falta de mecanismos de evaluación y rendición de cuentas para el logro de la igualdad de género, es un reto de grandes proporciones. Si bien México ha progresado ampliamente en la generación, análisis y uso de estadísticas de género en diversas áreas, la recolección y disponibilidad de más y mejores datos desagregados en todas las esferas del desarrollo sostenible, que visibilicen la discriminación múltiple que enfrentan distintos grupos de mujeres (Metas 17.18 y 17.19), es indispensable para llenar los vacíos en el conocimiento e informar políticas de igualdad y acciones afirmativas que conduzcan al efectivo cumplimiento del ODS 5 y de las dimensiones de género de los demás ODS.

Transformar los **estereotipos de género y prácticas discriminatorias** profundamente arraigados en la sociedad y las instituciones, impone desafíos a México en distintos niveles y ámbitos. A la discriminación por motivos de género o sexo, se suman otros factores de discriminación y exclusión, como la edad, la pertenencia étnica, la raza, la situación socioeconómica, la ruralidad, el estatus migratorio, la condición de discapacidad o la preferencia sexual. Esta discriminación interseccional, como se ha mostrado a lo largo de las diversas secciones del CCA, agrava la desigualdad de las mujeres y niñas de grupos o sectores socialmente marginados, colocándolas en situación de mayor desventaja para el ejercicio de sus derechos humanos. Para no dejar a ninguna mujer y niña atrás, como lo propone la Agenda 2030, México requiere, entre otros elementos, de más y mejores estadísticas de género, acciones afirmativas y políticas de igualdad (Meta 5.c), así como mayores esfuerzos y recursos para avanzar hacia un **cambio cultural** (Meta 5.1), tanto social como institucional, que incluya al sector educativo y a los medios de comunicación, y que esté orientado a eliminar las causas estructurales que reproducen y perpetúan los estereotipos de género que son la raíz de la desigualdad, discriminación y violencia contra las mujeres y niñas. En este contexto, el voluntariado puede servir como una herramienta para transformar los estereotipos de género y la discriminación, ya que este juega un papel importante en la promoción de la igualdad de género. La participación cívica voluntaria es una fuerza vital para sumar esfuerzos que aseguren el reconocimiento de los derechos de las mujeres y niñas, y las obligaciones que tienen las autoridades nacionales y subnacionales de respetarlos y promoverlos.

La **violencia contra las mujeres y niñas** es un problema estructural en México que merece la más alta prioridad (Meta 5.2). La ENDIREH 2016 revela que la violencia contra las mujeres muestra una tendencia al alza: 66% de las mujeres de 15 años y más (lo que equivale a 30.7 millones), ha sufrido al menos un incidente de violencia emocional, económica, física, sexual o discriminación a lo largo de su vida, en comparación con 62% en 2011. Si bien México tiene un marco normativo cada vez más sólido a nivel nacional y estatal para enfrentar la violencia contra las mujeres, su implementación efectiva sigue siendo un desafío mayor. Persisten múltiples barreras para prevenir, atender, sancionar, reparar y erradicar la violencia contra las mujeres, tales como la mala e insuficiente aplicación de las leyes y políticas; la limitada capacidad de las instituciones de la cadena de justicia, principalmente a nivel estatal y municipal; la baja inversión en la prevención primaria y en los servicios esenciales de calidad para las víctimas; la impunidad de los perpetradores y la falta de transparencia en los procesos y resoluciones judiciales; los inadecuados sistemas de seguimiento y evaluación; la falta de información y estadísticas sobre algunas formas de violencia; así como la deficiente atención a las mujeres que sufren formas múltiples e interrelacionadas de discriminación y violencia, como las mujeres jóvenes o niñas, las que pertenecen a comunidades migrantes o indígenas o las que tienen alguna discapacidad.

Las mujeres enfrentan barreras estructurales para ejercer su derecho de **acceso a la justicia y reparación**. Los principales obstáculos están relacionados con la falta de recursos judiciales efectivos y sensibles al género. Informes de organizaciones de la sociedad civil revelan que el 66% de las y los funcionarios de justicia desconocen los compromisos internacionales y nacionales relacionados con los derechos humanos de las mujeres³⁷³. La discriminación interseccional agrava el acceso a la justicia de las mujeres más desfavorecidas, especialmente de las mujeres indígenas, rurales y en situación de pobreza. La falta de transparencia y rendición de cuentas (Meta 16.6), así como de información estadística comparable, confiable y accesible sobre el acceso de las mujeres a la justicia (Meta 17.19) limitan la adopción de políticas y presupuestos (Meta 5.c) que permitan al país transitar hacia un sistema de justicia responsable con los derechos de las mujeres (Meta 16.3).

México debe sumar esfuerzos para eliminar percepciones y costumbres que permiten que el **matrimonio infantil y las uniones tempranas** sean considerados como opción viable y legal, en lugar de una violación de los derechos de las niñas y adolescentes. De acuerdo con la ENADID 2014, el 23.7% de las mujeres mexicanas de entre 15 y 54 años contrajeron matrimonio antes de los 18 años. Guerrero, Chiapas y Oaxaca son las entidades con mayor porcentaje de niñas que se casan antes de los 18 años. La falta de acceso a la educación (Meta 4.1) y la desigualdad de oportunidades (Meta 10.3) son una de las principales causas del matrimonio infantil y las uniones tempranas (Meta 5.3). En 2015, 2 de cada 4 mujeres menores de 15 años que contrajeron matrimonio contaban únicamente con educación primaria. Hasta el momento, 27 estados han armonizado su legislación con la LGDNNA para prohibir el matrimonio antes de los 18 años sin dispensas. Cinco estados aún establecen excepciones.

En México persisten retos estructurales para lograr que las mujeres puedan ejercer plenamente sus **derechos sexuales y reproductivos**. Además de los desafíos en materia de salud materna (Meta 3.1) y de cuidados obstétricos, acceso universal a la anticoncepción y el embarazo adolescente (Meta 3.7) analizados en el apartado de Salud, preocupa en este ámbito la falta de acceso de las mujeres a un aborto legal y seguro como parte de los derechos reproductivos fundamentales de las mujeres reconocidos internacionalmente (Meta 5.6). En México, el aborto es un delito con causales de exclusión de responsabilidad penal o de no punibilidad, cuya regulación varía de acuerdo con cada entidad³⁷⁴. Esta asimetría provoca una situación de discriminación jurídica y lo convierte en tema de justicia social, ya que las mujeres tienen más o menos derecho a interrumpir de manera legal y segura un embarazo dependiendo de su lugar de residencia³⁷⁵. Los abortos clandestinos son la cuarta causa de muerte materna en el país (Meta 3.1). El acceso a los servicios de aborto en caso de violación es aún limitado, a pesar de estar reconocido en el marco jurídico nacional como un derecho de las víctimas de violación sexual (Meta 5.2). La falta de aplicación de la normativa por parte de las autoridades de salud, así como de procuración e impartición de justicia (Meta 16.3), es el principal obstáculo para que niñas, adolescentes y mujeres víctimas de violación ejerzan este derecho.

³⁷³ EPADEQ, *Diagnóstico e Implementación de Acciones Básicas sobre Equidad de Género en la Impartición de Justicia, la Normatividad y la Cultura Organizacional de 15 Tribunales Superiores de Justicia*, 2012 (México, Estudios y Estrategias para el Desarrollo y la Equidad (EPADEQ): 14 de mayo de 2014). Recuperado de: <http://epadeq.com.mx/diagnostico-e-implementacion-de-acciones-basicas-sobre-equidad-de-genero-en-la-imparticion-de-justicia-la-normatividad-y-la-cultura-organizacional-de-15-tribunales-superiores-de-justicia/> (Fecha de consulta: 20 de mayo de 2018).

³⁷⁴ En 2007, la Ciudad de México aprobó la despenalización de la interrupción del embarazo (ILE) hasta las 12 semanas para que las mujeres y adolescentes pudieran tener un aborto seguro.

³⁷⁵ GIRE, *Niñas y mujeres sin justicia. Derechos reproductivos en México* (México, Grupo de Información en Reproducción Elegida, A.C (GIRE): 2015).

Tal y como se abordó en el capítulo 4.2.2, México tiene una de las tasas más bajas de **participación económica** de las mujeres entre los países de América Latina. Preocupa en este contexto que los avances en el perfil educativo de las mujeres (Metas 4.3 y 4.4) no se traducen en mejores posibilidades de inserción, movilidad y ascenso en el mercado de laboral (Meta 8.5). Persiste todavía un alto grado de segregación ocupacional y la desigualdad en los salarios se observa prácticamente en todos los grupos de ocupación. Hay más mujeres que hombres trabajando por cuenta propia o en trabajos no remunerados, expresión de precariedad laboral, y una proporción significativa de las mujeres trabajadoras se desenvuelve en el sector informal de la economía, sin acceso a los beneficios de la protección y seguridad social³⁷⁶, y con la consecuente falta de esquemas de jubilaciones y pensiones cuando son adultas mayores. A pesar de su importancia para la vida de muchas familias y la sociedad mexicana, cerca de 2 millones de trabajadoras del hogar enfrentan condiciones laborales marcadamente desiguales (Meta 8.8) con respecto a otros segmentos de trabajadores remunerados, lo que evidencia una cuestión sintomática de la discriminación y exclusión social de las que son objeto. El empoderamiento económico de las mujeres, incluidas las adolescentes, que son madres es un reto para el país. La brecha de empleo por maternidad es de las más pronunciadas de los países de la OCDE y es probable que en las próximas décadas esta situación sea todavía más compleja, ya que el número de mujeres jefas de hogar va en aumento y la tasa de embarazo adolescente sigue siendo muy alta³⁷⁷. México necesita invertir en políticas sociales, laborales y conciliatorias (Meta 5.4) que ayuden a las mujeres que son madres a ingresar a la fuerza de trabajo, permanecer y progresar en ella; por ejemplo, a través de un mayor acceso a servicios públicos de calidad, como los servicios de atención a la primera infancia (Meta 4.2).

La mayor presencia de las mujeres en el mercado laboral se ha dado en un contexto de desigualdad en la responsabilidad social del **trabajo doméstico y de cuidado no remunerado** (TDNR). En México, las mujeres destinan 77.5% de su tiempo al TDNR, mientras que los hombres 22.5%³⁷⁸. En 2015, el valor económico del TDNR alcanzó un nivel equivalente a 4.4 billones de pesos, lo que representó el 24.2% del PIB nacional. En esa participación, las mujeres contribuyeron con 18 puntos porcentuales y los hombres con 6.2, lo que en términos de valor económico representa 74.3% y 25.7%, respectivamente³⁷⁹. Las responsabilidades y el tiempo dedicado al hogar o al cuidado de personas dependientes, sin recibir remuneración alguna, significa para muchas mujeres trabajadoras una doble o triple carga de trabajo, mientras que para otras, particularmente las que viven en situación de pobreza, restringe notablemente la posibilidad de contar con ingresos propios (Meta 10.1), de buscar opciones en el mercado laboral (Meta 8.5), de participar plenamente en la política y la sociedad (Meta 5.5), al mismo tiempo que las relega de la protección social indispensable (Meta 10.3) para la satisfacción autónoma de sus necesidades³⁸⁰ y limita el tiempo que podrían invertir en su aprendizaje (Meta 4.3), capacitación (Meta 4.4), especialización, ocio o cuidado personal. México enfrenta el desafío de establecer políticas y estrategias transformadoras que regulen un nuevo paradigma de corresponsabilidad social para el trabajo doméstico y de cuidado no remunerado (Meta 5.4), en tanto que responsabilidad colectiva

³⁷⁶ OCDE, *Construir un México inclusivo...op cit.* P.28.

³⁷⁷ *Idem.* P. 113.

³⁷⁸ Con datos de la Cuenta Satélite del Trabajo No Remunerado de los Hogares, citado en INEGI/INMUJERES, *Mujeres y hombres en México, 2016...op cit.*

³⁷⁹ INEGI, "Cuenta Satélite del Trabajo No Remunerado de los Hogares de México, 2015" (Aguascalientes, Boletín de Prensa No. 532/16: 9 de diciembre de 2016). Recuperado de: http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/boletines/2016/especiales/especiales2016_12_03.pdf (Fecha de acceso: 29 de junio de 2018).

³⁸⁰ ONU Mujeres, *Trabajo doméstico y de cuidados no remunerado* (México, ONU Mujeres. Serie Transformando nuestro mundo: 2015).

más que individual, en el marco de la esfera pública, más que privada, con la participación central del Estado y bajo el enfoque del cuidado como un derecho humano.

Las mujeres enfrentan serias limitantes en el **acceso a los bienes productivos y recursos económicos**. Entre los principales problemas para acceder al crédito y la tecnología, además de la falta de una política de crédito y apoyos financieros con perspectiva de género, es la falta de títulos de propiedad u otros bienes que funcionen como garantía (Meta 1.4, 2.3 y 5.a). Esta dificultad es más evidente en las mujeres rurales, campesinas e indígenas, con énfasis en las jefas de hogar y en quienes recae la responsabilidad de trabajar la tierra en municipios con alta emigración masculina. Si bien hace más de treinta años las propietarias de la tierra eran muy pocas y su número apenas rebasaba un punto porcentual, se estima que ahora representan cerca del 18% (ver capítulo 4.1.3)³⁸¹. A pesar de este avance, persiste una marcada subrepresentación en este ámbito que se erige como un serio obstáculo de las mujeres rurales e indígenas para acceder a programas de equipamiento, infraestructura, créditos, arrendamiento y apoyos económicos por pago de servicios ambientales, además que repercute en su participación en la toma de decisiones (Meta 5.5) a nivel de los Consejos y Asambleas ejidales o comunales para organizar las actividades agropecuarias.

Si bien México ha logrado avances sustanciales en términos de la paridad en la representación política de las mujeres en el poder legislativo (ver capítulo 4.4.7), la **participación** plena de las mujeres en todos los espacios de toma de decisiones públicas sigue siendo un gran reto (Meta 5.5). Los mayores desafíos se observan en la marcada sub-representación y lento avance de las mujeres en puestos de decisión dentro de la APF (18.7%), el Poder Judicial (18.1% en la SCJN y 28.5% en el TEPJF), la administración pública de los gobiernos estatales (18.7%), así como dentro de los partidos políticos (28.5%)³⁸². Aun y cuando el porcentaje de presidentas municipales ha aumentado de 9% en 2015 a 14% en 2016, los datos siguen revelando una aguda subrepresentación. El incremento de la violencia política contra las mujeres (Meta 5.2), que tiene lugar especialmente a nivel municipal y con mayor énfasis en municipios indígenas, es motivo de alta preocupación. La escasa representación y participación de las mujeres en la toma de decisiones en otros espacios, como el sector privado (ODS 8), la ciencia y tecnología (ODS 9), la academia (ODS 4), los medios de comunicación o la cultura, refleja un progreso desigual en este ámbito.

4.5.2. Los derechos humanos de las personas migrantes.

México refleja de manera clara el carácter pluridimensional de la migración internacional. Por su ubicación geográfica, el país forma parte de uno de los corredores migratorios más dinámicos y complejos del mundo, en donde confluyen diversos procesos de la migración: origen, destino, tránsito, retorno, migración interna y desplazamiento.

Como país de origen, se estima que un millón de mujeres y hombres mexicanos, documentados y no documentados, migran hacia Estados Unidos cada año. Como país de retorno, aproximadamente 400,000 mexicanos son repatriados anualmente de Estados Unidos. Cerca del

³⁸¹ Si bien se carecen de datos oficiales y estadísticas desagregadas que permitan ubicar a las mujeres y sus necesidades en el campo o en las zonas rurales, la SAGARPA estima que, de la totalidad de mujeres que viven o trabajan en el campo (14 millones), 16% tiene un título de propiedad (Metas 1.4 y 5. a)³⁸¹. De acuerdo con el Environment Gender Index³⁸¹, en México, a nivel nacional, únicamente 19.8% de las personas que poseen derechos de propiedad ejidal son mujeres

³⁸² ONU Mujeres, PNUD, IDEA International (2017). *La democracia paritaria en México...op cit.*

12% de las repatriaciones son de mujeres y 5% de NNA, que en su gran mayoría viajan sin compañía de algún familiar (72% en 2010-2013)³⁸³.

Como país de tránsito, alrededor de 150,000 personas migrantes en situación irregular ingresan por la frontera sur de México y atraviesan el país en su camino principalmente hacia Estados Unidos. Más del 90% proviene de Centroamérica y 24.5% son mujeres. Algunas estimaciones de la sociedad civil indican que la cifra de migrantes en tránsito asciende a 400,000 al año³⁸⁴.

Como país de destino, un mayor flujo de trabajadores migrantes transfronterizos o temporales ingresan por la Frontera sur de México. Un número creciente de mujeres, muchas de ellas jefas de hogar, migran con la intención de buscar oportunidades económicas y sociales que les permitan mejorar su calidad de vida y la de sus familias, a través del envío de remesas y la generación de cadenas de cuidado³⁸⁵. A esta situación, se suma la creciente búsqueda de refugio y asilo político de migrantes centroamericanos provenientes del Triángulo, que huyen de la violencia en sus comunidades.

México ha fortalecido notablemente su marco normativo, institucional y de políticas públicas para atender el fenómeno migratorio desde una perspectiva integral de derechos humanos y garantizar más protección a las personas migrantes. Sin embargo, persisten brechas de implementación y diversos **desafíos estructurales** por resolver. Entre ellos, el Comité sobre los Derechos de los Trabajadores Migratorios de la ONU (CTM³⁸⁶), identificó los siguientes: la falta de alineación completa de la legislación nacional (sectorial), estatal y municipal con los estándares internacionales sobre derechos de las personas migrantes; los problemas de coordinación y la falta de evaluaciones eficaces entre los distintos niveles de gobierno para atender los flujos migratorios; así como, la falta de datos cualitativos y cuantitativos desagregados por sexo y otras características que permitan evidenciar y atender de forma diferenciada la situación de los grupos de migrantes más vulnerables, principalmente NNA, y mujeres.

Cada una de las dimensiones del fenómeno migratorio plantea **retos específicos**, dado su impacto en las esferas social, política y económica del país, que es más evidente a nivel estatal y principalmente en los estados fronterizos. La pobreza (ODS 1) y desigualdad (ODS 10), junto con el incremento de la violencia, las violaciones a derechos humanos, la impunidad y corrupción (ODS 16), la discriminación interseccional que enfrenan diversos grupos de migrantes, así como el cambio climático y los desastres naturales (ODS 13), plantean desafíos en distintas esferas del desarrollo sostenible para facilitar y gestionar la migración y movilidad de manera ordenada, segura y regular, bajo un enfoque de derechos humanos y seguridad humana (Meta 10.7).

El **retorno de migrantes** mexicanos requiere de políticas públicas focalizadas y con enfoque diferenciado para garantizar su protección y reintegración a los contextos donde arriban. Al retornar de Estados Unidos y restablecerse en México, las familias binacionales (aquellas de madre o padre mexicanos, con hijos nacidos en Estados Unidos, pero sin el trámite de la doble nacionalidad) encuentran dificultades en el acceso a derechos y servicios. La legislación que garantiza el acceso a la identidad y la educación no está armonizada en todas las entidades y los trámites para que se reconozca la identidad mexicana de NNA (Meta 16.9) nacidos en Estados Unidos representan una barrera para el acceso a la **educación** (Meta 4.1). En 2015, un total de

³⁸³ Secretaría de Gobernación, *Programa Especial de Migración 2014-2018* (Diario Oficial de la Federación: 30 de abril de 2014).

³⁸⁴ OIM, "Hechos y cifras. 2014", <http://oim.org.mx/hechos-y-cifras-2/> (Fecha de consulta: 23 de mayo de 2018).

³⁸⁵ ONU Mujeres, *Las mujeres trabajadoras migrantes, el envío de remesas y la generación de cadenas de cuidado en el corredor Chiapas–Centroamérica* (México, ONU Mujeres: 2015).

³⁸⁶ Comité sobre los Derechos de los Trabajadores Migratorios. *Observaciones finales sobre el tercer reporte periódico de México...* op cit. Párr. 9, 13 y 15.

27,135 NNA nacidos fuera de México y con derecho a la nacionalidad mexicana por madre o padre no asistían a la escuela³⁸⁷. La migración de retorno impone ciertamente presiones a los mercados laborales locales, pero no en términos del aumento de la tasa de desocupación, sino más bien en cuanto al acceso a un **trabajo decente** y de calidad (Meta 8.5). Una tercera parte de los migrantes repatriados se ocupan al regreso en el sector informal, sin acceso a la **protección social** (Meta 10.4), y 8 de cada 10 sin acceso a servicios de **salud**³⁸⁸ (Meta 3.8). La precariedad laboral afecta y limita el acceso a servicios jurídicos y legales de las mujeres repatriadas que son madres para invocar el principio del interés superior y arreglar la custodia de sus hijas e hijos que se quedaron en Estados Unidos.

Los datos comparados sobre **detenciones y deportaciones de migrantes extranjeros** muestran el enfoque de contención y de seguridad nacional de la política migratoria mexicana, que se intensificó a partir de 2014 con la aplicación del Programa Frontera Sur³⁸⁹. Este programa estaba dirigido a proteger y salvaguardar los derechos humanos de los migrantes que ingresaban de manera irregular y transitan por México; no obstante, su aplicación resultó en un incremento del 130% en las detenciones y 124% de las deportaciones entre 2013-2015³⁹⁰. En 2016, 186,216 migrantes irregulares fueron presentados ante una autoridad migratoria, de los cuales 159,872 fueron deportados³⁹¹.

La detención y los procedimientos acelerados de deportación obstruyen la efectiva atención y los recursos dedicados a la identificación, protección y puesta en marcha de soluciones duraderas para las personas que buscan **protección internacional**, en particular de mujeres y NNA. México ha experimentado un crecimiento importante en el número de solicitudes de la condición de refugiado. De acuerdo con estadísticas de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados³⁹² (COMAR), las solicitudes han mostrado un crecimiento exponencial, pasado de 1,296 en 2013 a 14,596 en 2017, siendo este último número el más alto registrado desde 1980, con una tasa de reconocimiento del 63.1. El ACNUR ha expresado su preocupación por la situación de 19,398 personas al final de 2017 en México, de los cuales 9,017 son refugiados/as, 10,368 solicitantes de asilo y 13 apátridas³⁹³.

Las y los **NNA migrantes no acompañados** son el grupo más vulnerable: sufrir graves violaciones a su integridad física y a sus derechos humanos. El número de casos de NNA migrantes no acompañados que son detectados, detenidos y devueltos a su país de origen por autoridades migratorias mexicanas ha mostrado un incremento constante desde 2013 (333%³⁹⁴). En 2016, se registraron 40,114 casos de NNA migrantes extranjeros presentados ante la autoridad migratoria, de los cuales 17,557 viajaba sin la compañía de un adulto. De estos, 96.1% fue retornado a su país

³⁸⁷ INEGI, *Resultados del procesamiento de información de la Encuesta Intercensal 2015, Presentación realizada en el Grupo de Trabajo de la Coordinación Interinstitucional Especializada derivado del Consejo Consultivo de Política Migratoria de SEGOB* (México, 13 de junio de 2016).

³⁸⁸ SEGOB/CONAPO/Fundación BBVA Bancomer, *Anuario de migración y remesas* (México, Fundación BBVA Bancomer: 2015). P. 99.

³⁸⁹ COLEF/CNDH, *Observatorio de legislación y política migratoria. ¿Qué es el Programa Frontera Sur?* (Colegio de la Frontera Norte/Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Boletín No. 1, Febrero 2016). Recuperado de: <http://observatoriocolef.org/wp-content/uploads/2016/06/BOLET%C3%8DN-1-Alejandra-Casta%C3%B1eda.pdf> (Fecha de consulta: 29 de mayo de 2018).

³⁹⁰ *Ibidem*.

³⁹¹ SEGOB/Unidad de Política Migratoria, "Boletín estadístico 2016" (última modificación: 29 de mayo de 2017), [http://www.politicamigratoria.gob.mx/es_mx/SEGOB/Boletín Estadístico 2016](http://www.politicamigratoria.gob.mx/es_mx/SEGOB/Bolet%C3%ADstico_2016) (Fecha de consulta: 29 de mayo de 2018).

³⁹² COMAR, "Estadísticas 2013-2017", https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/290340/ESTADISTICAS_2013_A_4TO_TRIMESTRE_2017.pdf (Fecha de consulta: 25 de junio de 2018).

³⁹³ ACNUR, "UNHCR, World Statistics", <http://popstats.unhcr.org/en/overview> (Fecha de consulta: 27 de junio de 2018).

³⁹⁴ UNICEF, "Niñez migrante. Vidas en tránsito", <https://www.unicef.org/mexico/spanish/17043.html> (Fecha de consulta: 29 de mayo de 2018).

de origen³⁹⁵, 242 solicitaron asilo y solo a 102 se le reconoció su condición de refugiado³⁹⁶. Estas cifras muestran que las y los NNA, principalmente provenientes de Centroamérica, enfrentan fuertes barreras para acceder a la protección internacional en México. Si bien la LGDNNA establece las bases para reconfigurar los procedimientos en torno a la protección de la niñez y adolescencia migrante, la capacidad de las instituciones para identificar, ayudar y proteger a migrantes, solicitantes de asilo y refugiados, y determinar el interés superior de acuerdo con los estándares internacionales es todavía limitada. La aprobación por parte del Senado de reformas a la *Ley de Migración y la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político*, que buscan su armonización con la LGDNNA en materia de niñez y adolescencia migrante, es un avance para garantizar los derechos de protección de NNA migrantes, refugiados y solicitantes de asilo en México³⁹⁷; no obstante, su aprobación en la Cámara de Diputados y Diputadas sigue aún pendiente.

Además de los riesgos a la vida e integridad física que implica el trayecto, los migrantes en tránsito están seriamente expuestos a la **violencia y violaciones graves a derechos humanos** (Meta 16.1). A lo largo de la ruta, son víctimas de asalto, extorsión, secuestro, tortura e, incluso, ejecuciones (como la masacre de San Fernando), entre otros tipos de crímenes cometidos por organizaciones delincuenciales. El **tráfico ilícito de migrantes** es un delito complejo y dinámico que genera miles de millones de dólares para los traficantes, quienes operan a través de redes que cruzan continentes por tierra, mar y aire. Se calcula que en la frontera de Estados Unidos y México los grupos delictivos organizados registran ganancias aproximadas de hasta 6 mil millones de dólares anuales³⁹⁸. De acuerdo con la CIDH, la desaparición de personas en México ha tenido un impacto extremadamente grave en los migrantes³⁹⁹, cuya magnitud se desconoce por la falta de datos desagregados por sexo, edad, nacionalidad y estatus migratorio. El CTM ha identificado que los bajos niveles de denuncia, la ausencia de mecanismos institucionales efectivos para hacer frente a estas violaciones (16.6), el escaso presupuesto asignado para investigar adecuadamente los delitos, pero también la corrupción y colusión de las autoridades federales, estatales y municipales en estos casos (Meta 16.5), obstaculizan el derecho de **acceso a la justicia** (Meta 16.3), la verdad y reparación de las víctimas, y perpetúan la impunidad⁴⁰⁰.

Las mujeres migrantes, solicitantes de asilo y refugiadas son víctimas de múltiples formas de **violencia basada en el género** (Meta 5.2). La política de contención migratoria ha llevado a las mujeres a transitar por rutas más clandestinas y peligrosas para evitar la detención y deportación. Esta situación las pone especialmente en riesgo de ser víctimas de violencia y abuso sexual, violación, desaparición y hasta de feminicidio. La falta de estadísticas oficiales y desagregadas sobre los distintos tipos de violencia contra las mujeres migrantes, refugiadas y solicitantes de

³⁹⁵ SEGOB/Unidad de Política Migratoria. “Boletín estadístico 2016...op cit”

³⁹⁶ COMAR, “Estadísticas 2013-2017...op cit”.

³⁹⁷ ONU-DH, UNICEF, ACNUR, OIM, “Agencias de Naciones Unidas exhortan a la Cámara de Diputados a seguir avanzando en la protección de la niñez y adolescencia migrante y refugiada” (México, Comunicado de prensa: 18 de abril de 2018), https://www.unicef.org/mexico/spanish/noticias_38331.html (Fecha de consulta: 28 de mayo de 2018).

³⁹⁸ UNODC, “La prevención del tráfico ilícito de migrantes una prioridad en México” (7 de septiembre de 2015), <https://www.unodc.org/mexicoandcentralamerica/es/webstories/2015/prevencion-del-trafico-ilicito-de-migrantes.html> (Fecha de consulta: 11 de julio de 2018)

³⁹⁹ CIDH, *Derechos Humanos de los migrantes y de otras personas en el contexto de la movilidad humana en México*, (Washington, OEA/Ser.L/V/II. Doc.48/13. Organización de Estados Americanos: 2013).

⁴⁰⁰ Comité sobre los Derechos de los Trabajadores Migratorios. *Observaciones finales sobre el tercer reporte periódico de México...op cit*. Párr. 23, 31, 33.

asilo, y el origen de los victimarios, ha limitado una respuesta integral y efectiva para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en el contexto de la migración⁴⁰¹.

La **trata de personas** y la migración son problemáticas que están vinculadas y que vulneran derechos básicos de las personas migrantes (Metas 5.2, 8.7 y 16.2). Las mujeres y los NNA no acompañados que provienen de Centroamérica y transitan de manera irregular por México se encuentran en una situación de alta vulnerabilidad a la trata de personas y a otros delitos relacionados. Si bien se carecen de datos y estadísticas desagregados por sexo, edad, nacionalidad y pertenencia étnica que permitan diagnosticar el total de personas migrantes en situación de trata, la modalidad de explotación sexual en la que están involucrados menores de edad es la más identificada y a la que se vincula con una actividad sumamente lucrativa para los grupos delictivos organizados⁴⁰².

La mayoría de las **trabajadoras migrantes** provenientes de Centroamérica trabaja de manera irregular en México, debido a que no cuenta con permisos de trabajo o con documentos que acrediten su estancia legal. A pesar de la existencia de mecanismos para garantizar los derechos de las personas que migran a México en búsqueda de oportunidades laborales, las mujeres han quedado fuera de estas políticas. Ante este panorama, se emplean en la economía informal, en trabajos precarios con salarios muy bajos y de escasa calificación; así como en sectores considerados socialmente “femeninos”, como el trabajo doméstico y de cuidados remunerado, o el trabajo agrícola⁴⁰³. La falta de reconocimiento de los derechos laborales de las trabajadoras domésticas en la legislación laboral mexicana (Meta 8.8) acentúa la vulnerabilidad de las trabajadoras migrantes frente a condiciones de abuso en el trabajo, además de que limita sus oportunidades de acceso a un trabajo decente (Meta 8.5) y a la protección social (Metas 1.3 y 10.4). El CTM, en sus observaciones finales a México, recomendó al país adoptar medidas para garantizar los derechos de todas las trabajadoras migrantes, incluyendo las trabajadoras domésticas⁴⁰⁴. El establecimiento de una acción afirmativa que permita garantizar el acceso a la documentación migratoria con autorización para trabajar a las trabajadoras agrícolas y domésticas migrantes (Meta 10.7) permitiría dar un salto cualitativo a favor de la igualdad de oportunidades (Meta 10.3), no sólo para el acceso a la documentación migratoria, sino para el trabajo decente (Meta 8.5), la protección social (Metas 1.3 y 10.4), acceso a servicios de salud (Meta 2.1) e igualdad en el acceso a la justicia (Meta 16.3).

Dentro de la población que es detenida y deportada se encuentran también personas trabajadoras migrantes que permanecen en México y trabajan de manera irregular en el sector informal. Estas suelen ser personas de nacionalidades que aún no tienen acceso a procedimientos simplificados de movilidad laboral, lo cual influyen en su ingreso y permanencia de manera irregular. Se refiere principalmente en trabajadores agrícolas, pero también trabajadores en las economías urbanas.

El **desplazamiento forzado de personas** en México tiene diversas causas, entre ellas la violencia, (ODS 16) los desastres naturales y el cambio climático (ODS 13), los proyectos de desarrollo que afectan principalmente el desplazamiento de pueblos y comunidades indígenas (ODS 12) o los

⁴⁰¹ Informe de Agencias de Naciones Unidas en México a la Lista de cuestiones previa a la presentación del tercer informe periódico de México a la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migrantes y de sus Familias. Junio de 2017. Documento confidencial.

⁴⁰² UNODC, *Diagnostico nacional sobre la situación de trata de personas en México...op cit.* P. 51.

⁴⁰³ ONU Mujeres/Instituto de las Mujeres para la Migración (IMUMI), *Las trabajadoras migrantes centroamericanas en Chiapas. Recomendaciones de política pública para garantizar el ejercicio de sus derechos* (México, ONU Mujeres: 2015).

⁴⁰⁴ Comité sobre los Derechos de los Trabajadores Migratorios, *Observaciones finales sobre el tercer reporte periódico de México...op cit.* Párr. 30

grupos de autodefensa⁴⁰⁵. En los últimos años, la escalada de violencia en el contexto del combate contra el crimen organizado ha provocado el desplazamiento forzado de un sector importante de la población, incluyendo migrantes extranjeros. Cálculos del Centro de Monitoreo de Desplazamiento Interno indican que en, 2015, había en México un total acumulado de 287 mil personas desplazadas internas. La ausencia de cifras oficiales y la falta de reconocimiento de las autoridades mexicanas de la existencia de este problema provoca su invisibilidad y ha limitado una respuesta integral.

4.6. Risk profile

El Informe Mundial de Riesgos 2018⁴⁰⁶ evidencia escenarios de gran incertidumbre, inestabilidad y fragilidad generalizadas a nivel global y de un creciente descontento popular con el orden político y económico existente. Los resultados de la Encuesta Anual de Percepción de Riesgos Mundiales 2017-2018, con la cual se nutre dicho informe, sugieren escenarios adversos para 2018. Si bien uno de los hallazgos es la menor prominencia de los riesgos económicos, dado que los indicadores más recientes muestran una mejora, si bien modesta, de la economía mundial, las mayores inquietudes se concentran en cuatro riesgos por probabilidad percibida: (i) la desigualdad e injusticia persistentes, con énfasis al interior de los países, que puede dar origen a una inestabilidad social profunda; (ii) las tensiones políticas nacionales e internacionales, que incluyen temores sobre el ascenso de la extrema derecha, el auge del nacionalismo, el repunte del proteccionismo y del populismo, así como una disminución del compromiso del multilateralismo basado en reglas; (iii) los riesgos ambientales, entre ellos las temperaturas y los fenómenos climáticos extremos, la aceleración de la pérdida de biodiversidad, la contaminación del aire, el suelo y el agua, los fracasos en la mitigación del cambio climático y la adaptación a él, así como la interconexión entre éstos y riesgos de otras categorías, como la crisis del agua y la migración involuntaria a gran escala; así como (iv) las vulnerabilidades y los ataques cibernéticos, que pueden desestabilizar tanto a entes públicos como privados, incluyendo el espionaje a los movimientos sociales o disidentes.

México enfrenta diversos riesgos con un grado diferenciado en cuanto a su probabilidad. El Índice de Riesgo País 2018⁴⁰⁷, que cuantifica el riesgo de un shock, como una crisis económica o un cambio repentino en el entorno político, el cual afectaría las condiciones comerciales dentro de un país, y en donde un puntaje entre 80-100 significa estabilidad y menor a 49 inestabilidad, ubica a México con un índice de riesgo país moderado (59.2), con mejores perspectivas en términos económicos (66.7), con una variación de -3.7 puntos con respecto al año anterior en cuanto a los riesgos políticos (56.9) debido a las elecciones del 2018, pero con un índice de riesgo operacional alto (51.2) como resultado principalmente de la corrupción y la situación de violencia e inseguridad que persiste en el país. En términos de los riesgos ambientales, el Índice de Gestión de Riesgo 2018⁴⁰⁸ ubica a México en el lugar 51 de 191 países, con un valor de 4.8, que implica un

⁴⁰⁵ CNDH, *Informe especial sobre desplazamiento forzado interno en México* (México, CNDH: 2016). Recuperado de http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Informes/Especiales/2016_IE_Desplazados.pdf (Fecha de consulta: 29 de mayo de 2018).

⁴⁰⁶ Foro Económico Mundial, *Informe de riesgos globales 2018, 13.a edición* (Ginebra, Foro Económico Mundial: 2018).

⁴⁰⁷ El Índice de Riesgo País se basa en datos de BMI Research y cuantifica el riesgo de un shock, como una crisis económica o un cambio repentino en el entorno político, el cual afectaría las condiciones comerciales dentro de un país. El IRC es el promedio de seis componentes del índice de riesgo: los índices de riesgo político y económico a corto y largo plazo, y también el riesgo operacional, que recibe una doble ponderación porque no se divide en diferentes marcos de tiempo. El riesgo operacional evalúa cuatro áreas principales: mercado de trabajo, comercio e inversión, logística y crimen y seguridad. El índice y sus componentes, así como el mapa interactivo, se pueden consultar en: <https://www.marsh.com/content/marsh/political-risk-map-d3/prm-2018.html#>

⁴⁰⁸ European Commission, "Index for Risk Management. Country risk profile. Mexico", <http://www.inform-index.org/Countries/Country-profiles/iso3/MEX> (Fecha de consulta: 3 de agosto de 2018).

riesgo medio, pero con un índice alto (8.2) en la dimensión “amenazas y exposición”, por encima del promedio regional (4.7), que lo colocan en el lugar 7.

Con base en un análisis contextual del riesgo en México, se identifican diversos escenarios que podrían impactar el desarrollo y rumbo del país durante el próximo sexenio.

a) Riesgos políticos

Nuevo escenario político. La elección de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) representa un cambio estructural para la política mexicana y más grande que los resultados de las tres últimas elecciones nacionales (2000, 2006 y 2012), cuando la presidencia se alternó entre el PRI y el PAN. Sin duda, el cambio de gobierno, así como de autoridades nacionales y subnacionales resultado de las elecciones de 2018, junto con la redefinición de las prioridades nacionales de desarrollo, marcarán un nuevo escenario político en México para el periodo 2018-2024, el cual puede representar al mismo tiempo una oportunidad o un claro desafío para afianzar el camino del país hacia el desarrollo sostenible con base en los preceptos de la Agenda 2030 y con los ODS como hoja de ruta para la acción.

El próximo presidente de México arribará al poder con un sólido bono democrático y mayorías en el Poder Legislativo que hacen viable cambios prometidos durante la campaña presidencial en temas medulares y polémicos que requerirían eventuales reformas legislativas y/o constitucionales. No pueden descartarse riesgos relativos a un retroceso o puesta en marcha más lenta de las reformas estructurales iniciadas en 2012 por la administración que concluye, muchas de ellas fundamentales para el desarrollo del país y que han empezado a dar resultados de acuerdo con la OCDE. Si bien es prematuro y existe todavía incertidumbre respecto al rumbo, qué tan rápido y en qué grado se implementará la agenda política de la próxima administración, las promesas de campaña mostraron nacionalismo, pragmatismo, orientación hacia lo social y una mayor intervención del Estado en la economía, lo que probablemente revele la dirección de las políticas públicas del próximo gobierno federal. Un riesgo a considerar en este sentido es la ausencia o poca claridad en la agenda política del presidente electo sobre temas fundamentales para el trabajo del SNU en México, como la integralidad del desarrollo sostenible, la protección, garantía y ejercicio de todos los derechos humanos para todas las personas o la igualdad de género como acelerador y resultado del desarrollo. Existe la posibilidad de que la prioridad asignada a los temas de corrupción, violencia e inseguridad y desarrollo social, este último con un fuerte enfoque basado en transferencias monetarias, opaquen los avances y desafíos otros ámbitos.

Incremento de la violencia e inseguridad. De acuerdo con las cifras del Secretariado Nacional de Seguridad Pública, el primer semestre de 2018 ha sido el más violento desde que se tiene registro. Con un total de 15 mil 973 personas asesinadas, el país acumula una tasa de 11.01 homicidios por cada 100 mil habitantes, la más alta desde 1997, lo que en términos absolutos significa un promedio de 88.7 homicidios al día. De seguir esta tendencia, AMLO llegará al poder en el año más violento del cual se tenga registro en México, por lo que disminuir la espiral de violencia e inseguridad será uno de los mayores retos de la próxima administración. Con base en las promesas de campaña, se percibe un viraje radical en la estrategia de seguridad y combate al crimen organizado que ha estado operando desde los dos últimos sexenios. El presidente electo ha manifestado su intención de retirar a las Fuerzas Armadas de las labores de seguridad, crear una Guardia Nacional y romper el ciclo de violencia a través de un proceso de paz y reconciliación que contempla la amnistía como una posibilidad. Si bien existe incertidumbre sobre cómo estas

promesas se materializarán a través de políticas públicas e intervenciones concretas, existe el riesgo de que no sean mecanismos efectivos para alcanzar resultados tangibles en el corto plazo.

Tendencias conservadoras y de ultraderecha en América Latina. Un reto contextual para México se refiere al incremento de las posturas ultraconservadoras y anti-derechos a nivel regional y global, las cuales atentan el progreso logrado en la agenda de derechos humanos y de igualdad de género, particularmente de los derechos de las mujeres, de las y los jóvenes, y la población LGBTI, con énfasis en los derechos sexuales y reproductivos. Las alianzas políticas, la visibilidad en el debate público, la influencia en la discusión electoral y el respaldo popular de los grupos ultraconservadores durante los procesos electorales de 2017 y 2018 en diversos países de la América Latina, incluido México, ponen en riesgo el avance de las agendas socialmente progresistas y la consolidación de los derechos ganados en distintos ámbitos. Los actores ultraconservadores (que están tanto en la sociedad civil, como en las instituciones intergubernamentales, estatales y religiosas) actualmente operan en los espacios internacionales y regionales de derechos humanos con un mayor impacto, frecuencia, coordinación, recursos y apoyo; usan argumentos basados en interpretaciones de la religión, la cultura y la tradición desde posiciones anti-derechos y han desarrollado todo un espectro de discursos sobre temas compartidos, principalmente relacionados con la soberanía y seguridad nacional, la familia, la vida, el género y una concepción particular de la libertad religiosa⁴⁰⁹. Sin duda, esta coyuntura tiene y tendrá un impacto en México, dada la alianza entre el partido del presidente electo y el PES, un partido evangélico, con una clara agenda conservadora que está en contra del derecho de las mujeres a interrumpir su embarazo, al matrimonio igualitario y la legalización de las drogas, y con el consecuente riesgo y probabilidad de legitimar y alentar regresiones en el reconocimiento y goce efectivo de los derechos humanos⁴¹⁰.

Endurecimiento de la política y controles migratorios de EU. La adopción e implementación por parte del gobierno estadounidense de la política de tolerancia cero a la migración irregular en la frontera sur con México, además de que viola diversas normas internacionales de derechos humanos y atenta contra el espíritu de la Agenda 2030 y los ODS, tendrá sin duda alguna un impacto en el incremento de las deportaciones de connacionales y ejercerá una mayor presión al sistema de asilo mexicano para recibir y aceptar a más solicitantes de asilo y otorgar la protección internacional de refugiados, con la consecuente garantía de acceso efectivo a los programas de integración y ejercicio de derechos económicos y sociales.

⁴⁰⁹ Observatorio sobre la Universalidad de los Derechos (OURS), *Derechos en riesgo. Informe sobre tendencias en derechos humanos 2017* (Toronto y Ciudad de México, Association for Women's Rights in Development –AWID/OURS: 2017). Recuperado de: <https://www.awid.org/sites/default/files/atoms/files/derechos-en-riesgo-ours-2017.pdf> (Fecha de consulta: 6 de junio de 2017).

⁴¹⁰ Por ejemplo: el 22 de marzo de 2018 el Congreso de la Unión aprobó una adición al artículo 10 BIS de la Ley General de Salud, la cual establece que el personal médico y de enfermería que forma parte del Sistema Nacional de Salud podrá ejercer la objeción de conciencia y excusarse de participar en la prestación de los servicios de salud establecidos en dicha ley, salvo en casos en los que se ponga en riesgo la vida del paciente o se trate de una urgencia médica. Si bien la reforma deriva de la interpretación del derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión, establecido en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, no previó las garantías adecuadas para que los servicios médicos nunca sean negados, garantizando la referencia inmediata de quien requiere el servicio con otro prestador u otra prestadora que sí pueda suministrarlo, así como la contratación de personal no objetor en todas las instalaciones de atención médica. De igual forma, la reforma no consideró que la objeción de conciencia es siempre una decisión individual del personal sanitario directamente implicado en la realización de los procedimientos médicos y que la misma debe ejercerse de forma justificada y anticipada, sin eximir a las instituciones públicas de sus obligaciones como garantes de los derechos humanos de las y los pacientes. Al no considerar estas precisiones, la reforma a la Ley General de Salud puede generar obstáculos sustantivos para que el Estado mexicano pueda atender los retos que persisten en materia de mortalidad materna, embarazo en adolescentes, violencia sexual e interrupción insegura de embarazos.

b) Riesgos económicos

Incertidumbre económica global. De acuerdo con la CEPAL⁴¹¹, la implementación de la Agenda 2030 y el avance hacia el logro de los ODS ocurrirán en un contexto internacional de incertidumbre económica global. Si bien hay señales de recuperación de la economía mundial que permiten tener expectativas optimistas respecto a las posibilidades de crecimiento de las economías de América Latina y el Caribe en los próximos años, los riesgos geopolíticos, en especial aquellos derivados del mayor proteccionismo observado en algunos países y que se reflejan en el creciente apoyo a partidos nacionalistas y anti-globalización en algunos países, así como una menor cooperación internacional resultado de los desequilibrios de cuenta corriente de algunas economías clave, aunado al elevado endeudamiento global, son una clara amenaza para las economías latinoamericanas y, por ende, para la economía mexicana.

Renegociación del TLCAN. Una renegociación desfavorable del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) representa un claro desafío para la economía mexicana en general, dada la dependencia y relación comercial con Estados Unidos. Las economías de los estados y municipios exportadores del país son los que más se verán impactados en el corto y mediano plazo. Si bien los riesgos de ruptura de la renegociación han disminuido, las expectativas de una renegociación prolongada han aumentado, lo que puede impactar en la llegada de inversión extranjera y elevar la volatilidad en el mercado cambiario, repercutiendo en este sentido en las proyecciones de crecimiento económico. El triunfo de AMLO y el largo periodo de transición agregan sin duda incertidumbre a las negociaciones en curso. Si bien existe el riesgo de que el perfil nacionalista del presidente electo haga difícil llegar a un acuerdo con una administración estadounidense proteccionista, su compromiso público con el TLCAN ha generado confianza entre el sector empresarial mexicano. De acuerdo con el Banco Mundial, a medida que disminuya la incertidumbre política relacionada con el contexto electoral y las renegociaciones del TLCAN, el crecimiento de la inversión puede acelerarse desde finales de 2018 en adelante, apoyando un repunte en el crecimiento económico hacia su tasa potencial a largo plazo⁴¹².

c) Riesgos ambientales

Desastres. México está altamente expuesto a una gran variedad de fenómenos geológicos e hidrometeorológicos y está clasificado como uno de los 30 países en el mundo más expuestos a tres o más tipos de peligros naturales (ver capítulo 4.3.5). En promedio, en México se experimentan más de 90 sismos al año con una magnitud de 4 grados o más en la escala de Richter. Cerca del 40% del territorio mexicano y más de una cuarta parte de la población están expuestos a tormentas, huracanes e inundaciones⁴¹³. Poco menos de nueve de cada diez desastres en México son por fenómenos hidrometeorológicos. Otros peligros con impactos notables son los incendios forestales y los deslaves.

⁴¹¹ CEPAL, *Segundo Informe....op cit.* P. 17

⁴¹² Banco Mundial, "México. Panorama general", <http://www.bancomundial.org/es/country/mexico/overview#2> (Fecha de consulta: 20 de mayo de 2018).

⁴¹³ Banco Mundial y Secretaría de Gobernación, *FONDEN: El Fondo de Desastres Naturales de México – una reseña*, (México, Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento/Banco Mundial: 2012). P. 12. Recuperado de: http://www.proteccioncivil.gob.mx/work/models/ProteccionCivil/Resource/469/1/images/LibroFonden_versionEsp.pdf (Fecha de consulta: 6 de junio de 2017).

De acuerdo con el Presidente de la Coordinación Nacional de Protección Civil⁴¹⁴, en el periodo 2013-2018 se emitieron 433 declaratorias de emergencia y 177 de desastre. El año 2017 fue un año histórico para México en materia de desastres naturales, ya que se vivieron 10 fenómenos de ese tipo en menos de dos meses, incluyendo los tres sismos de septiembre. El impacto económico y social de los desastres es alto y es un factor determinante por considerar en el marco de la implementación de la Agenda 2030, los ODS y el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030. Según el Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED), en el periodo 2000-2016, los daños y pérdidas para el país derivadas de los desastres naturales y antrópicos han ascendido a 424 mil 923 millones de pesos, con más de 33 millones de habitantes afectados y 8 mil 164 fallecidos. En 2017, los fenómenos naturales registrados generaron pérdidas económicas por 470 mil millones de pesos.

⁴¹⁴ Cámara de Diputados, “Se lleva a cabo Foro Internacional de protección civil y gestión de riesgos de desastres” (Boletín N°. 5444, 8 de mayo de 2018), <http://www5.diputados.gob.mx/> (Fecha de consulta: 16 de junio de 2018).

5.1. Desempeño en el cumplimiento de los ODS

De acuerdo con el *SDG Index 2017*⁴¹⁵, México retrocedió dos lugares con respecto al 2016, situándose en la posición número 58 (valor 69.1) de 157 países, por debajo de diversos países de América Latina, entre ellos Argentina (lugar 41), Chile (44), Uruguay (47), Costa Rica (53) y Brasil (56), y en el último lugar de los países de la OCDE (valor promedio 77.7).

De acuerdo con el grado de consecución (semáforo) de cada uno de los ODS, México presenta un rezago considerable o desempeño deficiente (color rojo) en el cumplimiento de ocho objetivos y un desempeño intermedio con lento avance en siete (color naranja). Solamente en dos objetivos México muestra un mejor desempeño, aunque con calificaciones intermedias (color amarillo). En ningún objetivo se ha logrado el semáforo verde.

Desempeño de México por ODS



Fuente: SDG Index and Dashboards Report 2017

Semáforo de México por ODS

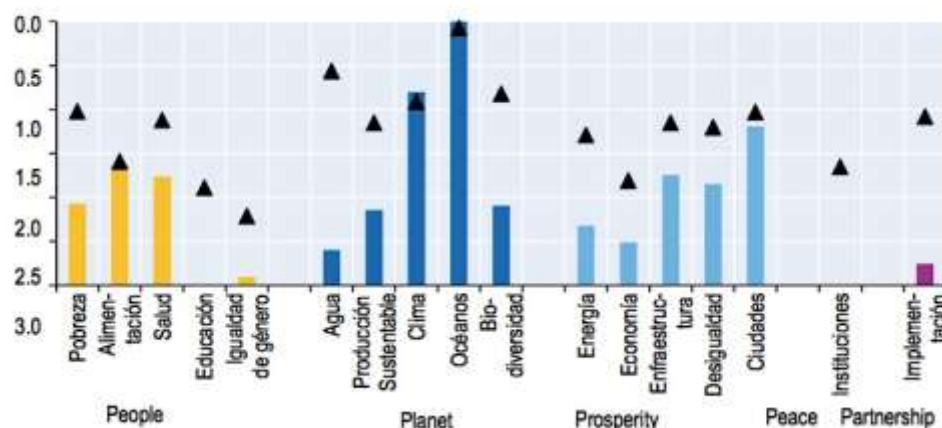


Fuente: *SDG Index and Dashboards Report 2017*

Un análisis de la OCDE sobre la viabilidad de México en el cumplimiento de los ODS muestra que el país está más cerca de alcanzar los objetivos del eje Planeta que de los de las categorías Personas, Prosperidad, y Paz. Las brechas en el desempeño de México en comparación con el promedio de la OCDE son particularmente grandes en educación (ODS 3); paz, justicia e instituciones sólidas (ODS 16) e Igualdad de género (ODS 5). México está adelantado o bastante próximo a la distancia promedio de la OCDE en varios objetivos, como en Hambre cero (ODS 2), Acción por el clima (ODS 13), Vida submarina (ODS 14) y Ciudades y comunidades sostenibles (ODS 11), pero está considerablemente más lejos que el promedio de la OCDE de alcanzar los objetivos relacionados con Educación de calidad (ODS 4), Agua limpia y saneamiento (ODS 6), Biodiversidad (ODS 15), Paz, justicia e instituciones sólidas (ODS 16) y Alianzas para lograr los objetivos (ODS 17).

⁴¹⁵ El Índice de los ODS es una iniciativa de la Fundación Bertelsmann y la Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible (SDSN) de la ONU. Se elaboró sobre la base de una serie de indicadores para cada uno de los 17 ODS, utilizando los datos de publicación más reciente. Para su medición, se incluyeron indicadores que ofrecen datos para, al menos, el 80% de todos los países que tengan más de 1 millón de habitantes. En la medida de lo posible, el Índice de los ODS utiliza los indicadores oficiales propuestos por el Grupo Interagencial y de Expertos de los ODS. En los casos en los que los indicadores oficiales no tienen suficientes datos disponibles o cuando sigue habiendo lagunas en los indicadores, se revisaron parámetros oficiales y otros parámetros publicados por fuentes fidedignas para su inclusión en el Índice de los ODS.

Distancia actual de México para el cumplimiento de los ODS en comparación con el promedio de la OCDE



Nota: Esta gráfica muestra la distancia que México habrá de recorrer para llegar a cada uno de los 17 ODS. Las barras indican el progreso de México y el triángulo el promedio de la OCDE. El 0 indica que se ha llegado al nivel para 2030.

Fuente: OCDE (2018). *Getting it right. Prioridades estratégicas para México*. P. 5, con base en OECD (2017), *Measuring Distance to the SDG Targets: an assessment of where OECD countries stand*.

5.2. Gobernanza e inversión para el cumplimiento de la Agenda 2030

México ha mostrado un avance importante para garantizar un entorno habilitante para el cumplimiento de la Agenda 2030 y los ODS. Los principales avances se encuentran en los siguientes rubros:

Arreglos institucionales

- Creación del *Comité Técnico Especializado de los Objetivos de Desarrollo Sostenible* (2015⁴¹⁶), bajo el liderazgo del INEGI y con la participación de más de 20 dependencias, entidades y organismos de la APF. Su objetivo es coordinar los trabajos para la generación y actualización de información estadística para medir y dar seguimiento a los objetivos, las metas e indicadores de la Agenda 2030.
- Instalación del *Grupo de trabajo para el Seguimiento Legislativo de los ODS del Senado* (2016). Su objetivo es dar seguimiento y respaldo al cumplimiento de la Agenda 2030⁴¹⁷.
- Creación de la *Comisión Ejecutiva para el Cumplimiento de la Agenda 2030 de la CONAGO* (2016⁴¹⁸). Su objetivo es avanzar el compromiso de los gobiernos estatales para que inicien acciones de monitoreo y planeación.

⁴¹⁶ INEGI, *Modificación del acuerdo de creación del comité técnico especializado del sistema de información de los objetivos de desarrollo del milenio para convertirlo en el Comité técnico especializado de los Objetivos de Desarrollo Sostenible*. Recuperado de: <http://www.objetivosdesarrollodelmilenio.org.mx/Doctos/AcuerdoCrea.pdf> (Fecha de consulta: 28 de mayo de 2018).

⁴¹⁷ Senado de la República/Coordinación de Comunicación Social, *Instalan Grupo de seguimiento legislativo de los Objetivos de Desarrollo Sostenible*, (Boletín 033, 8 de septiembre de 2016) Recuperado de: <http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/30725-instalan-grupo-de-seguimiento-legislativo-de-los-objetivos-de-desarrollo-sostenible.html> (Fecha de consulta: 28 de mayo de 2018).

⁴¹⁸ CONAGO, "Comisión para el cumplimiento de la Agenda 2030", <https://www.conago.org.mx/comisiones/cumplimiento-agenda-2030> (Fecha de consulta: 26 de mayo de 2018).

- Instalación del *Consejo Nacional de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible* (2017⁴¹⁹), en tanto que instancia de vinculación del Ejecutivo Federal con los gobiernos estatales, el sector privado, la sociedad civil y la academia. Su objetivo es coordinar las acciones para el diseño, la ejecución y la evaluación de estrategias, políticas, programas y acciones para el cumplimiento de la Agenda 2030.
- Creación en 31 de las 32 entidades federativas de Órganos de Seguimiento e Instrumentación e instalación formal de 29 órganos (dato a junio de 2018). En el ámbito municipal, más de 300 ayuntamientos cuentan con mecanismos similares⁴²⁰.

Armonización legislativa

- Incorporación en la *Ley de Planeación* de conceptos clave sobre las tres dimensiones del desarrollo sostenible, un marco temporal más amplio que permita planear cada sexenio con visión más estratégica, así como la posibilidad de que las Administraciones Públicas Federales correspondientes a los periodos 2018-2024 y 2024-2030 consideren en su contenido las estrategias para el logro de los ODS y sus metas (art. 5º transitorio).

Alineación programática

- Aplicación de la Herramienta de Evaluación Integrada Rápida, para analizar programas sectoriales, nacionales y especiales, así como los 5 ejes del PND. Como resultado, el PND 2013-2018, desde sus ejes, objetivos, estrategias y líneas de acción, hasta sus líneas transversales, refleja concordancia con la Agenda 2030. Falta realizar un análisis más exhaustivo que incluya la revisión de indicadores, así como las fuentes de información de los mismos para conocer la efectividad y pertinencia de dichas políticas públicas para el cumplimiento de los ODS. Es de esperarse que este proceso se detenga hasta el arribo de la nueva administración.
- Incorporación de los ODS y del enfoque sostenible en 7 Planes Estatales de Desarrollo⁴²¹.

Vinculación presupuestaria

- Realización del análisis del presupuesto federal para identificar las coincidencias de asignaciones presupuestales con los 17 ODS desde un enfoque de gestión para resultados. Como resultado, de 584 programas, 83.2% resultó vinculado a la Agenda 2030⁴²².
- Incorporación en el PEF 2018 de un esquema de desarrollo sostenible a los procesos de programación y presupuestación: 160 de las 169 metas de los ODS se vinculan con, al menos, un Programa Presupuestario⁴²³.

Monitoreo y seguimiento

- Lanzamiento de la *Plataforma Nacional de Seguimiento de los ODS*, actualmente con información de 67 indicadores, algunos de ellos con desglose a nivel estatal y municipal.

⁴¹⁹Diario Oficial de la Federación, *Decreti por el que se crea el Consejo Nacional de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible*, 26 de abril de 2017. Recuperado de: http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5480759&fecha=26/04/2017

⁴²⁰Gobierno de la República, *Segundo Informe Nacional Voluntario...op cit.* P. 32.

⁴²¹Francisco Guzmán, Jefe de la Oficina de la Presidencia de la República, "Avances y retos en la implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en México, Presentación durante la Reunión de Embajadores y Cónsules 2018" (Comunicado de prensa: 8 de enero de 2018, <https://www.gob.mx/agenda2030/prensa/avances-y-retos-en-la-implementacion-de-la-agenda-2030-para-el-desarrollo-sostenible-en-mexico?state=published> (Fecha de consulta: 3 de junio de 2018).

⁴²²SHCP/PNUD, *Invertir para el desarrollo sostenible. ¿Cómo invierte México en los Objetivos de Desarrollo Sostenible?* (México, SHCP/PNUD: 2017). Recuperado de: http://www.mx.undp.org/content/mexico/es/home/library/democratic_governance/invertir-para-el-desarrollo-sostenible--como-invierte-mexico-en.html (Fecha de consulta: 29 de mayo de 2018).

⁴²³Transparencia presupuestaria, "Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación", http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/infografia_ppef2018#page3 (Fecha de consulta: 29 de mayo de 2018).

- Integración del Reporte Nacional para la Revisión Voluntaria de México en el marco del Foro Político de Alto Nivel sobre Desarrollo Sostenible. Hasta el momento, el país ha sido parte de la revisión voluntaria en 2016 (en donde se examinó el progreso en la puesta en marcha de la Agenda 2030, con énfasis en los avances y desafíos en los medios de implementación) y de 2018, en donde se examinó el progreso en el cumplimiento de los ODS 6, 7, 11, 12 y 15, incluyendo de forma transversal el 17.

Alianzas con actores clave

- Establecimiento de la *Alianza por la Sostenibilidad*, iniciativa de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID), que tiene como propósito establecer una plataforma de colaboración estratégica con el sector privado para impulsar proyectos de desarrollo orientados al cumplimiento de la Agenda 2030 y los ODS.

5.3 Retos para la implementación

A dos años del inicio formal de la implementación de la Agenda 2030, y partiendo del diagnóstico situacional contenido a lo largo del CCA, se identifican los siguientes retos que México deberá solventar para avanzar con paso firme hacia la consecución de todos los ODS al 2030.

Visión transexenal. Superar la inercia sexenal de la planeación nacional y estatal del desarrollo e institucionalizar una visión de largo plazo para la implementación de la Agenda 2030 es fundamental para avanzar sostenidamente en el cumplimiento de los ODS. Todo apunta a que la Estrategia Nacional para el Cumplimiento de la Agenda 2030 (próxima a presentarse) va en esa dirección. La creación del Consejo Nacional de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, la alineación del PND y la vinculación de los programas presupuestarios son claves en la consecución de tal fin. Este aspecto cobra particular relevancia dado los diversos procesos electorales, los consecuentes cambios de gobierno y la redefinición de prioridades que tendrán lugar en el transcurso de la implementación de la Agenda 2030.

Visión de Estado. La apropiación de la Agenda 2030 por parte de todos los entes públicos es condición indispensable para su efectiva realización, y no solo responsabilidad de los Poderes Ejecutivos. El rol del Congreso de la Unión y los congresos locales es fundamental no solamente para legislar con enfoque de desarrollo sostenible y fortalecer un marco normativo propicio para el cumplimiento de los ODS, sino también para hacer un seguimiento más puntual en el proceso de aprobación de los presupuestos públicos y fortalecer la transparencia y rendición de cuentas en su realización. El Poder Judicial de la Federación y el de los estados está llamado a jugar un papel central en la implementación de la Agenda 2030, con énfasis en el ODS 16. No obstante, hasta el momento, su involucramiento, participación y apropiación ha sido marginal.

Integralidad. México necesita transitar de la inercia sectorial imperante de las políticas públicas, hacia un enfoque integral en la implementación de los ODS, a través de intervenciones intersectoriales, multidimensionales e interterritoriales para el desarrollo sostenible (Meta 17.14). En este proceso resulta indispensable situar a la igualdad de género y el enfoque de derechos humanos en el centro de la implementación de los ODS en los tres niveles de gobierno. El fortalecimiento de la coordinación y articulación intersectorial, tanto vertical como horizontal, es crucial para evitar la fragmentación y favorecer la coherencia entre las políticas de desarrollo. Para avanzar en este sentido, es necesario identificar las interrelaciones entre los ODS y las potenciales sinergias entre las metas para formular e implementar políticas catalizadoras del progreso

(aceleradores). Un gran reto para avanzar la integralidad de la Agenda 2030 es garantizar que las y los funcionarios públicos de los tres niveles y órdenes de gobierno con responsabilidades dentro del proceso de implementación, seguimiento, monitoreo y revisión de los ODS tengan el conocimiento técnico y la claridad para aplicar el enfoque integrador.

No dejar a nadie atrás. Las desagregaciones son uno de los mayores retos estadísticos. Tal y como se observó a lo largo de la Sección IV, hacen falta más y mejores datos y estadísticas desagregados por sexo, edad y otras condicionantes como el ingreso, la discapacidad, la pertenencia étnica o cultural, el estatus migratorio o la preferencia sexual, entre otras, que permitan hacer análisis integrados de las privaciones combinadas y de las múltiples desigualdades y formas de discriminación que se cruzan entre sí (Meta 17.18). Lo anterior, con miras a informar y enfocar adecuadamente las políticas públicas, acciones afirmativas y los presupuestos diseñados para atender a grupos específicos de población que, además, puedan ser plenamente identificados por su ubicación geográfica. El principio de *No dejar a nadie atrás* implica para México atender diversas y complejas carencias y desigualdades al mismo tiempo, logrando resultados para todos los grupos de población también al mismo tiempo.

Desigualdad entre regiones y estados. Atender las desigualdades territoriales en todas sus dimensiones y equilibrar el desarrollo sostenible en las entidades federativas es uno de los grandes desafíos en la implementación de los ODS. Además de contar con datos e información estadística geoespacial que permita identificar las localidades que requieren de un proceso de aceleración, la focalización territorial como eje de las políticas públicas es una estrategia que México deberá privilegiar para cerrar las profundas brechas que separan del desarrollo a los estados y municipios más rezagados del país, con énfasis los del sur-sureste de México. Para no dejar a nadie atrás, México se podría plantear una política de focalización territorial para la universalización de los servicios en los estados con los mayores rezagos sociales.

Localización de los ODS a nivel estatal y municipal. La efectiva localización de los ODS a nivel estatal y municipal requiere de la apropiación de la Agenda 2030 por parte de todos los actores subnacionales, pero también necesita de gobiernos locales con capacidades institucionales sólidas y de organizaciones de la sociedad civil robustas para comprender la articulación de las tres dimensiones del desarrollo sostenible, su traducción en estrategias, políticas y presupuestos públicos encaminados al logro de los ODS y avanzar el monitoreo, seguimiento y la rendición de cuentas. Las marcadas desigualdades y asimetrías de las capacidades institucionales a nivel estatal, con especial énfasis a nivel municipal, imponen retos considerables para garantizar la efectiva localización de los ODS en todo el territorio nacional.

Brecha de datos. De acuerdo con la CEPAL⁴²⁴, México trabaja actualmente con un conjunto de 80 indicadores de monitoreo a escala nacional, cubriendo todos los ODS. El país produce 32% de los indicadores del marco mundial de indicadores de los ODS; 33% no los produce, pero los puede producir con las fuentes de información existentes; 16% tiene alguna información, pero es necesario mejorarla o complementarla para producir el indicador; y 20% no tiene la información para producir el indicador. La brecha de datos sigue siendo considerable, con especial énfasis en la generación de datos desagregados y con perspectiva de género en todos los ODS, así como las estadísticas del ODS 5, los cuales permitirían monitorear la eliminación de las desigualdades entre mujeres y hombres en todas las esferas del desarrollo sostenible (Meta 17.19).

⁴²⁴ CEPAL, *Segundo Informe...op cit.* P. 142.

Línea de base y métricas de las metas. Formular metas nacionales desde una perspectiva de derechos y con base en un principio de progresividad, que tomen en cuenta las disparidades regionales, entre estados y grupos de población, es fundamental para medir el progreso de México en el cumplimiento de los ODS. Esto es particularmente relevante, por ejemplo, en el ajuste a nivel nacional que deberán realizarse a diversas metas, como la 3.1 sobre la reducción de la Razón de Mortalidad Materna. La definición de métricas de avance acordes al contexto y el desarrollo de México es crucial para revisar el progreso en todos los ODS, corregir el rumbo en caso de ser necesario y fortalecer las acciones para lograr el resultado.

Financiamiento. México requiere garantizar los recursos necesarios para el cumplimiento de los ODS y vincular los recursos existentes para la implementación de la Agenda 2030 en todas sus dimensiones (Meta 17.1). Tal y como se mencionó en el apartado 4.2.3, si bien la reforma fiscal (2014) ha tenido ya algunos efectos en los ingresos fiscales como porcentaje del PIB, el incremento en la recaudación tributaria es aún baja, no ha habido una mejora en la redistribución del ingreso, ni una mayor eficiencia del gasto social. La revisión de algunos programas públicos respecto a la evaluación de su efectividad, por el lado del gasto, y la revisión de la estructura tributaria del país es fundamental en un contexto económico y social profundamente desigual. Un análisis del impacto de la política fiscal sobre la desigualdad personal y regional en México⁴²⁵ muestra que el “potencial redistributivo de la política fiscal, en efecto, enfrenta realidades socioeconómicas que presentan impactos presupuestarios diferenciados. Visto desde la perspectiva del gobierno federal, no cuesta lo mismo reducir la desigualdad y combatir la pobreza en Chiapas que en Nuevo León”. Esta consideración tiene una importancia crítica para cerrar las brechas de desigualdad a entre regiones y estados, y para el adecuado financiamiento y efectivo cumplimiento de los ODS a nivel subnacional.

Mobilización de recursos. El cumplimiento de la Agenda 2030 y los ODS requiere de una gran movilización de recursos internos y externos, y exige cambios en el financiamiento, la organización y la asignación de los recursos (Meta 17.1). Sin duda alguna, la vinculación del PEF 2018 con los 17 ODS es un avance fundamental que el próximo gobierno federal deberá sostener bajo un enfoque de progresividad. El gran reto en este ámbito es institucionalizar la alineación de los sistemas de planeación presupuestal y de rendición de cuentas a nivel subnacional con los ODS y otros compromisos internacionales en materia de derechos humanos y vinculados a la Agenda 2030. Por otro lado, como país de renta media alta, México ha dejado de ser considerado país prioritario de la ayuda oficial para el desarrollo (AOD). Entre 2014-2016, el país se ubicó como el sexto receptor del total de AOD dirigida a América Latina y el Caribe, con un flujo promedio en el periodo de US \$648 millones (6%)⁴²⁶, después de Colombia, Cuba, Haití, Brasil y Bolivia. En valores absolutos, México no es país prioritario de la AOD enfocada al logro de la igualdad de género. Las inversiones dirigidas a este objetivo son marcadamente insuficientes y sólo una pequeña parte de la cooperación aborda problemas específicos de las mujeres y las niñas en México⁴²⁷. De ahí la necesidad de movilizar efectivamente los recursos internos, aumentando el impacto de los

⁴²⁵ Giorgio Brosio; Juan Pablo Jiménez; Ignacio Ruelas, *Analizando el impacto de la política fiscal sobre la desigualdad personal y regional: el caso de México* (Artículo presentado en las VI Jornadas Iberoamericanas de Financiación Local; Córdoba, Argentina: septiembre, 2017). Recuperado de: https://www.cepal.org/sites/default/files/document/files/ppt_brosio_jimenez_y_ruelas_avila.pdf (Fecha de consulta: 27 de junio de 2018).

⁴²⁶ OECD, *Development Aid at a Glance. 2018. Statistics by Region. Americas* (Paris, OECD:2018). Recuperado de: <http://www.oecd.org/dac/financing-sustainable-development/development-finance-data/America-Development-Aid-at-a-Glance-2018.pdf> (Fecha de consulta: 29 de mayo de 2018).

⁴²⁷ ONU Mujeres, *Mesa de Cooperantes para el Logro de la Igualdad de Género en México, 2016. Documento interno*. (México, ONU Mujeres: 2016).

recursos disponibles y guiando de mejor manera la inversión del sector privado y de otros actores (academia, sociedad civil) hacia el cumplimiento de los ODS.

Participación de diferentes actores. La implementación de los ODS a nivel nacional y subnacional requiere de la participación de múltiples actores, además de los gubernamentales, como la sociedad civil, el sector privado y la academia (Meta 17.17), a través de mecanismos innovadores y efectivos, como las alianzas público-privadas, para compartir información estadística y movilizar recursos adicionales a los previstos por el gobierno para la consecución de las metas en distintos ámbitos.

5.4. Ventajas comparativas del SNU

Las características de México imponen retos sustanciales al SNU en la definición de una **cooperación estratégica** que responda, por un lado, a las oportunidades que ofrece trabajar en un país de desarrollo dinámico, de renta media alta, con capacidad instalada a nivel nacional y con un sólido liderazgo a nivel global y regional; y que atienda, por el otro lado, a los grandes desafíos de desarrollo que todavía enfrenta el país, principalmente en áreas geográficas concretas, en grupos de población específicos y en un contexto marcado por asimetrías y grandes contrastes en las capacidades institucionales y técnicas a nivel subnacional.

El **UNDAF 2014-2019** definió seis áreas de cooperación identificadas como prioritarias para el trabajo del SNU en México: Igualdad, equidad e inclusión social; Desarrollo económico, competitividad y trabajo decente; Sostenibilidad ambiental y economía verde; Seguridad ciudadana, cohesión social y justicia; Gobernabilidad democrática; y Alianza global para el desarrollo. Asimismo, estableció seis modalidades de cooperación que reflejan el valor agregado y las ventajas comparativas del SNU en el contexto mexicano: asistencia técnica, abogacía, apoyo para diálogos y consensos, fortalecimiento de capacidades en áreas estratégicas, asesoría para el monitoreo de compromisos internacionales, así como la sistematización y publicación de buenas prácticas y experiencias internacionales. No obstante, la forma de apoyo a México se ha diferenciado de una agencia a otra, dependiendo de su mandato, especialidad, recursos y presencia en el país, lo que ciertamente ha segmentado las intervenciones y dificultando el trabajo colaborativo.

Si bien el UNDAF es un documento de planeación que tiene la intención de orientar de forma estratégica las acciones de los programas, fondos y agencias del SNU, los hallazgos de su Revisión de Medio Término apuntan a que prevaleció en su integración una visión fuertemente sectorizada, compartimentalizada y muy particular de algunas agencias. A pesar de que se identificaron 13 Efectos directos que se deseaban lograr y se establecieron acciones concretas para su consecución, el UNDAF careció de un eje articulador entre las distintas áreas de cooperación y no contempló estrategias integrales que impulsaran el trabajo interagencial bajo un esquema de resultados colectivos. De ahí que el número de iniciativas conjuntas en el marco del UNDAF actual es significativamente bajo: de las 249 iniciativas reportadas en el informe 2014-2016, solamente 14 (5.6%) involucraron a dos o más agencias⁴²⁸. Otro aspecto a resaltar es que el UNDAF no definió

⁴²⁸ ONU México, *Sistema de las Naciones Unidas en México: avances del Marco de Cooperación para el Desarrollo 2014-2019. Informe 2014-2016* (México, Oficina de la Coordinación Residente del Sistema de Naciones Unidas en México: agosto 2017). P. 43.

indicadores de desempeño que permitieran medir la contribución del SNU en cada una de las áreas de cooperación identificadas.

La coyuntura actual, marcada a nivel interno por las elecciones 2018, el cambio de gobierno, la redefinición de prioridades de desarrollo y la construcción del UNDAF 2020-2025, y a nivel internacional por el apoyo a la implementación de la Agenda 2030 y los ODS, en el marco de un proceso de Reforma de las Naciones Unidas, en donde los Equipos de País están llamados a ejercer un papel todavía más estratégico, ciertamente sugiere la necesidad de hacer un análisis sobre las fortalezas, las oportunidades, las debilidades y las amenazas del SNU en México y sobre la forma como ha venido operando en el país.

El análisis FODA realizado para tal efecto con el *Task Force* de Monitoreo y Evaluación arrojó los siguientes resultados:

Fortalezas

- El SNU es un **actor clave**, con reconocido **valor agregado**, que contribuye a las necesidades del desarrollo del país y cuyo **prestigio** es ampliamente reconocido, tanto por el gobierno como por otros sectores y agentes de cooperación.
- La **capacidad técnica** de proponer políticas a nivel nacional, estatal o municipal en diversos temas es ampliamente reconocida, y se expresa en las constantes solicitudes de **participación y acompañamiento** en iniciativas, proyectos y mecanismos de coordinación en distintos niveles y áreas del desarrollo sostenible.
- El SNU es un **facilitador y puente estratégico** entre actores y sectores clave para avanzar el diálogo y la toma de decisiones en múltiples niveles y ámbitos, con la capacidad de entablar relaciones a nivel técnico con independencia del partido político en el poder.
- El SNU es un **generador de información confiable** (indicadores, datos, buenas prácticas, experiencias internacionales) que es estratégica para incidir en la toma de decisiones del gobierno.
- EL SNU ha sabido potenciar el **liderazgo de México** en la ONU, hacer un buen uso de su proactividad en las distintas agendas globales para el desarrollo, aprovechar el punto de entrada clave que ofrece la ratificación por parte del país de una amplia gama de instrumentos internacionales de derechos humanos y potenciar las capacidades técnicas y operativas de México mediante esquemas de cooperación sur-sur y triangular, promoviendo el intercambio de conocimientos y el posicionamiento del país a nivel internacional.
- Las coincidencias entre los principales retos de México, los ODS y los instrumentos internacionales ratificados por México y que le dan mandato al SNU es una gran fortaleza para trabajar directamente sobre esas áreas.
- El trabajo de los **grupos interagenciales**, con énfasis del Grupo Interagencial de Género (GIG) y el *Task Force* de Monitoreo y Evaluación, ha permitido avanzar la asesoría al UNCT a través de la reflexión técnica y autocrítica conjunta, que han derivado en aportes sólidos y estratégicos, así como en iniciativas conjuntas que son catalogadas como buenas prácticas (informes confidenciales del UNCT a CEDAW y CMW, campaña matrimonio infantil). La **colaboración interagencial** entre el GIG y el *Task Force* de Monitoreo y Evaluación ha logrado avanzar la incorporación de la perspectiva de género en temas

clave, como los reportes del UNDAF, y es fundamental para el CCA y la Revisión de Medio Término del UNDAF. Esto releva la necesidad de seguir fortaleciendo el trabajo interagencial a través de estos grupos para brindar asesoría oportuna al UNCT. La Reforma del Secretario General es, en este aspecto, una oportunidad para fortalecer el trabajo interagencial.

Oportunidades

- El **cambio de gobierno** ofrece una oportunidad para el SNU de ir como un solo frente para acompañar y trabajar con el equipo de transición y con ello incidir en temas clave en el Senado y Presidencia, con miras a fortalecer el compromiso de México de cumplir con la Agenda 2030. Negociar como bloque posicionaría al SNU en la consecución de tal fin.
- Las **modificaciones normativas** en la Ley de Planeación y la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria son un punto de entrada clave para el trabajo del SNU en el marco de la Agenda 2030 y las **reformas estructurales** iniciadas por la actual administración abren la oportunidad para el trabajo con otros actores, como el sector privado, y fortalecen los mecanismos de cooperación sur-sur.
- La coyuntura actual a nivel interno (elecciones, cambio de gobierno y definición de un nuevo ciclo de programación del SNU), ofrece la oportunidad de replantear un **enfoque territorial** más estratégico, con base en un análisis previo, que contribuya a cerrar las marcadas brechas de desarrollo de los territorios y avanzar el cumplimiento de la Agenda 2030 en lo local. Los espacios de trabajo y la colaboración que se abren con los gobiernos subnacionales es una clara oportunidad para el SNU. Sin embargo, la dinámica del delito y del crimen organizado pueden prevenir o impedir la ejecución del trabajo en campo.
- Las **capacidades técnicas e institucionales de México**, principalmente a nivel nacional, hacen viable y oportuno el trabajo del SNU en el país. La diversificación de alianzas y de fuentes de financiamiento es un aspecto clave para ampliar la colaboración en otros ámbitos y niveles que son estratégicos para el desarrollo sostenible.
- El trabajo de otras agencias de cooperación en México (ver Amenazas), si bien puede ser visto como una competencia para el SNU, principalmente en la movilización de recursos para la implementación de iniciativas, puede ser también una oportunidad para sumar a **socios potenciales** en el cumplimiento de México de la Agenda 2030. Un reto para aprovechar esta oportunidad es hacer visibles las ventajas comparativas del SNU como bloque y fortalecer el diálogo con contrapartes y otros cooperantes para el desarrollo.

Debilidades

- El **acercamiento interagencial diferenciado** y muchas veces atomizado del SNU, que se refleja en el uso de canales múltiples, con los mismos o diferentes interlocutores para lograr un mismo objetivo, debilita el trabajo y posicionamiento del UNCT en diversos temas bajo el enfoque *ONE UN*. La falta de equilibrio entre las agendas individuales de las agencias, las demandas de sus contrapartes y las definiciones estratégicas como Equipo de País, las cuales no necesariamente son acatadas por todas las agencias, genera tensión y que en muchos temas el SNU no sea visto como una sola voz. Por otro lado, el trabajo desde lo local, pero en línea con lo federal, es un desafío para el SNU.
- La **divergencia de procedimientos, lineamientos y directrices de las agencias**, desde la que se gesta en las respectivas sedes, como también la que surge en el terreno, dificulta la coordinación interagencial. La falta de voluntad y compromiso de las agencias, en algunos

casos, y la dificultad de alineación, en otros, para adoptar los lineamientos *ONE UN* existentes en Operaciones, Comunicación, Movilización de Recursos y Presupuesto Conjunto, ha impactado negativamente en el trabajo interagencial. La diferencia entre los procedimientos administrativos, que muchas veces no son amigables entre sí, como tampoco frente a los procedimientos de las contrapartes, dificulta la formulación e implementación de iniciativas conjuntas programáticas. La necesidad de un marco flexible para la colaboración interagencial es indispensable para potenciar el acercamiento entre las agencias en beneficio de un trabajo conjunto. Esto cobrará aún mayor importancia de cara a la formulación del siguiente UNDAF, dado que se espera una mayor vinculación entre el eje programático y la estrategia de operaciones.

- La **falta de un presupuesto estable** provoca un desbalance entre los recursos humanos y financieros, y las necesidades operativas. La posición política y multidimensional del SNU en México, en donde a veces es demasiado grande para atender situaciones en contextos que son demasiado locales, puede dificultar el trabajo operativo. La competencia de recursos entre agencias es otro aspecto que debilita y dificulta la aplicación de un enfoque integral. De ahí la necesidad de explorar el desarrollo de una estrategia conjunta de movilización de recursos para el próximo UNDAF 2020-2025, bajo un enfoque de resultados colectivos.
- La **falta de comunicación organizacional** hace que la información del UNCT se estanque muchas veces a nivel de la representación y pocas veces es diseminada hacia abajo con los mismos criterios, lo que a su vez repercute en el conocimiento de carácter estratégico del personal de las agencias. Una forma de hacer frente a esta debilidad es la integración de minutas con información base y orientadas a diseminar la información de manera estandarizada entre el personal, lo que abona al fortalecimiento de su trabajo.

Amenazas (aspectos externos que impactan el trabajo del SNU en el país)

A nivel internacional

- La **Reforma del Secretario General** impactará la forma de trabajar del SNU en México, en donde el reto particular reside en transitar hacia un enfoque de intervención integral para avanzar el cumplimiento de la Agenda 2030. La reforma probablemente repercutirá en el presupuesto, los proyectos y la forma de operar del SNU en el país, en donde la interagencialidad será la regla y no la excepción. Con base en la experiencia del trabajo conjunto en los últimos años, algunas agencias contarán con mayor flexibilidad para responder de manera rápida y eficiente al tipo de ajustes que la reforma implicará. Por ello, un análisis interagencial sobre cómo puede funcionar mejor la reforma en el contexto mexicano es indispensable para facilitar su adaptación y mitigar riesgos en la definición e implementación del siguiente UNDAF.
- Los **cambios en la política internacional**, el resurgimiento de prácticas proteccionistas y visiones conservadoras, las presiones comerciales y el debilitamiento del multilateralismo, entre otros elementos, impactan e impactarán los avances del desarrollo en México, frente a lo cual el SNU deberá definir de forma conjunta estrategias de trabajo para posicionar la Agenda 2030 como marco de referencia para la acción a nivel nacional y en el marco de la cooperación internacional con y hacia México.
- Los **cambios sociales, políticos y medioambientales** en países frágiles vecinos de México, especialmente de Centroamérica, presionan las áreas de desarrollo sostenible en México, especialmente en el tema migratorio, la movilidad humana a causa de la violencia y la

mitigación frente al cambio climático. La **falta de coordinación y colaboración entre los Equipos de País de la región** es una limitante para hacer frente a estos retos de manera conjunta y con visión estratégica.

- La AOD y el **apoyo de donantes en atención a prioridades compartidas**, en contra de recursos etiquetados, representa un claro desafío para el SNU. Esto es particularmente evidente, por ejemplo, en la AOD enfocada al logro de la igualdad de género, en donde México no es país prioritario y las inversiones dirigidas a este objetivo son marcadamente insuficientes y sólo una pequeña parte aborda problemas específicos de las mujeres y las niñas en México. Por ello, la movilización de recursos etiquetados que obligan al SNU a trabajar de forma interagencial y a través de resultados colectivos, como la *Iniciativa Spotlight para eliminar la violencia contra las mujeres y niñas*, puede ser la ruta que el Equipo de País se trace para movilizar recursos en áreas estratégicas, prioritarias y en donde confluyen el mandato, el *expertise*, el valor agregado y las ventajas comparativas de diversas agencias.

A nivel interno

- El cambio de gobierno a nivel federal y subnacional, visto no solamente como un tema de coordinación entre los niveles de gobierno, sino también en el cumplimiento de los compromisos internacionales de México por parte de los estados, puede representar un desafío para el trabajo del SNU. El **cambio de prioridades nacionales**, la **falta de continuidad** de los programas o políticas, la **falta de capacidad y solidez** de algunas instituciones, principalmente a nivel subnacional, así como la **falta de coordinación** en diversos temas entre los tres niveles de gobierno y sectores, son grandes retos a los cuales el SNU tiene que hacer frente de manera simultánea para negociar con el Estado Mexicano, posicionar temas y agendas globales, y traducirlas en compromisos y acciones concretos a nivel interno, en un escenario de incertidumbre económica.
- Las **particularidades del contexto de México**, en tanto que país de ingresos medios altos y con una macroeconomía estable y resiliente, pero con profundas desigualdades sociales, altos niveles de pobreza, creciente polarización social, lacerante violencia e inseguridad, así como persistente corrupción, falta de transparencia y rendición de cuentas, combinado con un sólido liderazgo global y un rol polivalente en los esquemas de cooperación internacional para el desarrollo, implican para el SNU dar una respuesta diferenciada y simultánea a necesidades específicas que requieren de un enfoque de intervención integral y colaborativo. De ahí la relevancia, complejidad, adaptabilidad y visión del trabajo del SNU en un país con las características de México, en donde la cooperación para el desarrollo requiere de esquemas dinámicos, multidimensionales y corresponsables que respondan a las necesidades del contexto.
- La **presencia sólida de otros actores para la cooperación** con México, incluidas las organizaciones internacionales de la sociedad civil con capacidad para la movilización de recursos, es un desafío para el posicionamiento y trabajo del SNU en México, principalmente frente a la falta de visión en conjunto de Equipo de País sobre cómo convertir la competencia en potenciales alianzas.
- El trabajo con el gobierno como contrapartes principales y la dependencia de recursos gubernamentales afecta la percepción, principalmente de la sociedad civil, en cuanto a la **credibilidad e imparcialidad** del SNU, lo que, a su vez, limita el espacio y el trabajo con otros actores potenciales.

5.5. Recomendaciones

A partir del análisis de los principales desafíos de desarrollo de México, los avances y retos del país en la implementación de los ODS, el análisis FODA del SNU, así como a la luz de la propuesta de Reforma del Secretario General, se presenta a continuación una serie de consideraciones estratégicas para la toma de decisiones en la construcción del UNDAF 2020-2025.

Integralidad. En seguimiento a la Resolución 71/243 de la Asamblea General⁴²⁹, el próximo UNDAF se debe de construir sobre la base de una planificación integrada, con miras a lograr una mayor y mejor cooperación y complementariedad entre los pilares de las Naciones Unidas (desarrollo, reducción de riesgos de desastre, acción humanitaria y sostenimiento de la paz), para promover el desarrollo sostenible e inclusivo de México. Atender las brechas de desigualdad, erradicar todas las formas de discriminación y *no dejar a nadie atrás* en estos cuatro pilares requiere de un enfoque integrado, indivisible e interdependiente de la sostenibilidad del desarrollo y de la acción colectiva del SNU para el cumplimiento de la Agenda 2030. Lo anterior, implica, entre otros elementos, poner el acento en la complementariedad y la definición de resultados colectivos (*collective outcomes*) que potencien sinergias y tengan un efecto catalizador en las dimensiones económica, social y ambiental, y que sean la base de la programación interagencial con alianzas multi-actor para el desarrollo. A través de una respuesta integrada, coherente y articulada, el Equipo de País podrá contribuir de manera concreta y medible al cumplimiento de México de la Agenda 2030 y de otras agendas globales.

Priorización. Una parte medular de la integralidad es la priorización de esfuerzos y recursos en intervenciones en donde el SNU, desde una visión colectiva, puede maximizar su impacto y acompañar de manera verificable la implementación de los ODS. La nueva generación de UNDAFs vinculados al cumplimiento de la Agenda 2030 tiene un mayor enfoque temático y menos prioridades estratégicas⁴³⁰. La priorización debe partir de una reflexión interagencial sobre las ventajas comparativas del SNU, así como sobre las contribuciones puntuales y los compromisos reales que puede asumir el Equipo de País.

Derechos humanos. La agenda de los derechos humanos deberá sin duda alguna estar al centro del próximo UNDAF, a través de un mayor seguimiento, monitoreo y rendición de cuentas de los compromisos internacionales de México, con especial énfasis de las recomendaciones dirigidas al país por parte de los mecanismos internacionales de derechos humanos. El cumplimiento de los compromisos de derechos humanos y los avances en la Agenda 2030 se refuerzan mutuamente.

Igualdad de género. Tal y como se evidenció a lo largo del CCA, la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y niñas son requisitos indispensables para lograr el desarrollo sostenible de México, a la vez que son un potente acelerador para el cumplimiento de los ODS y un generador de sinergias en diversas áreas. Por lo tanto, es indispensable que el Equipo de País sitúe de manera clara y explícita a la igualdad de género y el empoderamiento de todas las

⁴²⁹ Naciones Unidas/Asamblea General, *Revisión cuatrienal amplia de la política relativa a las actividades operacionales del sistema de las Naciones Unidas para el desarrollo* (Documento A/RES/71/243, 1 de febrero de 2017). Recuperado de: <https://undocs.org/es/A/RES/71/243> (Fecha de consulta: 9 de junio de 2018).

⁴³⁰ United Nations Development Operations Coordination Office, *Summary brief on UN Development Assistance Frameworks (UNDAFs)—Status, trends and next generation*, (March 2016). Recuperado de: <https://www.un.org/ecosoc/sites/www.un.org.ecosoc/files/files/en/qcpr/doco-summary-brief-on-undaf-march2016.pdf> (Fecha de consulta: 10 de junio de 2018).

mujeres y niñas en el centro de la cooperación con México, así como de la teoría del cambio, implementación, financiamiento, monitoreo y seguimiento del UNDAF.

Sustentabilidad. El criterio de sustentabilidad en el fomento de las actividades productivas es un elemento rector de la contribución del SNU al desarrollo de México. La sustentabilidad es indispensable para monitorear el uso eficiente y racional de los recursos naturales y así asegurar el presente y futuro de las próximas generaciones, el cual debe contemplarse de forma transversal en el próximo UNDAF como elemento constitutivo de un nuevo estilo de desarrollo, cuya consideración deberá ser un eje presente en todas las actividades con el gobierno.

Cooperación internacional para el desarrollo. El próximo UNDAF deberá contemplar de forma transversal la cooperación internacional para el desarrollo como un medio para la implementación efectiva de la Agenda 2030 y los ODS, y como parte central de la contribución del SNU para el desarrollo sostenible de México. Alinear la cooperación que México recibe y ofrece con los ODS y las metas específicas, y en función de los resultados colectivos que el SNU identifique para el UNDAF, será parte central de este esfuerzo.

Interseccionalidad. Además del enfoque de derechos humanos y la perspectiva de igualdad de género, el UNDAF deberá considerar otros enfoques para abordar la discriminación y desigualdades, y avanzar de manera conjunta la implementación de los ODS bajo los principios de *no dejar a nadie atrás y llegar primero a los grupos que están más lejos*. El enfoque intercultural es clave para favorecer la inclusión y el de ciclo de vida para atender las brechas contextuales. La definición de grupos de población prioritarios, en función de las áreas temáticas o de los resultados colectivos del UNDAF, permitiría una mayor focalización e impacto de las intervenciones, pero con el cuidado de no generar esquemas de exclusión ante situaciones cambiantes del contexto. El apoyo a la desagregación de datos, así como a la producción y uso de estadísticas de calidad con perspectiva de género y otras condicionantes deberá ser un principio transversal del UNDAF para la consecución de tal fin.

Territorialidad. La cooperación con México requiere de un enfoque territorial más claro, estratégico y articulado por parte del SNU, con miras a responder a las desigualdades entre regiones, estados y municipios; priorizar territorios que requieren de una intervención integral; y focalizar intervenciones en donde existen claras oportunidades para acelerar el progreso. Por ello, un ejercicio clave previo al UNDAF es la definición de una estrategia multinivel frente a los diferentes escenarios del contexto mexicano, que incluya una propuesta integrada de apoyo a nivel subnacional y criterios para el fortalecimiento de la participación y vinculación de la sociedad civil y otros actores relevantes, como el sector privado y la academia.

Bibliografía

- Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), *Visión y Acción 20-30. Propuesta para renovar la educación superior en México* (México, ANUIES. Documento de trabajo 1.0: 2018), <https://www.uv.mx/crss-anuies/files/2018/01/ANUIES.-Vision-y-Accion-2030.pdf>
- Auditoría Superior de la Federación (ASF), *Informe de la Cuenta Pública. Grupo Funcional de Desarrollo Social. Seguro Popular*, http://informe.asf.gob.mx/Documentos/Fichas/Ficha_DS_a.pdf
- Banco de México, “Sistema de Información económica. Remesas por entidad federativa”, <http://www.banxico.org.mx/SieInternet/consultarDirectorioInternetAction.do?accion=consultarCuadroAnalitico&idCuadro=CA79>
- Banco Mundial, *Las dimensiones sociales del cambio climático en México* (Washington, Banco Mundial: 2013), <http://www.bancomundial.org/content/dam/Worldbank/document/web%20spa%20mexico.pdf>
- , “México. Panorama general”, <http://www.bancomundial.org/es/country/mexico/overview#2>
- , *Pérdidas y desperdicios de alimentos en México* (México, Banco Mundial: 2017)
- Banco Mundial y Secretaría de Gobernación, *FONDEN: El Fondo de Desastres Naturales de México – una reseña* (México, Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento/Banco Mundial: 2012) http://www.proteccioncivil.gob.mx/work/models/ProteccionCivil/Resource/469/1/images/LibroFonden_versionEsp.pdf
- Beazley, Rodolfo; Solórzano, Ana; *Protección social reactiva frente a emergencias en América Latina y el Caribe. Principales hallazgos y recomendaciones* (Oxford Policy Management/World Food Programme: 2017).
- Bracho González, Teresa. “Educación media superior. Un tema urgente, pero ausente”, en *El Universal* (Artículo de opinión, 25 de febrero de 2017), <http://www.eluniversal.com.mx/entrada-de-opinion/articulo/teresa-bracho-gonzalez/nacion/2017/02/25/educacion-media-superior-un>
- Brosio, Giorgio; Jiménez, Juan Pablo; Ruelas, Ignacio; *Analizando el impacto de la política fiscal sobre la desigualdad personal y regional: el caso de México* (Artículo presentado en las VI Jornadas Iberoamericanas de Financiación Local; Córdoba, Argentina: septiembre, 2017), https://www.cepal.org/sites/default/files/document/files/ppt_brosio_jimenez_y_ruelas_avila.pdf
- Cámara de Diputados, *Se lleva a cabo Foro Internacional de protección civil y gestión de riesgos de desastres* (Boletín N°. 5444, 8 de mayo de 2018), <http://www5.diputados.gob.mx/>
- Cámara de Diputados/Centro de Estudios de Finanzas Públicas. *El Gasto Público Federal en Equidad de Género* (Nota informativa, 27 de marzo de 2017), <http://www.cefp.gob.mx/publicaciones/nota/2017/notacefp0062017.pdf>
- Casar, María Amparo; *México. Anatomía de la corrupción* (México, Instituto Mexicano para la Competitividad/Centro de Investigación y Docencia Económicas: 2015), https://imco.org.mx/wp-content/uploads/2015/05/2015_Libro_completo_Anatomia_corrupcion.pdf
- Castellanos Cereceda, Roberto (Coord.) *Los Objetivos de Desarrollo Sostenible en México y América Latina: retos comunes para una agenda compartida. Aprendiendo del pasado, preparándonos para el futuro* (México, Senado de la República/Instituto Belisario Domínguez: 2017).
- Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), *Cartilla de Derechos de las Víctimas de Violencia Sexual Infantil* (México, CEAV: 2016), <https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/127012/cartilla-derechos-victimas-violencia-sexual-infantil.pdf>

- Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), *Indicadores socioeconómicos de los pueblos indígenas de México, 2015*, <https://www.gob.mx/cdi/articulos/indicadores-socioeconomicos-de-los-pueblos-indigenas-de-mexico-2015-116128?idiom=es>
- Centre for Law and Democracy, *Global Right to Information Rating. Country data*, <http://www.rti-rating.org/>
- Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY), *El México del 2018. Movilidad social para el bienestar* (México, CEEY Editorial: 2018).
- Centro de Análisis Multidisciplinarios de la Facultad de Economía, *Poder adquisitivo del salario y la precarización del nivel de vida de los trabajadores en México 2012* (Ciudad Universitaria, Universidad Nacional Autónoma de México/: agosto de 2012), <http://www.frecuencialaboral.com/multimedia/ReporteEMPLEOYSALARIOUNAM.pdf>
- Centro de Información de las Naciones Unidas para México, Cuba y Republica Dominicana (CINU), “Con las tendencias actuales no se alcanzará la universalización de la educación para el 2030, sino en 2095” (Noticias de la ONU: 23 de septiembre de 2016), <http://www.cinu.mx/noticias/la-con-las-tendencias-actuales-no/>
- Centro de Investigación para el Desarrollo (CIDAC), “Piratería: Entendiendo el mercado “sombra” en México” (México, CIDAC: 2015), http://cidac.org/esp/uploads/1/PIRATERIA_Entendiendo_el_mercado_sombra_en_Mexico_1_.pdf
- Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, A.C (CIEP), *Gasto en Salud per cápita: menos usuarios del sistema de salud* (México, CIEP: 2 de febrero de 2018), <http://ciep.mx/gasto-en-salud-per-capita-menos-usuarios-del-sistema-de-salud/>
- , *Gasto público para una educación de calidad* (México, CIEP: s/f), <http://gastoeducativo.ciep.mx/Gasto-publico-para-una-educacion-de-calidad.pdf>
- , *Sistema Universal de Salud: Retos de cobertura y financiamiento en México* (México, CIEP: s/f), <http://ciep.mx/sistema-universal-de-salud-retos-de-cobertura-y-financiamiento/>
- Coalición por el Acceso Legal a la Cultura (CALC), “Encuesta para la medición de la piratería en México”, <http://ht.ly/9hiz30g8fw1>
- Colegio de la Frontera Norte y Comisión Nacional de los Derechos Humanos (COLEF/CNDH), *Observatorio de legislación y política migratoria. ¿Qué es el Programa Frontera Sur?* (Boletín No. 1: Febrero 2016), <http://observatoriocolef.org/wp-content/uploads/2016/06/BOLET%C3%8DN-1-Alejandra-Casta%C3%B1eda.pdf>
- Comisión Económica para América Latina (CEPAL). *Panorama social de América Latina 2017* (Santiago de Chile, CEPAL: 2018).
- , *Segundo Informe anual sobre el progreso y los desafíos regionales de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en América Latina y el Caribe* (Santiago de Chile, CEPAL: 2018).
- , *Primer Informe anual sobre el progreso y los desafíos regionales de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en América Latina y el Caribe* (Santiago de Chile, CEPAL: 2017).
- , *Productividad y brechas estructurales en México* (Ciudad de México, CEPAL, LC/MEX/L.1211: mayo de 2016), https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/40165/1/S1600553_es.pdf
- Chávez Carlos; González, Pablo; Venegas, Gustavo. *Retos, perspectivas y horizontes de las organizaciones de la sociedad civil en México. Los caminos hacia una reforma de la LFFAROSC*, (Septiembre de 2016). http://ibd.senado.gob.mx/sites/default/files/Estudio_Final_Retos_y_Perspectivas_de_las_OSC.pdf

Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), *Informe sobre la situación de los derechos humanos en México* 2015. (Washington, OAS-Documentos oficiales OEA/Ser.L/V/II.Doc. 44/15: 2016).

-----*Derechos Humanos de los migrantes y de otras personas en el contexto de la movilidad humana en México*, (Washington, Documento OEA/Ser.L/V/II. Doc.48/13: 2013).

Comisión Interamericana de Derechos Humanos y Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, *Observaciones preliminares del Relator Especial de la ONU sobre la libertad de expresión y el Relator Especial sobre libertad de expresión de la CIDH después de su visita conjunta en México, 27 de noviembre–4 de diciembre 2017* (Comunicado de prensa: 4 de diciembre de 2017), https://www.oas.org/es/cidh/expresion/docs/Observaciones_Preliminares_ESP.PDF

Comisión Mexicana para los Refugiados (COMAR), “Estadísticas 2013-2017”, https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/290340/ESTADISTICAS_2013_A_4TO_TRIMESTRE_2017.pdf

Comisión Nacional contra las Adicciones (CONADIC), “Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco (ENCODAT) 2016-2017”, <https://www.gob.mx/salud/conadic/acciones-y-programas/encuesta-nacional-de-consumo-de-drogas-alcohol-y-tabaco-encodat-2016-2017-136758>

Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (CONAPESCA), *Anuario estadístico de acuacultura y pesca* (México, CONAPESCA: 2014).

Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), “Derechos Humanos. Materia Internacional. Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos”, http://www.cndh.org.mx/Instrumentos_Internacionales_Derechos_Humanos

-----, *Informe especial sobre desplazamiento forzado interno en México* (México, CNDH: 2016)., http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Informes/Especiales/2016_IE_Desplazados.pdf

Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), “Inventario Nacional de Humedales”, <https://www.gob.mx/conagua/acciones-y-programas/inventario-nacional-de-humedales-inh>

-----, *Estadísticas del Agua en México. Edición 2017* (México, SEMARNAT/CONAGUA: 2017), http://sina.conagua.gob.mx/publicaciones/EAM_2017.pdf

Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), *Indicadores socioeconómicos de los pueblos indígenas de México, 2015*. (México, CDI: 2015). <https://www.gob.mx/cdi/articulos/indicadores-socioeconomicos-de-los-pueblos-indigenas-de-mexico-2015-116128?idiom=es>

Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía, “Estrategia de Transición para Promover el Uso de Tecnologías y Combustibles más Limpios 2016”, https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/182202/20161110_1300h_Estrategia_CCTE-1.pdf

Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO), “Manglares de México”, <http://www.biodiversidad.gob.mx/ecosistemas/manglares2013/manglares.html>

Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO), “Comisión para el cumplimiento de la Agenda 2030”, <https://www.conago.org.mx/comisiones/cumplimiento-agenda-2030>

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), *Informe General del Estado de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación 2016* (México, CONACYT: 2017), <http://www.sicyt.gob.mx/index.php/transparencia/informes-conacyt/informe-general-del-estado-de-la-ciencia-tecnologia-e-innovacion/informe-general-2016/3835-informe-general-2016/file>

Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), *Informe de evaluación de la Política de Desarrollo Social, 2018* (Ciudad de México, CONEVAL: 2018).

- , "Glosario", <https://www.coneval.org.mx/Medicion/Paginas/Glosario.aspx>
- , *Indicadores de acceso y uso de los servicios de salud de afiliados al Seguro Popular* (México, CONEVAL: 2014), <https://www.coneval.org.mx/Informes/Evaluacion/Impacto/Acceso%20y%20Uso%20Efectivo.pdf>
- , "Índice de tendencia laboral de la pobreza al primer trimestre de 2018", https://www.coneval.org.mx/Medicion/Paginas/ITLP-IS_resultados_a_nivel_nacional.aspx
- , *Pobreza y género en México: hacia un sistema de indicadores. Información 2010-2016* (México, CONEVAL: 2016), <https://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Paginas/Pobreza-y-genero-en-Mexico-2010-2016.aspx>
- Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) y UNICEF México, *Pobreza y derechos sociales de niñas, niños y adolescentes, 2014* (México, CONEVAL/UNICEF México: 2016)
- Consejo Nacional de Inclusión Financiera. *Reporte Nacional de Inclusión Financiera 8*, (México, COANIF: 2017), <http://www.cnbv.gob.mx/Inclusi%C3%B3n/Documents/Reportes%20de%20IF/Reporte%20de%20Inclusion%20Financiera%208.pdf>
- Consejo Nacional de Población (CONAPO), *Proyecciones de la Población 2010-20150*. Datos de proyecciones, http://www.conapo.gob.mx/es/CONAPO/Proyecciones_Datos
- , *Fecundidad en niñas y adolescentes de 10 a 14 años, niveles, tendencias y caracterización sociodemográfica de las menores y de los padres de sus hijos(as), a partir de las estadísticas del registro de nacimiento, 1990-2016* (México, CONAPO: 2017).
- Cornell University, INSEAD, WIPO. *The Global Innovation Index 2017: Innovation Feeding the World* (Geneva, Ithaca, Fontainebleau: 2017), http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_gii_2017.pdf
- Corporación Latinobarómetro, *Informe 2017* (Santiago de Chile, Corporación Latinobarómetro: 2017), <file:///Users/administrador/Downloads/F00006433-InfLatinobarometro2017.pdf>
- Corte Interamericana de Derechos Humanos, "Casos contenciosos. México", http://www.corteidh.or.cr/cf/Jurisprudencia2/busqueda_casos_contenciosos.cfm?lang=es
- Das, P; Horton, R; "Pollution, health, and the planet: time for decisive action", *The Lancet*, (Elsevier, Volume 391, No.10119: October, 2017), [https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736\(17\)32588-6/fulltext](https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(17)32588-6/fulltext)
- Del Castillo, Miguel; *La magnitud de la desigualdad en el ingreso y la riqueza en México* (México, Comisión Económica para América Latina (CEPAL), Serie Estudios y Perspectivas N° 167: 2015), https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/39531/1/S1501288_es.pdf
- Engel, Jerome S; Del-Palacio, Itxaso; "Global networks of clusters of innovation: Accelerating the innovation process", *Business Horizons* (Elsevier, Volume 52, Issue 5: September–October 2009).
- Esquivel, Gerardo; *Desigualdad extrema en México: concentración del poder económico y político* (México, Oxfam México: 2015), https://www.oxfamMexico.org/sites/default/files/desigualdadextrema_informe.pdf
- Estudios y Estrategias para el Desarrollo y la Equidad (EPADEQ), *Diagnóstico e Implementación de Acciones Básicas sobre Equidad de Género en la Impartición de Justicia, la Normatividad y la Cultura Organizacional de 15 Tribunales Superiores de Justicia, 2012* (México, EPADEQ: 14 de mayo de 2014), <http://epadeq.com.mx/diagnostico-e-implementacion-de-acciones-basicas-sobre-equidad-de-genero-en-la-imparticion-de-justicia-la-normatividad-y-la-cultura-organizacional-de-15-tribunales-superiores-de-justicia/>

- ETHOS, Laboratorio de Políticas Públicas. *Descifrando el gasto público en seguridad*, (Ciudad de México, ETHOS: 2017) .
- Foro Económico Mundial, *Informe de riesgos globales 2018, 13.a edición* (Ginebra, Foro Económico Mundial: 2018).
- Frankfurt School-UNEP Centre/BNEF, *Global Trends in Renewable Energy Investment, 2018* (Frankfurt am Main: 2018), <http://www.fs-unep-centre.org>
- Fundación Konrad Adenauer & Polilat.com, *Índice de desarrollo democrático de América Latina 2016. Datos de México*, http://www.idd-lat.org/2016/informes_x_pais/297/2016-mxico.html
- Global Assessment Report on Disaster Risk Reduction 2015, “Mexico, basic country statistics and indicators (2014)”, <https://www.preventionweb.net/english/hyogo/gar/2015/en/home/data.php?iso=MEX>
- Gobierno de la República, *Estrategia Nacional sobre Biodiversidad de México y Plan de Acción 2016-2030*, (México, CONABIO: 2016), https://www.biodiversidad.gob.mx/pais/pdf/ENBIOMEX_baja.pdf
- , “Reforma educativa. Reformas y leyes”, <http://reformas.gob.mx/reforma-educativa/reformas-y-leyes>
- , *Reporte Nacional para la Revisión Voluntaria de México en el marco del Foro Político de Alto Nivel sobre Desarrollo Sostenible* (México, Oficina de la Presidencia de la República/Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo: 2016), <https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/10756Full%20report%20Mexico%20-%20HLPF%202016%20FINAL.pdf>
- , *Segundo Informe Nacional Voluntario para el Foro Político de Alto Nivel sobre Desarrollo Sostenible*, (México, Oficina de la Presidencia de la República: 2018).
- Grupo de Información en Reproducción Elegida, A.C (GIRE), *Niñas y mujeres sin justicia. Derechos reproductivos en México* (México, GIRE: 2015).
- Guzmán, Francisco (Jefe de la Oficina de la Presidencia de la República), *Avances y retos en la implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en México, Presentación durante la Reunión de Embajadores y Cónsules 2018* (Comunicado de prensa: 8 de enero de 2018, <https://www.gob.mx/agenda2030/prensa/avances-y-retos-en-la-implementacion-de-la-agenda-2030-para-el-desarrollo-sostenible-en-mexico?state=published>
- Help Age International, *Global AgeWatch Index 2015. AgeWatch Report Card. Mexico*, <http://www.helpage.org/global-agewatch/population-ageing-data/country-ageing-data/?country=Mexico>
- Hernández, María Felipa; Muradás, María de la Cruz y Sánchez, Miguel; “Panorama de la salud sexual y reproductiva, 2014”, en *La Situación Demográfica de México 2015* (México, Consejo Nacional de Población: 2016).
- HLPE, *Inversión en la agricultura a pequeña escala en favor de la seguridad alimentaria* (Roma, Informe del Grupo de Alto Nivel de Expertos en Seguridad Alimentaria y Nutrición del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial: 2013).
- International Budget, *Encuesta de Presupuesto Abierto. México. 2017*, <https://www.internationalbudget.org/wp-content/uploads/mexico-open-budget-survey-2017-summary-spanish.pdf>
- Institute for Economics and Peace (IEP), *Índice de Paz. México 2018* (México, IEP: 2018). <http://indicedepazmexico.org/wp-content/uploads/2018/04/Indice-de-Paz-Mexico-2018.pdf>
- Instituto Mexicano de la Juventud, “Situación demográfica”, https://www.imjuventud.gob.mx/imgs/uploads/Infografia_Demografica.pdf

- Instituto Nacional Electoral, “Cómputos Distritales 2018. Elecciones Federales”,
<https://computos2018.ine.mx/>
- , *En el Senado de la República habría más mujeres que hombres y en la Cámara de Diputados la conformación será casi igual* (Comunicado de Prensa 398: 3 de julio de 2018),
<https://centralector.ine.mx/2018/07/03/conforme-resultados-preliminares-se-perfila-conformacion-historica-del-congreso-de-la-union-en-materia-de-paridad-2/>
- , *Informe de País sobre la Calidad de la Ciudadanía* (México, Instituto Nacional Electoral:2017).
- Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC), *Avanza México en el cumplimiento del Convenio de Minamata*, <https://www.gob.mx/inecc/prensa/avanza-mexico-en-el-cumplimiento-del-convenio-de-minamata-143996>
- Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC), *Costos de las Contribuciones Nacionalmente Determinadas de México. Medidas Sectoriales No Condicionadas. Informe final* (México, INECC: 2018),
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/330857/Costos_de_las_contribuciones_nacionalmente_determinadas_de_Mexico_dobles_paginas.pdf
- Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). *Agua. Plantas de tratamiento de aguas residuales, capacidad y caudal en operación del sector privado y paraestatal, por entidad federativa 2013*.
<http://www3.inegi.org.mx/sistemas/sisept/default.aspx?t=mamb301&s=est&c=33058>
- , *Anuario estadístico y geográfico de los Estados Unidos Mexicanos 2015* (México, INEGI: 2015),
<http://internet.contenidos.inegi.org.mx/>
- , *Banco de información económica*, <http://www.inegi.org.mx/sistemas/bie/>
- , *Censo de Población y Vivienda 2010*, <http://www.beta.inegi.org.mx/proyectos/ccpv/2010/>
- , *Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Delegaciones 2015*,
<http://www.beta.inegi.org.mx/proyectos/censosgobierno/municipal/cngmd/2015/>
- , *Conjunto de Datos Vectoriales de Uso del Suelo y Vegetación escala 1:250 000. Serie V*,
<http://www.inegi.org.mx/geo/contenidos/recnat/ususuelo/>
- , *Cuentas Económicas y Ecológicas*, <http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/cn/ee/>
- , *Cuenta Satélite del Trabajo No Remunerado de los Hogares de México 2015* (Aguascalientes, Boletín de Prensa No. 532/16: 9 de diciembre de 2016),
http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/boletines/2016/especiales/especiales2016_12_03.pdf
- , *Encuesta de Cohesión Social para la Prevención de la Violencia y la Delincuencia (ECOPRED) 2014*.
http://internet.contenidos.inegi.org.mx/contenidos/productos/prod_serv/contenidos/espanol/bviniegi/productos/nueva_estruc/promo/ecopred14_presentacion_ejecutiva.pdf.
- , *Encuesta de Seguridad Pública Urbana 2018*,
<http://www.beta.inegi.org.mx/proyectos/enchogares/regulares/ensu/>
- , *Encuesta Intercensal 2015*,
<http://www.beta.inegi.org.mx/proyectos/enchogares/especiales/intercensal/>
- , *Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) 2017*,
<http://www.beta.inegi.org.mx/proyectos/enchogares/regulares/encig/2017/>
- , *Encuesta Nacional Agropecuaria 2014*,
<http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/encuestas/agropecuarias/ena/ena2014/doc/tabulados.html>

- Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre la Seguridad (ENVIPE) 2017, <http://www.beta.inegi.org.mx/proyectos/enchogares/regulares/envipe/2017/>
- Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de TIC en Hogares, (ENDUTIH) 2017, <http://www.beta.inegi.org.mx/temas/ticshogares/>
- ,Encuesta Nacional de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales 2016 (ENAIID), (Boletín de prensa 467/16, 8 de noviembre de 2016), http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/boletines/2016/especiales/especiales2016_11_01.pdf
- ,Encuesta Nacional de la Población Privada de la Libertad (ENPOL) 2017", http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/boletines/2017/enpol/enpol2017_07.pdf
- Encuesta Nacional de los Hogares (ENIGH) 2016, <http://www.beta.inegi.org.mx/proyectos/enchogares/regulares/enh/2016/default.html>
- Encuesta Nacional sobre las Dinámicas de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2016, http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/boletines/2017/endireh/endireh2017_08.pdf
- Encuesta Nacional sobre Productividad y Competitividad de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (ENAPROCE) 2015, <http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/Proyectos/encuestas/establecimientos/otras/enaproce/default.aspx>
- Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), <http://www.beta.inegi.org.mx/proyectos/enchogares/regulares/enoe/>
- Encuesta sobre Investigación y Desarrollo Tecnológico (ESIDET) 2014, <http://www.beta.inegi.org.mx/proyectos/enestablecimientos/especiales/esidet/2014/>
- Estadísticas a propósito del Día de la Madre. Datos nacionales 2017, http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2017/madre2017_Nal.pdf
- ,Estadísticas a propósito del Día Internacional contra la Corrupción, 9 de diciembre (Comunicado de Prensa: 7 de diciembre de 2017) http://www.beta.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2017/corrupcion2017_Nal.pdf
- ,Estadísticas a propósito del Día Internacional de la Juventud 2017, http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2017/juventud2017_Nal.pdf
- ,Estadísticas a propósito del Día Internacional de la Mujer, 2017, http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2017/mujer2017_Nal.pdf
- ,Estadísticas a propósito del Día Internacional de los Pueblos Indígenas 2016, http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2016/indigenas2016_0.pdf.
- ,Estadísticas a propósito del Día Mundial de la Población (11 de julio), http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2017/poblacion2017_Nal.pdf
- ,Estadísticas a propósito del Día Mundial para la Prevención del Suicidio 2017, http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2017/suicidios2017_Nal.pdf
- ,La discapacidad en México, datos al 2014 (México: INEGI, 2016), http://conadis.gob.mx/gob.mx/transparencia/transparencia_focalizada/La_Discapacidad_en_Mexico_datos_2014.pdf
- Módulo de Trabajo Infantil de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) 2015. <http://www.beta.inegi.org.mx/proyectos/enchogares/modulos/mti/2015/>
- PIB y Cuentas Nacionales. Valor Agregado de Exportación de la Manufactura Global <http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/cn/vaemg/default.aspx>

- Sistema de Cuentas Nacionales,
<http://www.beta.inegi.org.mx/app/buscador/default.html?q=gini#tabMCCollapse-Indicadores>
- Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), *Perfil de la población afrodescendiente en México* (México, INEGI: 2017),
http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/boletines/2017/especiales/especiales2017_03_04.pdf
- Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) e Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES), *Mujeres y hombres en México 2017* (México, INEGI: 2017),
- , *Mujeres y hombres en México 2016*, (México, INEGI: 2016),
http://internet.contenidos.inegi.org.mx/contenidos/Productos/prod_serv/contenidos/espanol/bvini/inegi/productos/nueva_estruc/702825084097.pdf
- Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) y UNICEF México, *Que nadie se quede atrás. La situación de niños y niñas con discapacidad en México*, (México, INSP-Unicef México: s/f).
- *Encuesta Nacional de Niños, Niñas y Mujeres en México 2015. Resultados Principales* (Ciudad de México, México: INSP y UNICEF México, 2016).
- Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, (INEE), *Panorama educativo de México 2016. Indicadores del Sistema Educativo Nacional. Educación básica y media superior* (Ciudad de México, INEE: 2017), <http://publicaciones.inee.edu.mx/buscadorPub/P1/B/115/P1B115.pdf>
- Jaime, Edna; "Sociedad civil: un vehículo de cambio para México, en *México Evalúa* (Artículo de opinión publicado en el Blog digital: 8 de junio de 2017),
<http://www.estepais.com/articulo.php?id=1037&t=sociedad-civil-un-vehiculo-de-cambio-para-mexico>
- Jarab, Jan (Representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos), *Seguridad y justicia en democracia: hacia una política de Estado centrada en los derechos humanos* (Palabras pronunciadas en la Segunda Conferencia Internacional en Seguridad y Justicia en Democracia, <http://www.hchr.org.mx/>
- Landrigan, PJ; Fuller, R; Acosta, NJR; et. al. *The Lancet Commission on pollution and health*, (*The Lancet*, Vol. 391, No. 10119: October, 2017), <https://www.thelancet.com/commissions/pollution-and-health>
- Martínez López, Cornelio; "Panorama general y alternativas legislativas para fomentar la movilidad social en México", en *Mirada Legislativa*, No. 130 (México, Instituto Belisario Domínguez: agosto 2017).
- Naciones Unidas/Asamblea General, *Revisión cuatrienal amplia de la política relativa a las actividades operacionales del sistema de las Naciones Unidas para el desarrollo* (Documento A/RES/71/243, 1 de febrero de 2017).
- /Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. *Observaciones finales sobre a los informes periódicos quinto y sexto combinados de México* (Documento E-C-12-MEX-CO_5_6_30800_S, 29 de marzo de 2018).
- /Comité de Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares. *Observaciones finales sobre el tercer informe periódico de México* (Documento CMW/C/MEX/3, 13 de septiembre de 2017).
- /Comité contra la Desaparición Forzada. *Observaciones finales sobre el informe presentado por México* (Documento CED/C/MEX/1, 11 de febrero de 2015).
- /Comité de los Derechos del Niño. *Observaciones finales sobre el informe presentado por México* (Documento CRC/C/MEX/4-5, 5 de junio de 2015).

- /Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. *Observaciones finales sobre el informe inicial de México* (Documento CRPD/C/MEX/CO/1, 27 de octubre de 2014).
- /Comité de Expertas para la eliminación de discriminación contra la mujer (CEDAW). *Observaciones finales del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer* (Documento CEDAW/C/MEX/CO/7-8, 7 de agosto de 2012).
- /Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD). *Observaciones finales del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial. México* (Documento CERD/C/MEX/CO/16-17, 4 de abril de 2012).
- , *Informe del Relator Especial de la ONU sobre la situación de los defensores de los derechos humanos acerca de su misión a México* (Documento A/HRC/37/51/Add.2, 12 de febrero 2018, versión en inglés)
- , *Informe del Relator Especial sobre el derecho humano al agua potable y el saneamiento acerca de su misión a México*. (Documento A/HRC/36/45/Add.2, 2 de agosto de 2017).
- , *Informe del Secretario General: Nuevo posicionamiento del Sistema de las Naciones Unidas para el desarrollo a fin de cumplir la Agenda 2030: garantizar un futuro mejor para todos* (Documento A/72/124, 11 de julio de 2017).
- Observatorio sobre la Universalidad de los Derechos (OURS), *Derechos en riesgo. Informe sobre tendencias en derechos humanos 2017* (Toronto y Ciudad de México, Association for Women's Rights in Development –AWID/OURS: 2017),
<https://www.awid.org/sites/default/files/atoms/files/derechos-en-riesgo-ours-2017.pdf>
- Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), *Diagnóstico sobre la trata de personas en México* (México, UNODC: 2014).
- Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), *México: Proyecto de Ley de Seguridad Interior supone riesgo para los derechos humanos y debe ser rechazado, advierten expertos y expertas de la ONU* (Ginebra. OACNUDH. Comunicado de prensa: 14 de diciembre de 2017)
- Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), *Better life Index. México*,
<http://www.oecdbetterlifeindex.org/es/countries/mexico-es/>
- , *Construir un México inclusivo. Políticas y buena gobernanza para la igualdad de género* (París, OECD Publishing, 2017).
- , *Estudios Económicos de la OCDE: México 2017. Visión general*,
<https://www.oecd.org/eco/surveys/mexico-2017-OECD-Estudios-economicos-de-la-ocde-vision-general.pdf>
- , *Getting it right. Prioridades Estratégicas para México* (Paris, OECD Publishing: 2018).
- , *Panorama de la Educación 2017. Nota país. México*, <http://www.oecd.org/education/skills-beyond-school/EAG2017CN-Mexico-Spanish.pdf>
- , *Panorama de la sociedad 2016. Un primer plano sobre los jóvenes. La situación en México*.
<https://www.oecd.org/mexico/sag2016-mexico.pdf>
- , *Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos. PISA 2015. Resultados, Nota País México*,
<http://www.oecd.org/pisa/pisa-2015-Mexico-ESP.pdf>
- , *Development Aid at a Glance. 2018. Statistics by Region. Americas* (Paris, OECD: 2018).
<http://www.oecd.org/dac/financing-sustainable-development/development-finance-data/America-Development-Aid-at-a-Glance-2018.pdf>

- , *Health at a Glance 2017: OECD Indicators. ¿Cómo se compara México?*, <https://www.oecd.org/mexico/Health-at-a-Glance-2017-Key-Findings-MEXICO-in-Spanish.pdf>
- *Measuring distance to the SDG targets. An assessment of where OECD countries stand* (Paris, France. OECD Publishing: June 2017).
- Oficina de Coordinación Residente del Sistema de Naciones Unidas en México. *Panorama General de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Diagnóstico Nacional* (México, Oficina de Coordinación Residente del Sistema de Naciones Unidas en México: 2017)
- Ollin, Jóvenes en Movimiento A.C. *Índice Nacional de Participación Juvenil 2015-2016* (México, Ollin: 2016).
- ONU Hábitat. *Tendencias del desarrollo urbano en México*, <http://onuhabitat.org.mx/index.php/tendencias-del-desarrollo-urbano-en-mexico>.
- *Índice de las Ciudades Prósperas en la República Mexicana. Reporte nacional de tendencias de la prosperidad urbana en México* (México, ONU Hábitat: noviembre 2016).
- ONU Mujeres, *Hacer las promesas realidad: la igualdad de género en la Agenda 2030* (Nueva York: ONU Mujeres: 2018), <http://www.unwomen.org/es/digital-library/publications/2018/2/gender-equality-in-the-2030-agenda-for-sustainable-development-2018>
- ONU Mujeres, *Democracia paritaria. Serie Transformando nuestro mundo* (México, ONU Mujeres México: 2016). Recuperado de: <http://mexico.unwomen.org/es/digiteca/publicaciones/2017/03/democracia-paritaria>
- , *Hacia un sistema integrado de información estadística sobre impartición de justicia con perspectiva de género y derechos humanos. Aportes desde la experiencia mexicana* (México, ONU Mujeres México: 2016).
- , *Las mujeres trabajadoras migrantes, el envío de remesas y la generación de cadenas de cuidado en el corredor Chiapas–Centroamérica* (México, ONU Mujeres México: 2015).
- , *Mesa de Cooperantes para el Logro de la Igualdad de Género en México, 2016*. (México, ONU Mujeres México. Documento interno: 2016).
- , *Respuesta humanitaria integral y con enfoque de igualdad de género: el liderazgo y la participación de las mujeres es clave en la reconstrucción* (México, ONU Mujeres México: 2017), <http://mexico.unwomen.org/es/digiteca/publicaciones/2018/02/respuesta-humanitaria>
- ONU Mujeres e Instituto para las Mujeres en la Migración (IMUMI), *Las trabajadoras migrantes centroamericanas en Chiapas. Recomendaciones de política pública para garantizar el ejercicio de sus derechos* (México, ONU Mujeres México: 2015).
- ONU Mujeres e Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES), *Pobreza de tiempo: una revisión conceptual. Cuaderno de trabajo* (México, ONU Mujeres/INMUJERES: 2015).
- ONU Mujeres, Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) y Secretaría de Gobernación (SEGOB), *Violencia feminicida en México. Aproximaciones y tendencias. 1985-2016* (México, ONU Mujeres/INMUJERES/SEGOB: 2018).
- , *La violencia feminicida en México, aproximaciones y tendencias 1985-2014* (México, ONU Mujeres/INMUJERES/SEGOB: 2016).
- ONU Mujeres, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) e IDEA International, *La democracia paritaria en México: Avances y desafíos* (México, ONU Mujeres México/PNUD/IDEA International: 2017), <http://mexico.unwomen.org/es/digiteca/publicaciones/2017/10/diagnostico-atenea-la-democracia-paritaria-en-mexico>

- Ordorika, Imanol; "Equidad de Género en la Educación Superior", en *Revista de Educación Superior* (Vol.44, No.174, abril/junio 2015), http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0185-27602015000200001
- Organización Panamericana de la Salud (OPS)/Organización Mundial de la Salud (OMS), *Informe de la evaluación del sistema de salud mental en México utilizando el Instrumento de Evaluación para Sistemas de Salud Mental de la Organización Mundial de la Salud* (México, OPS/OMS, Secretaría de Salud: 2011), http://www.who.int/mental_health/who_aims_country_reports/who_aims_report_mexico_es.pdf
- Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), *Informe sobre Desarrollo Humano 2016*, (Nueva York, PNUD:2016).
- , *Informe sobre Desarrollo Humano en México 2016. Desigualdad y movilidad* (México, PNDU: 2017).
- , *Programa de Cooperación AMEXCID-PNUD 2013-2017* (Documento de proyecto), <http://www.mx.undp.org/content/dam/mexico/docs/GobernabilidadDemocratica/Proyectos/ProgramaAMEXCID/PRODOC%20firmado.pdf>
- Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y Agencia Mexicana para la Cooperación Internacional de Desarrollo (AMEXCID), *Diferencias regionales y locales en México. Análisis de los indicadores de inclusión social de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible*. (México, PNUD/AMEXCID: 2015).
- Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), *Invertir para el desarrollo sostenible. ¿Cómo invierte México en los Objetivos de Desarrollo Sostenible*, (México, PNUD/SHCP: 2017), http://www.mx.undp.org/content/mexico/es/home/library/democratic_governance/invertir-para-el-desarrollo-sostenible--como-invierte-mexico-en-.html
- Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y UNICEF México, *Informe sobre la equidad del gasto público en la infancia y la adolescencia en México* (PNUD/UNICEF México: 2015). http://www.mx.undp.org/content/dam/mexico/docs/Publicaciones/PublicacionesReduccionPobrez a/InformesDesarrolloHumano/idhpnudunicef/UNICEF_PNUD_Equidad_Gasto.pdf
- Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), *El desarrollo sostenible en la práctica : la aplicación de un enfoque integrado en América Latina y el Caribe* (PNUMA: 2016).
- , *Fronteras 2017. Nuevos temas de interés ambiental* (Nairobi, PNUMA: 2017).
- ProMéxico, *Tratados de comercio*, <http://www.promexico.mx/es/mx/tratados-comerciales>
- Programa Universitario de Estudios del Desarrollo (PUDH), *Perspectivas del desarrollo al 2030* (México, Universidad Nacional Autónoma de México-PUDH: 2017).
- Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), *Zacatecas: la riqueza que empobrece* (Comunicado: 13 julio 2018), <http://www.remamx.org/wp-content/uploads/2018/07/Comunicado-sobre-datos-mineros-en-Zacatecas-13-jul.pdf> (Fecha de consulta: 13 de julio de 2018)
- Sachs, J., Schmidt-Traub, G., Kroll, C., Durand-Delacre, D. and Teksoz, K. *SDG Index and Dashboards Report 2017* (New York: Bertelsmann Stiftung and Sustainable Development Solutions Network (SDSN): July 2017).
- Samaniego, Norma; *La participación del trabajo en el ingreso nacional. El regreso a un tema olvidado*. (México, Comisión Económica para América Latina (CEPAL) Serie Estudios y Perspectivas: 2014), https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/37279/S1420829_es.pdf?sequence=1&isAllowed=y
- Sarukhán, J.et. al, *Capital Natural de México. Síntesis: evaluación del conocimiento actual y tendencias de*

cambio, perspectivas de sustentabilidad, capacidades humanas e institucionales (México, Comisión Nacional de Biodiversidad: 2017).

Save the children. *Las niñas y adolescentes frente a la violencia* (México, Save the Children: s/f). Recuperado de: <https://www.savethechildren.mx/sci-mx/files/76/76f9829b-4ba5-47b6-bf24-b508abcbfeda.pdf>

Secretaría de Cultura. *Avance y resultados 2017. Programa Especial de Cultura y Arte 2014-2017*, <https://www.gob.mx/cultura/documentos/logros-2017-peca>

Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), *Diagnóstico de PROSPERA Programa de Inclusión Social* (México, SEDESOL: diciembre de 2015), https://evaluacion.prospera.gob.mx/es/wersd53465sdg1/matriz/Diagnostico_PROSPERA_29122015.pdf

Secretaría de Energía, *Prospectiva del sector eléctrico* (México, SENER: 2017), [https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/284345/Prospectiva del Sector El ctrico 2017.pdf](https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/284345/Prospectiva_del_Sector_Elctrico_2017.pdf)

-----, *Reporte de avances de energías limpias primer semestre 2017* (México, Secretaría de Energía: 2017). [https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/279723/Informe Renovables 2017 11122017.pdf](https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/279723/Informe_Renovables_2017_11122017.pdf)

Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), *Estructura Programática a emplear en el proyecto de Presupuesto de Egresos 2018*. [http://ppef.hacienda.gob.mx/work/models/PPEF/2018/estructura_programatica/1_EstructurasProgramaticas paraPPEF2018.pdf](http://ppef.hacienda.gob.mx/work/models/PPEF/2018/estructura_programatica/1_EstructurasProgramaticas_paraPPEF2018.pdf)

-----, *Seguimiento de los Programas Transversales, Especiales, Sectoriales, Regionales e Institucionales derivados del PND 2013-2018*, <https://www.gob.mx/shcp/acciones-y-programas/seguimiento-de-los-programas-transversales-especiales-sectoriales-regionales-e-institucionales-derivados-del-pnd-2013-2018>

Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), *Invertir para el desarrollo sostenible. ¿Cómo invierte México en los Objetivos de Desarrollo Sostenible?* (México, SHCP/PNUD: 2017), http://www.mx.undp.org/content/mexico/es/home/library/democratic_governance/invertir-para-el-desarrollo-sostenible--como-invierte-mexico-en-.html

Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) *Diagnóstico sobre la situación de las personas con discapacidad en México* (México, SEDESOL: 2016), [https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/126572/Diagnostico sobre la Situacion de las Personas Con Discapacidad. Mayo 2016.pdf](https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/126572/Diagnostico_sobre_la_Situacion_de_las_Personas_Con_Discapacidad_Mayo_2016.pdf)

-----, *Diagnóstico de PROSPERA, Programa de Inclusión Social 2015*, https://evaluacion.prospera.gob.mx/es/wersd53465sdg1/matriz/Diagnostico_PROSPERA_29122015.pdf

-----, *Padrón Único de Beneficiarios de Programas de Desarrollo Social*, <http://pub.sedesol.gob.mx/spp/resumenes/personasFisicas.jsp>

Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), Consejo Nacional de Población (CONAPO) e Instituto Nacional de Geografía e Informática (INEGI), *Delimitación de las Zonas Metropolitanas de México 2010*, (México, SEDESOL/CONAPO/INEGI: 2012)

Secretaría de Educación (SEP), *Principales cifras 2016-2017*, [http://fs.planeacion.sep.gob.mx/estadistica_e_indicadores/principales cifras/principales cifras 2016 2017 bolsillo.pdf](http://fs.planeacion.sep.gob.mx/estadistica_e_indicadores/principales_cifras/principales_cifras_2016_2017_bolsillo.pdf)

- Secretaría de Educación (SEP)/Subsecretaría de Educación Media Superior, *El Modelo Mexicano de Formación Dual prepara a los estudiantes para "saber hacer" y "aprender haciendo* (Boletín informativo: diciembre de 2017), http://www.sems.gob.mx/es_mx/sems/el-modelo-mexicano-de-formacion-dual-prepara-a-los-estudiantes-para-saber-hacer-y-aprender-haciendo
- Secretaría de Gobernación (SEGOB), Consejo Nacional de Población (CONAPO) y Fundación BBVA Bancomer, *Anuario de migración y remesas* (México, Fundación BBVA Bancomer: 2015).
- Secretaría de Gobernación (SEGOB)/Unidad de Política Migratoria, *Boletines estadísticos*, http://www.politicamigratoria.gob.mx/es_mx/SEGOB/Boletines_Estadisticos
- Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), *Quinto informe de labores, 2016-2017*, (México, Secretaría de Relaciones Exteriores: 2017).
- Secretaría de Marina y Recursos Naturales (SEMARNAT), *Informe de la situación del Medio Ambiente en México 2015*, (México, SEMARNAT: 2015), <http://apps1.semarnat.gob.mx/dgeia/informe15/index.html>
- , *Impulsa SEMARNAT Estrategia Nacional para evitar el desperdicio de alimentos* (Comunicado de prensa: 7 de diciembre de 2017), <https://www.gob.mx/semarnat/prensa/impulsa-semarnat-estrategia-nacional-para-evitar-desperdicio-de-alimentos?idiom=es>
- , *Norma Oficial Mexicana (NOM-059-SEMARNAT-2010), Protección ambiental-Especies nativas de México de flora y fauna silvestres-Categorías de riesgo y especificaciones para su inclusión, exclusión o cambio-Lista de especies en riesgo*, <https://www.gob.mx/profepa/documentos/norma-oficial-mexicana-nom-059-semarnat-2010>
- , *Plan Nacional de Implementación del Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes en México* (México, SEMARNAT: 2016).
- Secretaría de Marina y Recursos Naturales (SEMARNAT)/Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC), *Perfil Nacional de Sustancias Químicas Base 2014* (México, INECC: 2016).
- , *Actualización del Inventario Nacional de Sustancias Químicas 2010-2013* (México, INECC: 2014).
- Secretaría de Relaciones Exteriores (SER), *Sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos*, <https://www.gob.mx/sre/acciones-y-programas/sentencias-de-la-corte-interamericana-de-derechos-humanos>
- Secretaría de Salud, *Boletín Epidemiológico. Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica. Sistema Único de Información*, <https://www.gob.mx/salud/acciones-y-programas/direccion-general-de-epidemiologia-boletin-epidemiologico>
- , *Gasto en salud en el Sistema Nacional de Salud. Gasto en salud por fuente de financiamiento 1990-2016*, http://www.dgis.salud.gob.mx/contenidos/sinais/gastoensalud_gobmx.html
- , *Informe de la Salud de los mexicanos. 2015. Diagnóstico general de la salud poblacional* (México, Secretaría de Salud: 2015), https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/64176/INFORME_LA_SALUD_DE_LOS_MEXICANOS_2015_S.pdf
- , *Informe Nacional sobre Violencia y Salud* (México, DF: SSA; 2006).
- , *Panorama epidemiológico del Dengue, 2017. Información publicada en la Semana Epidemiológica 52 (Actualizada al 1 de enero de 2018)*, https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/285237/Pano_dengue_sem_52_2017.pdf
- , *Programa de Acción Específico. Salud Mental 2013-2018*, https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/11918/Salud_Mental.pdf

- Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, *Tasas por cada 100 mil habitantes. 1999-2017* (Corte informativo: 31/12/2017. Fecha de publicación: 20/02/18).
<http://secretariadoejecutivo.gob.mx/docs/pdfs/tasas%20por%20cada%20100%20mil%20habitante/s/Tasas012018.pdf>
- Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas en México.*
<https://www.gob.mx/sesnsp/acciones-y-programas/registro-nacional-de-datos-de-personas-extraviadas-o-desaparecidas-rnped>
- Senado de la República/ Instituto Belisario Domínguez, *Recuento de los daños 7S y 19S: a un mes de la tragedia.* Nota estratégica (México, Instituto Belisario Domínguez: 17 de Octubre de 2017.)
- Senado de la República/Comisión de Relaciones Exteriores y Organismos Internacionales. *Jornadas de análisis "México y los Objetivos de Desarrollo Sostenible en la Agenda post 2015.* (México, Relatorías de la Comisión de Relaciones Exteriores Organismos Internacionales, Volumen 5: 2015).
- The Economist/Intelligence Unit, *Democracy Index 2016, Country Profile,*
https://www.eiu.com/public/topical_report.aspx?campaignid=DemocracyIndex2016
- The Software Alliance (BSA), *Encuesta Global de Software,*
http://www.bsa.org/~media/Files/StudiesDownload/2018_BSA_GSS_Report_eslatam.pdf
- The World Bank, *Atlas of Sustainable Development Goals 2018 : From World Development Indicators* (Washington, D.C., World Bank: 2018),
<https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/29788>
- The World Justice Project, *Rule of Law Index 2017-2018,* (Washington, D.C., The World Justice Project: 2018) <https://worldjusticeproject.org/our-work/wjp-rule-law-index/wjp-rule-law-index-2017%E2%80%932018>
- Transparencia Mexicana, *Índice de percepción de la Corrupción. Enfoque para México* (México, Transparencia Mexicana. Documento de análisis: 25 de enero de 2017),
<https://www.tm.org.mx/ipc2016/>
- UNESCO. *Acceso a la información: Lecciones de la América Latina* (Montevideo, Uruguay; Oficina Regional de Ciencias de la UNESCO para América Latina y el Caribe. Cuadernos de discusión de comunicación e información: 2017).
- *Informe de Seguimiento de La Educación en el Mundo 2016. La educación al servicio de los pueblos y el planeta: creación de futuros sostenibles para todos* (Paris, Francia, UNESCO: 2017).
- *Informe Mundial Re-Pensar las Políticas Culturales* (Paris, Francia, UNESCO: 2015).
http://en.unesco.org/creativity/sites/creativity/files/gmr_es.pdf
- UNICEF México. *Los derechos de la niñez y la adolescencia en México. Análisis de su situación* (México, UNICEF México: 2017).
- *Niñas y niños fuera de la escuela* (México, UNICEF México: 2016).
- UNICEF México e Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), *Encuesta Nacional de Niños, Niñas y Mujeres en México 2015. Resultados Principales* (Ciudad de México, México: Instituto Nacional de Salud Pública y UNICEF México:2016).
- UNICEF México y Secretaría de Educación Pública (SEP), *Informe Nacional sobre Violencia de Género en la Educación Básica en México,* (México, UNICEF-SEP-CIESAS: 2009).
- United Nations Environmental Program (UNEP), *GEO-6 Regional Assessment for Latin American and the Caribbean* (Nairobi, Kenya; UNEP: 2016), <https://www.unenvironment.org/resources/assessment-report/geo-6-regional-assessment-latin-america-and-caribbean>

- , *Global Gender and Environment Outlook 2016* (Nairobi, Kenya; UN Environment: 2016). Recuperado de: <http://web.unep.org/ggeo>
- , *Taking Steps toward Marine and Coastal Ecosystem-Based Management* (Nairobi, UNEP: 2011).
- , *The Emissions Gap Report 2017* (Nairobi, United Nations Environment Programme: 2017).
- , *Towards a Green Economy: Pathways to Sustainable Development and Poverty Eradication-A Synthesis for Policy Makers* (United Nations Environment Programme: 2011)
- Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), *Acceso de las mujeres a la propiedad de la tierra y sus recursos. Evaluación de Género y Desarrollo Sostenible en la Península de Yucatán* (Oficina Regional para México, América Central y el Caribe de la UICN: noviembre de 2015).
- United Nations Development Operations Coordination Office, *Summary brief on UN Development Assistance Frameworks (UNDAFs)–Status, trends and next generation*, (March 2016). Recuperado de: <https://www.un.org/ecosoc/sites/www.un.org.ecosoc/files/files/en/qcpr/doco-summary-brief-on-undaf-march2016.pdf>
- United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division. *World Population Prospects: The 2017 Revision, Key Findings and Advance Tables*. Working Paper No. ESA/P/WP/248 (New York, United Nations: 2017).
- Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), *Índice Global de Impunidad 2017* (Puebla, México; UDLAP: 2017), <http://www.udlap.mx/cesij/files/IGI-2017-Resultados.pdf>
- UN Women & International Parliamentarian Union (IPU), *Women in politics, 2017*, <https://www.ipu.org/resources/publications/infographics/2017-03/women-in-politics-2017>
- Weiss, Thomas; López Chaltelt, Pedro; *México: políticas pública beneficiando a los migrantes* (México, Organización Internacional para las Migraciones (OIM): 2011).
- World Economic Forum. *The Global Competitiveness Report 2017-2018* (Geneva, World Economic Forum: 2017), <http://www3.weforum.org/docs/GCR2017-2018/05FullReport/TheGlobalCompetitivenessReport2017%E2%80%932018.pdf>

Plataformas electrónicas nacionales

- Gobierno de la República/INEGI, *Plataforma Nacional de Seguimiento de los ODS*
<http://agenda2030.mx/index.html?idioma=es#/home>
- Gobierno de la República/INEGI, *Sistema de Indicadores de los ODM*
<http://www.objetivosdesarrollodelmilenio.org.mx/>
- INEGI, *Consulta interactiva de datos*
http://www.inegi.org.mx/est/lista_cubos/
- INEGI, INMUJERES, ONU Mujeres, *Atlas de género*
http://gaia.inegi.org.mx/atlas_genero/
- INMUJERES, *Sistema de Indicadores de Género*
<http://estadistica.inmujeres.gob.mx/formas/index.php>
- Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Secretaría de Relaciones Exteriores, Centro de Investigación y Docencia Económicas, *Recomendaciones internacionales a México en materia de Derechos Humanos*.
<http://recomendacionesdh.mx/inicio>

Plataformas electrónicas internacionales

Banco Mundial, *Indicadores del Desarrollo Mundial. Banco de datos*

<https://datos.bancomundial.org/>

UNESCO, Institute for Statistics, *UIS.Stat*

<http://data.uis.unesco.org/>

Global Health Observatory (GHO), *World Health Statistics data*

<http://www.who.int/healthinfo/statistics/en/>

World Health Organization, *Statistical Information System (WHOSIS)*

<http://www.who.int/whosis/en/>

Organization for Economic Co-operation and Development (OECD), *OECD.Stat*

<https://stats.oecd.org/>

International Labour Organization (ILO), *Information System on International Labour Standards*

<http://www.ilo.org/normlex>

United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), *UNHCR, World Statistics*

<http://popstats.unhcr.org/en/overview>

Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) *Índice Universal de los Derechos Humanos*

<http://uhri.ohchr.org/es/Summary/Country>